



**Documentos
Oficiales del
Proceso de
Cumbres de
las Américas**

De Puerto
España (2009)
a Cartagena
de Indias
(2012)

**Official
Documents
from the
Summits of
the Americas
Process**

From Port of
Spain (2009)
to Cartagena
de Indias
(2012)



**Documentos Oficiales del Proceso
de Cumbres de las Américas:
de Puerto España (2009)
a Cartagena de Indias (2012)**

**Official Documents from the Summits
of the Americas Process:
From Port of Spain (2009)
to Cartagena de Indias (2012)**

José Miguel Insulza

Secretario General
Secretary General

Albert R. Ramdin

Secretario General Adjunto
Assistant Secretary General

**Secretaría de Cumbre de las Américas
Summits of the Americas Secretariat**

Sherry Tross

Patricia Andrade

Isabella Araujo

Nathalia Araujo

Savio D'Souza

Thiago Dal-Toe

Martin Huenneke

Jennifer Molina-Vrolijk

Andrea Montilla

Beatriz Piñeres

Joaquin Salcedo

Manoel Silva

Erin Yiu

OAS Cataloging-in-Publication Data

Organization of American States. Summits of the Americas Secretariat.

Documentos oficiales del Proceso de Cumbres de las Américas : De Puerto España (2009) a Cartagena de Indias (2012) : volumen VI / Secretaría de Cumbres de las Américas, Organización de los Estados Americanos = Official documents from the Summits of the Americas Process : From Port of Spain (2009) to Cartagena de Indias (2012) : volume VI / Summits of the Americas Secretariat, Organization of American States. p. ; cm. (OEA Documentos Oficiales; OEA Ser.E) (OAS Official Records Series; OEA Ser.E)

ISBN 978-0-8270-5928-3

1. Organization of American States--Bibliography--Periodicals. 2. Summit of the Americas--Bibliography--Periodicals. 3. America--Politics and government. I. Title. II. Title: Official documents from the Summits of the Americas Process : From Port of Spain (2009) to Cartagena de Indias (2012) : volume VI.

F1402 .A21 O7 v.6

OEA/Ser.E SG/SCA/III.1 v.6

Índice

I. Prólogo del Secretario General de la OEA	13
II. Introducción	15
III. De Puerto España a Cartagena de Indias: Un informe sobre el proceso de Cumbres de las Américas	17
IV. Sexta Cumbre de las Américas	
Mandatos derivados de la Sexta Cumbre de las Américas	19
Comunicados de la Sexta Cumbre	27
V. Reuniones ministeriales (Declaraciones y Documentos Finales)	
Asamblea General de la OEA	
• Declaración de San Pedro Sula (2009)	33
• Declaración de Lima (2010)	41
• Declaración de San Salvador (2011)	47
Ministros de Educación	
• Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación	53

• Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación	59
Ministros de Trabajo	
• XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)	63
• XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)	77
Ministros de Agricultura	
• Quinta Reunión Ministerial	93
• Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2011	103
Ministros de Seguridad Pública	
• Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA II)	107
• Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA III)	111
Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales	
• Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VIII)	123
Ministros de Desarrollo Social	
• Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social	137

Ministros de Desarrollo Sostenible

- Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI **141**

Ministros de Defensa

- IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas **151**

Ministros de Turismo

- Decimonoveno Congreso Interamericano de Turismo **157**

Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres

- Cuarta Reunión de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros (REMIM IV) **163**

Ministros de Cultura

- Quinta Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura **171**

Ministros de Ciencia y Tecnología

- Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología **175**

Contents

I. Prologue by the Secretary General of the OAS	187
II. Introduction	189
III. From Port of Spain to Cartagena de Indias: A Report on the Summits of the Americas Process	191
IV. Sixth Summit of the Americas	
Mandates arising from the Sixth Summit of the Americas	193
Sixth Summit Communiqués	199
V. Ministerial Meetings (Declarations and Final Documents)	
OAS General Assembly	
• Declaration of San Pedro Sula (2009)	205
• Declaration of Lima (2010)	213
• Declaration of San Salvador (2011)	219
Ministers of Education	
• Sixth Inter-American Meeting of Ministers of Education	225

• Seventh Inter-American Meeting of Ministers of Education	231
Ministers of Labor	
• XVI Inter-American Conference of the Ministers of Labor (IACML)	235
• XVII Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML)	247
Ministers of Agriculture	
• Fifth Meeting of Ministers of Agriculture	261
• Meeting of Ministers of Agriculture of the Americas 2011	271
Ministers of Public Security	
• Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA II)	275
• Third Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA III)	277
Ministers of Justice or other Ministers or Attorneys General	
• Eighth Meeting of Ministers of Justice or other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA VIII)	289
Ministers of Social Development	
• Second Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development	303

Ministers of Sustainable Development

- Second Meeting of Ministers and High Authorities on Sustainable Development in the CIDI Framework **307**

Defense Ministers

- IX Conference of Defense Ministers of the Americas **317**

Ministers of Tourism

- Nineteenth Inter-American Travel Congress **323**

Ministers or Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women

- Fourth Meeting of Ministers or of the Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women (REMIM IV) **329**

Ministers of Culture

- Fifth Inter-American Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities **337**

Ministers of Science and Technology

- Third Meeting of Ministers and High Authorities on Science and Technology **341**

**Documentos Oficiales del Proceso
de Cumbres de las Américas:
de Puerto España (2009)
a Cartagena de Indias (2012)**

**Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos**

2012



Prólogo del Secretario General de la OEA

José Miguel Insulza

La Sexta Cumbre de las Américas marcó un importante momento en las relaciones interamericanas, y demostró una vez más que las relaciones entre los Estados de las Américas están en un proceso de evolución.

Enfocados en el lema central de la Sexta Cumbre “*Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad*”, las Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno de la región entablaron una conversación franca, abierta y sustantiva, y acordaron mandatos orientados a la acción en cinco áreas de gran importancia para nuestra región: la eliminación de la pobreza, la infraestructura, la seguridad, el acceso a las tecnologías, y la prevención y mitigación de los desastres. La fase de implementación del proceso se enfocará en convertir las decisiones tomadas por nuestros líderes en acciones concretas para nuestros pueblos. Durante esta fase nos orientaremos no sólo en aquellos compromisos adquiridos en Cartagena, sino también en los de Cumbres anteriores, con el pleno compromiso de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para adelantar nuestros esfuerzos colectivos y fortalecer las alianzas que busquen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las Américas.

Cartagena también ofreció un espacio para fortalecer aún más la participación de los actores sociales en el proceso de Cumbres. Durante los meses previos a la Sexta Cumbre, la sociedad civil, los jóvenes, los indígenas, y los trabajadores participaron en una serie de consultas presenciales y virtuales sobre los temas de la Sexta Cumbre. A través de estos mecanismos y el gran esfuerzo de todos los involucrados, se concretó la participación y contribución de aproximadamente 74,000 individuos en la fase de preparación de la Cumbre. Los resultados de estas consultas fueron presentados a los Estados en el proceso de preparación de la Cumbre de Cartagena. Asimismo, en Cartagena, los actores sociales tuvieron una oportunidad sin precedentes en el proceso de Cumbres – más de 850 representantes de 27 países de la región se reunieron con dos Jefes de Estado, Cancilleres y con representantes de alto nivel de los Gobiernos para sostener una conversación sobre la implementación de los mandatos derivados de la Cumbre. Continuaremos fortaleciendo este diálogo franco entre los actores sociales y los Gobiernos, con el ánimo de hacer más participativo, inclusivo y abierto el proceso de Cumbres.

Durante la preparación de la Sexta Cumbre, así como en las Cumbres anteriores, se continuó reforzando el vínculo entre los diferentes procesos ministeriales y sectoriales, y el proceso de Cumbres, con el ánimo de que los procesos ministeriales y sectoriales sean parte integral de la preparación de las Cumbres y de su respectiva fase de seguimiento. Este volumen “Documentos oficiales del proceso de Cumbres de las Américas: De Puerto España (2009) a Cartagena de Indias (2012)” constituye un compendio de los documentos acordados por los Estados durante la Sexta Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, así como de las reuniones ministeriales interamericanas celebradas desde la Quinta Cumbre de las Américas en Puerto España. El contenido del Volumen VI es un punto de referencia fundamental para la formulación de políticas, estrategias y programas de acción a nivel interamericano.

La OEA continúa comprometida con el proceso de Cumbres de las Américas, y con forjar alianzas con los Estados, los socios institucionales, y los actores sociales para convertir las aspiraciones y compromisos de nuestras Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en una realidad para los ciudadanos del hemisferio.

Introducción

La Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se complace en presentar el *Volumen VI: Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de las Américas*. Esta publicación forma parte de la serie de publicaciones que se inició en 1998, después de la Segunda Cumbre de las Américas. Cada una de las publicaciones en la serie contiene un compendio de los documentos relacionados a una Cumbre específica.

El Volumen I de la serie compila los documentos acordados desde la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, Florida (1994), la Cumbre Extraordinaria sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1996), y la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago, Chile (1998).

El Volumen II reúne las declaraciones ministeriales interamericanas suscritas luego de la Segunda Cumbre de las Américas y antes de la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, Canadá (2001). Este volumen abarca temas como el terrorismo, el empleo, el comercio, las finanzas, el transporte, las telecomunicaciones y el desarrollo sostenible.

El Volumen III es una compilación de las Declaraciones y Planes de Acción adoptados en cada una de las Cumbres, desde Miami (1994) hasta ciudad de Québec (2001). Se incluye también la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, Perú, en 2001, así como otros instrumentos que integran el sistema jurídico regional.

El Volumen IV presenta los elementos esenciales del Proceso de Cumbres entre 2004 y 2006. Entre los documentos incluidos en el Volumen IV se encuentran la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en 2004, y la Declaración y Plan de Acción de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 2005.

El Volumen V es una reseña de los documentos oficiales del proceso de Cumbres entre la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata (2005) y la Quinta Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España (2009), incluyendo aquellos documentos acordados en Puerto España, y los resultados de dicha Cumbre.

El presente *Volumen VI: Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de las Américas: De Puerto España (2009) a Cartagena de Indias (2012)* continúa con esta tradición. En este volumen se incluyen los “Mandatos Derivados de la Sexta Cumbre de las Américas” y los Comunicados acordados por los Estados en ocasión de la Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, del 14 al 15 de abril de 2012, así como los documentos aprobados que resultaron de las reuniones Ministeriales. Esta compilación de mandatos y compromisos de la Sexta Cumbre de las Américas representa la memoria institucional del proceso de Cumbres y provee un punto de referencia a los gobiernos, los organismos multilaterales, los actores sociales, el mundo académico y el público.

De Puerto España a Cartagena de Indias: Un informe sobre el proceso de Cumbres de las Américas

La Sexta Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, 14 y 15 de abril de 2012, bajo el lema central “Conectando las Américas: Socios para la prosperidad” subrayó el rol de la infraestructura física y la cooperación regional como medios para alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los desafíos de la región en algunas áreas claves, incluyendo la pobreza y la inequidad, la seguridad ciudadana, los desastres, y el acceso a las tecnologías. En la Cumbre, las Jefas y los Jefes de Estados y Gobierno de la región adelantaron un importante proceso de diálogo y de debate, y adoptaron una serie de decisiones que forman la base para el seguimiento e implementación post-Cumbre.

El trabajo del **Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)** sirvió como base para las deliberaciones de los Presidentes y Primeros Ministros de la región. El GRIC, compuesto de los Coordinadores Nacionales de los Estados Miembros, es el órgano ejecutor principal del proceso de Cumbres de las Américas. En preparación para la Sexta Cumbre, el GRIC celebró varias sesiones de negociación entre octubre de 2011 y abril de 2012. El documento que resultó de las negociaciones, titulado “*Mandatos derivados de la Sexta Cumbre de las Américas*” contiene 47 párrafos bajo cinco ejes temáticos: integración de la infraestructura física en las Américas; pobreza, desigualdad, e inequidad; reducción y gestión del riesgo de desastres; acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; y seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional.

Las instituciones que forman parte del **Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)** contribuyeron con documentos técnicos en los ejes temáticos de la Sexta Cumbre y acompañaron el proceso de negociación brindando apoyo y asesoría técnica a los países. Las instituciones participaron activamente en foros públicos y diálogos de políticas organizados por la Secretaría de Cumbres y rindieron informes exhaustivos a los países sobre actividades relacionadas con la Cumbre. Reunidos al nivel de Jefes de Institución, bajo la presidencia del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, los miembros del GTCC se comprometieron en brindar asistencia técnica y financiera para apoyar la implementación de los compromisos de la Sexta Cumbre.

Más de 65 **consultas con actores sociales** se realizaron en preparación para la Sexta Cumbre. De estas, aproximadamente 25 fueron organizadas por el gobierno de Colombia. Cuarenta fueron organizadas por la Secretaría de Cumbres de las Américas y otras áreas de la OEA, incluyendo la Secretaría de Relaciones Externas, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, y el Young Americas Business Trust. En los Foros de los Actores Sociales en el marco de la Cumbre en Cartagena, del 10 al 12 de abril, más de 850 representantes de 27 países participaron presencialmente. En el diálogo de cierre de los foros, dos Jefes de Estado – el Presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el Presidente Evo Morales de Bolivia – se unieron a los ministros de relaciones exteriores en el diálogo de gobiernos/actores sociales, entablando una discusión directa con representantes de la sociedad civil, la juventud, los pueblos indígenas, y las organizaciones laborales.

La **Comunidad Virtual de Cumbres (CVC)** ofreció un mecanismo inclusivo y accesible para participar en el proceso de Cumbres. Más de 4,750 individuos de 22 países en las Américas participaron en los foros virtuales y las discusiones en-línea por medio de la CVC en los meses anteriores a la Cumbre. Las transmisiones en vivo de los foros de los actores sociales en Cartagena fueron seguidas por más de 74,000 personas alrededor del mundo.

La **Cumbre Empresarial de las Américas** fue lanzada durante la Sexta Cumbre de las Américas. Esta Cumbre fue organizada por el gobierno de Colombia, con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y contó con la participación de más de 600 ejecutivos de las empresas más importantes de la región. Los empresarios de la región fueron acompañados en varios de los eventos por Jefes de Estado y Gobierno mientras que analizaron oportunidades actuales y futuras en comercio e inversión en las Américas, y discutieron temas tales como globalización y desarrollo, infraestructura para el desarrollo sostenible, capital humano para la economía del conocimiento, y crecimiento económico y recursos naturales.

El **Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas (SISCA)** fue rediseñado por la Secretaría de Cumbres en 2011 para crear un espacio más amigable tanto para los países como para las instituciones para informar en línea sobre las actividades y los resultados relacionados con las Cumbres. El nuevo sistema facilitó un incremento en la presentación de informes por parte de los Estados. El tráfico al sitio Web también registró un incremento significativo. Posterior a la Sexta Cumbre, se incorporó en el sitio Web información accesible a todas las audiencias dedicada específicamente al Programa de Implementación de la Sexta Cumbre con el ánimo de proveer información precisa y oportuna sobre iniciativas relacionadas con la Cumbre y sus impactos relacionados.

Sexta Cumbre de las Américas

Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad



Mandatos derivados de la Sexta Cumbre de las Américas

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas nos comprometemos a:

Integración de la infraestructura física en las Américas

1. Reafirmar que la promoción y la profundización de proyectos de infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional son prioridades de las políticas públicas y estrategias de desarrollo en nuestros países, según corresponda, y contribuyen al desarrollo sostenible, a la inclusión social y al aumento del comercio.
2. Promover el intercambio de experiencias y la participación de los sectores público y privado teniendo en cuenta los programas y proyectos de infraestructura física nacionales, subregionales y regionales, en curso y futuros, que conecten e integren las Américas, que deberían, con atención a nuestras especificidades respectivas y al pleno respeto de nuestras legislaciones nacionales, contribuir al desarrollo de sinergias de las agendas nacionales de infraestructura física.
3. Examinar mecanismos de financiación con miras a alentar y fortalecer una mayor participación de instituciones financieras nacionales, subregionales, regionales e internacionales, y del sector privado, en proyectos para la promoción de la integración física de las Américas, así como la cooperación horizontal entre nuestros países a tal fin.
4. Impulsar, con base en las políticas y marcos normativos nacionales correspondientes, la compatibilización y la armonización de normas institucionales que faciliten inversiones en infraestructura en las Américas.

5. Promover y/u optimizar la interconexión eléctrica y fomentar el desarrollo de generación de energías renovables en las Américas.

6. Alentar la transferencia de tecnologías disponibles en energía bajo términos voluntaria y mutuamente acordados, así como el intercambio de mejores prácticas.

7. Promover la expansión de las conexiones de redes de telecomunicaciones en general, incluyendo fibra óptica y banda ancha, entre los países de la región, así como las salidas internacionales con el fin de mejorar la conectividad, dinamizar la comunicación entre los países americanos, así como reducir los costos de transmisión de datos por rutas internacionales y, por lo tanto, promover el acceso, la conectividad y los servicios convergentes en favor de todos los sectores sociales de las Américas.

Pobreza, Desigualdad e Inequidad

1. Promover e impulsar políticas públicas integrales, oportunas y de calidad orientadas a:

a. La atención, la educación y el desarrollo de la primera infancia.

b. Proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y de la realización de tareas que puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de la OIT Relativa a los de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998); asimismo prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil de acuerdo al Convenio 182 de la OIT (1999).

c. Concientizar acerca de los efectos adversos que tiene el embarazo en la adolescencia para el desarrollo integral de los adolescentes y del infante, así como fomentar su salud y su bienestar.

2. Combatir la pobreza, la pobreza extrema, el hambre, la desigualdad, la inequidad y la exclusión social a través de políticas públicas que promuevan el trabajo decente, digno y productivo, un sostenido crecimiento económico y el aumento de los ingresos, así como el acceso a la educación integral y de calidad, a la salud y la vivienda, para alcanzar en las Américas un desarrollo sostenible con justicia social.

3. Asegurar el acceso igualitario y equitativo a la educación primaria y secundaria para todos; promover la mejora de la calidad de la educación en todos los niveles, un mayor acceso a la educación terciaria, técnica y vocacional, en el menor tiempo posible, con particular atención a grupos en situación de vulnerabilidad y con necesidades educativas especiales, haciendo uso, entre otras, de la modalidad de educación a distancia, y promover el fortalecimiento de programas de alfabetización.

4. Promover un mayor intercambio internacional de estudiantes con el fin de propiciar las mejores oportunidades posibles de aprendizaje para los mismos.

5. Reafirmar nuestro compromiso de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y promover la financiación de proyectos y programas de difusión de las buenas prácticas en las comunidades más rezagadas.

6. Profundizar la cooperación interamericana en materia de desarrollo y protección social para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas, y la generación de una fuerza de trabajo calificada, con perspectiva de género y atención a los grupos vulnerables.

7. Promover el crecimiento económico con equidad e inclusión social por medio del fortalecimiento de las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las industrias culturales, así como las iniciativas de economía popular y otras unidades de producción, la innovación y la competitividad en los países de las Américas.

8. Fortalecer las alianzas tanto público-privadas como con todos los actores interesados para promover la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como el desarrollo económico y social de las comunidades en las que operan.

9. Promover una mayor inversión y acceso a la investigación, innovación tecnológica y a la creación de capacidades con miras a fortalecer y asegurar un sector agroalimentario sustentable, integral, inclusivo y competitivo que contribuya a alcanzar la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza y la inequidad, especialmente en las zonas marginales rurales y urbanas.

10. Reafirmar nuestro apoyo a los objetivos establecidos en la Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016) y su Plan de Acción, promoviendo la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad a través de su participación en los procesos de desarrollo social, político, económico y cultural de nuestros países, con el fin de asegurar su bienestar y el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.

11. Avanzar en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores mediante la promoción de políticas públicas, programas y servicios, salvaguardando así su dignidad, su bienestar físico, mental, social y su calidad de vida, teniendo en cuenta los esfuerzos que se están llevando a cabo en el ámbito interamericano en la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para proteger los derechos de las personas mayores y la consideración del tema en el ámbito internacional.

12. Desarrollar políticas públicas integrales, según proceda, que fortalezcan la inclusión social de los migrantes a fin de poder superar la marginación, la victimización, la pobreza e, independientemente de su condición migratoria, proteger sus derechos humanos.

13. Promover la progresiva formalización de la economía informal, reconociendo su carácter heterogéneo y multidimensional, a través de políticas tales como los sistemas de registro e información que faciliten su formalización y acceso al crédito, mecanismos de

protección social, el mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, el fortalecimiento de la inspección laboral y la plena vigencia de la legislación laboral.¹

14. Tomar medidas específicas para mejorar el acceso a la educación de calidad de las niñas, especialmente en las zonas rurales, así como promover mayores capacidades en las escuelas, entre los docentes, la sociedad civil y las comunidades para reducir las barreras a la asistencia habitual de las mujeres y las niñas.

15. Actuar sobre las condiciones que inciden negativamente en la salud de nuestros pueblos teniendo en cuenta la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud del año 2011.

16. Desarrollar y fortalecer, según corresponda, estrategias y políticas de empleo para la juventud, así como promover oportunidades de educación y capacitación técnica y vocacional con el fin de mejorar e incrementar la inserción laboral de la juventud, la calidad y estabilidad de sus trabajos, así como su protección social.

17. Otorgar prioridad a la nutrición, especialmente a la nutrición infantil, en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad y, en este contexto, atribuimos importancia a los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado, la sociedad civil y otros actores sociales.

Reducción y gestión del riesgo de desastres

1. Reafirmar que la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de las políticas públicas nacionales y sus estrategias de desarrollo.

2. Priorizar la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección financiera, según corresponda, encaminadas a mitigar el impacto social, económico y ambiental de los desastres, con el apoyo de entre otras, las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales.

3. Fortalecer nuestras plataformas institucionales para la gestión del riesgo de desastres, en colaboración con los mecanismos subregionales, regionales e internacionales a través de estrategias de ayuda mutua y cooperación solidaria, con el fin de facilitar la investigación conjunta, el intercambio de conocimientos, información, mejores prácticas y experiencias aprendidas sobre la temática, y la transferencia de tecnologías bajo términos mutuamente acordados.

4. Fortalecer los instrumentos regionales y subregionales e iniciativas existentes en materia de reducción y gestión del riesgo de desastres y asistencia humanitaria y los mecanismos de coordinación y cooperación para generar sinergias, haciendo énfasis en la importancia de la coordinación.

¹ En San Vicente y las Granadinas, la definición del término “economía informal” es muy amplia e incluye algunas actividades ilegales que, no obstante, inciden en la economía local. Tomando en cuenta las diferencias en cada país, San Vicente y las Granadinas se une al consenso sobre este párrafo en el entendido de que el término “economía informal” se refiere total y exclusivamente a actividades sancionadas jurídicamente.

5. Trabajar con las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales con miras a mejorar los mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático, la mitigación, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, orientados a la reducción y gestión del riesgo de desastres y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y naciones que son vulnerables o afectadas por los desastres.

6. Designar, donde sea necesario, y fortalecer donde ya existan, puntos focales nacionales e institucionales para fomentar una más eficiente coordinación entre los organismos del sistema interamericano, los organismos y las organizaciones internacionales y regionales y los mecanismos subregionales y promover el uso de herramientas virtuales en este contexto, con el objeto de hacer más rápida y eficaz la respuesta ante emergencias y catástrofes.

Acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Fomentar la participación y la colaboración de los sectores público y privado, de los actores sociales y de las comunidades para promover iniciativas, de conformidad con los respectivos marcos legales internos, que hagan posible que nuestros centros educativos y establecimientos de salud, incluyendo los de las zonas remotas y rurales, gocen del acceso y uso equitativo y asequible a la banda ancha expandida, a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y a computadores.

2. Promover y establecer, según corresponda, programas que fomenten la capacitación de maestros para la inclusión y el uso efectivo de las TIC en la educación, y para la construcción y difusión de contenidos educativos pertinentes en cada país.

3. Promover la aplicación más intensiva de las TIC en salud con miras a mejorar la eficiencia de los sistemas de información sanitaria de nuestros países, incluyendo el mantenimiento preciso de registros, y de los sistemas de alerta subregional y regional de eventos de salud pública de interés internacional; la ampliación de programas de educación continua para los trabajadores de la salud y para la población; y el acceso a la información de los servicios de salud en aquellos centros y comunidades que más lo necesitan.

4. Impulsar el desarrollo, coordinación e implementación de estrategias y proyectos, según corresponda, para expandir el acceso y uso de las TIC con el apoyo y la participación de las organizaciones internacionales, el sector privado, los actores sociales y las comunidades con la finalidad de lograr una mayor inclusión social y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.

5. Propiciar y apoyar, según corresponda, iniciativas que expandan el aporte de las TIC a la innovación, el emprendimiento, la productividad, la competitividad, el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, y el crecimiento económico en el marco del desarrollo sostenible.

6. Fortalecer nuestros esfuerzos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos gubernamentales mediante el apoyo de iniciativas y proyectos de TIC que mejoren la participación ciudadana y desarrollen capacidades para la creación, acceso e intercambio de información y conocimiento virtual, según lo disponga la ley.

7. Promover la transparencia, la entrega de resultados de gestión e iniciativas de lucha contra la corrupción en el sector privado, con el apoyo de programas, actividades y proyectos de las TIC, según corresponda, para mejorar la capacidad de las partes interesadas para participar y tener acceso a información, según lo disponga la ley.

8. Continuar promoviendo la cooperación de las organizaciones internacionales, las agencias especializadas, el sector privado y demás actores sociales en la recopilación y el análisis de datos estandarizados sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, según corresponda, con miras a fortalecer las políticas públicas, incluyendo el diseño de estrategias adecuadas sobre el uso de estas tecnologías.

Seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional

1. Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos.

2. Continuar implementando políticas, estrategias y acciones integrales que procuren prevenir la delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta los vínculos entre seguridad y desarrollo así como abordar todas las causas de la violencia y promover la convivencia y la resolución pacífica de controversias entre ciudadanos, con especial atención a los jóvenes y otros grupos vulnerables.

3. Implementar políticas que contemplen medidas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar la violencia sexual y por motivos de género.

4. Mejorar la efectividad y la eficiencia de políticas públicas integrales de seguridad ciudadana a través de acciones tales como la generación y el uso de información relevante y oportuna, y el fortalecimiento de la capacidad y la coordinación de las instituciones que participan en el manejo de la seguridad ciudadana.

5. Fortalecer el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional abordando las finalidades económicas relacionadas con este fenómeno mediante mecanismos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias, cuando proceda, para enfrentar dichas amenazas de manera concertada, aprovechando las experiencias y recursos disponibles de las redes, los organismos y los mecanismos existentes, de conformidad con el derecho interno e internacional.

6. Fortalecer la conducción de la seguridad pública desde las instancias gubernamentales mediante el fomento de la participación ciudadana y comunitaria, la coordinación institucional, y la capacitación y formación del personal civil y policial, con pleno respeto al Estado de derecho, el derecho interno, a la igualdad de género y a los derechos humanos.

7. Impulsar y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la promoción y sostenibilidad de las políticas y programas de seguridad ciudadana.

8. Implementar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que contemplen como centro a la persona humana, en el marco de un orden democrático, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

9. Fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en particular de mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la cooperación entre los Estados con ese fin, respetando y protegiendo plenamente sus derechos humanos.

Comunicados de la Sexta Cumbre

Comunicado de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20

Nosotras y nosotros, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos con ocasión de la Sexta Cumbre de las Américas:

1. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar una amplia participación en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible - "Río +20", que se celebrará en Río de Janeiro, los días 20-22 de junio de 2012.
2. Reafirmamos nuestra determinación de alcanzar resultados orientados a la acción en la Río+20, reconociendo su importancia para el progreso hacia el desarrollo sostenible. La Conferencia será una inestimable oportunidad para repensar los modelos actuales de desarrollo. Reconocemos que una integración equilibrada de los tres pilares del desarrollo sostenible es esencial para erradicar la pobreza extrema y el hambre, apoyar la inclusión social, proteger el medio ambiente y promover el crecimiento económico. Para promover la gobernanza nacional e internacional necesaria a la implementación del desarrollo sostenible, tenemos que asegurar los esfuerzos para mejorar su estructura institucional.

Comunicado de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas sobre la celebración del "VI Foro de Competitividad de las Américas: Innovación para la Prosperidad" que se llevará a cabo en la ciudad de Cali del 24 al 26 de octubre de 2012

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos con ocasión de la VI Cumbre de las Américas, en la ciudad de Cartagena de Indias,

Reconocen los esfuerzos y liderazgo de Chile, Estados Unidos y República Dominicana como sedes anteriores y presidencias *Pro Tempore* del Foro de Competitividad de las Américas, de la Reunión Anual de la RIAC, y de la Reunión de Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio en 2009, 2010 y 2011;

Reconocen la importancia de la celebración del VI Foro de Competitividad de las Américas, de la Reunión Anual de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y de la Reunión de Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio e invitar a todos los Estados a que participen con sus máximas autoridades en materia de competitividad, así mismo promover la participación de pequeñas¹ y medianas empresas, nuevos emprendedores y de cooperativas;

¹ La Delegación de San Vicente y las Granadinas se une al consenso respecto del Comunicado sobre la base de que la palabra "micro" está incluida con referencia a las pequeñas y medianas empresas.

Celebran que el Gobierno de Colombia sea sede del VI Foro de Competitividad de las Américas como Presidencia *Pro Tempore* de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) del evento que tendrá lugar en Cali, Colombia, del 24 al 26 de octubre de 2012;

Agradecen que el gobierno de Panamá sea el anfitrión del VII Foro de Competitividad de las Américas en 2013; y manifiestan que el gobierno de Trinidad y Tobago ha presentado un ofrecimiento formal para realizar el VIII Foro de Competitividad de las Américas en 2014.

Comunicado de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas para enfrentar y combatir la delincuencia organizada transnacional en el hemisferio

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas y su declaración política:

Profundamente preocupados porque las actividades de la delincuencia organizada transnacional, constituyen una de las grandes amenazas a la seguridad y al bienestar de nuestros pueblos, ya que: i) han trascendido la esfera del narcotráfico y se han extendido a otros delitos, ii) su capacidad económica y corruptora, así como el amplio acceso a grandes cantidades de armamento de alto poder, han incrementado la violencia y afectado el tejido social de muchos de los países del continente americano, y iii) estos efectos negativos se padecen en los territorios de producción, tránsito y consumo de drogas ilícitas;

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica, para enfrentar y combatir de manera más efectiva este flagelo;

Preocupados una vez más que las respuestas nacionales ante esta amenaza, por sí mismas, resultan insuficientes,

Recordando las conclusiones emanadas, entre otros encuentros, de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional llevada a cabo en la Ciudad de México los días 1 y 2 de marzo de 2012,

1. Reafirman su voluntad de sumar fuerzas y capacidades para enfrentar este desafío común.
2. Acuerdan, al más alto nivel político, el desarrollo de un esquema hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional.
3. Para dicho propósito, la comunidad hemisférica deberá implementar una entidad coordinadora para armonizar las estrategias y acciones de los Estados americanos en contra la delincuencia organizada transnacional.
4. Dicha entidad determinará su interacción con los foros y mecanismos universales existentes, regionales y subregionales que tienen como objetivo la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional en sus diversas manifestaciones.

5. Con estos propósitos, instruirán a sus instituciones gubernamentales relevantes a iniciar consultas de carácter técnico y de otros aspectos, con el objetivo de desarrollar este esquema de cooperación hemisférica. Las propuestas emanadas de este proceso serán presentadas en una conferencia internacional a celebrarse en México, en el presente año.

6. Las consultas deberán abordar los objetivos, mandato, alcance, modalidades de financiamiento y las formas de operación del esquema hemisférico.

Comunicado de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la realización de la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales especializados contra el problema mundial de las drogas

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos con ocasión de la Sexta Cumbre de las Américas:

Profundamente preocupados porque el problema mundial de las drogas representa una seria amenaza para la salud pública, la seguridad, el bienestar y la estabilidad política y económica de nuestros pueblos y naciones;

Alertados por los momentos críticos que se experimentan a causa del accionar de las bandas organizadas criminales involucradas en el problema mundial de la droga y que permanentemente buscan penetrar y asentarse en nuestras sociedades e instituciones democráticas;

Conscientes que frente a los ingentes recursos y el accionar violento y corruptor del narcotráfico, la sola suma de esfuerzos no coordinados y aún aquellos que han tenido éxito, han tenido un limitado impacto sobre el problema mundial de las drogas y, por lo tanto, es necesario determinar medidas efectivas bajo un enfoque integral y equilibrado;

Reconociendo la necesidad de fortalecer e intensificar los esfuerzos conjuntos a nivel nacional, regional e internacional para enfrentar los retos a nivel global que presenta el problema de las drogas ilícitas conforme a lo establecido en la Declaración Política y el Plan de Acción para la Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integrada y Balanceada para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas, aprobados en el 52º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacentes de las Naciones Unidas, en marzo de 2009, y conscientes que se fijó para el 2019 la eliminación o reducción de manera considerable de los cultivos ilícitos; la producción, fabricación y el tráfico de drogas ilícitas; la demanda ilícita de estupefacentes y sustancias psicotrópicas; la desviación y el tráfico ilícito de precursores y el blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas;

Reconociendo asimismo la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011 – 2015 de la Comisión Interamericana para el control y el abuso de drogas (CICAD) de la OEA, como una herramienta de referencia para el accionar conjunto de la región para contrarrestar de manera efectiva la amenaza del problema mundial de las drogas;

- Expresan su pleno apoyo a la realización de la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y de Jefes de Organismos Nacional Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, los días 25 y 26 de junio del presente año.
- Se comprometen a realizar los mayores esfuerzos para participar al más alto nivel apropiado en dicha reunión, de forma de avanzar en los objetivos acordados por la comunidad internacional para enfrentar el problema mundial de las drogas.

Comunicado de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas sobre la conectividad en las Américas

Nosotras y Nosotros, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la VI Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, los días 14 y 15 de abril de 2012, acordamos:

Reconocer que la conectividad de las Américas es fundamental para la prosperidad de nuestros países. Por lo tanto, agradecemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y al Gobierno de Panamá por organizar y ofrecer la sede para la Cumbre Conectando las Américas que se celebrará en la Ciudad de Panamá del 17 al 19 de julio de 2012, como un paso concreto en la realización de la visión que hemos establecido en la VI Cumbre de las Américas.

Buscar la participación de nuestros ministros de telecomunicaciones o autoridades relevantes y solicitar que trabajen conjuntamente con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU), la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) y la UIT, entre otros, con el propósito de dar un paso más para conectar a las Américas y seguir promoviendo la interconexión de las redes y sistemas de comunicaciones del mundo para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos.

Comunicado de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos en ocasión de la Sexta Cumbre de las Américas:

Teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los pueblos y gobiernos centroamericanos como consecuencia de la violencia que generan las actividades del crimen organizado transnacional, particularmente, las redes del narcotráfico, en la región;

Reconociendo el sustancial avance que los gobiernos centroamericanos han realizado al formular la Estrategia de Seguridad, la cual, con una perspectiva regional e integral se orienta a enfrentar los problemas que aquejan a Centroamérica en materia de seguridad;

Conscientes de que la puesta en marcha de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica requiere de la cooperación y contribución decidida de todos los actores de la comunidad internacional sobre la base de los principios de responsabilidad común, compartida pero diferenciada;

1. Reiteramos nuestra solidaridad y disposición de aunar esfuerzos con el objetivo de contribuir a la seguridad en la región centroamericana y la importancia de “mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, hemisférica e internacional en materia de seguridad;

2. Expresamos nuestro firme apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que ha sido formulada en forma conjunta por los Estados parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y, cuyas prioridades, han sido definidas con visión estratégica de futuro y en completa alineación con los problemas y necesidades que en materia de seguridad enfrentan los pueblos y gobiernos centroamericanos;

3. Respaldamos el llamado que los gobiernos centroamericanos han formulado a la comunidad internacional para que se brinde el apoyo político necesario, los oportunos recursos financieros y de otra índole que permitan la ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica; apoyos que aunados a la creciente inversión que la región viene haciendo en materia de seguridad, permitan que Centroamérica se consolide como una región segura, en paz, libertad, democracia y desarrollo.

Reuniones ministeriales

(Declaraciones y Documentos Finales)

Asamblea General de la OEA

*Trigésimo-noveno período ordinario
de sesiones de la Asamblea General*

2 - 4 de junio de 2009

San Pedro Sula, Honduras

AG/DEC. 60 (XXXIX-O/09)

Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no violencia

LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFES Y JEFAS DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Pedro Sula, Honduras, con ocasión del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General,

RECONOCIENDO Y TOMANDO EN CUENTA la preocupación expresada por sus sociedades acerca de la violencia en el Hemisferio, así como las consecuencias que ésta tiene sobre el desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos, afectando a todos los grupos de la población, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, con grave deterioro de su calidad de vida;

CONSIDERANDO que una cultura de paz y no violencia debe entenderse como el conjunto de valores, actitudes y conductas basadas en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad; que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad que caracteriza a los pueblos del Hemisferio; y que debe ser promovida mediante la educación, el diálogo y la cooperación;

TENIENDO EN CUENTA que los Gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

RECORDANDO que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente las unas con las otras;

TOMANDO EN CUENTA que el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales representan la base del establecimiento y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

PREOCUPADOS por las graves consecuencias que la violencia tiene en el goce y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

RECONOCIENDO que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo democrático y socioeconómico en el Hemisferio, y que existe la urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención;

TENIENDO PRESENTE que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, así como para su plena e igualitaria participación en la sociedad;

RECORDANDO la importancia de prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad;

CONSIDERANDO la importancia de incentivar y fortalecer la responsabilidad social en la promoción de una cultura de paz y no violencia, con la participación voluntaria de la ciudadanía, de la comunidad, de los medios de comunicación y del sector privado;

TOMANDO EN CUENTA que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión es esencial para la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia, por ser fundamental para la democracia, la promoción del pluralismo y la tolerancia, así como para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia y prevenir violaciones de los derechos humanos;

PREOCUPADOS por el impacto de la crisis económica y financiera, especialmente sus consecuencias sociales y sus efectos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

REAFIRMANDO el respeto pleno por los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional;

TENIENDO PRESENTE la pertinencia de, entre otros, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; las declaraciones en la materia de las asambleas de la Comisión Inte-

americana de Mujeres (CIM); y la campaña mundial “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2008;

RECORDANDO:

Que tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la Organización de los Estados Americanos abogan por el rechazo a la violencia y promueven una cultura de paz;

La importancia de los instrumentos jurídicos del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano sobre la materia;

La Declaración de Bridgetown: Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica, adoptada por la Asamblea General de la OEA celebrada en Bridgetown, Barbados, en 2002, así como la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en Ciudad de México, México, en 2003, en la que se resaltó el alcance multidimensional de la seguridad y que la razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana;

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/25, mediante la cual se proclamó el período comprendido entre los años 2001 y 2010 “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”, y demás resoluciones de la Asamblea General de la ONU relacionadas con la materia, así como la Declaración y Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre una Cultura de Paz de 1999;

La resolución 61/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Día Internacional de la No Violencia”;

La resolución 63/23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada”;

Las resoluciones de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2164 (XXXVI-O/06) “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas”, que destacó la importancia de la educación para la paz, y AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08) “Prevención de la delincuencia y la violencia en las Américas”, así como las demás resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre la materia;

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, así como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las secciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño;

Los resultados de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, realizada en Ciudad de México, México, en 2008; de la Reunión de Ministros sobre Prevención de Violencia y Lesiones en las Américas, realizada en Mérida, México, en 2008; y de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, realizada en Buenos Aires, Argentina, en 2009; y

Que las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaran que la naturaleza polifacética de la violencia exige la adopción de estrategias multisectoriales con el compromiso de los Gobiernos y las partes interesadas en todos los niveles de la toma de decisiones: local, nacional e internacional;

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN los importantes trabajos realizados por los diferentes órganos, organismos y entidades del sistema interamericano destinados a la prevención de la violencia;

TOMANDO NOTA:

Que, de acuerdo con el Informe mundial de la violencia y la salud de la OMS, la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales;

De las preocupaciones expresadas por los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el informe de la Primera Conferencia Internacional sobre las Causas Estructurales de la Violencia; y

De los trabajos realizados en el marco del Foro Interamericano de Paz, incluyendo el seminario “Democratización del Conocimiento para la Creación de una Cultura de Paz - Plan Ceibal”, realizado en Montevideo, Uruguay, en 2009;

RECONOCIENDO:

Que la violencia puede manifestarse tanto entre los individuos como en las familias y en otros ámbitos de la comunidad;

Que la desigualdad y la exclusión social, así como la falta de oportunidades en las sociedades, contribuyen al incremento de la violencia y que, en consecuencia, es esencial un desarrollo económico y social que ofrezca igualdad de oportunidades, justicia e inclusión social;

El papel fundamental de la familia en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

Que los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos a conductas violentas en el hogar, en la escuela y en los espacios públicos debido a una variedad de factores, incluidos los culturales, económicos, sociales, étnicos y políticos;

Que la intolerancia y la violencia en contra de los migrantes y sus familias atentan contra una cultura de paz y no violencia;

Que la violencia en la sociedad, incluida la violencia armada, obstaculiza la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, por lo tanto, puede afectar el desarrollo económico y social, esencial para una cultura de paz y no violencia;

La necesidad de eliminar el tráfico, la fabricación y el uso ilícitos y el desvío de armas pequeñas y ligeras, toda vez que agravan la violencia en la sociedad e impiden la consolidación de una cultura de paz y no violencia;

Que la reducción progresiva de la violencia, el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, la buena gestión pública, el combate de la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento y respeto a los valores democráticos y el Estado de derecho son indispensables para crear y sostener una cultura de paz y no violencia;

La contribución de la cultura a la promoción de la cohesión y la inclusión social, así como el efecto positivo de las actividades culturales, el aporte de las industrias creativas y el emprendimiento cultural como medios para combatir, reducir y prevenir la violencia;

Que los medios de comunicación libres, plurales, independientes y responsables pueden contribuir activamente a la promoción de los valores de la paz y la no violencia, la tolerancia y el respeto irrestricto a los derechos humanos; y

Que una cultura de paz y no violencia incluye esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras,

DECLARAN:

1. Su compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad.
2. La necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad en el fomento de una cultura de paz y no violencia.
3. La importancia de realizar una amplia difusión de los derechos humanos, mediante políticas públicas que consoliden los esfuerzos de los Estados Miembros para promover una cultura de paz y no violencia.
4. La importancia de adoptar las medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como de procurar asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos y procure garantizar que las víctimas reciban la asistencia legal que se requiera para obtener la reparación que corresponda.
5. Su compromiso de promover acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y sus familias y las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos afectados por la violencia generada por cualquier tipo de discriminación, incluida la basada en el origen racial o étnico, la orientación sexual y la xenofobia.

6. La importancia de promover políticas para una mayor concientización y sensibilización de la ciudadanía orientadas a combatir la discriminación contra las personas con discapacidad y evitar que sus derechos sean vulnerados por actos de violencia.
7. La necesidad de promover el fortalecimiento de las instituciones del Estado para la protección y la seguridad de los individuos y el combate de la impunidad, con pleno respeto a los derechos humanos, así como de facilitar el acceso y la administración de la justicia.
8. Su determinación de formular políticas públicas y propiciar medidas legislativas, cuando corresponda, encaminadas a combatir la violencia y la discriminación.
9. Su compromiso de desarrollar políticas públicas y fortalecer la cooperación multilateral con el objeto de promover un empoderamiento efectivo de las mujeres en los ámbitos político, social y económico, así como de alentar acciones de carácter educativo para eliminar los patrones culturales que favorecen la violencia y la discriminación hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes.
10. Su compromiso de avanzar en la promoción y la implementación de legislaciones internas que prevengan, eliminen y sancionen todo tipo de violencia contra las mujeres.
11. La necesidad de propiciar espacios de colaboración y diálogo entre las autoridades públicas y las comunidades, de acuerdo con las características de cada población, a fin de desarrollar programas de prevención de violencia y resolución de conflictos.
12. Su determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.
13. La importancia de desarrollar e implementar programas educativos, comenzando en los primeros años de formación y educación, tanto en el sistema formal como informal, que promuevan una cultura de paz y no violencia.
14. La necesidad de brindar asistencia integral, de acuerdo con las respectivas legislaciones internas, a las víctimas de la violencia que permita su recuperación.
15. Su compromiso de continuar auspiciando políticas, programas y medidas que fomenten el papel de la familia en la promoción de una cultura de paz y no violencia.
16. Su preocupación por la publicación, circulación o difusión, incluyendo en la Internet, de materiales que deliberadamente defiendan, promuevan o inciten al odio o a la violencia.
17. La importancia de apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales en la recuperación y el resguardo de los espacios públicos, a fin de ofrecer un entorno seguro.
18. Su determinación de formular y promover políticas que incorporen el deporte, las artes y otras actividades culturales, incluido el intercambio de experiencias, que propicien el respeto por la diversidad y el patrimonio cultural, y que incluyan estímulos a las industrias creativas y el emprendimiento cultural, las cuales fortalecen una cultura de paz y no violencia.

19. Su compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica para combatir la delincuencia y la violencia, mediante la adopción de estrategias que enfatizen el papel de la prevención en sus diversos niveles y la administración de justicia.
20. La importancia de la cooperación multilateral basada en el pleno respeto a la soberanía de los Estados, teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida para hacer frente de manera integral al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos.
21. La necesidad de desarrollar y fortalecer programas de prevención contra el uso y abuso de drogas ante la violencia que este consumo genera en las escuelas, universidades, comunidades y lugares de trabajo.
22. La necesidad de desarrollar y fortalecer programas de prevención y tratamiento contra el abuso del consumo de alcohol, con el fin de prevenir la violencia asociada a éste.
23. Su decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social, con un enfoque integral que comprenda, entre otros, su prevención y la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por este fenómeno, fortaleciendo la cooperación para su combate, a fin de eliminar la violencia e intimidación que provocan en la sociedad.
24. La necesidad de continuar los esfuerzos en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Programa de Acción).
25. La importancia de intensificar la cooperación, de acuerdo con los compromisos internos e internacionales, para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, a fin de continuar enfrentando la delincuencia y la violencia en la sociedad, como parte de la consolidación de una cultura de paz y no violencia.
26. La necesidad de continuar promoviendo la organización de un sistema penitenciario fundado en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción a la sociedad.
27. Su determinación de enfrentar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en especial la pornografía infantil en todas sus manifestaciones, incluyendo en la Internet, y de crear conciencia sobre la dimensión y los efectos de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial.
28. Su compromiso de adoptar políticas y programas para garantizar la inclusión social, económica y cultural de los y las jóvenes, a fin de crear las condiciones necesarias para que la juventud pueda vivir en una sociedad pacífica y no violenta.
29. Su compromiso de promover el respeto y la tolerancia por la diversidad cultural, identidades y religiones de los pueblos, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y no violencia.

30. Su compromiso de promover el respeto y la protección del medio ambiente en el contexto de una cultura de paz y no violencia mediante, entre otros, el fortalecimiento institucional y la capacitación de recursos humanos para la formulación de estrategias y proyectos de desarrollo para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente.

31. Su intención de emprender iniciativas de cooperación coordinadas para mitigar el impacto de la crisis económica y financiera y sus efectos en los programas sociales, con el apoyo, cuando proceda, de los organismos internacionales, regionales y subregionales.

32. Solicitar a la Secretaría General que, con el apoyo de los Estados Miembros, realice las acciones necesarias para lograr la implementación de la presente Declaración.

AG/DEC. 63 (XL-O/10)

Declaración de Lima: Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas

LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Lima, Perú, en ocasión del cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General,

CONFIRMANDO el respeto por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y comprometidos con su más estricto cumplimiento, así como el de los demás instrumentos regionales y subregionales que reafirman nuestro compromiso con la paz y nuestra aspiración a brindar seguridad a nuestros pueblos;

REAFIRMANDO la importancia de los instrumentos jurídicos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano sobre paz, seguridad y cooperación;

REAFIRMANDO ASIMISMO que el artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que los propósitos esenciales de la Organización son: a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros; d) Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión; e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio, y h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros;

REAFIRMANDO DE IGUAL MANERA que el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen;

REAFIRMANDO la Carta Democrática Interamericana y los principios en ella contenidos;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y a la solidaridad en el Hemisferio;

REAFIRMANDO TAMBIÉN que la democracia constituye un derecho y un valor compartido fundamental que contribuye a la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio y su plena vigencia es esencial para la consolidación del Estado de derecho y el desarrollo político, económico y social de los pueblos;

REAFIRMANDO DE IGUAL MANERA que el artículo 3 e) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales;

RECONOCIENDO el importante papel que juegan los organismos y mecanismos regionales y subregionales en la solución pacífica de controversias en el Hemisferio;

RECONOCIENDO TAMBIÉN al Fondo de Paz de la OEA como una de las herramientas que contribuye a articular medidas de fomento de la confianza y acercamiento entre las partes en una controversia internacional;

REITERANDO que, tal como se señala en la Declaración de Santiago, la Declaración de San Salvador y el Consenso de Miami, las medidas de fomento de la confianza y la seguridad incrementan la transparencia y el entendimiento entre los Estados del Hemisferio y fortalecen directamente la estabilidad regional;

REAFIRMANDO que cada Estado Miembro tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas;

REAFIRMANDO TAMBIÉN que en el marco de la paz, la cooperación y la estabilidad alcanzados en el Hemisferio, cada Estado americano es libre para determinar sus propios instrumentos para la defensa, incluidos la misión, el personal y las fuerzas armadas y de seguridad pública necesaria para garantizar su soberanía, así como adherirse a los instrumentos jurídicos correspondientes en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

RECONOCIENDO que el control de armamentos, el desarme y la no proliferación son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;

REFRENDANDO el compromiso de continuar realizando esfuerzos para limitar los gastos militares, manteniendo una capacidad que corresponda a nuestras legítimas necesidades de defensa y seguridad y promoviendo la transparencia en la adquisición de armamentos;

RECONOCIENDO las contribuciones y recursos de los Estados Miembros en operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;

TENIENDO EN CUENTA el importante papel que desempeñan las fuerzas armadas y de seguridad pública en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas;

TENIENDO TAMBIÉN EN CUENTA el importante papel que desempeñan las fuerzas armadas y de seguridad pública y las agencias de protección y defensa civil como parte de una respuesta integral en casos de desastres naturales;

RECONOCIENDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas establece que la concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional;

CONSCIENTES de que las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado;

CONSCIENTES TAMBIÉN de que muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados Miembros son de naturaleza transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica, respetando las normas y principios del derecho internacional, entre ellos el respeto a la soberanía e independencia de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso y de la amenaza del uso de la fuerza en contra de la soberanía e integridad territorial de cualquier Estado;

RECONOCIENDO que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación, son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros;

AFIRMANDO que las soluciones ante los desafíos que enfrentan nuestros pueblos tienen una íntima interdependencia con nuestros esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la inclusión social; construir instituciones democráticas más sólidas; fortalecer la gobernabilidad en nuestras democracias; preservar el Estado de derecho y asegurar el acceso a la justicia para todas las personas; proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales y lograr mayor participación ciudadana y comunitaria;

DESTACANDO que las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre;

TENIENDO EN CUENTA que el desarrollo económico y social, especialmente el desafío de reducir la pobreza en nuestras sociedades, en particular la pobreza extrema, constituye parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia, lo que demanda otorgar la adecuada prioridad en la asignación de nuestros recursos a los esfuerzos para este desarrollo;

RECORDANDO que la discriminación, la pobreza, la inequidad y la exclusión social en el Hemisferio son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas, especialmente de niñas y niños;

REAFIRMANDO la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las iniciativas de paz, seguridad y cooperación;

PREOCUPADOS porque además de la violencia interpersonal y los delitos comunes, muchos países enfrentan algunas de las siguientes amenazas: la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de dinero, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos cibernéticos;

TENIENDO EN CUENTA el apoyo expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las medidas bilaterales y multilaterales adoptadas por los gobiernos a fin de reducir los gastos militares cuando proceda; y

CONSCIENTES de la importancia de fomentar condiciones que permitan limitar el uso para fines militares de recursos que podrían destinarse al desarrollo,

DECLARAN:

1. Su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación para hacer frente a las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas que afectan a la región.
2. Su compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral y, en ese contexto, fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.
3. Su compromiso con el respeto al derecho internacional y su convicción en la solución pacífica de las controversias.
4. La obligación de los Estados Miembros de que, en sus relaciones internacionales, no recurrirán al uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados.
5. La importancia de continuar promoviendo en el Hemisferio un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa, que permita que cada Estado Miembro pueda dedicar un mayor número de recursos a su desarrollo económico y social, teniendo en cuenta el cumplimiento de los compromisos internacionales, así como sus legítimas necesidades de defensa y seguridad.

6. Su compromiso de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) continúe contribuyendo a la superación de situaciones de tensión y a la solución de crisis, con pleno respeto a la soberanía de los Estados y a los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos-; y que continúe apoyando los esfuerzos, acuerdos y mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales para prevenir conflictos y solucionar pacíficamente las controversias.

7. Su compromiso de continuar implementando medidas de fomento de la confianza y la seguridad identificadas en la Declaración de Santiago, la Declaración de San Salvador y el Consenso de Miami.

8. Su firme compromiso de promover la transparencia en la adquisición de armamentos, atendiendo las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y la OEA sobre la materia e invitar a los Estados que aún no lo hayan hecho, a que consideren suscribir o ratificar, según sea el caso, la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC).

9. Su invitación a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, a que den pronta consideración a la ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA).

10. La importancia de que se continúe avanzando en los esfuerzos bilaterales, subregionales y regionales tendientes a la cooperación en materia de seguridad y a la implementación de los convenios, declaraciones y entendimientos que se han adoptado en el curso de los años en temas de paz, estabilidad, confianza y seguridad.

11. Su compromiso de fortalecer la cooperación para prevenir y enfrentar de manera integral y con pleno respeto al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, las amenazas que afectan la seguridad de sus pueblos, incluyendo la pobreza extrema, la exclusión social, los efectos de los desastres naturales, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de dinero, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos cibernéticos.

12. Su compromiso de continuar fomentando una cultura de paz y promoviendo la educación para la paz en los países de la región, reafirmando nuestra meta de seguir destinando mayores recursos al bienestar de nuestros pueblos.

**Cuadragésimo-primer período ordinario
de sesiones de la Asamblea General**

5 - 7 de junio de 2011

San Salvador, El Salvador

AG/DEC. 66 (XLI-O/11)

**Declaración de San Salvador sobre seguridad
ciudadana en las Américas**

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Salvador, El Salvador, en el marco de la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA;

RECONOCIENDO que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros;

CONVENCIDOS de que todo esfuerzo de carácter multilateral y cooperación en el ámbito de la seguridad debe respetar plenamente los principios de soberanía, integridad territorial, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional, así como considerar las diferentes perspectivas sobre las amenazas a la seguridad de los Estados y sus prioridades;

RECONOCIENDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirma que la concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía nacional;

RECONOCIENDO que con la adopción del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-I) celebrada en México, del 7 al 8 de octubre de 2008, los Estados Miembros expresaron su voluntad política y la prioridad que asignan para enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad en forma conjunta, solidaria, preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente;

RECONOCIENDO ASIMISMO el Consenso de Santo Domingo sobre Seguridad Pública adoptado en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-II) celebrada en la República Dominicana, del 4 al 5 de noviembre de 2009;

REAFIRMANDO que las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las amenazas a la seguridad;

RECORDANDO los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

TOMANDO NOTA del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado por ésta en diciembre de 2009;

RECONOCIENDO que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el Estado de derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos sus derechos;

TENIENDO EN CUENTA que la participación ciudadana y comunitaria es fundamental en la promoción y sostenibilidad de las políticas de seguridad pública;

RECONOCIENDO que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, así como la promoción de la educación, de la cultura, de la salud y del desarrollo económico y social;

RECONOCIENDO ADEMÁS que se deben fomentar y fortalecer políticas de Estado de largo plazo e integrales en materia de seguridad pública que garanticen la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo énfasis en enfrentar las causas de la criminalidad y la violencia;

DESTACANDO la necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales, fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes;

REITERANDO el compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia, y el respeto a la diversidad;

RECONOCIENDO que la delincuencia y la violencia afectan negativamente al desarrollo social, económico y político de nuestras sociedades;

CONSIDERANDO ASIMISMO que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados Miembros convinieron en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral;

RECONOCIENDO la necesidad de adoptar acciones para generar condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural a fin de fomentar la inclusión social, reducir las inequidades y crear oportunidades para sus pueblos, contribuyendo a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad;

REITERANDO el compromiso de atender los desafíos relacionados con las pandemias, los desastres naturales, así como los originados por el hombre;

REAFIRMANDO que los Estados tienen la obligación y la responsabilidad de proveer la asistencia humanitaria necesaria para proteger la vida, la integridad y la dignidad de sus habitantes en situaciones de desastres naturales, así como los originados por el hombre;

CONSIDERANDO la importancia de adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y contrarrestar la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que incluyan medidas para la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en la sociedad, así como de la importancia de incorporar una perspectiva de género en las políticas de seguridad;

RECONOCIENDO la importancia de brindar a los jóvenes, particularmente a aquellos en situación de riesgo, oportunidades y acceso en materia de educación, capacitación, empleo, cultura, deportes y recreación, con miras a prevenir la violencia;

REAFIRMANDO que la prevención, sanción y erradicación del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la explotación en todas sus formas, incluida la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, son un compromiso de los Estados Miembros que debe ser abordado de conformidad con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia y, cuando corresponda, en cooperación con la sociedad civil;

TENIENDO EN CUENTA que las actividades de la delincuencia organizada transnacional pueden ser utilizadas para financiar y facilitar el terrorismo;

RECONOCIENDO la importancia de continuar reforzando la aplicación de las leyes y las capacidades en materia de justicia penal;

RECONOCIENDO TAMBIÉN la importancia de la asistencia mutua en materia penal y extradición en respuesta a la preparación, planificación, comisión, ejecución o financiación de actos de terrorismo, así como la corrupción y delincuencia organizada, de conformidad con su legislación interna y convenios internacionales;

CONSIDERANDO la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales y su consecuente impacto sobre el fortalecimiento de la seguridad pública; y

REAFIRMANDO la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública,

DECLARAN:

1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.
2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, del imperio del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos, orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades.
3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad pública y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.
5. Que las políticas públicas de seguridad requieren la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la sociedad en su conjunto.
6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas integrales de seguridad pública de largo plazo, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, según sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.
7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.
8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.

9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable.

10. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios fundados en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluyan políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social.

11. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la seguridad y, en ese sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de desarrollo integral y seguridad multidimensional de la Organización de los Estados Americanos.

12. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública.

13. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.

14. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales, fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes.

15. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, para enfrentar, prevenir y combatir de manera integral y efectiva la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético, por cuanto éstos pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e institucional.

16. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y coordinación con las autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), con la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción hemisférico para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.

17. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento adecuado para la elaboración del proyecto de plan de acción hemisférico e informar a la Asamblea General, en su próximo período ordinario de sesiones, sobre las gestiones realizadas.

Ministros de Educación

Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación

12 - 14 de agosto de 2009

Quito, Ecuador

Declaración de Quito: Mejores oportunidades para los jóvenes de las Américas: Repensando la educación secundaria

LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en la ciudad de Quito, del 12 al 14 de agosto de 2009, con motivo de la Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI, declaramos lo siguiente:

1. Afirmamos que el acceso equitativo y oportuno a la educación es un derecho humano y que la educación de calidad es esencial, un bien público y una prioridad que forma el pilar central de nuestras sociedades. La educación secundaria de calidad constituye un factor esencial para el éxito futuro de los y las jóvenes en su inserción y acceso a la educación postsecundaria, terciaria y superior, al desarrollo personal y a una ciudadanía activa.
2. Redoblabaremos nuestros esfuerzos para cumplir con el compromiso de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno asumido en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1998, retomado y reformulado en la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, en 2009, para lograr una tasa bruta de matrícula de educación secundaria del 75% como mínimo a más tardar en 2010 y, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instituciones regionales e internacionales encargadas del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Compromisos de la Educación para Todos y organizaciones de la sociedad civil, desarrollar estrategias para hacer accesible la educación secundaria de calidad a todas nuestras y nuestros jóvenes a más tardar en 2015, especialmente para los grupos más vulnerables y aquellos con necesidades educativas especiales. Estas estrategias deberán basarse en los principios de equidad, calidad, pertinencia y eficiencia en la educación, tomando en cuenta la perspectiva de género, la diversidad étnica y las culturas juveniles y deberán también alentar la innovación y la creatividad.
3. Existen enormes desafíos para cumplir con el compromiso de garantizar una educación secundaria de calidad para todos ya que en muchos contextos las demandas de los diferentes actores de la sociedad exceden los recursos disponibles del sistema, sean económicos, sociales, institucionales, humanos u organizacionales. Al mismo tiempo, reconocemos que los compromisos en esta Declaración de Quito deben traducirse en prácticas reales e institucionalizadas en cada uno de nuestros países. En los países que han establecido que la educación secundaria es obligatoria, es esencial que sea de calidad, gratuita y que sea accesible para todos y todas.

4. La educación es una de las principales herramientas de movilidad social para alcanzar el desarrollo de los países ya que promueve una mayor equidad social y el acceso a oportunidades, condiciones necesarias para superar las situaciones de exclusión, pobreza y marginalidad que afectan a muchos jóvenes en la región. Consideramos fundamental, especialmente en el contexto de la crisis económica global actual, que es necesario priorizar el financiamiento de la educación de calidad en todos sus tipos, niveles y modalidades, como una inversión en el futuro de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Recomendamos que nuestros Gobiernos examinen estrategias financieras para fomentar el avance de la educación en nuestro Hemisferio que incluyan un mayor financiamiento público para este sector y que a la vez promuevan alianzas y estrategias de cooperación entre los sectores público y privado.

5. El diálogo, el intercambio y la cooperación internacional son factores para fortalecer y enriquecer nuestros esfuerzos nacionales, generando los recursos, los conocimientos y las alianzas necesarias para lograr una transformación real de la educación secundaria que traerá beneficios concretos para todos y todas. Nos comprometemos a desarrollar, en colaboración con la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) y en coordinación con las organizaciones y agencias internacionales, otros donantes y la sociedad civil, un plan regional de cooperación para fortalecer la educación secundaria con metas claras y recursos para fomentar el intercambio y la cooperación entre países.

6. En un contexto de escasos recursos y creciente demanda social por la educación secundaria, destacamos la necesidad de explorar estrategias innovadoras y flexibles de oferta educativa que promuevan el acceso, la permanencia, la reinserción de los que han abandonado la escuela y la calidad de la educación secundaria, especialmente en poblaciones rurales y urbano-marginales, pueblos indígenas y otros grupos que han sido históricamente excluidos, migrantes u otros grupos en condiciones de vulnerabilidad social. Tomando en cuenta las realidades nacionales, la política educativa debe considerar las experiencias y particularidades de estos grupos para entregarles una educación pertinente y de calidad, y crear condiciones para garantizar el acceso y mejorar la permanencia en la educación secundaria de los sectores más vulnerables.

7. Nos comprometemos a fortalecer los mecanismos de participación de los y las jóvenes en las decisiones relativas a su propio desarrollo educativo y en la generación de políticas públicas dirigidas a ellos y ellas. Nos comprometemos a considerar las propuestas de los y las adolescentes y jóvenes en nuestras deliberaciones y decisiones respecto a los compromisos de esta Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, e instruimos a la CIE, a través de nuestro Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, a que dé seguimiento a los acuerdos adoptados.

8. Reconocemos la importancia de manejar un modelo de educación secundaria que posibilite a los estudiantes construir una trayectoria que articule la formación general, el desarrollo personal y la preparación para el mundo del trabajo y que les permita desarrollar habilidades para la toma de decisiones desde sus propios intereses y su particular realidad, tanto en la selección de la educación postsecundaria como en el desarrollo de proyectos laborales a futuro.

9. Reconocemos la necesidad de fortalecer los currículos, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales y subnacionales para que sean pertinentes a las demandas del mundo contemporáneo. Una educación integral en el siglo XXI debe asegurar la incorporación de las culturas juveniles y considerar los diferentes contextos socioculturales, los conocimientos y valores de los pueblos indígenas y otros grupos que han sido históricamente excluidos, el desarrollo de políticas específicas de inclusión y ciudadanía juvenil, y el desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Asimismo, debe enfatizar y promover la comprensión crítica de la sociedad, el conocimiento y el respeto de los derechos humanos, la democracia, la diversidad, la inclusión, la no discriminación, la interculturalidad, el medio ambiente, la educación sexual y la prevención de adicciones, entre otros.

10. Reconocemos las consecuencias de la pandemia del VIH para la juventud en todos los países del Hemisferio como un problema de grandes proporciones que presenta un gran reto para los gobiernos nacionales, tal y como fue establecido en la Declaración Ministerial: Prevenir con Educación, de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH/ITS en América Latina y el Caribe, en el marco de la XVII Conferencia Internacional del SIDA, realizada en la Ciudad de México, en agosto de 2008. Nos comprometemos a promover el desarrollo de estrategias y programas dirigidos a la prevención de estos problemas en nuestras escuelas.

11. Reconocemos la importancia de fortalecer la formación técnico-profesional y vocacional, así como otras competencias pertinentes a las necesidades de desarrollo de nuestros países para crear capacidad local y regional para la innovación y para construir proyectos de desarrollo comunitarios, locales, nacionales y regionales.

12. Destacamos la importancia de desarrollar sistemas de acreditación y certificación de competencias claves y laborales, reconociendo los conocimientos y habilidades adquiridos por los jóvenes en el mundo laboral u otro ámbito, para favorecer los procesos de inclusión y de reinserción de alumnos que han salido del sistema educativo formal antes de terminar el ciclo escolar.

13. Convenimos en la necesidad de impulsar acciones dirigidas a jóvenes que quedaron al margen de los sistemas educativos con el propósito de favorecer su integración a la sociedad tanto en el ámbito educativo como laboral. Consideramos que estas acciones socioeducativas deben articularse con los sistemas educativos formales para fomentar la culminación del ciclo de estudios de educación media (o secundaria), así como para facilitar la continuidad educativa.

14. Reconocemos la necesidad de una mejor articulación o coordinación de los subsistemas educativos que conforman los sistemas nacionales, en especial de los currículos de la educación secundaria o media con la educación terciaria o superior y la educación técnica cuyo propósito sea asegurar el acceso equitativo y facilitar el libre tránsito de los estudiantes por todo el sistema educativo, desde la niñez más temprana hasta la vida adulta.

15. Considerando el papel fundamental de los docentes en la educación, reafirmamos el compromiso de adoptar mecanismos de cooperación para el desarrollo de la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes que respondan a las demandas de la edu-

cación en el siglo XXI. Encomendamos a la CIE que dé seguimiento a este tema a través de la Red Interamericana de Formación Docente a la cual damos nuestro pleno respaldo.

16. Convenimos en la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de información y de evaluación de la educación, como la participación en mediciones internacionales, para avanzar en estrategias que consoliden una educación secundaria de calidad.

17. Reconocemos con satisfacción los avances en la implementación del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas por su contribución al fortalecimiento de la cultura democrática y de la no violencia, a través de la educación formal y no formal, promoviendo una participación activa y genuina de los y las jóvenes en decisiones que los afectan. Alentamos la incorporación en los programas y currículos educativos de la educación secundaria de los principios contenidos en aquellos instrumentos internacionales destinados a la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia, entre ellos, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo con el ordenamiento de cada país. Asimismo, apoyamos el impulso de nuevas iniciativas en el marco del Programa Interamericano para incentivar la participación y liderazgo de los estudiantes secundarios.

18. Asumimos las preocupaciones de nuestros Ministros de Relaciones Exteriores incorporadas en la Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no violencia, adoptada en el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, y nos comprometemos a impulsar políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia con énfasis en la violencia intraescolar, intrafamiliar y la ejercida contra la mujer, los y las niñas y los y las jóvenes, debido a una variedad de factores, incluidos los culturales, económicos, sociales, étnicos y políticos.

19. Reconocemos que el estudio y la práctica del arte, la cultura y el deporte fortalecen la identidad y la formación personal, establecen mejores relaciones interpersonales, desarrollan un mayor sentido de la responsabilidad social, incrementan la disciplina y aumentan el interés de aprender. Alentamos la promoción de la integración de los contenidos y las actividades culturales, artísticas y deportivas en los planes de estudio escolares secundarios. Apoyaremos los esfuerzos de la CIE de colaborar con la Comisión Interamericana de Cultura (CIC) para desarrollar iniciativas que promuevan la creatividad y fortalezcan el aprendizaje cultural de los jóvenes a través del sistema educativo, integrando sus experiencias e historias sociales para el diálogo y el intercambio con otros. Reconocemos la importancia de impulsar el fortalecimiento del contenido cultural de los programas educativos, en particular aquellos dirigidos a los jóvenes para promover el desarrollo de su identidad cultural, promover el diálogo intercultural y crear una mayor conciencia y respeto a la diversidad cultural y lingüística.

20. Reafirmamos nuestro Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, adoptado en la Quinta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en Cartagena de Indias del 12 al 14 de noviembre de 2007, en el que nos comprometimos a aumentar la cobertura de la atención integral de calidad a la primera infancia, de acuerdo con las realidades de cada Estado Miembro, con un objetivo a largo plazo de universalizar

su atención integral a la primera infancia. Expresamos nuestra complacencia con los avances hacia el cumplimiento de los mandatos que en esa oportunidad fijamos y, en el ámbito interamericano, bajo la coordinación de la CIE. Para otorgarle más impulso y visibilidad, hemos acordado encomendarle a la CIE elaborar un programa interamericano sobre la atención integral a la primera infancia, al que daremos un fuerte respaldo.

21. Reconocemos la importancia de ampliar el acceso al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación secundaria, como factor que contribuirá a la preparación de los y las jóvenes y a su apropiación del conocimiento, herramientas necesarias para la incorporación a una ciudadanía activa y democrática en los ámbitos político, social, cultural y productivo. Nos comprometemos a continuar trabajando hacia la universalización del acceso de los y las jóvenes a las TIC y su incorporación en la educación secundaria, la capacitación de los maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de ampliar el acceso al conocimiento y a la reducción de la brecha digital. Encomendamos a la CIE incorporar estos temas en los procesos de cooperación horizontal, asistencia técnica e intercambio de experiencias.

22. Reconocemos la importancia de implementar políticas en el ámbito educativo dirigidas a fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo científico. Nos comprometemos a promover y apoyar programas y políticas que incentiven la participación activa de los y las jóvenes en iniciativas de innovación, ciencia y tecnología, considerando sus expectativas y vocaciones en concordancia con las necesidades de desarrollo humano, social, cultural y productivo de nuestros países.

23. Expresamos nuestra satisfacción con los aportes positivos de la CIE en la formulación y el mejoramiento de la política educativa en los Estados Miembros. En ese sentido, es importante resaltar que la CIE se ha constituido en un valioso foro para asegurar que los mandatos políticos emanados de ésta y de anteriores reuniones ministeriales reciban el apoyo técnico y el seguimiento adecuados. Asimismo, reconocemos el apoyo importante que ha representado en este proceso la existencia de un fondo especial para proveer recursos semilla para la implementación de proyectos en consonancia con los mandatos de las Cumbres de las Américas y de las reuniones de ministros en materia de educación, e instamos a los organismos de cooperación, desarrollo y financiamiento que aúnen esfuerzos para respaldar el trabajo multilateral de la CIE, aportando nuevos recursos financieros que permitan, en colaboración con los aportes de los Estados Miembros y otros socios, implementar los mandatos que hoy acordamos.

24. Encomendamos a la CIE, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), que elabore un Plan de Trabajo 2009-2012 que tenga como objetivo central implementar y darle seguimiento a nuestras decisiones, con especial atención en líneas de acción tales como: (1) fortalecimiento de los procesos de cooperación horizontal y asistencia técnica; (2) promoción y monitoreo de políticas de equidad, calidad e inclusión, y experiencias de innovación; (3) fortalecimiento de la formación inicial y del desarrollo profesional de los docentes; (4) financiamiento y movilización de recursos con criterios de equidad, calidad y eficiencia; (5) fortalecimiento de estrategias, mecanismos e instancias para promover la participación de los jóvenes, y (6) uso de tecnologías de información y comunicación.

25. Instruimos a las Autoridades de la CIE para que convoquen a una reunión para este propósito a más tardar en febrero de 2010. En ese sentido, encargamos a la CIE que busque alianzas con otras organizaciones para reunir los recursos a fin de apoyar la implementación del Plan de Trabajo, e informar sobre los avances de su implementación en nuestra próxima reunión ministerial así como en otras instancias políticas correspondientes dentro del marco de la OEA.

26. Agradecemos al pueblo y Gobierno de Ecuador por la especial acogida que nos han brindado durante esta Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI. En especial, deseamos reconocer el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional para garantizar el éxito de este evento.

Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación

29 de febrero - 2 de marzo de 2012

Paramaribo, Suriname

Declaración de Paramaribo “La transformación del rol del docente frente a los desafíos del siglo XXI”*

NOSOTROS, LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Paramaribo, Suriname, el 1 y 2 de marzo de 2012 en ocasión de la Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI,

REAFIRMANDO que el acceso equitativo y oportuno a la educación es un derecho humano y que la educación de calidad es esencial y constituye una herramienta efectiva para reducir la inequidad y propiciar condiciones para el desarrollo y el bienestar de la población;

TENIENDO PRESENTE la diversidad de los contextos culturales, así como la necesidad de reducir las desigualdades sociales, de fomentar las competencias adecuadas al contexto globalizado del siglo XXI y de acortar la brecha digital;

AFIRMANDO que es necesario mejorar la calidad de la educación y la oferta educativa con el fin de preparar a los y las estudiantes para el aprendizaje a lo largo de toda su vida, para un ejercicio activo y comprometido de ciudadanía, la obtención de un trabajo decente¹ y una buena calidad de vida;

CONSCIENTES del papel fundamental que tienen los docentes en la calidad de los procesos y resultados educativos, quienes para ello necesitan una formación integral inicial y continua, así como condiciones laborales adecuadas para el desarrollo de su carrera profesional;

DESTACANDO que la enseñanza y el aprendizaje tienen lugar dentro de sistemas sociales e institucionales y que ningún docente puede ejercer plenamente su función si no cuenta con ambientes institucionales y humanos propicios; y

CONSCIENTES del papel fundamental de los gobiernos en la promoción de una educación de calidad para todos y todas y que hay que prestar atención especial al diseño e implementación de políticas que fortalezcan la profesión docente y que propicien el ejercicio del papel estratégico del educador en la facilitación de aprendizajes y promoción de valores.

* Sujeto a la revisión de la Comisión de Estilo

¹ La República Bolivariana de Venezuela quiere resaltar que en la Declaración de Compromiso de Puerto España, los Jefes y las Jefas de Estado y de Gobierno se comprometieron a promover el acceso y a crear trabajo decente y digno.

EN ESE SENTIDO, NOSOTROS, LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS:

1. Subrayamos la importancia de la educación como un aspecto fundamental del desarrollo, y por tanto, del mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, culturales y democráticas de los Estados Miembros.

2. Enfatizamos el valor intrínseco de la educación, su función social y su impacto en la calidad de vida de cada persona y su comunidad, así como su papel en el fortalecimiento de la economía, en favorecer la inclusión y movilidad social y en promover el acceso igualitario a mejores oportunidades, la reducción de la pobreza, y la construcción de la ciudadanía y la identidad.

3. Reiteramos la responsabilidad de los gobiernos en asegurar el acceso a una educación de calidad para todos.

4. Ratificamos el papel fundamental del docente en los procesos y resultados educativos y reconocemos la importancia de su participación en los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación, a fin de ayudar a asegurar que los resultados sean efectivos y duraderos.

5. Afirmamos la importancia de que cada docente pueda acceder a una formación inicial y desarrollo profesional continuo de calidad que le permita actuar como guía y promotor de aprendizajes significativos, armonía social, diálogo intercultural y respecto a la diversidad, y cuya práctica pedagógica integre apropiadamente la reflexión, la innovación, la creatividad y las TIC así como el desarrollo de habilidades para atender a estudiantes con diversas necesidades y relacionarse adecuadamente con sus pares, los estudiantes y sus familias.

6. Reconocemos que las políticas que fortalecen la profesión docente y las oportunidades de desarrollo profesional de calidad son vitales para atraer, acoger, inducir, capacitar, evaluar, motivar, mantener y reconocer a los docentes para que sean cada vez mejores educadores.

7. Priorizamos, dentro de los esfuerzos por elevar la calidad de la educación en nuestros países, el fomento de una práctica pedagógica pertinente y adaptada a la diversidad de los contextos locales, a fin de responder con más efectividad a las necesidades del estudiante del siglo XXI. Favorecemos también la provisión a los docentes de oportunidades para observar, analizar, adaptar y adoptar prácticas pedagógicas innovadoras.

8. Subrayamos que el estudiante es la figura central en el proceso educativo y por lo tanto promovemos una participación activa de los y las estudiantes en el aprendizaje y en los procesos educativos que los afectan. Destacamos además nuestro compromiso para promover un mayor intercambio internacional de estudiantes con el fin de propiciar las mejores oportunidades posibles de aprendizaje para nuestros estudiantes.

9. Afirmamos que es necesario conceptualizar los centros educativos en el siglo XXI como comunidades de aprendizaje, cuya misión central es ofrecer una educación de calidad a cada estudiante y donde todo el personal trabaje en equipo, propiciando el aprendizaje y el crecimiento personal, y la integración y participación permanente de estudiantes, miem-

bros de familia, tutores legales y otros agentes educativos. Para ello, nos esforzaremos por proporcionar liderazgo para que esta misión se pueda cumplir.

10. Nos comprometemos a promover el fortalecimiento, la profesionalización y la valoración social de la profesión docente a través de mecanismos dinámicos para fomentar el diálogo y la cooperación entre los sistemas educativos, las universidades y otras instituciones de formación docente, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros sectores de gobierno.

11. Afirmamos la importancia de revisar y, donde sea necesario, de acuerdo con las circunstancias de cada Estado Miembro, fortalecer los marcos legislativos, regulatorios y administrativos para promover la formulación e implementación de políticas que respondan a las demandas del estudiante del siglo XXI y a las necesidades de los contextos locales.

12. Reconocemos la importancia de expandir el acceso al uso de las TIC en la educación a todos los niveles y en todos los sectores, en especial como factor que contribuirá a la preparación de los y las estudiantes, a su apropiación del conocimiento y su participación activa y democrática en los ámbitos político, social, cultural y productivo. Nos esforzaremos por promover la capacitación de los y las maestro/as en los procesos de enseñanza y aprendizaje que hacen uso efectivo de estas herramientas.

13. Redoblabremos nuestros esfuerzos por generar conocimientos e intercambiar buenas prácticas sobre políticas y programas innovadores de formación inicial, desarrollo profesional, mejoramiento de las condiciones laborales y fortalecimiento de la profesión docente. Encomendamos a la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con apoyo de su Secretaría Técnica, que continúe dando seguimiento a este tema a través de los mecanismos de cooperación existentes en la región, incluyendo la Red Interamericana de Formación Docente (RIED/ITEN), cuyos avances aplaudimos.

14. Reafirmamos nuestro Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, adoptado en la Quinta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en Cartagena de Indias del 12 al 14 de noviembre de 2007, en el que nos comprometimos a aumentar la cobertura de la atención integral de calidad a la primera infancia en cada Estado Miembro de acuerdo a sus circunstancias. Expresamos nuestra complacencia con los avances hacia el cumplimiento de los mandatos que en esa oportunidad fijamos y, en el ámbito interamericano, bajo la coordinación de la CIE.

15. Reconocemos con satisfacción los avances en la implementación del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, por su contribución al fortalecimiento de la cultura democrática y de la no violencia, a través de la educación formal y no formal, promoviendo una participación activa y genuina de los y las jóvenes en decisiones que los afectan, y brindando herramientas a los docentes que les apoyan para hacer de las aulas espacios más democráticos.

16. Expresamos nuestra convicción que la CIE se ha constituido en un valioso foro para asegurar que los mandatos políticos emanados de ésta y de reuniones ministeriales anteriores reciban el apoyo técnico y el seguimiento adecuados. Encomendamos a la CIE, con

el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), elaborar un Plan de Trabajo para los años 2012 y 2013 que tenga como objetivo central implementar y darle seguimiento a nuestras decisiones, con especial atención en fortalecer los procesos de cooperación horizontal y asistencia técnica en líneas de acción que incluyan (1) promoción y monitoreo de políticas de calidad, equidad e inclusión; (2) fortalecimiento de la formación inicial, desarrollo profesional y profesión docente; (3) atención integral a la primera infancia; (4) educación en valores y prácticas democráticas; y (5) uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

17. Instruimos a las Autoridades de la CIE a convocar una reunión para este propósito a más tardar en mayo de 2012. En ese sentido, alentamos a los Estados Miembros a seguir apoyando las iniciativas en curso y encargamos a la CIE, con el apoyo de la Secretaría Técnica, buscar alianzas con otras organizaciones para reunir recursos adicionales para apoyar la implementación del Plan de Trabajo, e informar sobre los avances en su implementación en nuestra próxima reunión ministerial así como en otras instancias políticas correspondientes dentro del marco de la OEA.

18. Agradecemos al pueblo y gobierno de Suriname por la especial acogida que nos han brindado durante esta Séptima Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el marco del CIDI. En especial deseamos reconocer el liderazgo del Ministerio de Educación y Desarrollo Comunitario para garantizar el éxito de este evento.

Ministros de Trabajo

XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)

6 - 8 de octubre de 2009

Buenos Aires, Argentina

Declaración de Buenos Aires de 2009: “Enfrentar la crisis con desarrollo, Trabajo decente y protección social”

NOSOTROS, LOS MINISTROS Y MINISTRAS PARTICIPANTES EN LA XVI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 8 de octubre de 2009, conscientes de los efectos de la crisis económica internacional y especialmente preocupados acerca de su impacto sobre la magnitud y la calidad del empleo y reconociendo el papel del Estado, en su rol tutelar, proactivo y de promoción del empleo y protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre otros roles, nos proponemos avanzar en soluciones innovadoras y diversas que coloquen al trabajo decente y a la protección social como pilares fundamentales del desarrollo.

1. En el actual contexto de contracción económica mundial, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo integral y los principios de solidaridad y cooperación internacional reflejados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Afirmamos la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, aprobada en Lima, Perú, en septiembre de 2001, reafirmando que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

2. Reafirmamos nuestras obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y nuestros compromisos de respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales contenidos en la Declaración de la OIT. En este marco tomamos como guías la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada en 2008, y a la resolución sobre la promoción de empresas sostenibles aprobada por la 96 Conferencia Internacional del Trabajo.

3. Adoptamos la resolución “Para recuperarse de la crisis: Un pacto mundial para el empleo” emanada de la 98 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y diseñada para orientar políticas nacionales e internacionales destinadas a estimular la recuperación económica, a generar empleos y a proteger a los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.

4. Recordamos los mandatos laborales de la Cuarta y Quinta Cumbres de las Américas, en cuyas declaraciones los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reafirmaron el papel central del trabajo decente en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Más aún, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la prosperidad humana e implementaremos el mandato específico de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno contenido en la Declaración de Compromiso de Puerto España de respaldar en la XVI CIMT un programa de trabajo para lograr los objetivos de la promoción del trabajo decente.

5. Nos preocupa constatar que la actual crisis económica internacional afecta a millones de trabajadores y trabajadoras de nuestra región. El impacto de la actual coyuntura requiere de parte de los países de América acciones complementarias a nivel nacional y regional, respetando nuestras diferencias y asimetrías, pero comprometidas con nuestros objetivos comunes y persistentes con nuestras políticas para mantener los niveles de actividad y fomentar la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.

6. Reconocemos la contribución positiva del comercio entre nuestras naciones para la promoción del crecimiento, el empleo y el desarrollo. Por lo tanto, continuaremos insistiendo en un sistema de comercio multilateral abierto, transparente y basado en normas. Igualmente, reconocemos la necesidad que todos nuestros pueblos se beneficien del aumento de las oportunidades y los avances del bienestar que genera el sistema multilateral de comercio. Nos comprometemos a continuar analizando, en el ámbito de nuestras competencias, la dimensión laboral, los mecanismos de cooperación que contienen y los efectos sobre el empleo de los procesos de integración regional y subregional, así como de los acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio del Hemisferio.

7. Convencidos de la necesidad de involucrar a toda la sociedad en la definición de las políticas públicas, reconocemos que el diálogo entre los gobiernos y los interlocutores sociales es un instrumento indispensable para generar los consensos que brinden sostenibilidad social, política y económica a las estrategias frente a la crisis y amplíen la base de legitimidad de las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades fundamentales de nuestros pueblos.

8. Estamos convencidos de que la promoción de los niveles de empleo y la defensa de la calidad del trabajo, además de constituir un requisito para la sostenibilidad de los sistemas democráticos, son un objetivo indispensable para enfrentar el impacto de la crisis sobre las condiciones de vida de nuestros pueblos.

9. En consecuencia, los Ministros y Ministras de Trabajo del Hemisferio, conscientes de la necesidad de otorgar un rol proactivo al Estado a través de sus políticas públicas y para promover la consecución de dichos objetivos, adoptamos las siguientes recomendaciones para orientar las políticas laborales activas en nuestros respectivos países y para que se constituyan en un marco de referencia para las acciones de intercambio y cooperación regional.

Coordinación de políticas y programas para la promoción del empleo y la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras: un marco orientador frente a la crisis

10. Destacamos las medidas de recuperación y estímulo que han sido implementadas por nuestros países y por otros alrededor del mundo en respuesta a la crisis económica más grande de los tiempos modernos. Somos firmes en nuestra convicción de que el buen rumbo de nuestras acciones sólo podrá ser medido por la cantidad de hombres y mujeres que estén vinculados al trabajo digno, decente y productivo.

11. Reafirmamos nuestra convicción sobre la necesidad de continuar generando respuestas y políticas innovadoras para enfrentar la crisis económica que, por una parte, estén basadas en un enfoque integrado de las dimensiones económicas, laborales, sociales y ecológicas, y por otra, combinen estrategias de largo y mediano plazo y medidas de emergencia para promover el empleo y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

12. Manifestamos nuestra decisión de continuar promoviendo la centralidad del empleo y del trabajo decente en los debates y decisiones del sistema multilateral, con el objetivo de afrontar la crisis con acciones coordinadas y sentar las bases de una nueva estrategia de desarrollo en el contexto democrático y en el marco de una nueva cooperación global.

13. Renovaremos esfuerzos para promover la creación y preservación del empleo en colaboración con los actores productivos y sociales junto con otros ministerios y organismos gubernamentales, en un marco de sustentabilidad económica y medioambiental que integre la gestión de recursos naturales y la innovación tecnológica en sintonía con los objetivos del trabajo decente. En la misma dirección y adhiriendo a los postulados del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), promoveremos la calidad de los empleos que se generen en el marco de un desarrollo sustentable ambientalmente, dado su potencial para generar ingresos, crear trabajo decente y reducir la pobreza.

14. En el marco de la crisis impulsaremos sinergias entre la inversión pública y privada en infraestructura, a fin de que la planificación y ejecución de los proyectos se orienten hacia aquellos que contengan un alto coeficiente de empleo, estimulando trabajos dignos y mejorando las calificaciones laborales.

15. Por todo lo expuesto, en los niveles nacionales y locales creemos imprescindible la colaboración y el intercambio con otros ministerios y organismos de las áreas económicas, educativas y sociales para desarrollar medidas que impulsen la demanda efectiva, contribuir al mantenimiento del nivel adquisitivo del salario, al sostenimiento y crecimiento de las empresas y a la mejora de los niveles de empleo, inclusive a través de paquetes de estímulo macroeconómico, cuando sea apropiado.

El rol de los Ministerios de Trabajo ante la crisis

16. Frente al actual contexto de crisis económica y sus efectos sobre el empleo, reconociendo el importante rol de nuestros ministerios en esta coyuntura, fortaleceremos la capacidad de la administración del trabajo como un elemento importante de toda acción que tenga por objeto la protección de los trabajadores y las trabajadoras, la cobertura de la seguridad social, las políticas activas de empleo y el diálogo social. Los ministerios de trabajo, según corresponda, pueden jugar un rol positivo contribuyendo a desarrollar relaciones laborales armónicas, ambientes de trabajo saludables y seguros, y salarios negociados. Sus contribuciones representan un aporte clave para la recuperación y prosperidad económica con empresas sostenibles.

17. Reafirmamos nuestro compromiso de asegurar el cumplimiento de nuestras legislaciones laborales nacionales y asegurar la vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Reconocemos que las normas internacionales del trabajo apoyarán la recuperación económica y, en consecuencia, que su promoción es especialmente importante en estos momentos.

18. Incrementaremos nuestros esfuerzos para reducir significativamente los niveles de trabajo no registrado, instrumentando o fortaleciendo la inspección del trabajo y otros mecanismos que aseguren el cumplimiento de las leyes laborales nacionales en el lugar de trabajo.

19. Reconociendo la heterogeneidad de la economía informal en los países del Hemisferio, promoveremos la adopción de medidas tendientes a su progresiva formalización. Esto contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y productividad y promoverá la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente.

20. Fomentaremos el desarrollo de las competencias, el perfeccionamiento y la readaptación profesional de los trabajadores y las trabajadoras mediante programas de formación técnica, tecnológica y profesional –articulados con las necesidades educativas y productivas– para mejorar su empleabilidad, con especial atención en quienes van a entrar por primera vez al mercado de trabajo, en aquellos que han perdido su trabajo o corren el riesgo de perderlo y en los grupos más vulnerables. Favoreceremos el desarrollo de competencias que permitan una utilización adecuada de las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para las empresas, los trabajadores y las trabajadoras.

21. Mejoraremos las competencias laborales y su certificación, y buscaremos los recursos necesarios para los servicios públicos de empleo, como responsables de impulsar políticas activas de vinculación, capacitación y movilidad laboral de manera que quienes buscan trabajo reciban servicios adecuados; así mismo nos esforzaremos por asegurar la calidad y disponibilidad de sus prestaciones, sobre todo para aquellas personas y grupos más vulnerables a la crisis.

22. Reconocemos la necesidad de fortalecer o implementar los instrumentos de políticas activas y pasivas, según las circunstancias nacionales, e incluyendo programas de empleo

de emergencia bien focalizados a fin de amortiguar el aumento del desempleo, proveer ingresos a los trabajadores y las trabajadoras cesantes o en riesgo de pérdida de sus trabajos y generar competencias que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras.

23. Impulsaremos políticas activas para la preservación del vínculo laboral en empresas cuya situación pudiera afectar los niveles de actividad económica y el empleo, según las circunstancias nacionales. Trabajaremos en colaboración con los actores sociales para encontrar opciones que minimicen la pérdida de empleos o mitiguen los efectos de la crisis económica sobre el empleo, en un marco de respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de diálogo social continuo.

24. Reconocemos la contribución de las empresas sostenibles, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas y otras unidades de producción en la reducción de la pobreza, la creación de riqueza y la generación de empleo. En la actualidad, en algunos países existen empresas que se enfrentan a un descenso en la demanda que, junto con un menor acceso al crédito, amenazan su sostenibilidad pudiendo, consecuentemente, desembocar en la disminución de puestos de trabajo. Por ello, contribuiremos a la creación de un ambiente propicio para el establecimiento y crecimiento de las empresas.

25. Redoblabremos nuestros esfuerzos para promover condiciones de igualdad de trato y de oportunidades en el mundo del trabajo a fin de que la crisis económica no se constituya en pretexto que incremente la discriminación en el mercado de trabajo. Incrementaremos nuestros esfuerzos, dando especial atención a los grupos vulnerables, en la atención y las oportunidades de los jóvenes en situación de riesgo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los trabajadores y las trabajadoras que perciben bajos salarios y los menos calificados, las personas ocupadas en la economía informal y los trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros.

26. Promoveremos políticas para brindar pleno acceso a las oportunidades de empleo y de formación profesional, técnica y tecnológica, desde nuestro ámbito de competencia, para la población y en especial para los grupos vulnerables, con el objetivo de superar la pobreza y la exclusión social, donde exista, en el marco de políticas de combate a toda forma de discriminación en el trabajo.

27. Profundizaremos nuestros esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus modalidades, incluyendo la servidumbre y semiesclava, mediante acciones integradas de Gobiernos y sociedad.

28. Trabajaremos para la reducción continua de la brecha de género, promoviendo la disminución de las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Aún cuando durante las últimas décadas se han realizado progresos, persisten desafíos que se tornan más relevantes con la crisis económica actual. Nos comprometemos a reforzar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas de empleo y promoverla en los programas de recuperación. Nos esforzaremos, en el ámbito de nuestras competencias, por asegurar que los lugares de trabajo estén libres de violencia y acoso en sus diversas manifestaciones. Contribuiremos a iniciativas de equidad en el lugar de trabajo que permitan alcanzar un mejor equilibrio entre responsabilidades familiares y laborales.

29. Priorizaremos la reducción del desempleo y de la precariedad laboral de los y las jóvenes del Hemisferio e intensificaremos esfuerzos para su inclusión en programas de formación profesional, aprendizaje calificante, reinserción educativa y modelos de vinculación educación-empresa con el objetivo de aumentar sus posibilidades de acceso a trabajos dignos y productivos.

30. Nos comprometemos a proteger a los niños y las niñas de la explotación económica y de la realización de tareas que puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), en concordancia con el compromiso adoptado por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno en la Cuarta Cumbre de las Américas. Asimismo, contribuiremos a adoptar estrategias nacionales coordinadas para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil, a más tardar en 2020, de conformidad con la Declaración de Compromiso de la Quinta Cumbre de las Américas y el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas.

31. Destacamos la necesidad de formular políticas nacionales en materia de salud y seguridad ocupacional y programas que promuevan la prevención y el control de riesgos ocupacionales, que reafirmen el compromiso de los Estados y de los empleadores, los trabajadores y las trabajadoras en la promoción de una acción eficaz en esta materia, aplicando un enfoque intersectorial.

32. Colaboraremos con los ministerios de salud para contribuir a reducir los efectos que tienen fenómenos como las pandemias o crisis sanitarias que pueden repercutir en la salud de la población, en la economía de los países y en el empleo, mediante la legislación y normativa adecuada, y la promoción del diseño e implementación de planes de preparación en las empresas y en los lugares de trabajo, con miras a afectar lo menos posible la salud de los trabajadores y las trabajadoras y la actividad productiva.

33. Nos comprometemos a hacer el mejor uso de mecanismos, según corresponda, que permitan mantener relaciones laborales estables y prioricen la negociación entre empleadores y trabajadores y trabajadoras a fin de prevenir y resolver controversias a través de la conciliación, la mediación, la mediación preventiva y los servicios de arbitraje, entendiendo que estos mecanismos juegan un importante papel para ayudar a las economías a recuperarse de la crisis actual.

34. Reafirmamos la importancia de proteger plenamente los derechos humanos de las y los migrantes, independientemente de su condición migratoria, y la observancia de las leyes laborales aplicables, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

35. En el contexto de la crisis económica actual, reconocemos que los trabajadores y las trabajadoras migrantes y sus familias son particularmente vulnerables. También reconocemos que las familias que dependen de las remesas de los migrantes van a enfrentar desafíos adicionales. Asimismo, incrementaremos, en el ámbito de nuestras competencias, los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en el mundo laboral.

36. Promoveremos la mejora de los sistemas de información y estadísticas de los mercados laborales nacionales, sectoriales y regionales, priorizando en esta etapa el desarrollo de observatorios de sectores y unidades productivas potencialmente afectados en sus niveles de actividad y empleo.

37. Coincidimos en que la crisis económica nos convoca a perfeccionar nuestras políticas y programas laborales y de empleo para mejorar las vidas de hombres y mujeres que trabajan y sustentar un crecimiento económico más equitativo. En este contexto, nos comprometemos a realizar las gestiones necesarias en el nivel nacional y ante los organismos de cooperación técnica y financiera internacional a fin de dotar a nuestros ministerios de trabajo de recursos humanos calificados y suficientes medios presupuestarios y técnicos para asumir de modo eficaz los retos inmediatos y de largo plazo que surgen del actual contexto.

38. Conscientes de los beneficios que conlleva el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de una activa cooperación horizontal en el ámbito interamericano, acordamos vigorizar la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) y otros mecanismos de cooperación horizontal en los niveles regional, subregional y bilateral para la promoción del empleo de calidad, el desarrollo de la fuerza laboral y la aplicación efectiva de la legislación laboral en nuestros países.

Estimular el diálogo social y la negociación colectiva

39. Fomentaremos el diálogo social, amplio e incluyente a nivel nacional, por sectores de actividad y a nivel de empresa, reconociéndolo como un mecanismo eficiente para mantener los niveles de empleo, preservar las calificaciones y compartir en forma justa tanto los costos de la crisis como los beneficios de la posterior recuperación económica y social.

40. Reforzaremos nuestros esfuerzos para promover la institucionalización de las diferentes prácticas de diálogo social vigentes en nuestros países y fortalecer nuestra respuesta a los actuales desafíos en los que se requiere aumentar los consensos y reducir los disensos.

41. Insistimos en la necesidad de promover la libertad sindical y ampliar la negociación colectiva para la incorporación de acuerdos entre las partes a los efectos de enfrentar la crisis con los menores costos posibles, reconociendo las heterogeneidades sectoriales y productivas.

42. Reconocemos que los derechos de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones. Nos comprometemos a garantizar el pleno respeto de este principio.

43. Nos comprometemos a apoyar el desarrollo de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y de empleadores, contribuyendo a incrementar sus capacidades en la defensa de sus intereses en la crisis y a consolidar un diálogo social vigoroso.

Fortalecer la protección social ante la crisis

44. Reconocemos la importancia de los sistemas de protección social para atender las necesidades de los segmentos más vulnerables de nuestras sociedades, particularmente en la actual crisis económica. Continuaremos explorando modelos de protección social para atender sus dificultades económicas y sociales, manteniendo un balance con la necesidad de promover la vinculación laboral y la empleabilidad.

45. Reiteramos nuestra convicción, expresada en las anteriores CIMT, de la necesidad de fortalecer y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social, asegurando, en el ámbito de nuestra competencia, su eficiencia y transparencia, con políticas efectivas que tomen en consideración los principios de universalidad y solidaridad, permitan su sustentabilidad y responsabilidad financiera, y promuevan la justicia, equidad e inclusión social, con independencia del modelo de gestión.

46. En el esfuerzo de garantizar una cobertura integral y una equitativa distribución de los beneficios, buscaremos propiciar una articulación del sistema de protección social que integre de forma coordinada, cuando corresponda, los regímenes contributivos y no contributivos.

47. Destacamos la relevancia de los mecanismos de protección al desempleo (apoyos o seguros por desempleo, entre otros), especialmente en el actual contexto. Dichos mecanismos deben ser parte de una estrategia integral que se complemente con políticas activas de empleo.

48. Diseñaremos o fortaleceremos, según las circunstancias de cada país, los instrumentos no contributivos de protección social, en las áreas de nuestra competencia, lo que permitirá gestionar un programa de beneficios sociales mínimos con transferencias hacia los hogares vulnerables o afectados por la crisis. Nuestra meta será proteger a los trabajadores y trabajadoras cesantes en países sin seguro de desempleo o provenientes de la economía informal contra el riesgo de caer en situación de extrema pobreza.

RESOLVEMOS:

A. Poner en marcha un Plan de Acción basado en esta Declaración y en el trabajo realizado por la XV CIMT y la Quinta Cumbre de las Américas, así como dedicar los recursos necesarios para ese fin.

B. Establecer dos grupos de trabajo, a saber:

a. Grupo de Trabajo 1: Trabajo Decente para Afrontar la Crisis Económica Global con Justicia Social para una Globalización Equitativa.

b. Grupo de Trabajo 2: Fortalecer los Ministerios de Trabajo para Promover el Trabajo Decente.

C. Alentar a los países del Hemisferio a que intensifiquen la cooperación y compartan conocimientos, experiencias y logros en las áreas de empleo, trabajo y protección social, así como intercambiar las mejores prácticas en la promoción del trabajo decente para todos, en el marco de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).

D. Agradecer la invaluable colaboración de los distintos organismos internacionales, en particular los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres: Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Panamericana de la Salud (OPS), etc., los cuales han ocupado un papel central en la promoción del trabajo decente e invitamos a fomentar todo espacio de diálogo regional con estas instituciones.

E. Agradecer al Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y a la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), en su carácter de interlocutores constructivos y de órganos consultivos, sus innumerables aportes a la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

F. Organizar la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA en El Salvador en 2011.

Plan de acción de Buenos Aires de 2009: Enfrentar la crisis con desarrollo, trabajo decente y protección social

1. NOSOTROS, LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE TRABAJO, REUNIDOS EN BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2009, CON OCASIÓN DE LA XVI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), nos comprometemos a implementar el siguiente Plan de Acción para enfrentar la actual crisis económica desde una perspectiva que integre el desarrollo, el trabajo decente, digno y productivo y la protección social para alcanzar un desarrollo integral y un crecimiento económico con mayor justicia y equidad en nuestro Hemisferio.

A. Organización

2. La Presidencia pro t mpore de la XVI CIMT (Rep blica Argentina) en colaboraci n con la Presidencia anterior (Trinidad y Tobago) y la futura (El Salvador), con el apoyo de la Secretar a T cnica de la OEA y en consulta con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento T cnico (COSATE), de la Comisi n Empresarial de Asesoramiento T cnico en Asuntos Laborales (CEATAL) y del Comit  T cnico Permanente sobre Cuestiones Laborales (COTPAL), ser  responsable de promover la implementaci n del Plan de Acci n y de mejorar la colaboraci n y la coordinaci n con las organizaciones internacionales relevantes.

B. Recursos

3. Los Estados Miembros deben dedicar los recursos económicos, técnicos y logísticos apropiados para ejecutar el Plan de Acción con la participación de COSATE y CEATAL. Asimismo, la Presidencia pro t mpore invitar  a las organizaciones regionales e internacionales relevantes a hacer contribuciones voluntarias para apoyar las actividades y proyectos incluidos en este Plan deacci n y para facilitar la participaci n de las referidas entidades sindicales y empresariales.

C. Grupos de trabajo

4. Se constituir n dos grupos de trabajo, que se detallan a continuaci n, cuyo objetivo central es asesorar a la CIMT en los prop sitos de la Declaraci n de Buenos Aires. Como tal, los grupos examinar n con mayor profundidad los temas identificados en este Plan deacci n, facilitar n el intercambio de experiencias, proporcionar n informaci n pertinente y estudios, y dar n seguimiento a iniciativas hemisf ricas relacionadas.

5. Al definir sus actividades y el enfoque que dar n a los temas identificados en este Plan deacci n, los grupos de trabajo deber n ce nirse a la Declaraci n de Buenos Aires y tomar n en cuenta los informes finales de los grupos de trabajo presentados a la XVI CIMT.

Grupo de trabajo 1:

Trabajo Decente para Afrontar la Crisis Econ mica Global con Justicia Social para una Globalizaci n Equitativa

6. El Grupo de Trabajo 1 dar  seguimiento a la Declaraci n de Buenos Aires desde una perspectiva de pol tica y atendiendo especialmente a las respuestas de los ministerios de trabajo frente a la crisis econ mica actual. Continuar  trabajando con base en la labor del anterior Grupo de Trabajo 1: El Trabajo Decente como Instrumento de Desarrollo y Democracia en el Contexto de la Globalizaci n.

7. El Grupo de Trabajo 1 tratar  los siguientes temas, en seguimiento a la Declaraci n de Buenos Aires y a los informes de los grupos de trabajo:

articulaci n de pol ticas econ micas, laborales, educativas, ambientales y sociales; respuestas de los gobiernos y los ministerios de trabajo a la crisis econ mica y sus impactos;

- estrategias para la preservaci n del empleo desarrolladas por parte de Gobiernos, trabajadores y empleadores con el prop sito de mitigar los efectos de la crisis econ mica;
- pol ticas, programas y desarrollos relacionados con los trabajadores migratorios;
- estrategias e iniciativas de empleo juvenil;
- estrategias de combate al trabajo infantil y erradicaci n de sus peores formas seg n lo enunciado por los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de las Am ricas;
- transversalizaci n de la perspectiva de g nero en las pol ticas laborales y de empleo;
- apoyo a la sostenibilidad de las micro, peque as y medianas empresas y otras unidades productivas;

- informalidad laboral y trabajo no registrado;
- políticas de protección social al desempleo de base contributiva y no contributiva;
- dimensión laboral de la globalización, procesos de integración regional y acuerdos de libre comercio;
- políticas de atención e incorporación de grupos vulnerables de acuerdo con lo señalado en el párrafo 26 de la Declaración de Buenos Aires;
- promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y experiencias de buenas prácticas de diálogo social;
- trabajo forzoso y trata de personas, y
- políticas de ingreso en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.

Grupo de trabajo 2:

Fortalecer los Ministerios de Trabajo para Promover el Trabajo Decente

8. El Grupo de Trabajo 2 dará seguimiento a la Declaración de Buenos Aires en lo relativo a los temas de capacidad institucional y continuará construyendo sobre la labor del anterior Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento de las Capacidades de los Ministerios de Trabajo para Responder a los Retos de la Promoción del Trabajo Decente en el Contexto de la Globalización”.

9. El Grupo de Trabajo 2 tratará los siguientes temas, en seguimiento a la Declaración de Buenos Aires y a los informes de los grupos de trabajo:

- fortalecer la capacidad de gestión de los ministerios de trabajo y los procesos de planeación estratégica;
- elaboración y seguimiento de programas nacionales de trabajo decente;
- cooperación internacional en materia laboral;
- desarrollo, cumplimiento y promoción de la legislación laboral;
- sistemas de información del mercado laboral;
- servicios públicos de empleo;
- formación y capacitación profesional, técnica y tecnológica y certificación de competencias laborales;
- inspección laboral;
- salud y seguridad ocupacional, y
- diálogo social.

D. Directrices para el funcionamiento de los grupos de trabajo

10. Los grupos de trabajo serán coordinados por los siguientes Ministros y Ministras de Trabajo, elegidos por esta conferencia, quienes podrán desempeñar sus funciones directamente o por medio de representantes:

Grupo de Trabajo 1:

Estados Unidos (Presidente), Brasil (Vicepresidente) y Guyana (Vicepresidente)

Grupo de Trabajo 2:

República Dominicana (Presidente), México (Vicepresidente) y Canadá (Vicepresidente)

11. La participación en los grupos de trabajo estará abierta a todos los Estados Miembros, así como a COSATE y CEATAL. La Presidencia pro t mpore buscar  los medios que aseguren la activa participaci n de todos los Estados Miembros y de COSATE y CEATAL en los grupos de trabajo. La Secretar a General de la OEA ser  la Secretar a T cnica de los grupos de trabajo y las organizaciones regionales e internacionales relevantes ser n consultadas para proveer apoyo y asistencia.

12. Los grupos de trabajo contar n con el apoyo de la Secretar a T cnica de la OEA y se reunir n por lo menos dos veces antes de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Asimismo, deber n definir un cronograma para las actividades asignadas en este Plan de Acci n antes de febrero de 2010, considerando la complementariedad de sus actividades y recogiendo las experiencias anteriores de los grupos de trabajo.

E. La Red Interamericana para la Administraci n Laboral

13. La CIMT renueva su apoyo y se compromete a potenciar la Red Interamericana para la Administraci n Laboral (RIAL) en tanto la misma se constituye como un mecanismo valioso para el fortalecimiento institucional y t cnico de los ministerios de trabajo y para la difusi n e intercambio entre los pa ses de aquellas pol ticas destinadas a paliar la crisis internacional.

14. La CIMT encomienda a sus autoridades (troika, presidencias y vicepresidencias de los grupos de trabajo) a revisar la Gu a de Operaci n de la RIAL, explorando los mecanismos m s adecuados de participaci n, decisi n, seguimiento y evaluaci n sobre la operaci n de la RIAL, incluyendo su Fondo de Cooperaci n y elaborando una propuesta en este sentido.

15. La RIAL dar  continuidad a las actividades que le fueron asignadas y desarrollar  las actividades sugeridas en los informes finales de los Grupos de Trabajo 1 y 2, pudiendo incluir nuevas  reas que se consideren necesarias en el marco de la Declaraci n y el Plan de Acci n de la XVI CIMT.

16. La Secretar a T cnica continuar  coordinando las actividades de la RIAL siguiendo las prioridades definidas por los ministerios de trabajo del Hemisferio en la XVI CIMT y con la m s amplia participaci n de sus miembros.

17. Los Estados Miembros har n todos los esfuerzos para asegurar la efectiva operaci n de la RIAL, incluyendo la realizaci n de contribuciones financieras y t cnicas, y la Secretar a T cnica continuar  explorando posibles fuentes de financiamiento. Reconociendo que esta cooperaci n trasciende la asistencia financiera, se promover n los canales de intercambio de experiencias, espacios de di logo, cooperaci n intraregional y asistencia t cnica, entre otros.

Los Estados Miembros comprometidos con el fortalecimiento de la RIAL, proporcionarán información periódicamente sobre programas en ejecución incluyendo mejores prácticas para el Portafolio de Programas de la RIAL. La Secretaría Técnica actualizará periódicamente una base de datos sobre programas en el Hemisferio como sustento de las actividades de intercambio y cooperación horizontal. En este esfuerzo solicitamos a la Secretaría Técnica que trabaje en coordinación con otras agencias internacionales.

XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)

31 de octubre - 1 de noviembre de 2011

San Salvador, El Salvador

Declaración de San Salvador de 2011: Avanzando en la recuperación económica y social con desarrollo sustentable, trabajo decente e inclusión social

NOSOTROS, LOS MINISTROS Y MINISTRAS PARTICIPANTES EN LA XVII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Salvador, El Salvador, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2011, conscientes de la necesidad de fortalecer y continuar avanzando en el proceso de recuperación económica y social de nuestros pueblos, reconocemos que el desarrollo sustentable, el trabajo decente y la inclusión social son ejes articuladores de las políticas públicas para mantener e incrementar los niveles y la calidad del empleo, y continuar fortaleciendo el rol tutelar y proactivo del Estado en la promoción y protección de los derechos del trabajo,

1. En el entorno económico que vive la región y considerando los diversos efectos de la crisis económica global que continúan afectando de manera distinta a nuestros países, reafirmamos que el objetivo principal del modelo de desarrollo en democracia debe ser la creación de empleo productivo en el contexto del trabajo decente. Para lograr este propósito, reconocemos que se deberá profundizar en la implementación de estrategias que lleven a desarrollar economías fuertes, sostenibles y equilibradas, articulando políticas macroeconómicas, financieras, laborales, medioambientales y sociales.

2. En el contexto de la celebración del Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, adoptada en la ciudad de Lima, Perú, el día 11 de septiembre de 2001, celebramos y, a la vez, reafirmamos el principio de que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Ratificamos los postulados de dicha Carta Democrática que establecen que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requiere el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores.

3. Recordamos la Declaración de la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 2005, cuyo lema fue: “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos de las Américas, le asignaron al derecho al trabajo un lugar central en la agenda hemisférica. Asimismo recordamos la Declaración de Compromiso de la Quinta Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago, en 2009, cuando nuestros Jefes de Estado y Gobierno, bajo lema “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad am-

biental”, se comprometieron al cumplimiento de las leyes laborales internas para ofrecer condiciones de trabajo aceptables y lugares de trabajo seguros y saludables, exentos de violencia, acoso y discriminación.

4. Reconocemos los avances y retos identificados en la XVII Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en diciembre de 2010 en Santiago, Chile, entre los que se destaca que, pese a los logros económicos alcanzados, persiste la desigualdad en la región y que el crecimiento económico no basta por sí solo para disminuir la desigualdad y generar empleos de calidad. Igualmente consideramos que la Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo Decente (2006-2015) es una herramienta para orientar nuestras acciones y avanzar en la consecución de los Objetivos del Milenio para el año 2015.

5. Recordamos que el Pacto Mundial para el Empleo, adoptado en la 98.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, advierte que, por regla general, la recuperación del empleo se alcanza varios años después de la recuperación económica, por lo que hacen falta opciones de políticas coordinadas para potenciar la eficacia de los esfuerzos nacionales e internacionales en la creación de empleo. Lo anterior requiere de coherencia de políticas y acciones que incluyan el respeto de los derechos del trabajo y la promoción del diálogo social.

6. Tal como lo ha reiterado el Director General de la OIT en la Memoria de la 100.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, es necesario continuar avanzando en un ideal de desarrollo sostenible con justicia social y en un modelo de crecimiento eficiente que permita superar los desequilibrios de la globalización y las desigualdades de ingresos. Compartimos la preocupación de la OIT de que la economía global aún no ha logrado crear las oportunidades de trabajo que la gente necesita; en este contexto, consideramos al desempleo y al subempleo como unos de los principales problemas de nuestro tiempo y reivindicamos al trabajo decente como el mejor medio para superar la pobreza. En virtud de que la crisis económica y financiera mundial sigue teniendo un fuerte impacto sobre las condiciones de trabajo, los salarios, los trabajadores vulnerables y el empleo en general, coincidimos en que es necesario buscar alternativas innovadoras, social y ambientalmente responsables en materia de ingresos, empleo e inversión, atendiendo a las particularidades de cada país y subregión.

7. En consecuencia, los Ministros y Ministras de Trabajo del Hemisferio adoptamos las siguientes propuestas para avanzar en la recuperación social y económica con desarrollo sustentable, trabajo decente e inclusión social, que se constituyan en un marco de referencia para las acciones de intercambio y cooperación regional.

El empleo en el centro de las estrategias para crear una economía fuerte, sostenible y equilibrada

8. Sostenemos nuestra convicción de que el empleo debe mantenerse como objetivo central de la política económica y social a nivel nacional e internacional, asumiendo que el verdadero progreso de nuestros países sólo puede alcanzarse cuando las mujeres y los hombres de nuestro Hemisferio estén vinculados a trabajos decentes.

9. Afirmamos que las políticas de empleo e ingresos son equivalentes y complementarias a las políticas macroeconómicas, monetarias y fiscales, y destacamos que éstas deben tener dentro de sus objetivos la generación de empleo productivo y de calidad.

10. Consideramos que es necesario fortalecer el rol del Estado para revertir la tendencia al incremento de las desigualdades económicas y sociales en algunos de nuestros países, superar la pobreza y consolidar la gobernabilidad democrática. Para lograr estos objetivos es fundamental que el Estado genere las condiciones para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales, promueva el diálogo social y asegure la libertad sindical.

11. Destacamos que es necesario que las políticas macroeconómicas, laborales, ambientales y sociales sean ejecutadas de manera coordinada para lograr un crecimiento económico fuerte, sostenible y equilibrado, generar y preservar empleo, reducir la pobreza y la economía informal, y mejorar la protección social.

12. Reconocemos que la articulación de políticas es un desafío con múltiples dimensiones. Por ello nos comprometemos a trabajar para lograr una mayor coordinación de políticas y acciones, en distintos niveles y ámbitos, colocando al trabajo decente y la inclusión social como objetivos transversales.

13. Impulsaremos políticas activas de empleo, particularmente aquellas relacionadas con los servicios públicos de empleo, la capacitación y formación profesional, teniendo en cuenta e integrando las necesidades del mundo productivo. Para alcanzar estos objetivos prestaremos especial atención a la ampliación y mejora de la red de servicios públicos de empleo; el desarrollo de programas de incentivos para la creación de empleos, y el apoyo para el mantenimiento y la retención del empleo en empresas afectadas por la crisis.

14. Fortaleceremos los programas de asistencia técnica, administrativa, financiera y gerencial para la instalación y fomento de micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas, tomando en cuenta la Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles, adoptada en la 96.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Compartiremos nuestra experiencia sobre otras unidades de producción, como las cooperativas, las sociedades mutuales, las asociaciones, las empresas autogestionadas y otras empresas sociales de producción, en aquellos países donde existan, como generadoras de trabajo y renta y promotoras de trabajo decente e inclusión social a fin de contribuir a garantizar que los beneficios del crecimiento económico sean ampliamente compartidos.

15. Promoveremos una política de capacitación y formación permanente que contemple una mayor articulación entre el mundo del trabajo, la educación formal y los sistemas de formación profesional como elementos esenciales para mejorar las competencias laborales de los trabajadores y la complementariedad, productividad y competitividad de nuestros países, fomentando la generación de empleo calificado y la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado; aspectos que fueron establecidos en la Resolución relativa a las calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, adoptada durante la 97.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

16. Trabajaremos para desarrollar sistemas nacionales de calificación y certificación profesional basados en estándares de competencias; coordinar la formación profesional con la educación básica de jóvenes y adultos; incluir en la currícula y planes de educación los principios y derechos en el trabajo y sobre salud y seguridad ocupacional; asegurar al trabajador en situación de desempleo el derecho a acceder a la formación profesional, y ampliar las oportunidades de formación y empleo de los grupos de población menos favorecidos promoviendo mayor equidad.

17. Teniendo en cuenta que en esta década la mayoría de los países de las Américas tendrá el mayor número de hombres y mujeres jóvenes de la historia, procuraremos promover políticas que permitan mejorar las capacidades de los jóvenes, aumentar sus oportunidades de acceso y facilitar su incorporación al mercado laboral. Para ello, fortaleceremos los servicios de información y orientación profesional y los servicios públicos de empleo, e impulsaremos el espíritu emprendedor en la juventud.

18. En el marco de las transformaciones que experimentan los sistemas productivos, impulsaremos una mayor sinergia entre las políticas productivas y educativas. Para ello, continuaremos promoviendo la inclusión en el mercado laboral y apoyando el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), reduciendo la brecha digital y potenciando las oportunidades que éstas ofrecen para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los jóvenes.

19. Promoveremos y articularemos esfuerzos para dotarnos de observatorios del mercado laboral, a los que consideramos instrumentos estratégicos de análisis e investigación que orientan la formulación de políticas y la toma de decisiones. Asimismo, avanzaremos en la armonización de estadísticas e indicadores relacionados con el empleo y la formación profesional.

20. Trabajaremos con otros ministerios en nuestros países y a nivel regional para promover la generación de nuevas formas de trabajo decente, productivo y ambientalmente sostenible (empleos verdes).

21. Promoveremos un marco de transición justa que provea trabajo decente para aquellos trabajadores que pudieran verse afectados por las acciones derivadas de los esfuerzos realizados para mitigar el cambio climático.

Avanzando en la construcción de condiciones más justas en el trabajo

22. Fortaleceremos nuestras acciones y capacidades en los temas centrales de la administración del trabajo para avanzar en la construcción de condiciones más justas en el trabajo.

23. Consideramos que la cooperación y la asistencia técnica en todas sus formas (multilateral, bilateral, etc.), especialmente de la OEA y la OIT, constituyen algunas importantes herramientas con que cuentan los Ministerios de Trabajo para respaldar e impulsar el fortalecimiento institucional. Por ello, valoramos y renovamos nuestro compromiso y apoyo a las iniciativas de la OIT y la OEA, destacando particularmente la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).

24. Continuaremos trabajando con firmeza para asegurar el cumplimiento de nuestras legislaciones laborales nacionales y la vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, mediante el fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo, la capacitación continua y la profesionalización de los inspectores de trabajo, así como la provisión de recursos y equipos adecuados, entre otros esfuerzos.

25. Nos comprometemos a promover el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas como valor inherente a toda sociedad democrática, propiciando la eliminación de todas las formas de discriminación en las relaciones laborales. Fortaleceremos políticas, programas y proyectos encaminados a prevenir y eliminar la discriminación, el acoso laboral (sexual, psicológico o de otra índole), la violencia y las brechas salariales que no permiten el acceso a condiciones laborales más justas en el trabajo.

26. Manifestamos nuestro compromiso para avanzar en la construcción de condiciones más justas en el trabajo, promoviendo el fortalecimiento de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, y el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares. Incrementaremos nuestros esfuerzos para eliminar progresivamente la brecha entre hombres y mujeres en el trabajo, removiendo aquellos obstáculos a la igualdad de oportunidades. En este sentido, nos proponemos continuar fortaleciendo el diálogo y la coordinación entre nuestros Ministerios y los Mecanismos Nacionales para el Avance de la Mujer, agrupados en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA.

27. Fortaleceremos el rol de la inspección del trabajo y las medidas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir y eliminar prácticas de discriminación, acoso laboral (sexual, psicológico o de otra índole), y la violencia contra la mujer y otros segmentos de la población.

28. Fomentaremos acciones que permitan el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar con el fin evitar el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y el incremento de los costos sociales.

29. Asumimos el compromiso de generar políticas que contribuyan a crear oportunidades para el acceso al trabajo decente de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, independientemente de su condición social, económica, étnica, racial, étnica, de género o religión.

30. Reconocemos que los trabajadores y las trabajadoras migrantes y sus familias son particularmente vulnerables. Por ello, reafirmamos la importancia de proteger plenamente los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria, y la observancia de las leyes laborales aplicables, incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Promoveremos esfuerzos, en el ámbito de nuestras competencias, para combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y el trabajo forzoso.

31. Consideraremos opciones que generen trabajo decente para mitigar los efectos negativos de la emigración de trabajadores calificados. Al mismo tiempo fomentaremos, para mejorar la situación de los trabajadores migrantes y dentro del ámbito de nuestras com-

petencias, medidas encaminadas a crear condiciones de trabajo decente para el desplazamiento, estadía y retorno digno, ordenado y seguro de los trabajadores migrantes.

32. Promoveremos políticas y programas para erradicar todas las formas de trabajo forzoso, defendiendo los derechos humanos en general y los derechos sociolaborales en particular, de todos los grupos vulnerables que sean o pudieran ser víctimas de este flagelo.

33. Impulsaremos estrategias de mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo construidas en colaboración con los actores sociales, promoviendo una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo para garantizar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.

34. Nos comprometemos a promover el desarrollo e implementación de políticas que faciliten la prevención de toda discriminación en los centros de trabajo basada en el estado real o supuesto respecto a enfermedades transmisibles y no transmisibles, e impulsaremos el acceso al trabajo decente a personas afectadas por estas enfermedades, respetando el derecho de los trabajadores a lugares de trabajo saludables y seguros.

35. Estamos convencidos que el diálogo social y la negociación colectiva, en un contexto de respeto a la libertad sindical son pilares fundamentales de la democracia y la prosperidad de nuestras naciones. Reforzaremos nuestras acciones para impulsar espacios de diálogo social a nivel nacional, regional y hemisférico y trabajaremos para que sean ámbitos inclusivos, abiertos, transparentes y tripartitos. En este sentido, reconocemos que el diálogo social, la concertación tripartita y el respeto de los principios fundamentales de libertad de asociación y negociación colectiva requieren de actores sociales (trabajadores y empleadores) representativos, protegidos ante prácticas de cualquier naturaleza que impidan o limiten el ejercicio de su autonomía.

36. Promoveremos la ampliación de la cobertura de los sistemas de protección social por medio de una combinación adecuada de esquemas contributivos y no contributivos en atención a las particularidades de cada país. Promoveremos el diseño de políticas y sistemas de protección social sostenibles, adaptados a las realidades de cada uno de nuestros países y que incluyan medidas activas de empleo. En estos casos, impulsaremos la ampliación de la cobertura basada en pisos de protección social, en atención a lo que define el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.

37. Reconocemos la necesidad de fortalecer las iniciativas de empleo y la protección social para reducir la pobreza en la región. Destacamos la importancia de continuar apoyando la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) para combatir la pobreza en la región a través de programas sociales implementados por diferentes instituciones de gobierno.

38. Diseñaremos políticas y promoveremos medidas tendientes a la progresiva formalización de la economía informal reconociendo que es un fenómeno heterogéneo y multidimensional. Estas políticas podrían incluir incentivos a la formalización empresarial y sistemas de registro e información que faciliten su formalización (ventanillas únicas), mecanismos de protección social, el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio del fortalecimiento de la inspección laboral y de sus facultades sancionatorias.

El flagelo del trabajo infantil: Un obstáculo para el desarrollo integral de las sociedades

39. Reconocemos la necesidad de erradicar el trabajo infantil que constituye una injusticia y un obstáculo para el progreso de nuestras sociedades e impide el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Destacamos que el combate al trabajo infantil requiere de una estrategia de acción multisectorial que exige un rol más activo de los Estados para asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación sobre edad mínima de trabajar o la de educación obligatoria. También plantea la necesidad de avanzar en transformaciones económicas, sociales y culturales que superen el fenómeno del trabajo infantil y lo eliminen como pretexto de formación.

40. Fortaleceremos la coordinación con las instituciones responsables de la niñez y adolescencia mediante un marco institucional dedicado a la prevención y erradicación del trabajo infantil. En tal sentido, apoyaremos acciones que mejoren los ingresos familiares mediante programas de protección social tales como las transferencias económicas condicionadas y similares.

41. Somos conscientes de que sólo es posible eliminar el trabajo infantil con la participación de todos los sectores de la sociedad, especialmente de los trabajadores y empleadores y mediante el establecimiento de iniciativas conjuntas. Asimismo los Estados Miembros desarrollaremos mecanismos apropiados en las regiones fronterizas y promoveremos el intercambio de experiencias.

42. Recordamos también que los líderes de la región, reunidos en la Cuarta y Quinta Cumbres de las Américas, hicieron un llamamiento a los ministros de trabajo y otras autoridades sectoriales para que adopten estrategias nacionales coordinadas para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil a más tardar en 2020. Asimismo será importante la participación de los ministerios de la región en la próxima conferencia mundial sobre la erradicación del trabajo infantil a realizarse en 2013 en Brasil.

POR LO TANTO, RESOLVEMOS:

G. Poner en marcha un Plan de Acción basado en esta Declaración y en el trabajo realizado por la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y la Quinta Cumbre de las Américas, así como dedicar los recursos necesarios para ese fin.

H. Establecer dos Grupos de Trabajo, a saber:

c. Grupo de Trabajo 1: “Desarrollo Sustentable con Trabajo Decente para una Nueva Era de Justicia Social”.

d. Grupo de Trabajo 2: “Fortalecer los Ministerios de Trabajo para Promover el Trabajo Decente y la Inclusión Social”.

I. Alentar a los países del Hemisferio a que intensifiquen la cooperación y compartan conocimientos, experiencias y logros en las áreas de empleo, trabajo y protección social, así como intercambiar las mejores prácticas en la promoción del trabajo decente para todos, en el marco de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).

J. Agradecer la invaluable colaboración de los distintos organismos internacionales, en particular los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (Organización de los Estados Americanos, Organización Internacional del Trabajo, Organización Panamericana de la Salud, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) los cuales han ocupado un papel central en la promoción del trabajo decente e invitamos a fomentar todo espacio de diálogo regional con estas instituciones.

K. Agradecer al Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y a la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), en su carácter de interlocutores constructivos y de órganos consultivos, sus innumerables aportes a la CIMT.

L. Agradecer y felicitar a Argentina por su liderazgo y compromiso como Presidente de la XVI CIMT.

M. Felicitar al Gobierno de Canadá por su excelente apoyo a través de los años a la RIAL.

N. Felicitar a Estados Unidos, Brasil y Guyana como Autoridades del Grupo de Trabajo 1, así como a República Dominicana, México y Canadá como Autoridades del Grupo de Trabajo 2.

O. Felicitar a la República Dominicana, los Estados Unidos y la OEA por auspiciar y organizar las reuniones de los Grupos de Trabajo de la XVI CIMT.

P. Organizar la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA en Colombia en 2013.

Plan de acción de San Salvador de 2011: Avanzando en la recuperación económica y social con desarrollo sustentable, trabajo decente e inclusión social

1. NOSOTROS, LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE TRABAJO, REUNIDOS EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011, CON OCASIÓN DE LA XVII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), nos comprometemos a implementar el siguiente Plan de Acción para continuar avanzando en la recuperación económica y social en nuestro Hemisferio desde una perspectiva que integre el desarrollo sustentable, el trabajo decente, digno y productivo y la inclusión social.

A. Organización

2. La Presidencia pro t mpore de la XVII CIMT (El Salvador) en colaboraci n con la Presidencia anterior (Argentina) y la futura (Colombia), con el apoyo de la Secretar a T cnica de la OEA y en consulta con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento T cnico (COSATE), de la Comisi n Empresarial de Asesoramiento T cnico en Asuntos Laborales (CEATAL) y del Comit  T cnico Permanente sobre Asuntos Laborales (COTPAL), ser  responsable de promover la implementaci n del Plan de Acci n y de mejorar la colaboraci n y la coordinaci n con las organizaciones internacionales relevantes.

B. Recursos

3. Los Estados Miembros deben dedicar los recursos econ micos, t cnicos y log sticos apropiados para ejecutar el Plan de Acci n con la participaci n de COSATE y CEATAL. Asimismo, la Presidencia pro t mpore invitar  a las organizaciones regionales e internacionales relevantes a hacer contribuciones voluntarias para apoyar las actividades y proyectos incluidos en este Plan de Acci n y para facilitar la participaci n de las referidas entidades sindicales y empresariales.

C. Grupos de trabajo

4. Se constituir n dos Grupos de Trabajo, que se detallan a continuaci n, cuyo objetivo central es asesorar a la CIMT en los prop sitos de la Declaraci n de San Salvador. Como tal, los Grupos de Trabajo examinar n con mayor profundidad los temas identificados en este Plan de Acci n, facilitar n el intercambio de experiencias, proporcionar n informaci n pertinente y estudios, y dar n seguimiento a iniciativas hemisf ricas relacionadas.

5. Al definir sus actividades y el enfoque que dar n a los temas identificados en este Plan de Acci n, los Grupos de Trabajo deber n ce nirse a la Declaraci n de San Salvador y tomar n en cuenta los Informes Finales de los Grupos de Trabajo presentados a la XVII CIMT.

a. Grupo de Trabajo 1: “Desarrollo Sustentable con Trabajo Decente para una Nueva Era de Justicia Social”

b. Grupo de Trabajo 2: “Fortalecer los Ministerios de Trabajo para Promover el Trabajo Decente y la Inclusión Social”

Grupo de trabajo 1: “Desarrollo Sustentable con Trabajo Decente para una Nueva Era de Justicia Social”

6. El Grupo de Trabajo 1 dará seguimiento a la Declaración de San Salvador desde una perspectiva de política y atendiendo especialmente a las respuestas de los Ministerios de Trabajo frente a los esfuerzos de recuperación económica y social. Continuará trabajando con base en la labor del anterior Grupo de Trabajo 1 “Trabajo Decente para afrontar la Crisis Económica Global con Justicia Social para una Globalización Equitativa”.

7. El Grupo de Trabajo 1 tratará los siguientes temas, en seguimiento a la Declaración de San Salvador y a los Informes de los Grupos de Trabajo:

- Coherencia de políticas económicas, laborales, educativas, ambientales y sociales en pos de un desarrollo fuerte, sostenible y equilibrado;
- Respuestas de los gobiernos y de los Ministerios de Trabajo a los desafíos de la recuperación económica y social;
- Examinar estrategias para la generación y preservación del empleo desarrolladas por parte de gobiernos, trabajadores y empleadores;
- Estrategias para reducir las brechas de ingresos con particular atención hacia los grupos en situación de vulnerabilidad;
- Políticas y programas relacionados con el empleo juvenil;
- Examinar estrategias de promoción de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo;
- Apoyo a la sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y otras unidades productivas;
- Estrategias para superar la informalidad laboral y el trabajo no registrado;
- Análisis de iniciativas impulsadas por los países para la construcción de un piso de protección social;
- Dimensión sociolaboral de la globalización en los procesos de integración regional y acuerdos de libre comercio;
- Experiencias de buenas prácticas de diálogo social y negociación colectiva.

8. El Grupo de Trabajo 1 desarrollará, según la disponibilidad de recursos, las siguientes actividades, basadas en las recomendaciones del Informe Final presentado a la XVII CIMIT, y podrá incluir nuevas áreas que considere necesarias:

- a. Profundizar el análisis de políticas, discutir mejores prácticas y determinar medidas innovadoras en la región enfocadas en la creación de trabajos decentes y sostenibles que protejan los derechos de los trabajadores y provean o expandan los programas, sistemas y beneficios de protección social para los más vulnerables.

b. Enfatizar que existe una persistente necesidad de combatir la informalidad y crear más oportunidades de trabajo decente en el sector formal, a través de una combinación de políticas educativas, sociales, económicas y de empleo. Se considerará el intercambio de buenas prácticas o estrategias para atender al sector informal, prestando particular atención al trabajo no registrado, a las comunidades rurales, los trabajadores domésticos y a otros trabajadores vulnerables en cada país.

c. Continuar los esfuerzos para apoyar los temas de empleo y protección social bajo los auspicios de la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) y como seguimiento al seminario conjunto RIAL-RIPSO sobre empleo y protección social celebrado en Río de Janeiro, Brasil en diciembre de 2010. Continuar la cooperación con agencias de gobierno a nivel estatal y local sobre empleo y protección social.

d. Desarrollar un intercambio más profundo de mejores prácticas en la región enfocado en empleos verdes (ejemplo: cómo son definidos, agencias responsables/aliadas en cada país, promoción de empleos verdes y capacitación, impactos ambientales). Reconocemos la importancia de que los Ministerios de Trabajo tengan un rol activo durante la próxima Conferencia Río +20. Adicionalmente, procuraremos identificar mejores prácticas en la región a través de un taller o estudio sobre el rol de los Ministerios de Trabajo frente a los desastres naturales o de origen humano, y las redes de protección social que existen para asistir a los ciudadanos. También discutiremos los impactos que estos desastres y emergencias tengan sobre los mercados de trabajo.

e. Reconocer la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan prosperidad e inclusión social, y apoyar el llamamiento a las instituciones financieras internacionales y regionales para que incrementen los préstamos y expandan el acceso a créditos tal como fue mencionado en la Quinta Cumbre de las Américas. Reconocer la necesidad de fortalecer las iniciativas empresariales en la región y el rol de los Ministerios de Trabajo en este sentido.

f. Incorporar el diálogo social como un elemento transversal en las discusiones de los Grupos de Trabajo y continuar expandiendo la cooperación, el intercambio y la sistematización de experiencias sobre el fortalecimiento del diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva.

g. Compartir mejores prácticas en la región e implementar programas que permitan mejorar las capacidades de nuestros jóvenes, aumentar sus oportunidades de acceso y facilitar su incorporación al mercado laboral. Reiteramos la importancia de realizar una actividad de seguimiento del seminario RIAL sobre empleo juvenil celebrado en Río de Janeiro, Brasil en 2008 y actualizar el Portafolio de Programas de la RIAL en este tema.

h. Continuar el intercambio de información sobre la transversalización del enfoque de género en la región para reducir la desigualdad y prevenir la violencia y el acoso laboral (sexual, psicológico o de otra índole).

i. Apoyar a Haití tras el devastador terremoto de enero de 2010.

j. Fortalecer la contribución continua de la CIMT al proceso G20, en particular respecto a temas laborales.

k. Avanzar en el análisis y seguimiento de las provisiones laborales de los tratados de libre comercio (TLC) y procesos de integración, dando especial atención al papel que los Ministerios de Trabajo están desempeñando en la negociación de esos acuerdos y su implementación.

Grupo de trabajo 2:

“Fortalecer los Ministerios de Trabajo para Promover el Trabajo Decente y la Inclusión Social”

9. El Grupo de Trabajo 2 dará seguimiento a la Declaración de San Salvador en lo relativo a los temas de capacidad institucional y continuará desarrollando la labor del anterior Grupo de Trabajo 2: “Fortalecer los Ministerios de Trabajo para promover el Trabajo Decente”.

10. El Grupo de Trabajo 2 tratará los siguientes temas, en seguimiento a la Declaración de San Salvador y a los Informes de los Grupos de Trabajo:

- Fortalecer la capacidad de gestión de los Ministerios de Trabajo y los procesos de planeación estratégica;
- Elaboración y seguimiento de programas nacionales de trabajo decente e inclusión social;
- Cooperación internacional en materia laboral;
- Observatorios del mercado laboral;
- Servicios públicos de empleo;
- Formación y capacitación profesional, técnica y tecnológica y certificación de competencias laborales;
- Inspección laboral;
- Salud y Seguridad en el trabajo;
- Desarrollo, cumplimiento y promoción de la legislación laboral y vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el trabajo;
- Estrategias de combate al trabajo infantil y erradicación de sus peores formas;
- Transversalización de políticas laborales para eliminar toda forma de discriminación;
- Avances en la eliminación del trabajo forzoso y trata de personas;
- Apoyar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

11. El Grupo de Trabajo 2 desarrollará, según la disponibilidad de recursos, las siguientes actividades, basadas en las recomendaciones del Informe Final presentado a la XVII CIMT, y podrá incluir nuevas áreas que considere necesarias:

- a. Fortalecer a la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) como el mecanismo de cooperación y asistencia técnica de la CIMT, según lo establecido en la sección E de este Plan de Acción. En este esfuerzo, reiteramos la voluntad política de los Ministerios de Trabajo del Hemisferio con este instrumento.
- b. Continuar y/o apoyar los esfuerzos de los Ministerios de Trabajo por mejorar su capacidad institucional, entre otros aspectos, la profesionalización de sus funcionarios y el desarrollo de ejercicios de planificación estratégica con una visión de evaluación de resultados.
- c. Impulsar las acciones de los Ministerios de Trabajo encaminadas a mejorar aspectos de la capacitación y formación profesional que permitan la preparación adecuada de la fuerza de trabajo, tales como experiencias innovadoras de los vínculos educación-empresas; desarrollo de multihabilidades; buenas prácticas del enfoque de competencias laborales y de certificación de competencias; la incorporación de avances tecnológicos en el aprendizaje; la articulación con los servicios de empleo, y la equiparación de capacidades o habilidades del personal con trabajos requeridos (job matching).
- d. Recopilar información regional, subregional y nacional sobre prácticas innovadoras en el uso de tecnologías de la información para la difusión y concientización del cumplimiento de la legislación laboral. Dicha información podría integrarse en un banco de datos de la RIAL al cual los países tengan acceso para impulsar el intercambio de buenas prácticas en materia de promoción y respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.
- e. Propiciar la responsabilidad social empresarial como un instrumento para la promoción del cumplimiento de la legislación laboral ya que el convencimiento, concientización, consenso y compromiso de los actores sociales son factores clave en el marco de una cultura de cumplimiento.
- f. Apoyar la ampliación y mejora de la red de servicios públicos de empleo para lograr mayor incidencia e impacto a nivel local. Compartir experiencias e identificar prácticas exitosas sobre la participación de los agentes sociales en el diseño de las políticas, la medición de satisfacción de los usuarios y la incorporación de las necesidades de empleadores y de las nuevas demandas del mercado laboral.
- g. Fortalecer los Observatorios del mercado laboral como un instrumento que permita a los Ministerios tener estudios y recomendaciones apropiadas sobre el mercado laboral.
- h. Fortalecer el servicio de inspección del trabajo y promover la concientización y compromiso de los empleadores y trabajadores sobre el respeto de los derechos de los trabajadores. Asimismo, profundizaremos el intercambio sobre instrumentos como la sistematización de los procesos de inspección que permitan evaluar resultados y obtener reportes oportunos para trazar políticas efectivas.

i. Apoyar la formulación de políticas nacionales de salud y seguridad en el trabajo que reafirmen el compromiso en la promoción de una acción eficaz en esta materia, con énfasis en la prevención y el cumplimiento. El enfoque tripartito debe continuar consolidándose, reforzado por el concepto de responsabilidad compartida.

j. Reforzar políticas públicas, programas y acciones de prevención y eliminación del trabajo infantil y que permitan compartir mejores prácticas en la región. Reconocer la importancia de que los Ministerios de Trabajo tengan un rol activo durante la Conferencia Global sobre Trabajo Infantil a realizarse en Brasil en el 2013.

D. Directrices para el funcionamiento de los grupos de trabajo

12. Los Grupos de Trabajo serán coordinados por los siguientes Ministerios de Trabajo, elegidos por esta Conferencia, quienes podrán desempeñar sus funciones directamente o por intermedio de representantes:

Grupo de Trabajo 1: Ministros de Trabajo de Brasil (Presidente), Estados Unidos (Vicepresidente) y PAIS (Vicepresidente)

Grupo de Trabajo 2: Ministros de Trabajo de Canadá (Presidente), Bahamas (Vicepresidente) y México (Vicepresidente)

13. La participación en los Grupos de Trabajo estará abierta a todos los Estados miembros, así como a COSATE y CEATAL. La Presidencia pro t mpore buscar  los medios que aseguren la activa participaci n de todos los Estados miembros y de COSATE y CEATAL en los Grupos de Trabajo. La Secretar a General de la OEA ser  la Secretar a T cnica de los Grupos de Trabajo y las organizaciones regionales e internacionales relevantes ser n consultadas para proveer apoyo y asistencia.

14. Los Grupos de Trabajo, con el apoyo de Secretar a T cnica de la OEA, se reunir n por lo menos dos veces antes de la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Asimismo, deber n definir un cronograma para las actividades asignadas en este Plan de Acci n antes de febrero de 2012, considerando la complementariedad de sus actividades y recogiendo las experiencias anteriores de los Grupos de Trabajo.

E. La Red Interamericana para la Administraci n Laboral (RIAL)

15. La CIMT reconoce que la RIAL ha logrado importantes resultados en el fortalecimiento institucional y la profundizaci n de la cooperaci n entre los Ministerios de Trabajo de la regi n y como tal, reitera su total apoyo y compromiso a este mecanismo.

16. La CIMT confirma la creación del Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL, instaurado por los Grupos de Trabajo de la CIMT en julio de 2010 y constituido en la Secretaría Técnica. Los Ministerios de Trabajo reiteran su compromiso de hacer contribuciones voluntarias al mismo, en los términos del Instructivo que lo rige y de acuerdo con las capacidades nacionales a fin de fortalecer la RIAL.

17. Orientar el trabajo inmediato de la RIAL con base en las siguientes propuestas:

- Actualizar permanentemente su página de Internet.
- Crear una biblioteca virtual con información institucional de los Ministerios de Trabajo (autoridades, organigramas, misiones, responsabilidades, manuales, legislación laboral, etc.).
- Realizar los talleres de la RIAL en alianza con otras organizaciones y, cuando el contexto lo permita, organizar los talleres en conjunto con la Reunión de Grupos de Trabajo para maximizar el uso de los recursos.
- Dar énfasis al seguimiento de las actividades RIAL.

18. La Secretaría Técnica continuará coordinando las actividades de la RIAL siguiendo las prioridades definidas por la CIMT y procurando la más amplia participación de sus miembros. Además, continuará explorando posibles fuentes de financiamiento para la operación de la misma.

19. Los Estados Miembros harán todos los esfuerzos para asegurar la efectiva operación de la RIAL, incluyendo la realización de contribuciones financieras y técnicas, y continuarán estrechando sus vínculos de cooperación horizontal y asistencia técnica a través de la misma. Asimismo, los Ministerios de Trabajo se comprometen a proporcionar información periódica a la Secretaría Técnica sobre su funcionamiento, autoridades, noticias sobresalientes y programas en ejecución para alimentar el Portafolio de Programas de la RIAL.

Ministros de Agricultura

Quinta Reunión Ministerial

“Agricultura y Vida Rural en las Américas”

26 - 29 de octubre de 2009

Montego Bay, Jamaica

Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas “Construyendo capacidad para mejorar la seguridad alimentaria y la vida rural en las Américas”

Nosotros, los Ministros y Secretarios de Agricultura o Jefes de Delegación, reunidos como la Quinta Reunión Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas”, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica y en el marco del proceso Cumbres de las Américas, en seguimiento del Acuerdo Ministerial Guatemala 2007 y de los mandatos relacionados con agricultura, seguridad alimentaria y vida rural de la Quinta Cumbre de las Américas (Puerto España, Trinidad y Tobago 2009), reafirmamos mediante el presente acuerdo nuestro compromiso con la implementación y la actualización del *Plan AGRO 2003- 2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas*.

Por ello, vistos los informes nacionales de avances y desafíos identificados en la implementación del Plan AGRO durante el proceso ministerial 2008-2009 y con base en el consenso alcanzado por los Delegados Ministeriales en la Reunión del GRICA 2009 (Grupo de Implementación y Coordinación de los Acuerdos sobre Agricultura y Vida Rural), adoptamos las **acciones estratégicas** de la Agenda Hemisférica para el bienio 2010-2011 y las **medidas** para la implementación y el seguimiento del Plan AGRO.

Agenda Hemisférica 2010-2011

La actualización de la Agenda Hemisférica para el bienio 2010-2011 se sustenta en la vigencia de las acciones estratégicas adoptadas en el 2003, 2005 y 2007 y en nuevos desafíos y énfasis identificados por los países en el proceso ministerial 2008-2009, en particular, los referidos a la seguridad alimentaria, la crisis económica global y el cambio climático y sus impactos en la agricultura y el medio rural.

Para la definición de las **acciones estratégicas** de la presente Agenda Hemisférica y congruentes con la forma de ver y actuar en la agricultura y el medio rural, se continuó con el uso de la AGRO-Matriz, empleada por los Ministros y Delegados Ministeriales en la elaboración del Plan AGRO en el 2003 y de los Acuerdos Ministeriales Hemisféricos Guayaquil 2005 y Guatemala 2007.

La AGRO-Matriz

Concepción Sistémica	Territorios rurales	Cadenas agroproductivo-comerciales	Entorno nacional e internacional	Objetivos estratégicos
Enfoque de Desarrollo Sostenible				
Productivo – comercial	I. Fomentando empresas rurales competitivas	II. Integrando las cadenas y fortaleciendo su competitividad	III. Promoviendo un entorno favorable para una agricultura competitiva	Competitividad
Ecológico – ambiental	IV. Asumiendo la responsabilidad ambiental en el campo	V. De la finca a la mesa impulsando una gestión ambiental integral	VI. Participando en la construcción de la institucionalidad ambiental	Sustentabilidad
Socio-cultural-humana	VII. Calidad de vida en las comunidades rurales: creando capacidades y oportunidades	VIII. Fortaleciendo el aprendizaje y el conocimiento en la cadena	IX. Promoviendo políticas para la creación de capacidades y oportunidades para las comunidades rurales	Equidad
Político – Institucional	X. Fortaleciendo la participación y la acción coordinada público-privada en los territorios	XI. Fortaleciendo el diálogo y los compromisos entre actores de la cadena	XII. Promoviendo políticas de Estado y la cooperación regional y hemisférica para la agricultura y la vida rural	Gobernabilidad
Objetivos Estratégicos	Prosperidad Rural – Seguridad Alimentaria – Posicionamiento Internacional			Objetivo Superior Desarrollo Sostenible de la Agricultura y el Medio rural

En este contexto, las principales estrategias que inspiran este acuerdo, respaldadas por los procesos Ministerial y de Cumbres de las Américas, son:

- aumentar la capacidad nacional para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la vida rural,
- fortalecer el posicionamiento de los temas y las prioridades de la agricultura y el desarrollo rural en la conciencia pública y en las estrategias nacionales,
- invertir más en agricultura y desarrollo rural,

- promover con los actores del agro una forma amplia de ver y actuar en la agricultura y el medio rural, y
- propiciar con ellos el enfoque de “trabajando juntos” por el mejoramiento de la agricultura y la vida rural en las Américas.

Por tanto, expresamos nuestra voluntad de impulsar conjuntamente con otros actores de la agricultura y la vida rural, las siguientes **acciones estratégicas**:

I. Fomentando empresas rurales competitivas

(Territorios rurales – dimensión productivo comercial)

Más y mejores alimentos

1. Promover la innovación tecnológica y difundir el uso de buenas prácticas de producción y de tecnología, basada en la ciencia, incluidas las ambientales y sanitarias, entre los productores, las organizaciones de productores, los líderes locales y los profesionales que brindan asistencia técnica para contribuir a incrementar la producción, la productividad, la nutrición, la calidad e inocuidad de los alimentos, la competitividad y la sustentabilidad de las actividades agropecuarias.

Diversificación de la canasta alimentaria

2. Mejorar la calidad de vida en las áreas rurales alentando la producción de alimentos tradicionales de consumo local y pertinencia cultural, potenciando el uso de especies y variedades subutilizadas y promoviendo el incremento de su productividad y comercialización mediante la investigación, entre otras acciones, con el fin de contribuir a la diversificación de la canasta alimentaria, el abastecimiento local, y seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

II. Integrando las cadenas y fortaleciendo su competitividad

(Cadenas agroproductivo comerciales – dimensión productivo comercial)

Almacenamiento y procesamiento de alimentos

3. Promover el mejoramiento de la tecnología e infraestructura de recolección, almacenamiento y procesamiento de alimentos mediante la inversión pública y privada que contribuya a un mejor aprovechamiento de la producción agropecuaria, una reducción de las pérdidas de post cosecha y un aumento del abastecimiento de alimentos a los mercados nacional y de exportación.

III. Promoviendo un entorno favorable para una agricultura competitiva

(Entorno nacional e internacional – dimensión productivo comercial)

Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos

4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y la modernización de la institucionalidad nacional e internacional para la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos con el propósito de mejorar:

- el estatus veterinario, fitosanitario y de la salud pública de los países,
- la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias, de acuerdo a normas internacionales basadas en la ciencia,
- los controles de fronteras y de las enfermedades transfronterizas, y
- la capacidad de gestión para prevenir y combatir la incidencia y el movimiento de los organismos invasivos y las enfermedades.

Gestión de suelos y agua

5. Fortalecer, conjuntamente con la cooperación de otras instituciones nacionales y con la asistencia técnica de organismos internacionales:

- la implementación de estrategias nacionales,
- el intercambio internacional de experiencias, y
- la movilización de recursos

para incrementar la capacidad de los actores del agro, fomentar la conservación, el manejo sostenible de los recursos de tierras y agua, y enfrentar la degradación, desertificación, inundaciones y sequías para la protección de la tierra y agua como bienes de la humanidad, así como, motivar el aumento de la producción y la productividad agropecuaria.

Tenencia de la tierra y titulación

6. Propiciar programas que faciliten el acceso a la tierra y el establecimiento de mecanismos que posibiliten la seguridad de su tenencia y titulación para los pequeños productores.

Gestión de riesgos y emergencias agrícolas

7. Mejorar y desarrollar instrumentos para la gestión de riesgos tales como:

- seguros agropecuarios,
- mecanismos para combatir los riesgos relacionados con la ocupación ilegal y el hurto agropecuario,
- integración de sistemas de información de alerta temprana,
- redes internacionales de cooperación para la evaluación de riesgos,

así como, fortalecer la capacidad nacional de gestión integral de emergencias en la agricultura y el medio rural generados por cambios agroclimáticos, meteorológicos y por la intervención humana.

IV. Asumiendo la responsabilidad ambiental en el campo (Territorios rurales – dimensión ecológico ambiental)

Los desafíos identificados están cubiertos por las anteriores Agendas Hemisféricas, por lo que no sugieren acciones estratégicas complementarias.

V. De la finca a la mesa: impulsando una gestión ambiental integral (Cadenas agroproductivo comerciales – dimensión ecológico ambiental)

Los desafíos identificados están cubiertos por las anteriores Agendas Hemisféricas, por lo que no sugieren acciones estratégicas complementarias.

VI. Participando en la construcción de la institucionalidad ambiental (Entorno nacional e internacional – dimensión ecológico ambiental)

Cambio climático

8. Fortalecer la capacidad del sector agrícola para mitigar y adaptarse al cambio climático mediante el desarrollo e implementación de estrategias que contemplen:
- la coordinación entre políticas ambientales y de seguridad alimentaria,
 - el desarrollo de incentivos para quienes protegen el ambiente,
 - la generación y el uso de tecnologías y prácticas ambientalmente sostenibles,
 - una mayor inversión de los sectores público y privado, y
 - evaluaciones del impacto del cambio climático y el intercambio de información.

Gestión agroambiental multisectorial

VII. Calidad de vida en las comunidades rurales: creando capacidades y oportunidades (Territorios rurales – dimensión socio-cultural y humana)

Gestión y liderazgo

10. Mejorar las capacidades de gestión y liderazgo empresarial por medio de la operación de instituciones rurales apropiadas brindando servicios tales como capacitación, difusión tecnológica, innovación e información de mercado, así como, otros servicios para la producción y la comercialización. Estas actividades deberían poner especial prioridad en pequeños y medianos productores y empresarios, trabajadores del campo, las mujeres y jóvenes.

VIII. Fortaleciendo el aprendizaje y el conocimiento en la cadena

(Cadenas agroproductivo comerciales – dimensión socio-cultural y humana)

Los desafíos identificados están cubiertos por las anteriores Agendas Hemisféricas, por lo que no sugieren acciones estratégicas complementarias.

IX. Promoviendo políticas para la creación de capacidades y oportunidades para las comunidades rurales

(Entorno nacional e internacional – dimensión socio-cultural y humana)

Producción e ingresos

11. Promover la ampliación de productores y empresarios rurales y el aumento del ingreso rural a través de:

- dar señales claras de precios de alimentos y los costos asociados al transporte y procesamiento,
- aumentar la capacidad de almacenamiento, post cosecha y mercadeo,
- estrategias nacionales dirigidas a la incorporación de grupos, organizaciones y comunidades rurales al proceso productivo,
- el aumento de la inversión en la agricultura,
- el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa rural, y
- la participación de las mujeres y los jóvenes rurales en actividades productivas que les generen ingresos, ocupación y empleo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en el medio rural con prioridad en quienes presentan una mayor vulnerabilidad social y a la inseguridad alimentaria.

X. Fortaleciendo la participación y la acción coordinada público-privada en los territorios

(Territorios rurales – dimensión político institucional)

Focalización en los territorios rurales

12. Promover el uso de un enfoque sistémico, multisectorial y participativo en el diseño de políticas y programas, en la asignación y la focalización de recursos para el mejoramiento de la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

XI. Fortaleciendo el diálogo y los compromisos entre actores de la cadena

(Cadenas agroproductivo comerciales – dimensión político institucional)

Mecanismos de coordinación y enfoque de cadena

13. Promover o fortalecer, según corresponda, la creación y operación de mecanismos de coordinación formales entre los actores públicos y privados de las cadenas agroproductivas que facilite, entre otros:

- la identificación y eliminación de los factores que restringen su competitividad,
- el análisis integral empleando el enfoque de cadena,
- la construcción de confianza y mecanismos institucionales para resolver los conflictos inherentes a cada cadena,
- el mejoramiento de la logística entre la finca y el consumo final,
- un mejor cumplimiento del marco regulatorio,
- la respuesta a las crisis, y
- el diálogo, la concertación y el seguimiento de compromisos para la acción.

XII. Fortaleciendo políticas de Estado y la cooperación regional y hemisférica para la agricultura y la vida rural

(Entorno nacional e internacional – dimensión político institucional)

Capacidad institucional

14. Fortalecer la capacidad institucional pública y privada para promover:

- la participación de los actores del agro en el desarrollo de sus propias capacidades,
- la expansión de los servicios técnicos y la innovación tecnológica para mejorar toda la cadena de valor agrícola con énfasis en los pequeños y medianos productores y empresarios,
- la construcción de capacidades comerciales que beneficien a la agricultura y las comunidades rurales,
- la gestión ambiental en las distintas actividades de la agricultura,
- la coordinación interinstitucional, y
- la participación informada en foros internacionales sobre agricultura y vida rural.

Inversión en agricultura y desarrollo rural

15. Promover políticas de Estado para el aumento de la inversión pública y privada, nacional e internacional, así como para un mejor financiamiento de la agricultura, los agronegocios, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, la infraestructura y los bienes públicos para el medio rural.

Implementación y Seguimiento

El Plan AGRO 2003-2015 refleja la voluntad de los países de trabajar hacia la Visión Compartida 2015, considerando que los gobiernos nacionales son los principales responsables de la implementación de la agenda compartida y de coordinar la participación con los demás actores públicos y privados del agro a la luz de sus compromisos y acuerdos internacionales.

Difusión del Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 y la AGRO-Matriz

16. La implementación del *Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009* requiere de una acción conjunta de los actores de los sectores público, privado y social. Por ello, es necesaria la difusión amplia del Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009, acción que los Delegados Ministeriales realizarán con el apoyo de las oficinas del IICA en los países, considerando las políticas de Estado de los países.

La forma amplia e integral como concebimos la agricultura y vida rural en el Plan AGRO (expresada en la AGRO-Matriz) constituye el aporte principal de nuestro proceso ministerial para facilitar la comprensión de la contribución de la agricultura y el medio rural al desarrollo de nuestros países, de acuerdo con el llamado de la Declaración de Compromiso de Puerto España, para que iniciemos acciones en el 2009 que faciliten la implementación de los compromisos de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno como se indica en los párrafos 23, 24, 25, 90 y 93 de la mencionada declaración.

Mecanismos y estrategias regionales

17. Fortalecer las reuniones regionales de ministros de agricultura y las de otros actores relacionados y trabajar conjuntamente con los mecanismos de integración regional para la consulta, identificación de prioridades, coordinación de acciones y adopción de políticas regionales en asuntos de interés común, en el contexto del Plan AGRO 2003-2015.

Apoyo y alineamiento de los organismos internacionales

18. Reiteramos nuestro llamado a las instituciones internacionales, como lo hicimos en 2001, 2003, 2005 y 2007, y les solicitamos que se incorporen activamente a la implementación del Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009.

Actualización de la Agenda Hemisférica

19. La Agenda Hemisférica 2010-2011 es la cuarta de seis agendas bienales para la implementación del Plan AGRO. Los gobiernos nacionales elaborarán informes sobre el avance en la implementación de cada agenda bienal e identificarán los desafíos enfrentados. Esos informes servirán de insumo para la actualización de la Agenda para el período 2012-2013. Por ello encomendamos:

- a los Delegados Ministeriales la elaboración, con el apoyo de la Secretaría del Proceso Ministerial, del informe nacional de avance y desafíos en la implementación de este Acuerdo Ministerial.
- al Foro Hemisférico de Delegados Ministeriales (GRICA) la construcción del Acuerdo Ministerial para el bienio 2012-2013.
- a la Secretaría Técnica para que informe en la Sexta Reunión Ministerial sobre el avance del Proceso Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas” y de las acciones que lleve a cabo para asegurar la coordinación de este Proceso Ministerial con el proceso de las Cumbres de las Américas, a fin de consolidar el posicionamiento de la agricultura y la vida rural en la Sexta Cumbre de las Américas a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia en el 2012.

Foros de diálogo de otros actores del agro

20. Dada la importancia de la participación de todos los actores de la cadena de valor en el logro de los objetivos de desarrollo de la agricultura y el medio rural, consideramos necesario promover foros de diálogo de otros actores, paralelos a la Reunión Ministerial, como son, de la empresa privada y de organizaciones sociales, entre otros actores claves del agro. En tal sentido, solicitamos al IICA y a otras organizaciones internacionales, socios institucionales del proceso Cumbres de las Américas, apoyar la realización de tales foros en las siguientes Reuniones Ministeriales.

Mecanismos de implementación

21. En el marco de las preocupaciones con respecto a la implementación efectiva de la Agenda Hemisférica 2010-2011, encomendamos al IICA proporcionar apoyo para fortalecer y monitorear la implementación del Plan AGRO en los Estados Miembros y facilitar el intercambio de experiencias.

Firmado en la ciudad de Montego Bay, Jamaica el veintinueve de octubre de dos mil nueve

Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2011

“Sembrando innovación para cosechar prosperidad”

19 - 21 de octubre de 2011

San José, Costa Rica

Declaración de Ministros de Agricultura, San José 2011

1. Nosotros, los Ministros y los Secretarios de Agricultura de las Américas, reunidos en San José, Costa Rica, del 19 al 21 de octubre de 2011, con el propósito de dialogar y adoptar compromisos para avanzar hacia la seguridad alimentaria, el bienestar rural y el desarrollo de un sector agroalimentario competitivo, sostenible e inclusivo y, en congruencia con los desafíos y los ejes temáticos señalados para la Sexta Cumbre de las Américas “*Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad*”, Colombia 2012.

2. Creemos que la innovación agrícola es un catalizador del crecimiento y el cambio positivo, estamos convencidos de que promover la innovación es vital para incrementar e intensificar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir pobreza e inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, responder a desastres naturales, incrementar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, consecuentemente, alcanzar la seguridad alimentaria y la calidad de vida para todos nuestros ciudadanos.

3. Reconocemos que la innovación en el sector agroalimentario debe comprender mejores prácticas y nuevas tecnologías, productos sanos e inocuos, mayor infraestructura y servicios de apoyo a la producción y a la comercialización, transferencia de tecnologías, compartir conocimiento en las cadenas de valor, servicios de capacitación y extensión, acceso al crédito y un marco jurídico y de políticas basado en la ciencia.

4. Estamos conscientes que responder a los desafíos actuales y prepararnos para el futuro, requiere impulsar la innovación en el sector agroalimentario en nuestro hemisferio, para alcanzar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales, tomando en cuenta el aumento de la demanda, el cambio climático, los altos costos de los insumos y las restricciones de los recursos.

Reafirmamos que:

5. El sector agroalimentario y el desarrollo rural desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de todos los países del hemisferio para lograr el crecimiento económico y social de los habitantes de las Américas.

6. El acceso efectivo a la innovación y la transferencia de tecnologías es un elemento clave para lograr un sector agroalimentario sostenible, competitivo e inclusivo.

7. La innovación ayudará al sector agroalimentario a abordar los desafíos económicos y ambientales y ofrecer las herramientas que convertirán al sector en un eje para el desarrollo económico y social.

8. La adopción de políticas públicas y de sistemas reglamentarios transparentes que promuevan y apoyen la innovación en el sector agroalimentario es fundamental para facilitar el desarrollo y el uso de tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras y alcanzar los objetivos de competitividad y crecimiento económico con integración social, de cada uno de nuestros países.

9. El uso de reglamentos técnicos y de medidas sanitarias y fitosanitarias basados en la ciencia, sin restringir el comercio nacional e internacional de manera injustificada, es clave para facilitar a los países el beneficiarse de las tecnologías agrícolas innovadoras.

10. Las iniciativas regionales, hemisféricas y globales en materia de innovación son un excelente complemento a los esfuerzos que cada uno de nuestros países despliega y, en consecuencia, serán las tareas prioritarias para la acción conjunta.

11. El apoyo de los organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y de financiamiento al desarrollo agroalimentario es esencial para lograr los objetivos comunes que los países hemos establecido, con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de innovación, construidos con base en diferentes tipos de cooperación.

12. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ejerce una función de liderazgo en apoyo a la innovación para el desarrollo competitivo y sustentable del sector agroalimentario de las Américas y el mejoramiento de la vida rural, por medio de la provisión de cooperación técnica, la difusión y el aprovechamiento de su conocimiento especializado y sus redes de expertos, implementando proyectos y trabajando con sus Estados Miembros.

Por lo tanto, instamos a:

13. Los Estados Miembros, las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y las organizaciones del sector público y privado a fortalecer los marcos institucionales, el aumento en la inversión y el financiamiento de la innovación agroalimentaria de forma sostenida, predecible y con resultados medibles.

14. Las organizaciones internacionales que operan en el hemisferio, las agencias nacionales de cooperación internacional, los gobiernos nacionales, los centros de investigación y los mecanismos regionales de investigación e innovación agroalimentaria, a cooperar mutuamente en beneficio de los países y a conformar una estrategia regional que fomente la innovación, la transferencia de tecnología y el acceso a las mismas.

Nos comprometemos a:

15. Promover, con el apoyo del sector público y privado, una mejor inserción de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos para el sector agroalimentario en los sistemas nacionales de innovación y el acceso a la tecnología y la construcción de capacidades para los pequeños productores.

16. Adoptar políticas públicas de innovación para el sector agroalimentario y fortalecer la creación y mejora de las organizaciones públicas y privadas pertinentes, incentivando su participación efectiva y comprometida.

17. Desarrollar estrategias nacionales para la generación, la difusión y el uso de la innovación, incluyendo la agrobiotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de información y comunicación, de acuerdo a las políticas de cada país, que apoyen y guíen todos los esfuerzos hacia el mejoramiento de la competitividad del sector agroalimentario, preservando los recursos naturales y promoviendo la integración social, el valor agregado en el país de origen y el desarrollo pleno de las capacidades productivas.

18. Promover la innovación, por medio del fortalecimiento de las evaluaciones de riesgo, medidas sanitarias y fitosanitarias y reglamentos técnicos, basados en la ciencia, como elementos claves, para permitir que los países se beneficien de un mejor acceso a los mercados de productos agroalimentarios.

19. Establecer condiciones favorables y mecanismos para impulsar una cultura de innovación basada en alianzas estratégicas para el trabajo colaborativo entre organizaciones públicas y privadas, en los niveles nacional e internacional norte-sur, sur-sur y triangular, a fin de desarrollar, transferir e implementar tecnologías y prácticas innovadoras orientadas a mejorar la productividad y la sustentabilidad del sector agroalimentario.

20. Fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana sobre seguridad alimentaria y mejorar la disponibilidad de información oportuna y confiable para fomentar la transparencia de mercados e identificar oportunidades comerciales de productos agroalimentarios.

21. Apoyar el trabajo de la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) para promover una mayor colaboración entre los Estados Miembros sobre maneras innovadoras para recolectar, procesar, analizar y diseminar información sobre los mercados y los productos agroalimentarios fomentando una mayor transparencia y eficiencia de los mercados.

22. Promover la inversión directa y sostenida en la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de los sistemas de extensión para asegurar la transmisión de estos mediante metodologías innovadoras.

23. Apoyar las innovaciones tecnológicas e institucionales que: (i) faciliten una mayor integración del sector agroalimentario –incluyendo productores de pequeña escala– en las cadenas de valor, (ii) fortalezcan los vínculos entre los sectores agroalimentarios tradicionales con los sectores “intensivos en conocimientos”, (iii) potencien la base tecnológica para emprender actividades competitivas y (iv) faciliten la integración social rural.

24. Impulsar la innovación, incluyendo las tecnologías de manejo de aguas y suelos, la biotecnología y demás factores, que contribuya a la resiliencia de los sistemas de producción agroalimentaria ante eventos climáticos adversos.

25. Estimular innovaciones en diferentes tipos de agroenergía que contribuyan a diversificar la matriz energética y a reducir el impacto ambiental negativo.

26. Promover la innovación en la gestión de riesgo climático e impulsar iniciativas nacionales, regionales y hemisféricas así como facilitar la identificación y difusión de mejores prácticas que reduzcan la vulnerabilidad del sector agroalimentario y del medio rural.

27. Invertir en el mejoramiento de las capacidades y habilidades de nuestros recursos humanos adecuadas para impulsar la investigación y la innovación así como promover el emprendedurismo agroalimentario.

28. Continuar apoyando al IICA en su capacidad de trabajar en conjunto con los países miembros para propiciar la innovación en el sector agroalimentario de conformidad con la presente Declaración.

Firmado en la ciudad de San José, Costa Rica el 21 de octubre del dos mil once.

Ministros de Seguridad Pública

Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA II)

4 - 5 de noviembre de 2009

Santo Domingo, República Dominicana

Consenso de Santo Domingo sobre seguridad pública

Nosotros, los Ministros y Ministras responsables de la seguridad pública en las Américas y los representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, los días 4 y 5 de noviembre de 2009 en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA II) convocada por la Asamblea General de la Organización mediante la resolución AG/RES. 2444 (XXXIX-O/09);

REITERANDO la vigencia e importancia del “Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas”, adoptado durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, celebrada en la Ciudad de México en octubre de 2008, así como de la Declaración de Puerto España de la Quinta Cumbre de las Américas;

TENIENDO PRESENTE que en el mencionado “Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas” los representantes de los Estados Miembros expresaron su voluntad política y la prioridad de enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad en todas las formas de manera conjunta, solidaria, preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente;

TOMANDO NOTA de los resultados de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Seguridad Pública: Reunión de Expertos preparatoria de la MISPA II, celebrada en Montevideo, Uruguay en agosto de 2009, así como de la reunión preparatoria de la sociedad civil realizada en Lima, Perú en septiembre de 2009;

RECONOCIENDO que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como mediante la promoción de la educación, la cultura, la salud y el desarrollo económico y social;

RECONOCIENDO ADEMÁS que son necesarios esfuerzos adicionales en los ámbitos hemisférico, subregional, nacional y local, para disminuir la delincuencia, la violencia y la inseguridad en la región;

SUBRAYANDO la importancia de la gestión de la seguridad pública; de la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad; de la gestión de la policía; de la participación ciudadana y comunitaria; y de la cooperación internacional;

CONSIDERANDO la importancia de continuar adoptando activamente políticas, programas y acciones en materia de prevención, para luchar contra la delincuencia, la violencia y la inseguridad, protegiendo los jóvenes en situación de riesgo y grupos en condiciones de vulnerabilidad; y

PREOCUPADOS por las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas de las actividades de la delincuencia organizada transnacional y otras formas de delincuencia organizada y convencidos de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional, respetando la soberanía de los Estados,

POR ENDE DEBERÍAMOS:

1. Avanzar decididamente en la implementación del “Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas” (MISPA/doc. 7/08 rev. 4).
2. Alentar a los Estados Miembros a intercambiar información en mejores prácticas y experiencias en temas de la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad; de gestión por la seguridad pública, gestión de la policía, participación ciudadana y comunitaria y cooperación internacional basadas en las experiencias exitosas de los Estados Miembros y de participación ciudadana y comunitaria.
3. Solicitar a la Secretaría General que, en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) y con el apoyo de los Estados Miembros, proponga iniciativas necesarias para la plena implementación del “Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas”.
4. Agradecer a la Secretaría General de la OEA el proyecto de estudio de factibilidad sobre las mejores formas para fortalecer en la región el entrenamiento y formación de personal con responsabilidad en materia de seguridad pública (MISPA/RE/doc. 4/09); solicitarle que complete el Estudio con aportes de los Estados Miembros, a fin de que sea presentado en la MISPA III para consideración de los Ministros, y que mantenga permanentemente informada a la CSH sobre los avances realizados.
5. Institucionalizar el proceso MISPA con una Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, a realizarse a partir de ésta cada 2 años (años impares) y una reunión de expertos preparatoria con antelación a las reuniones ministeriales, en el marco de la CSH.
6. Agradecemos y aceptamos con beneplácito el gentil ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile para ser sede de la próxima reunión de expertos preparatoria de la MISPA III.
7. Aguardamos con interés la continuación del proceso MISPA en nuestra tercera reunión que se celebrará en la República de Trinidad y Tobago.

8. Agradecemos y reconocemos al pueblo y Gobierno de la República Dominicana por haber sido sede de la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas y por su cálida acogida durante esta reunión.

Santo Domingo, República Dominicana, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA III)

17 - 18 de noviembre de 2011

Puerto España, Trinidad y Tobago

Recomendaciones de Puerto España sobre gestión de la policía

Nosotros, los Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas y los representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunidos en Puerto España, Trinidad y Tobago, los días 17 y 18 de noviembre de 2011, en la Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-III), convocada por la Asamblea General de la OEA, de conformidad con la resolución AG/RES. 2629 (XLI-O/11);

REAFIRMANDO la importancia de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, aprobado durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-I), celebrada en Ciudad de México, en octubre de 2008, así como el Consenso de Santo Domingo sobre Seguridad Pública, aprobado durante la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-II), llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre de 2009;

TOMANDO NOTA de los resultados de la Reunión de Expertos para la Preparación de la MISPA-III, celebrada en Santiago de Chile, en noviembre de 2010, en particular el apoyo de los Estados Miembros a la propuesta formulada por el Gobierno de Trinidad y Tobago de centrar la atención durante la MISPA-III en la gestión de la policía, uno de los pilares de la gestión de seguridad pública, contenido en el Compromiso por la Seguridad Pública de las Américas;

DESTACANDO que la gestión efectiva de la policía por parte de las autoridades nacionales competentes requiere la formulación e implementación de políticas integrales para abordar en forma plena y adecuada las preocupaciones de seguridad pública;

RECONOCIENDO que la profesionalización y el fortalecimiento de la policía requieren la continua observancia de las normas y principios de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la democracia y de los principios de justicia e imparcialidad, de la igualdad de género, de conformidad con las legislaciones nacionales de cada Estado, así como de fomentar las capacidades nacionales de los Estados mediante la provisión de asistencia técnica, desarrollo de capacidades y capacitación de la policía y del personal civil con responsabilidad en materia de seguridad pública;

TOMANDO NOTA de la finalización del Estudio de Factibilidad sobre las Mejores Formas para Fortalecer en la Región el Entrenamiento y Formación de Personal con Responsabilidad en Materia de Seguridad Pública preparado por la Secretaría General de la OEA; y

TOMANDO NOTA ASIMISMO del Documento de Puerto España: Institucionalización del proceso MISPA, aprobado durante esta reunión ministerial y el cual rige el proceso de las MISPA,

Acordamos las siguientes Recomendaciones para el Fortalecimiento de la Gestión de la Policía en el Hemisferio:

1. Promover el fortalecimiento de los sistemas de información, entre otras medidas, a través del mejoramiento de los métodos para la recolección y registro de datos mediante la utilización de la tecnología disponible, la promoción de la cooperación en materia de investigación y el intercambio de conocimientos en los ámbitos subregional, hemisférico e internacional de conformidad con las leyes nacionales aplicables.
2. Promover la confianza y la credibilidad de la sociedad en la gestión de la policía mediante, entre otras, la adopción de medidas que fomenten la responsabilidad, la transparencia, la efectividad, la participación ciudadana y comunitaria, el respeto de los derechos humanos y la perspectiva integral de género.
3. Implementar programas de capacitación policial que promuevan el respeto por los derechos humanos en el desempeño de las funciones policiales.
4. Apoyar la profesionalización y capacitación de personal con responsabilidad en materia de seguridad pública y mejorar, cuando sea necesario, el desarrollo profesional y los sistemas de gestión de carrera en la policía.
5. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en consulta con los Estados Miembros, continúe desarrollando programas de formación y capacitación continua para el personal de policía y personal con responsabilidad en materia de seguridad pública que contribuyan al fortalecimiento de la gestión policial, en las áreas de interés especificadas por los Estados Miembros en el marco del Programa Interamericano de Capacitación Policial y teniendo en cuenta los acuerdos suscritos por la Secretaría General de la OEA, entre otros.
6. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que prepare, actualice y publique un inventario de programas de capacitación ofrecidos por los Estados Miembros a fin de dar mayor difusión y acceso a las oportunidades de capacitación, aprovechando para ello el documento de la Secretaría General de la OEA en el que se resumen las prácticas óptimas y experiencias sobre la gestión de la policía y la cooperación internacional.
7. Alentar el conocimiento y, cuando corresponda, el uso de tecnologías para promover la eficacia y la modernización de la gestión y capacitación de la policía.
8. Alentar a los Estados Miembros a que consideren intercambiar instructores y materiales de capacitación civil y policial con el fin de crear nuevas áreas de cooperación y capacitación.

SEGUIMIENTO:

9. Solicitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que suministre a los Estados Miembros apoyo técnico continuo a fin de lograr los propósitos y objetivos de estas Recomendaciones.

10. Encomendar a la Secretaría General de la OEA que informe a las organizaciones internacionales, hemisféricas, regionales y subregionales pertinentes sobre los resultados de la Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-III) y las aliente a considerarlos y, en la medida que corresponda, actuar en consecuencia.

11. Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes ante la OEA, instituciones del sistema interamericano y otras organizaciones internacionales a que consideren realizar aportes voluntarios, financieros, técnicos y/o de recursos humanos para lograr la implementación de estas Recomendaciones.

12. Solicitar al Consejo Permanente de la OEA que dé seguimiento a estas Recomendaciones, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica.

13. Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la República de Colombia para ser sede de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IV) en 2013.

14. Nosotros, los Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas y los representantes de los Estados Miembros de la OEA, también expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago por ser sede de la Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-III), en Puerto España, Trinidad y Tobago.

18 de noviembre de 2011

Documento de Puerto España: Institucionalización del proceso MISPA

I. Propósito del Documento

1. Propósito del Documento. El presente Documento (en adelante, el “Documento”) regirá el proceso de las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA). A estos efectos, se referirá a las temáticas especificadas en sus respectivos capítulos.

Las reuniones MISPA cumplirán sus funciones en el marco de los propósitos, principios y demás normas pertinentes de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

En relación con los aspectos no previstos en este Documento, se aplicarán, en lo pertinente y en su orden, las disposiciones del Reglamento de la Asamblea General y del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.

El presente Documento se conocerá como “Documento de Puerto España: Institucionalización del proceso MISPA”.

II. Composición y funciones de las reuniones MISPA

2. Composición. En las reuniones MISPA participarán los Ministros de Seguridad Pública u otros Ministros de los Estados Miembros de la OEA que tengan responsabilidades en materia de seguridad pública.

Podrán acreditar delegaciones a las reuniones ministeriales los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización. Las delegaciones estarán integradas por los jefes de delegación, delegados alternos y asesores que los Gobiernos acrediten.

Los Estados, por intermedio de sus misiones permanentes ante la OEA, comunicarán por escrito a la Secretaría la integración de sus respectivas delegaciones, señalando el jefe de la misma.

3. Funciones. Las reuniones MISPA tendrán las siguientes funciones:

- a) Servir de foro hemisférico para el intercambio de información y experiencias, y la consolidación y el fortalecimiento de la cooperación en las áreas de seguridad pública.
- b) Formular recomendaciones a los Estados Miembros de la OEA en materia de cooperación en el área de seguridad pública.
- c) Dar seguimiento a sus recomendaciones y para estos efectos, cuando sea necesario, asignar mandatos específicos, incluyendo sus respectivos plazos, a grupos de trabajo técnicos subsidiarios.
- d) Seguir dando seguimiento a mandatos existentes que son objeto de recomendaciones de reuniones MISPA anteriores, llevadas a cabo antes de la aprobación de este Documento.
- e) Promover, cuando se considere necesario, el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre las reuniones MISPA y otros órganos, organismos, entidades y mecanismos de la OEA y, para estos efectos, formular recomendaciones y darles el seguimiento que estimen pertinentes.
- f) Promover y facilitar la coordinación y colaboración entre el proceso MISPA y otros procesos de cooperación internacional en las áreas de seguridad pública.
- g) Facilitar las demás funciones que sean acordadas.

III. Organización y Funcionamiento

4. Periodicidad, sede y convocatoria de las reuniones. Las reuniones MISPA se llevarán a cabo bienalmente en años impares.

La sede de la siguiente reunión MISPA se determinará teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los Estados Miembros en cada una de las reuniones MISPA.

En caso de que lo anterior no ocurra, los Estados podrán hacer ofrecimientos de sede para una de las reuniones MISPA mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de la OEA, quien informará al respecto a todos los Estados Miembros a través de sus misiones permanentes ante la Organización.

Si no hubiere ofrecimientos de sede para la celebración de una de estas reuniones o por cualquier motivo ésta no pudiere celebrarse en el lugar escogido, se llevará a cabo en la sede de la Secretaría General de la OEA.

La Asamblea General o, en su defecto, el Consejo Permanente de la OEA, mediante resolución, convocarán formalmente cada una de las reuniones MISPA y fijarán la fecha y, en los casos a que se refieren los dos párrafos inmediatamente anteriores, también la sede de la respectiva reunión.

5. Presidencia y vicepresidencias. Una vez que se convoque formalmente una de las reuniones MISPA de acuerdo con lo previsto en el último párrafo de la disposición anterior, el Estado Miembro que vaya a ser sede de la reunión asumirá la Presidencia y convocará a las reuniones preparatorias a que se refiere la disposición 7 del presente Documento.

En caso de que una de las reuniones MISPA se vaya a llevar a cabo en la sede de la Secretaría General de la OEA, el Estado Miembro que tenga la Presidencia continuará en el ejercicio de la misma y convocará las reuniones preparatorias previstas en la disposición 7 de este Documento. En este caso, al comienzo de la respectiva reunión MISPA se elegirá la Presidencia de la misma.

Asimismo, al comienzo de la respectiva reunión MISPA se elegirán las Vicepresidencias de la misma, las cuales tendrán como función reemplazar a la Presidencia en caso de impedimento de ésta.

6. Funciones de la Presidencia. La Presidencia tendrá las siguientes funciones:

- a) Representar al proceso MISPA ante los órganos de la OEA y en las reuniones, actos o ceremonias en que sea invitada en tal calidad.
- b) Coordinar con la Secretaría la preparación, desarrollo y seguimiento de las reuniones MISPA.
- c) Convocar a las reuniones preparatorias y presentar a consideración de las mismas las propuestas de temario y documentos propios de las reuniones MISPA, con el apoyo técnico de la Secretaría.

- d) Abrir y clausurar todas las sesiones y dirigir los debates.
- e) Someter a consideración los temas que figuren en el temario aprobado para cada una de las reuniones MISPA.
- f) Decidir los puntos de orden que se susciten durante las deliberaciones.
- g) Someter a consideración los puntos en debate que requieran la toma de una decisión, de acuerdo con lo previsto en la disposición 9 de este Documento, y anunciar los resultados.
- h) Las demás que le confiera este Documento y las reuniones MISPA de acuerdo con la naturaleza de sus responsabilidades.

7. Reuniones preparatorias. De conformidad con lo previsto en la disposición 5 de este Documento, se convocará a reuniones preparatorias para cada una de las reuniones MISPA con suficiente antelación a la fecha prevista para su celebración, de tal forma que las autoridades de las reuniones MISPA consideren enviar a sus representantes.

En las reuniones preparatorias se considerarán y prepararán los proyectos de temario, calendario y documento final de la respectiva reunión MISPA. Para estos efectos, en las reuniones preparatorias se acordarán los plazos dentro de los cuales los Estados Miembros, por intermedio de sus misiones permanentes ante la OEA, podrán presentar propuestas en relación con estos documentos.

Siempre que sea posible y si fuere necesario, se podrá acordar que la última reunión preparatoria se realice durante el día o días inmediatamente anteriores al comienzo de la respectiva reunión MISPA.

Para la adopción de las decisiones en las reuniones preparatorias se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en las disposiciones 8 y 9 del presente Documento.

8. Quórum. El quórum para sesionar en las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, se constituirá con la presencia de un tercio de los Estados Miembros de la OEA.

El quórum para los acuerdos a que se refiere la siguiente disposición se constituirá con la presencia de la mayoría de los representantes de los Estados Miembros de la OEA.

9. Acuerdos. Los acuerdos a que lleguen las reuniones MISPA se denominarán “recomendaciones” y tendrán dicho carácter.

Como regla general, las “recomendaciones” y demás documentos que se consideren en las reuniones se aprobarán por consenso. En caso de que se presenten controversias en relación con algún tema, la Presidencia interpondrá sus buenos oficios y realizará todas las gestiones a su alcance para lograr el consenso. Una vez que la Presidencia considere agotada esta etapa y no se logre el consenso, el tema podrá ser sometido a votación. En

este último caso, cada delegación tendrá derecho a un voto y la decisión correspondiente se tomará por mayoría simple de votos de las delegaciones presentes.

La implementación de recomendaciones que pudieran llegar a significar gastos para la OEA estará sujeta a la consideración que de tales gastos hagan las instancias competentes de la OEA, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos establecidos en el marco de la Organización.

10. Participación de Estados Observadores Permanentes. Los Estados Observadores Permanentes ante la OEA podrán participar en las reuniones MISPA en tal carácter, para lo cual informarán la integración de su respectiva delegación, mediante comunicación escrita transmitida por conducto de la Secretaría.

11. Participación de órganos, organismos, entidades, mecanismos y grupos de trabajo de la OEA. Los órganos, organismos, entidades, mecanismos y grupos de trabajo de la OEA podrán participar en las reuniones MISPA, en calidad de observadores, en tanto hubiera consenso entre los Estados Miembros.

12. Participación de otros organismos internacionales. Para la participación de otros organismos internacionales en las reuniones MISPA se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Reglamento de la Asamblea General de la OEA.

13. Participación de organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, debidamente registradas de acuerdo con las “Directrices para la participación de las Organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA” [CP/RES. 759 (1217/99)] y las “Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA” [CP/RES. 840 (1361/03)], podrán participar en las reuniones MISPA, en calidad de observadores.

IV. Grupos de Trabajo Técnicos Subsidiarios

14. Grupos de Trabajo Técnicos Subsidiarios. El proceso MISPA podrá establecer grupos de trabajo técnicos subsidiarios con la finalidad de que den seguimiento a sus recomendaciones, de conformidad con los cinco pilares establecidos en las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, a saber, la gestión de la seguridad pública, la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, la gestión de la policía, la participación ciudadana y comunitaria, y la cooperación internacional, al igual que otros temas actuales y emergentes.

El proceso MISPA asignará mandatos y plazos específicos a sus grupos de trabajo técnicos subsidiarios para que los desarrollen entre una y otra reunión MISPA, debiendo informar sobre los resultados alcanzados en relación con tales mandatos.

El mandato de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios expirará al final del tiempo otorgado por los ministros en materia de seguridad pública. Si no se ha especificado algún tiempo determinado, el mandato de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios expirará

cuando, en opinión de los ministros, hubiesen cumplido su cometido o cuando así lo determinen los ministros.

15. Funciones de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios. Los grupos de trabajo técnicos subsidiarios tendrán las siguientes funciones:

- a) Implementar los mandatos que reciban del proceso MISPA en el área de su competencia.
- b) Presentar informes en las reuniones MISPA en sus reuniones, o en cualquier otro momento que se le solicite, sobre los avances logrados en la implementación de los mandatos o funciones que le fueron asignados.
- c) Las demás que les asignen el proceso MISPA de acuerdo con el ámbito de sus competencias.

16. Periodicidad, sede y convocatoria de las reuniones de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

A no ser que dispongan lo contrario los ministros, los grupos de trabajo técnicos subsidiarios podrán reunirse por lo menos en una ocasión dentro del plazo que los ministros les asignen para su existencia.

Las reuniones de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios tendrán lugar en la sede de la Secretaría General de la OEA, a menos que un Estado Miembro ofrezca sede para una determinada reunión.

El Consejo Permanente de la OEA, mediante resolución, convocará formalmente a las reuniones de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios y fijará la fecha y sede de las mismas, en consulta con la Presidencia del grupo de trabajo técnico subsidiario.

17. Presidencia y Vicepresidencia de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

Las reuniones MISPA elegirán al Presidente del grupo de trabajo técnico subsidiario en la sesión en la que éste sea establecido.

Las delegaciones de los Estados Miembros que sigan al Estado Miembro que ejerza la Presidencia, de acuerdo con el orden alfabético en español, serán vicepresidentes ex officio del respectivo grupo de trabajo técnico subsidiario y lo reemplazarán en caso de impedimento del mismo.

En caso de que la reunión de un grupo de trabajo técnico subsidiario vaya a tener lugar fuera de la sede de la Secretaría General de la OEA, una vez que se convoque formalmente la respectiva reunión de acuerdo con lo previsto en el último párrafo de la disposición anterior, el Estado que vaya a ser sede de la misma asumirá la Presidencia del grupo y coordinará la preparación de la reunión con el apoyo de la Secretaría.

18. Funciones de la Presidencia de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios. La Presidencia de cada grupo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

- a) Coordinar con la Secretaría la preparación y desarrollo de las reuniones del grupo de trabajo técnico subsidiario, de acuerdo con los mandatos que a éste le haya asignado el proceso MISPA.
- b) Informar a las reuniones MISPA sobre los avances logrados en la implementación de los mandatos que le hayan asignado al grupo de trabajo técnico subsidiario.
- c) Abrir y clausurar las sesiones y dirigir los debates en las reuniones del grupo de trabajo técnico subsidiario.
- d) Someter a consideración del pleno del grupo de trabajo técnico subsidiario los puntos que figuren en el temario aprobado para cada reunión del grupo de trabajo.
- e) Decidir los puntos de orden que se susciten durante las deliberaciones.
- f) Someter a consideración del pleno del grupo de trabajo técnico subsidiario los puntos en debate que requieran tomar una decisión, de acuerdo con lo previsto en la disposición 9 de este Documento, y anunciar los resultados.
- g) Las demás que le confiera este Documento y el proceso MISPA de acuerdo con la naturaleza de sus responsabilidades.

19. Preparación de las reuniones de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios. La Secretaría asistirá a la Presidencia para elaborar una versión preliminar del proyecto de temario y, siguiendo las instrucciones de ésta, lo distribuirá a las demás delegaciones con por lo menos un mes de anticipación, señalando un plazo para que los Estados Miembros puedan hacer llegar sus observaciones o propuestas en relación con el mismo. Teniendo en cuenta las observaciones o propuestas recibidas oportunamente, se elaborará una versión revisada del proyecto de temario que se someterá a consideración al comienzo de la reunión.

Una vez que se reciban las observaciones y propuestas, en caso de que, en opinión de la Presidencia, sea necesario llevar a cabo una reunión preparatoria, entonces la Presidencia convocará dicha reunión.

20. Remisión a disposiciones establecidas para el proceso MISPA. En los aspectos que no se hayan previsto en este capítulo, los grupos de trabajo técnicos subsidiarios se regirán, en lo pertinente, por el resto de las disposiciones establecidas en este Documento y otras aplicables al proceso MISPA.

V. Relaciones con órganos, organismos, entidades y mecanismos de la OEA

21. Relaciones con órganos, organismos, entidades y mecanismos de la OEA. Las reuniones MISPA considerarán y formularán las recomendaciones que estimen pertinentes con el fin de consolidar y fortalecer la coordinación, el intercambio de información y la

cooperación entre ellas y los órganos, organismos, entidades y mecanismos de la OEA en las áreas de interés común, procurando evitar la eventual duplicación de acciones en relación con los mismos temas.

VI. Relaciones con otros procesos de cooperación

22. Relaciones con otros procesos de cooperación. Las reuniones MISPA formularán las recomendaciones que estimen pertinentes con el fin de consolidar y fortalecer la coordinación, el intercambio de información y la cooperación entre los Estados Miembros y otros procesos de cooperación relacionados con los temas de que se ocupan.

VII. Secretaría

23. Secretaría. La Secretaría General de la OEA prestará los servicios de secretaría técnica y administrativa al proceso MISPA y sus grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

En consecuencia, en todo lo que tiene que ver con su personal técnico y administrativo, así como con su organización y funcionamiento, la Secretaría se regirá por lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, las Normas Generales para su funcionamiento, aprobadas por la Asamblea General y las decisiones que, en desarrollo de las mismas, adopte el Secretario General de la OEA.

24. Funciones de la Secretaría. La Secretaría cumplirá las siguientes funciones:

- a) Asesorar a las respectivas presidencias en la preparación y desarrollo del proceso MISPA y sus grupos de trabajo técnicos subsidiarios.
- b) Asistir a las presidencias de las reuniones MISPA y de los grupos de trabajo técnicos subsidiarios en la elaboración y distribución, por conducto de las misiones permanentes ante la OEA, de los proyectos de temario.
- c) Coordinar los aspectos organizativos y administrativos relacionados con las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios. Cuando un Estado Miembro ofrezca sede para alguna de ellas, celebrará con éste un acuerdo cuya negociación y suscripción se coordinará a través de su misión permanente ante la OEA.
- d) Prestar los servicios propios de secretaría al proceso MISPA y sus grupos de trabajo técnicos subsidiarios, asistirlos en la elaboración y consideración de los respectivos proyectos de recomendaciones, clasificar, traducir, distribuir a las delegaciones y, si fuere el caso, difundir por Internet y por cualquier otro medio, los textos oficiales de los documentos presentados, considerados y aprobados en el marco de las reuniones MISPA.

e) Elaborar informes resumidos de las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, distribuirlos a las delegaciones y llevar el archivo de todos los documentos relacionados con tales reuniones.

f) Servir de punto central de coordinación y contacto para el envío y recepción de documentos y comunicaciones entre las autoridades que participan en las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, con respecto a todo lo relacionado con su organización, funcionamiento e implementación de sus respectivas recomendaciones.

g) Siguiendo las recomendaciones de las reuniones MISPA, promover, organizar y coordinar los programas, proyectos y actividades para facilitar y fortalecer el intercambio de información, la capacitación y la cooperación técnica. Para estos efectos y en permanente comunicación con los Estados Miembros, suscribirá los acuerdos respectivos con Estados, organizaciones internacionales y agencias que contribuyan a su financiamiento y con los Estados en que se ejecutarán, de conformidad con las disposiciones vigentes que rigen la materia en el marco de la OEA.

h) Administrar y mantener las redes que se lleguen a crear en el ámbito del proceso MISPA, en coordinación con los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, y en permanente comunicación con los Estados Miembros, en sus diferentes componentes, para la difusión y el intercambio de información en gestión de la seguridad pública, prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, gestión de la policía, participación ciudadana y comunitaria, así como prestar los servicios de capacitación y asistencia técnica con el fin de facilitar la participación de las autoridades en las mismas, para lo cual se suscribirán los acuerdos necesarios con los Estados o instituciones de éstos. Asimismo, servir de punto central de coordinación y contacto para el envío y recepción de documentos y comunicaciones entre las autoridades que participen en las citadas redes, con respecto a todo lo relacionado con su organización, mantenimiento y funcionamiento.

i) Llevar el registro de autoridades o puntos de contacto que participan en las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

j) Siguiendo las recomendaciones de las reuniones MISPA, elaborar documentos o estudios para apoyar el seguimiento o implementación de las recomendaciones de las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, para lo cual los Estados Miembros le suministrarán la información necesaria.

k) Siguiendo las recomendaciones de las reuniones MISPA, promover y realizar las gestiones necesarias para establecer o fortalecer la coordinación y colaboración con las secretarías de otros organismos, entidades o mecanismos de cooperación internacional en las materias de que se ocupan las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

l) Rendir los informes que le requiera la Asamblea General, el Consejo Permanente de la OEA o sus comisiones permanentes, en el ámbito de sus funciones de secretaría técnica y administrativa del proceso MISPA.

m) Siguiendo las recomendaciones de las reuniones MISPA, realizar gestiones para obtener recursos internos y externos para el financiamiento de las actividades de las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios.

n) Las demás propias de sus funciones de secretaría técnica y administrativa de las reuniones MISPA, los grupos de trabajo técnicos subsidiarios y redes de intercambio de información, para el adecuado funcionamiento de éstos.

25. Comunicación y coordinación entre los Estados Miembros y la Secretaría. Las comunicaciones y la coordinación entre la Secretaría y las autoridades de los Estados Miembros, con respecto a todos los aspectos relacionados con la preparación, desarrollo y seguimiento de las reuniones MISPA y los grupos de trabajo técnicos subsidiarios, así como sobre la implementación de sus recomendaciones, las redes de intercambio de información y los programas, proyectos y actividades de capacitación y cooperación técnica, se canalizarán a través de las misiones permanentes.

VIII. Disposiciones finales

26. Modificación del presente Documento. El presente Documento regirá el proceso MISPA una vez que lo acuerde la reunión respectiva de éstas y podrá ser modificado por ellas. Para estos efectos, de acuerdo con lo previsto en la disposición 9, se procurará que el acuerdo respectivo se apruebe por consenso, requiriéndose que el número de delegaciones presentes sea igual o superior a los dos tercios de los Estados Miembros de la OEA. En caso de votación, se necesitará la aprobación de los dos tercios de los Estados Miembros de la OEA.

27. Distribución y publicación. La Secretaría distribuirá a todas las delegaciones el presente Documento y lo publicará, en sus versiones en español, inglés, francés y portugués, a través de su página en Internet.

Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales

Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VIII)

24 - 26 de febrero de 2010

Brasilia, Brasil

Conclusiones y Recomendaciones de la REMJA VIII*

La Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VIII) se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, durante del 24 al 26 de febrero de 2010, de acuerdo con lo establecido en el “Documento de Washington” (REMJA-VII/doc.6/08 rev. 1) y en las Resoluciones AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2462 (XXXIX-0/09) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La REMJA VIII destaca la utilidad e importancia que ha tenido la implementación del “Documento de Washington”, aprobado en la REMJA VII para regir el proceso de la REMJA, tanto en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de dicho encuentro como en la preparación y desarrollo de la presente reunión. A este respecto, la REMJA VIII, en particular, destaca la trascendencia que ha tenido el hecho de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el “Documento de Washington”, en esta reunión hayan participado tanto Ministros de Justicia como Procuradores o Fiscales Generales de los Estados Miembros de la OEA con responsabilidades en cooperación jurídica internacional principalmente en materia penal. Lo anterior consolida las REMJA como foro hemisférico para la cooperación en este campo y constituye un avance fundamental para el mejoramiento de la coordinación interinstitucional e internacional y la definición y adopción de medidas concretas y prácticas, como las que se expresan en estas conclusiones y recomendaciones, para fortalecer la efectividad, eficiencia y agilidad en la acción conjunta de los Estados para prevenir, perseguir y combatir la criminalidad en las Américas.

Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su temario, la REMJA VIII aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales serán transmitidas a la Asamblea General de la OEA, en su cuadragésimo período ordinario de sesiones:

* Las presentes “Conclusiones y Recomendaciones” fueron aprobadas por consenso en la sesión plenaria celebrada el día 26 de febrero de 2010, en el marco de la Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VIII) celebrada en Brasilia, Brasil.

I. Medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en las Américas

La REMJA VIII reafirma que el daño causado y la amenaza que representan las diferentes manifestaciones de delincuencia en el Hemisferio para nuestros ciudadanos, para nuestras democracias y para el desarrollo económico y social de nuestros Estados, hacen necesario y urgente continuar fortaleciendo y perfeccionando la cooperación jurídica y judicial mutua a nivel hemisférico, así como asegurar que los Estados Miembros cuenten con legislación, procedimientos y mecanismos jurídicos en vigor que les permitan prevenir la delincuencia organizada transnacional y perseguir y castigar a quienes cometan este tipo de delitos, negar su acogida, así como al producto e instrumentos de su conducta delictiva.

En este sentido, la REMJA VIII destaca la utilidad y eficacia para el perfeccionamiento de la cooperación jurídica y judicial en materia penal que han probado tener diversos procesos que se han iniciado en el marco de las REMJA. Entre ellos se encuentran los relacionados con el apoyo a la reforma a la justicia en la región tales como la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA); el desarrollo de mecanismos de cooperación práctica, a través de reuniones, redes y otras modalidades de intercambio de información, experiencias, capacitación y cooperación técnica, entre las autoridades nacionales competentes en áreas tales como asistencia mutua penal y extradición, delito cibernético, trata de personas, políticas penitenciarias y carcelarias, e investigación forense; la iniciativa de elaborar y adoptar un plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional y el desarrollo de otros numerosos acuerdos expresados en las recomendaciones de las REMJA y de sus grupos de trabajo y reuniones técnicas, así como de los procedimientos establecidos para el seguimiento de la implementación de los mismos; y el fortalecimiento de la cooperación con otras organizaciones e instancias regionales, subregionales e internacionales en las diversas materias de que se ocupan las REMJA y sus grupos de trabajo y reuniones técnicas.

Los desarrollos dados en cumplimiento de las recomendaciones de las REMJA han demostrado tener un alcance práctico y ser de gran utilidad para consolidar la efectividad, eficacia y agilidad de la cooperación jurídica internacional principalmente en materia penal. Sin menoscabo de los progresos realizados en este ámbito, se requiere continuar avanzando y fortaleciendo aún más el trabajo conjunto de los Estados, a través de nuevas medidas y acciones concretas como las que se derivan de las recomendaciones de las reuniones de los grupos de trabajo y reuniones técnicas que se han realizado desde la REMJA VII y sobre las cuales la REMJA VIII ha tenido la oportunidad de recibir informes y formular recomendaciones específicas que se expresan en las siguientes secciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la REMJA VIII considera importante formular las siguientes recomendaciones relacionadas con medidas o acciones para el fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial en las Américas:

1. Que los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho firmen y ratifiquen o adhieran, según sea el caso, a la brevedad posible a:
 - a) La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementación (MESICIC) (“Documento de Buenos Aires”);

- b) La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo;
- c) La Convención Interamericana contra el Terrorismo;
- d) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA);
- e) La Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero;
- f) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;
- g) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos; y
- h) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

2. Que los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho adopten la legislación y otras medidas que se requieran para facilitar y asegurar la aplicación de las convenciones antes citadas y brindar la cooperación, en el marco de las mismas, entre otros, en asistencia mutua, extradición e incautación y/o decomiso de activos, que sea efectiva, eficiente y expedita.

3. Que los Estados Miembros de la OEA, cuando sea necesario y con pleno respeto a los principios de sus ordenamientos jurídicos internos, revisen su legislación interna y los mecanismos para su aplicación con miras a modernizar las herramientas para enfrentar los desafíos de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo la implementación de leyes y otras medidas para:

- a) Asegurar que las personas involucradas con la delincuencia organizada transnacional sean enjuiciadas por los Estados Miembros cuyas leyes han violado;
- b) Combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas;
- c) Fortalecer y aplicar los controles legales de importación y exportación para evitar el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos;
- d) Fortalecer los ordenamientos jurídicos y la cooperación internacional para evitar el narcotráfico;
- e) Facilitar, cuando su ordenamiento jurídico lo permita, con pleno respeto a las garantías individuales y procesales, y de conformidad con la legislación aplicable, la interceptación de comunicaciones por cable, orales y electrónicas y compartir esa información con otros Estados Miembros para la aplicación de la ley;
- f) Considerar, con pleno respeto a la soberanía de los Estados y de acuerdo con los principios de sus ordenamientos jurídicos internos y de lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales que

otorguen un marco jurídico a los equipos de investigaciones conjuntas, así como la necesidad de que las legislaciones nacionales vayan progresivamente considerando este nuevo mecanismo de asistencia mutua entre los Estados;

g) Promover investigaciones financieras eficaces encaminadas al decomiso de los productos e instrumentos de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo, cuando sea compatible con su marco jurídico nacional, el decomiso no basado en una condena;

h) Considerar, cuando su ordenamiento jurídico interno lo permita y de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos, el cumplimiento de las órdenes extranjeras de embargo preventivo, incautación y decomiso, tomando en cuenta las cuestiones relacionadas con la gestión de activos previo a su decomiso, así como la liquidación eficaz, el mantenimiento adecuado y la devolución de los bienes decomisados;

i) Utilizar todos los avances posibles en tecnología forense en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y

j) Asegurar la protección efectiva de las víctimas y testigos en el marco de las actuaciones penales, promoviendo a su vez, a través de mecanismos de cooperación expeditos, que se viabilice la reubicación de los mismos, de acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

4. Que se dé la debida consideración a las propuestas relacionadas con el desarrollo de instrumentos jurídicos complementarios de los existentes para fortalecer la cooperación jurídica internacional en materia penal, teniendo en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo y reuniones técnicas de las REMJA.

5. Que los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho, tomen las medidas que sean necesarias con el fin de establecer y asegurar el funcionamiento de las autoridades centrales para la cooperación recíproca en asistencia mutua en materia penal, extradición e incautación y/o decomiso de activos, así como para garantizar que ellas cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan cumplir sus funciones en forma eficaz, eficiente y expedita.

6. Que los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho, tomen las medidas necesarias con el fin de facilitar, dentro del marco de su ordenamiento constitucional, canales de comunicación directa y de contacto permanente entre las autoridades centrales con responsabilidades en la cooperación recíproca en asistencia mutua en materia penal, extradición e incautación y/o decomiso de activos, así como para acelerar los procedimientos y reducir o eliminar los factores que contribuyen al retraso en la transmisión y ejecución de las solicitudes de cooperación en asistencia mutua en materia penal, extradición e incautación y/o decomiso de activos.

7. Que, dado el carácter transversal que tiene la cooperación en asistencia mutua en materia penal, extradición e incautación y/o decomiso de activos, las REMJA se continúen consolidando como foro para la cooperación hemisférica en esas materias y las entidades,

órganos, organismos, grupos o mecanismos de la OEA, en el marco de sus respectivas competencias, tomen las medidas pertinentes con el fin de facilitar y fortalecer la cooperación entre ellos y las REMJA en dichas áreas y de evitar la duplicación de esfuerzos.

8. Que, de conformidad con los principios de sus ordenamientos jurídicos internos, se potencie el uso de las nuevas tecnologías, como las videoconferencias, de modo seguro y responsable, para hacer más efectiva, eficaz y ágil la cooperación jurídica y judicial en las Américas.

9. Que se continúe promoviendo, apoyando y desarrollando programas de capacitación de las autoridades y expertos gubernamentales, tales como los que se han venido desarrollando en materia de prevención, investigación y procesamiento del delito cibernético, y en la Red en Materia Penal, para facilitar la cooperación jurídica internacional en las áreas correspondientes.

10. Que se continúe fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación entre las REMJA y otras organizaciones, foros, mecanismos o instancias subregionales, regionales e internacionales, en asistencia mutua en materia penal, extradición e incautación y/o decomiso de activos.

II. Asistencia Mutua Penal y Extradición

1. Expresar su satisfacción por la realización de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2009, así como por el hecho de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el “Documento de Washington”, en la misma hayan participado tanto las autoridades centrales como las autoridades de cooperación jurídica internacional y otros expertos gubernamentales con responsabilidades en asistencia mutua penal y extradición de los Estados Miembros de la OEA.

2. Aprobar las recomendaciones adoptadas en la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición, las cuales se encuentran publicadas en el documento PENAL/doc.29/09 rev.1, y al respecto, solicitar que, por conducto de la respectiva presidencia, se informe a la REMJA IX sobre los avances logrados en relación con éstas.

3. Instar a los Estados a darle la debida consideración y aplicación a las guías de mejores prácticas con respecto a la “Recolección de Declaraciones, Documentos y Pruebas Físicas” y a la “Asistencia Mutua en relación con la Investigación, Congelación, Decomiso e Incautación de Activos que sean Producto o Instrumento de Delitos” y al “Formulario sobre Cooperación Jurídica en Materia Penal” (documento PENAL/doc.19/07 rev. 1), así como a la “Ley Modelo de Asistencia Mutua en Materia Penal” (documento PENAL/doc.20/07 rev. 1).

4. Encomendar al Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en su Cuarta Reunión, que, con el apoyo de la Secretaría Técnica de las REMJA:

a) Avanzar en la consideración del desarrollo de un instrumento jurídico interamericano, complementario de los existentes, con el objeto, entre otros, de facilitar el uso de nuevas tecnologías de comunicación para la cooperación en asistencia mutua en materia penal y extradición, y solicitarle que, por conducto de su Presidencia, informe al respecto a la REMJA IX.

b) Considere la elaboración de un instrumento jurídico interamericano, ágil y expedito en materia de extradición, que incluya los avances y nuevos institutos desarrollados en los ámbitos bilaterales y subregionales, a fin de fortalecer la cooperación en este campo.

c) Continúe promoviendo el intercambio de información en torno a los desarrollos subregionales que se están dando, entre otros, con la adopción del Tratado Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); del Tratado sobre la Orden de Arresto de la CARICOM (“CARICOM *Arrest Warrant Treaty*”) y la propuesta sobre un “Mandato MERCOSUR de Captura (MMC)”. Asimismo que, teniendo en cuenta éstos y otros desarrollos internacionales relacionados, considere avanzar en la elaboración de un texto de acuerdo modelo en la materia.

d) Considere avanzar en la elaboración de acuerdos modelos que otorguen un marco jurídico a las investigaciones conjuntas y/o coordinadas y las técnicas especiales de investigación, así como en la formulación de otras recomendaciones sobre medidas legales y de otra naturaleza que faciliten a los Estados considerar, crear y poner en práctica estos nuevos mecanismos de asistencia mutua entre ellos, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; en los artículos 9.1.c) y 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y en los artículos 49 y 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Para la elaboración de dichos acuerdos modelo podría tenerse como referencia asimismo, el proyecto de “Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados para la creación de Equipos Conjuntos de Investigación en Materia de Crímenes Transnacionales”, que se encuentra actualmente en negociación en el ámbito de las reuniones de los Ministros de Justicia de dicho foro regional.

e) A partir de la guía de mejores prácticas que elaboró en la materia, continúe dando consideración al tema de la asistencia mutua en relación con la investigación, congelación, decomiso e incautación de activos que sean producto o instrumento de delitos, y formule las recomendaciones que estime pertinentes para continuar mejorando y fortaleciendo la cooperación en este campo entre los Estados Miembros de la OEA.

5. Recomendar que los Estados Miembros de la OEA consideren diversas medidas para mejorar la captación de recursos contra la delincuencia organizada, incluyendo la implementación de medidas que se ajusten a las leyes nacionales para congelar, confiscar, incautar y compartir los productos de actividades ilícitas, y que consideren la posibilidad de establecer un fondo de la OEA para asistir a los Estados Miembros.

6. Recomendar que los Estados Miembros, reconociendo la creciente necesidad de mejorar la asistencia mutua en materia penal entre ellos, tomen las medidas necesarias para perfeccionar la cooperación en esta área, tales como:

- a) Perfeccionar las legislaciones nacionales relativas a la asistencia mutua en materia penal;
- b) Implementar las recomendaciones de las REMJA para perfeccionar la asistencia mutua en materia penal en el Hemisferio, y
- c) Considerar medidas para perfeccionar la asistencia mutua en materia penal con países fuera del Hemisferio, e incluso, cuando corresponda, ampliar la aplicación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal en tales países.

7. Recomendar que los Estados Miembros que participen en el Duodécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, den a conocer la anterior recomendación a los otros Estados.

8. Agradecer y aceptar el ofrecimiento de sede para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición, realizado por la Delegación del Paraguay.

9. Solicitar a la Secretaría Técnica de las REMJA que continúe propiciando y fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación con otras redes, organizaciones y procesos de cooperación internacional en materia penal.

10. Encomendar a la Secretaría Técnica que, con antelación a la REMJA IX, recabe información de los Estados sobre los avances dados hasta entonces en las materias a que se refieren las recomendaciones de reuniones anteriores relacionadas con cooperación jurídica internacional en materia penal y la organice en forma agregada en un informe de carácter hemisférico que presente a dicha reunión.

III. Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (“Red en Materia Penal”)

1. Reconocer los avances dados por la Secretaría General de la OEA en la institucionalización, consolidación, mantenimiento, ampliación y obtención de financiamiento de la Red en Materia Penal, los cuales se expresan, entre otros, en la suscripción de memorandos de entendimiento con instituciones de los Estados Miembros de la OEA y la participación de sus respectivos funcionarios en el Sistema de Comunicación Electrónico Seguro; la capacitación a los nuevos usuarios de este sistema en el taller realizado en San Salvador, El Salvador, el 31 de marzo de 2009 y a través del programa de capacitación en línea por medio del “Portal Educativo de las Américas”; y la actualización y traducción a los cuatro idiomas oficiales de la OEA de todos los documentos pertinentes de los componentes público y privado de la Red en Materia Penal.

2. Expresar su satisfacción por el desarrollo de las herramientas electrónicas para enviar y responder en forma segura las solicitudes de asistencia mutua penal y con respecto al diccionario de términos jurídicos de uso común en asistencia mutua penal y extradición en los cuatro idiomas oficiales de la OEA.

3. Respaldar que se avance en el desarrollo de una fase piloto de la herramienta para el uso de videoconferencias seguras, incluyendo la elaboración de un proyecto de convenio modelo para la utilización de videoconferencia en la toma de declaraciones de testigos, peritos, víctimas e imputados, con absoluto respeto de las garantías de defensa en juicio con relación a éstos últimos e instar a los Estados a que regulen el uso de esta herramienta en sus normativas internas, y que se informe sobre los desarrollos dados al respecto a la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición y a la REMJA IX.

4. Destacar la utilidad del “Boletín de Cooperación Jurídica” y solicitar a la Secretaría Técnica de las REMJA que éste se continúe realizando e invitar a los Estados a que contribuyan con información para el mismo.

5. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que, en el marco de los recursos de que dispone, continúe brindando los servicios de mantenimiento, actualización, apoyo y asistencia técnicos de la Red en Materia Penal; de capacitación a los funcionarios que participan en el Sistema de Comunicación Electrónico Seguro; y de desarrollo de nuevas herramientas electrónicas para facilitar la cooperación en asistencia mutua penal y extradición. De igual forma, solicitarle que informe a las REMJA y al Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición en sus próximas reuniones sobre los avances dados en estas materias.

6. Invitar a los Estados Miembros de la OEA y a los Estados Observadores Permanentes a considerar realizar contribuciones voluntarias para el financiamiento de la Red en Materia Penal.

IV. Delito Cibernético

1. Expresar su satisfacción por los resultados de la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético, celebrada en la sede de la OEA, los días 21 y 22 de enero de 2010, en cumplimiento de lo acordado en la REMJA-VII.

2. Adoptar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético en la citada Sexta Reunión (REMJA-VIII/doc.--/10) y solicitarle que, a través de su Presidencia, informe a la REMJA IX sobre los avances logrados en relación con éstas.

3. Continuar consolidando y actualizando el Portal Interamericano de Cooperación en materia de Delito Cibernético a través de la página de la OEA en Internet y al respecto:

a) Solicitar a la Secretaría General de la OEA que, en coordinación con el Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético, continúe completando y actualizando la información del Portal en sus componentes público y privado.

b) Solicitar a los Estados que respondan a las solicitudes que les formule la Secretaría General de la OEA para completar o actualizar la información que, en relación con cada uno de ellos, se difunde en los componentes público y privado del Portal.

4. Expresar su satisfacción por los resultados alcanzados en los talleres para fortalecer la capacidad de los Estados en el desarrollo de legislación y medidas procesales relacionadas con el delito cibernético y las pruebas electrónicas, los cuales fueron realizados, bajo el liderazgo de Estados Unidos como Presidencia del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético y con el auspicio financiero de este Estado, el apoyo de los Estados en que se llevaron a cabo y la cooperación de la Secretaría General de la OEA, en Puerto España, Trinidad y Tobago; Bogotá, Colombia; Santiago, Chile; Ciudad de Panamá, Panamá y Asunción, Paraguay.

5. Continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan el intercambio de información y la cooperación con otras organizaciones e instancias internacionales en materia de delito cibernético, tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico Asiático, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el G-8, el Commonwealth y la INTERPOL, de manera que los Estados Miembros de la OEA puedan aprovechar los desarrollos dados en dichos ámbitos. Adicionalmente, y reconociendo la consideración que algunos Estados Miembros de la OEA le han dado, recomendar a aquellos que aún no lo han hecho a que le den debida consideración, a la aplicación de los principios de la Convención del Consejo de Europa sobre Delincuencia Cibernética y la adhesión a la misma, así como a la adopción de las medidas legales y de otra naturaleza que sean necesarias para su implementación, teniendo en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético y por las REMJA en sus últimas reuniones. Asimismo que, con estos propósitos, se continúen realizando actividades de cooperación técnica con el auspicio de la Secretaría General de la OEA y el Consejo de Europa.

6. Que el Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético se reúna con antelación a la próxima REMJA, con el fin de considerar, entre otros, los avances dados en la implementación de las recomendaciones de su Sexta Reunión y que informe a la REMJA IX sobre los resultados obtenidos al respecto.

V. Asistencia y protección a víctimas y testigos

1. Expresar su satisfacción por la consideración inicial dada al tema de la asistencia y protección a víctimas y testigos, en la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición, en cumplimiento de lo acordado en la REMJA VII.

2. Que, con base en la información suministrada por los Estados, la Secretaría Técnica de las REMJA:

a) Continúe compilando en forma sistematizada las legislaciones y otras medidas en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos de los Estados Miembros de la OEA, y poniendo esta información a disposición de los mismos a través de "Internet".

- b) Continúe manteniendo actualizado un directorio de las autoridades directamente responsables de los programas en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos de los Estados Miembros de la OEA.
3. Que se convoque a una reunión técnica de las autoridades directamente responsables de la asistencia y protección a víctimas y testigos incluyendo aquellas responsables de los programas de protección de testigos en los Estados Miembros de la OEA, con el propósito de identificar áreas prioritarias de trabajo.
4. Mantener el tema asistencia y protección a víctimas y testigos en la agenda de las REMJA y solicitar que se informe a la REMJA IX sobre los avances dados en relación con las anteriores recomendaciones.

VI. Políticas Penitenciarias y Carcelarias

1. Expresar su satisfacción por la realización de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Políticas Penitenciarias y Carcelarias, celebrada en la ciudad de Valdivia, Chile, del 26 al 28 de agosto de 2008.
2. Recomendar a los Estados Miembros de la OEA considerar la adopción, dentro del contexto de sus posibilidades y limitaciones, y según lo estimen pertinente, de las medidas, orientaciones y políticas a que se refieren las recomendaciones de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Políticas Penitenciarias y Carcelarias, las cuales se encuentran publicadas en el documento GAPECA/doc.8/08 rev. 2.
3. Recomendar la convocatoria de una Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de las REMJA en Políticas Penitenciarias y Carcelarias, con el fin de continuar intercambiando información y experiencias y fortaleciendo la cooperación mutua entre las autoridades responsables de dichas políticas en los Estados Miembros de la OEA, así como que la Secretaría General de la OEA siga prestando apoyo técnico a estas reuniones y que se informe a la REMJA IX sobre los desarrollos que se den en esta materia.

VII. Cooperación hemisférica en materia de investigación forense

1. Expresar su satisfacción por la realización de la Primera Reunión de Especialistas Forenses de las Américas realizada en el marco del Grupo de Trabajo de las REMJA en Ciencias Forenses, celebrada en la Sede de la OEA en Washington D. C., Estados Unidos, los días 24 y 25 de septiembre de 2009.
2. Tomar nota de las necesidades detectadas por los Especialistas Forenses de las Américas y acoger las recomendaciones adoptadas durante su primera reunión, las cuales se encuentran publicadas en el documento REF/doc.4/09 rev.1 corr.1., y al respecto solicitar que, por conducto de la presidencia, se informe a la REMJA IX sobre los avances logrados en relación a dichas recomendaciones.

3. Recomendar la convocatoria de la Segunda Reunión de Especialistas Forenses de las Américas en el marco del Grupo de Trabajo de las REMJA en Ciencias Forenses, con el fin de continuar intercambiando información y fortaleciendo la cooperación mutua entre las autoridades forenses de los Estados Miembros de la OEA, y agradecer y aceptar el ofrecimiento de la Delegación de República Dominicana para ser sede de la Segunda Reunión de dichos especialistas.

4. Solicitar al Grupo de Trabajo de las REMJA en Ciencias Forenses que invite a la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF), así como a otros institutos académicos afines, a compartir sus prácticas y experiencias en futuras reuniones del Grupo de Trabajo.

5. Solicitar que la Secretaría General de la OEA continúe prestando el apoyo al desarrollo de estas reuniones, de conformidad con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

VIII. Cooperación hemisférica contra el delito de trata de personas

1. Expresar su satisfacción por la realización de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de Personas, co-organizada por los Gobiernos de Argentina y Uruguay y celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 27 de marzo de 2009.

2. Respalidar las conclusiones y recomendaciones de la Primera y Segunda Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas y la implementación de las mismas, así como el desarrollo de un plan de trabajo, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la OEA, sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de dichas reuniones y demás disposiciones relevantes en el ámbito de la OEA, teniendo en cuenta los avances realizados en la esfera subregional, así como en el ámbito universal, evitando la duplicidad de esfuerzos y generando una mayor coordinación.

3. Alentar a los Estados Miembros a considerar, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, la penalización u otras medidas que resulten apropiadas, del denominado cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas.

4. Mantener la cooperación hemisférica contra la trata de personas como un tema permanente en la agenda de las REMJA y solicitar que se informe a la REMJA IX sobre los avances realizados en esta materia en el ámbito de la OEA.

IX. Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de justicia en la región

Manifiestar su satisfacción con el Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009 realizado y presentado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y encomendarle que continúe contribuyendo con la investigación, evaluación, difusión, capacitación y apoyo técnico a los procesos de reforma y mejoramiento de los sistemas de justicia penal de los Estados Miembros. En este sentido, instar al CEJA a que continúe con la publicación del reporte señalado.

X. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

1. Felicitar el trabajo que el CEJA ha seguido desarrollando en las Américas desde la REMJA VI, especialmente en lo relativo a la evaluación de los procesos de reforma a la justicia penal, mejoramiento de estándares para la defensa jurídica, identificación de buenas prácticas en la investigación de delitos complejos y generación de índices de accesibilidad por Internet de información judicial relevante.
2. Apoyar con entusiasmo la labor que el CEJA ha venido impulsando para el fortalecimiento de los poderes judiciales en la Región. En este sentido las REMJA reconoce el valor de la vinculación con el sistema de cumbres judiciales, federaciones de magistrados y, en general, colaboración con procesos de modernización de los órganos judiciales en el continente.
3. Instar al CEJA a fortalecer y difundir sus proyectos en el área de información, gestión y nuevas tecnologías de información (TIC), para la modernización de los sistemas judiciales, poniendo a disposición de las REMJA y sus autoridades las propuestas que en esta materia considere relevantes.
4. Reiterar el llamado a los Estados Miembros a que consideren realizar contribuciones voluntarias al CEJA con el objeto de financiar sus gastos básicos de conformidad con lo acordado por la REMJA VI y sancionado en la XXXVI Asamblea General de la OEA.
5. Recomendar a los Estados Miembros, órganos e instituciones vinculados al sistema interamericano para que profundicen sus vínculos de trabajo con el CEJA en las materias de su competencia.

XI. Cooperación jurídica hemisférica en materia de derecho de familia y niñez

1. Seguir fortaleciendo el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación jurídica y judicial en el marco del sistema interamericano en materia de derecho de familia y niñez, en temas tales como la adopción, restitución de menores y pensiones alimenticias.

2. Reafirmar el contenido de la recomendación X.2 de la REMJA VII, en el sentido de solicitar a los Estados Miembros la designación de autoridades centrales en relación con las diversas convenciones del sistema interamericano de las que sean parte, tales como:

- a) La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su protocolo adicional;
- b) La Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero;
- c) La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias;
- d) La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, y
- e) La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.

3. Expresar su satisfacción por la realización de la Primera Reunión Piloto de la Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez, celebrada en Washington, D. C., Estados Unidos, los días 3 y 4 de noviembre de 2009, en la que participaron Argentina, Colombia, El Salvador, España, México y República Dominicana.

4. Solicitar al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA que continúe con los preparativos de la Segunda Reunión Piloto de la Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez, a celebrarse en abril de 2010.

5. Solicitar al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA que comparta con los Estados Miembros los resultados de la Primera y Segunda Reuniones Piloto de la Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez en una reunión técnica, coordinada por Brasil, que se celebrará en el segundo semestre de 2010, con la finalidad de discutir la utilidad de esta Red y el interés de los Estados de constituir un grupo de trabajo sobre derecho de familia y niñez, así como determinar su efectiva contribución a esta iniciativa y su capacidad para hacerlo. En la primera reunión técnica, de considerarse necesario, podría acordarse realizar una segunda reunión técnica antes de la REMJA IX.

6. Solicitar al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA que continúe con la elaboración de las herramientas de la Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez como un proyecto piloto, y que presente un informe sobre los resultados de esta iniciativa a la REMJA IX.

7. Alentar a los Estados Miembros de la OEA a que designen a las autoridades competentes para participar en las reuniones de la Red de Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez y a que respondan a las solicitudes de información para su difusión a través de los componentes público y privado de esta Red.

8. Solicitar al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA que consulte a los Estados Miembros sobre el posible establecimiento de un grupo de trabajo en cooperación jurídica internacional en materia de derecho de familia, niñez y alimentos, y que elabore una propuesta que incluya aspectos fundamentales del grupo de trabajo propuesto tales como el mandato, métodos de trabajo y recursos para la consideración de la REMJA IX.

9. Reiterar lo dispuesto en el punto X.4 del documento de Conclusiones y Recomendaciones de la REMJA VII, en el sentido de recomendar a los Estados Miembros de la OEA que consideren ratificar o adherir, según sea el caso, a la brevedad posible, el “Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y otras formas de Manutención de la Familia”, adoptado en noviembre de 2007.

10. Expresar su agradecimiento al Gobierno de España por el financiamiento que ha proporcionado para las operaciones y fortalecimiento de la Red de Cooperación Jurídica en la materia y por su participación activa en la misma.

XII. Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. Tomar nota del informe de la Segunda Reunión del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, celebrada en la sede de la OEA, en Washington D. C., Estados Unidos, el 7 de octubre de 2009.

2. Recomendar que, de acuerdo con lo previsto en la sección I, 1) del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, este tema se mantenga en el temario de las REMJA y se informe a la REMJA IX sobre las actividades realizadas en desarrollo de dicho Plan.

XIII. Acceso a la Justicia

La REMJA VIII hace constar los avances obtenidos a partir de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, y de las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, y sugiere la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al tema de accesibilidad a la justicia y asistencia jurídica.

XIV. Sede de la REMJA IX

Agradecer y aceptar el ofrecimiento de sede de la REMJA IX, realizado por la Delegación de El Salvador, la cual tendrá lugar en 2012.

Ministros de Desarrollo Social

Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social

8 - 9 de julio de 2010

Cali, Colombia

Comunicado de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social

Fortaleciendo y brindando sostenibilidad a los sistemas de protección social

LOS MINISTROS, MINISTRAS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Cali, Colombia, los días 8 y 9 de julio de 2010, con ocasión de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI),

RECONOCIENDO el papel central que juega el Estado en la lucha contra la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la exclusión social.

TENIENDO PRESENTE que con el fin de fortalecer nuestros esfuerzos para reducir la desigualdad y las disparidades sociales y disminuir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, en la Quinta Cumbre de las Américas nuestros Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a intercambiar información sobre políticas, experiencias, programas y mejores prácticas. Con ese fin apoyaron el establecimiento de una Red Interamericana de Cooperación para la Protección Social a fin de facilitar este intercambio.

TOMAMOS NOTA de que los programas de protección social basados en las transferencias condicionadas contribuyen a enfrentar los desafíos de la pobreza. También estamos convencidos que debemos impulsar acciones de promoción dirigidas a propiciar la movilidad social, a disminuir las tasas de desocupación y la inequidad, generando condiciones propicias para el desarrollo de las oportunidades de trabajo digno y decente y el acceso a una educación y salud de calidad como dos de los factores principales de inclusión social.

CONSTATANDO con preocupación el impacto humano, económico, social y ambiental de los desastres acontecidos recientemente en la región, en particular los terremotos en Haití y Chile, tanto por la lamentable pérdida de vidas, así como por las devastadoras consecuencias que estas catástrofes han tenido sobre las economías nacionales, el desarrollo local y las redes sociales de las comunidades directamente afectadas, especialmente las más vulnerables y pobres.

CONSCIENTES del impacto negativo de las crisis en materia de empleo y pobreza, así como de los desafíos que esta situación plantea para los esfuerzos nacionales para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en lo que respecta la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.

NOSOTROS LOS MINISTROS, MINISTRAS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL,

ASUMIMOS el compromiso de fortalecer nuestras estrategias de protección social para minimizar las consecuencias de las crisis y evitar, en lo posible, retroceder en los avances logrados en la disminución de la pobreza; para ello, debemos fortalecer y consolidar las instituciones encargadas de las políticas sociales y asegurar la sostenibilidad fiscal de los programas de protección social. Dichas estrategias tendrán como referencia las experiencias de modelos de desarrollo integral donde las políticas económicas, el desarrollo productivo con generación de empleo, y los programas de protección y equidad social son componentes centrales e igualmente prioritarios del mismo.

REAFIRMAMOS que la protección social es un enfoque integral conformado por un variado conjunto de políticas y programas universales y focalizados que buscan apoyar a las personas ante los diversos riesgos que enfrentan durante el transcurso de sus vidas; y que su diseño específico dependerá de las condiciones, necesidades y decisiones de cada Estado miembro; en este sentido, consideramos de utilidad el intercambio de experiencias, metodologías, resultados e impactos de los programas de protección social, tales como las transferencias monetarias condicionadas y otras estrategias de intervención en el marco de las redes de protección social.

ASUMIMOS el compromiso de mejorar la efectividad y eficiencia de los programas de protección social, inclusión y erradicación de la pobreza y promoveremos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía, para lo cual compartiremos nuestros avances en materia de gestión incluyendo, cuando corresponda, la implementación de sistemas únicos de registro de beneficiarios, el refuerzo de los sistemas de evaluación y monitoreo, y procedimientos presupuestales que aseguren la sostenibilidad fiscal de dichos programas, incluso frente a contextos adversos o de crisis.

REITERAMOS que la pobreza y la inequidad son fenómenos multidimensionales que requieren intervenciones intersectoriales y coordinadas en el marco de una estrategia nacional de desarrollo social. Por ello, seguiremos promoviendo la implementación y el fortalecimiento de estrategias gubernamentales que integren la labor de diferentes ministerios y organismos públicos para asegurar un mayor impacto en los esfuerzos por enfrentar dichos desafíos. La articulación intersectorial resulta indispensable para potenciar el impacto de las diversas intervenciones en política social, incluyendo la promoción del empleo y generación de ingresos, el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria, y la gestión de la prevención y la protección de las comunidades ante los riesgos y vulnerabilidades resultantes de los desastres.

DESTACAMOS la necesidad de profundizar la coordinación con organismos y mecanismos de integración interamericanos, regionales y subregionales para avanzar en las prioridades que compartimos en materia de política social.

DESTACAMOS ASIMISMO la importancia de que la Red Interamericana de Protección Social sume esfuerzos de cooperación con otros mecanismos internacionales dedicados al análisis y difusión de la protección social, incluyendo los del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas.

CONVOCAMOS a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicas, del sector privado y comunitarias, a aportar insumos y colaborar en el diseño e implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas de desarrollo social; las alianzas estratégicas entre el Estado y los diversos grupos sociales, fortalecen la democracia y potencian las acciones necesarias, en un marco de corresponsabilidad, para enfrentar los desafíos de la pobreza, en particular la pobreza extrema, la desigualdad y la vulnerabilidad.

TOMAMOS NOTA de los avances en las negociaciones de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, instrumento llamado a orientar los esfuerzos de nuestros Estados en materia de desarrollo económico, social y cultural. Reiteramos nuestro apoyo a sus objetivos, los cuales buscan ofrecer a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social.

ENCOMENDAMOS a la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) que en su Plan de Trabajo 2010–2012 considere, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA, los siguientes aspectos:

1. Fortalecer la Red Interamericana de Protección Social como un mecanismo de cooperación hemisférica en materia de combate a la pobreza y la inequidad, y fomentar las transferencias de experiencias exitosas y el análisis de los principales desafíos de las estrategias de protección social.
2. Continuar en el marco de dicha Red, con la implementación de la cooperación técnica en el Caribe, a través del “Programa Puente en el Caribe”, cuyos resultados son un ejemplo de cooperación solidaria para el desarrollo; e informar a todos los miembros de la CIDES de los resultados de la reunión subregional sobre esta materia, a realizarse en Barbados en 2010; a fin de buscar oportunidades para facilitar la aplicación de este mecanismo de cooperación a lo largo de la región.
3. Apoyar al gobierno de Haití, especialmente en lo que se refiere a la reconstrucción de sus comunidades tras el terremoto del cual fue víctima en enero de 2010, poniendo a su disposición las herramientas de cooperación de este foro para la transferencia de conocimientos y experiencias pertinentes y relevantes para su proceso de reconstrucción.
4. Promover mayor diálogo y actividades conjuntas con todos los sectores de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicas, del sector privado y otras, a fin de avanzar en el desarrollo de políticas y programas de protección social más inclusivas, participativas y sujetas a una más amplia rendición de cuentas.
5. Utilizar los mecanismos existentes en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA con el fin de fortalecer la coordinación intersectorial en materia de política social. En este sentido, promover el intercambio de opiniones y pro-

yectos conjuntos con los foros y Comisiones Interamericanas pertinentes sobre temas tales como la promoción del empleo y la generación de ingresos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria, la atención a la desigualdad entre mujeres y hombres, y la gestión de riesgo y reconstrucción comunitaria para reducir la vulnerabilidad de las víctimas de los desastres.

6. Contribuir, cuando le sea solicitado, a la elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción.

7. Colaborar, cuando corresponda, con el proceso preparatorio de la Sexta Cumbre de las Américas.

8. Preparar un informe sobre la ejecución del Plan de Trabajo 2010–2012 para ser presentado en la próxima Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social.

AGRADECEMOS al Gobierno de Brasil por su generoso ofrecimiento para ser sede de la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social en el ámbito del CIDI, a realizarse en 2012.

Ministros de Desarrollo Sostenible

Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI

17 - 19 de noviembre de 2010

Santo Domingo, República Dominicana

Declaración de Santo Domingo para el desarrollo sostenible de las Américas

NOSOTRAS Y NOSOTROS, LAS MINISTRAS, LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AMÉRICAS, reunidos en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 17 al 19 de noviembre de 2010, con ocasión de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible;

RECONOCIENDO que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y que la erradicación de la pobreza es parte integral del desarrollo sostenible;

RECONOCIENDO TAMBIÉN que la Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos;

RECONOCIENDO ASIMISMO que los principios constitucionales, legislativos y de la jurisprudencia de los Estados Miembros reflejan la visión de cada país sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza;

RECONOCIENDO ADEMÁS los diferentes niveles de desarrollo y de vulnerabilidad económica, social y ambiental de los Estados del Hemisferio, la riqueza de sus ecosistemas y su diversidad biológica y cultural, así como la necesidad de trabajar solidariamente con el fin de que las estrategias, políticas, planes y programas se refuercen mutuamente y contribuyan al desarrollo sostenible, a la erradicación del hambre y la pobreza, a la paz y a la democracia en las Américas;

TOMANDO NOTA de los beneficios económicos, sociales y ambientales que resultan de la gestión sostenible de los recursos naturales, incluidos aquellos resultantes del acceso a la justa y equitativa distribución de los beneficios que se derivan del uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados;

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), que se celebrará en Río de Janeiro en 2012, y reiterando el pleno apoyo y compromiso de todos los países de la región para el éxito de la conferencia, con miras a lograr un documento con un enfoque político y exhortando a un alto nivel de participación;

RECONOCIENDO que para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible se requiere de enfoques integrales que fortalezcan las alianzas público-privadas en nuestros países y a nivel regional, en temas claves como la producción y consumo sostenible y la responsabilidad social, que aborden de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental;

CONSIDERANDO:

Los compromisos regionales, subregionales e internacionales adoptados por los Estados Miembros vinculados al desarrollo sostenible¹, así como los adoptados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000;

Que para erradicar el hambre y la pobreza, especialmente la pobreza extrema, crear trabajo digno y decente, y elevar el nivel de vida de todos nuestros pueblos, debemos promover un desarrollo económico sostenible, prácticas empresariales de responsabilidad social y ambiental a través de la equidad, la inclusión social y la participación activa de todos los sectores, asegurando la creación y el fortalecimiento de las capacidades de la población;

Que la contribución positiva del comercio entre nuestras naciones, para la promoción del crecimiento, el empleo y el desarrollo, depende de la insistencia continua en un sistema multilateral de comercio abierto, transparente y basado en normas; además, reconocemos la necesidad de que todos nuestros pueblos se beneficien del aumento de oportunidades y las mejoras en el bienestar que genera el sistema multilateral de comercio²;

Que las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos en Puerto España durante la Quinta Cumbre de las Américas, renovaron su apoyo al Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006-2009), e instruyeron a que se llevara a cabo

¹ La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Programa 21 y Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo); la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 1996 (Declaración y Plan de Acción); la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, (Declaración y Plan de Acción); la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, en 2006 [Declaración de Santa Cruz + 10 y el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006-2009)]; la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en Kobe, Hyogo, en 2005 (Marco de Acción de Hyogo 2005-2015); la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España en 2009 (Declaración de Compromiso de Puerto España), el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Estrategia de las Islas de Mauricio en apoyo a la implementación de dicho Programa, entre otros, según corresponda.

² La República Bolivariana de Venezuela no apoya este párrafo por considerar que la liberalización de los mercados en su concepción actual no responde a los intereses de los pueblos del mundo, amplía las brechas de inequidad e inclusión social. Proponemos una reorientación del sistema de comercio internacional por un sistema multilateral de comercio más justo y equitativo que incorpore los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y respeto a la soberanía de los pueblos.

la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en 2010, bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con las instituciones internacionales pertinentes de financiamiento y desarrollo, y con la participación de la comunidad académica y de otros integrantes de la sociedad civil con el fin de evaluar los logros del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) a la fecha y renovarlo o modificarlo, según sea necesario;

Que la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América suscrita en octubre de 1940 en el marco de la Unión Panamericana, ha sido un instrumento pionero en el establecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas de sus Estados Parte, y que conmemoramos en 2010 el septuagésimo aniversario de su suscripción y el Año Internacional de la Diversidad Biológica;

Que las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos en Puerto España durante la Quinta Cumbre de las Américas, instruyeron a los ministros o altas autoridades competentes a que en colaboración con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales especializadas en cuestión de desastres fortalezcan la cooperación en las Américas en las áreas de reducción y de gestión de riesgos de desastres. Asimismo, que se ha encomendado a la Secretaría General que colabore con los Estados Miembros para implementar el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015; y

Que las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos en Puerto España durante la Quinta Cumbre de las Américas, reafirmaron su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y sus objetivos,

DECLARAMOS QUE:

1. Los patrones de producción y consumo insostenibles dan lugar a desafíos complejos para el desarrollo sostenible y el bienestar humano y asimismo, el deterioro de los bienes y servicios provistos por los ecosistemas generan impactos en las economías y los medios de vida de las comunidades que dependen de éstos y afectan su capacidad de resiliencia.^{3/4}
2. La erradicación de la pobreza es un objetivo fundamental del desarrollo sostenible dados los vínculos entre vulnerabilidad, pobreza, inequidad, degradación ambiental y desastres.
3. La importancia del compromiso de reducir la pérdida de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010.

³ La República Oriental del Uruguay, la República de Guatemala y la República de Colombia consideran que la degradación de los suelos se reconoce como uno de los principales desafíos mundiales del medioambiente y del desarrollo sostenible para el siglo XXI y, en particular, para los países de América que tienen en la producción agropecuaria su base económica.

⁴ La República Bolivariana de Venezuela deja constancia de su reserva a la inclusión en los párrafos 1 y 7 de la frase “bienes y servicios” y en el párrafo 29, inciso a) que reza: “desarrollar programas de valoración ambiental, social y cultural y de pagos o reconocimientos por servicios ecosistémicos” por considerar que su intencionalidad se dirige a convertir la naturaleza y al medio ambiente en sujetos de mercado y bienes transables

4. La gestión integrada de los ecosistemas es vital en la adaptación al cambio climático y para el bienestar social y económico de todos los países, en particular, de aquellos con zonas costeras bajas como los pequeños estados insulares en desarrollo, los del istmo tropical, así como también de los que presentan ecosistemas montañosos frágiles o con riesgos de desertificación y sequías prolongadas.

5. Los Estados Miembros reconocen que el agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental y que la gestión integrada del agua y el acceso no discriminatorio y equitativo de la población al agua potable y a los servicios de saneamiento contribuye al pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos.

6. La energía es esencial para mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos y que el acceso a la misma es de fundamental importancia para el crecimiento económico con equidad e inclusión social.

7. Son necesarias las reducciones profundas en las emisiones de gases de efecto invernadero y medir los avances en la mitigación, a fin de lograr, en el contexto del proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el objetivo último y los principios de dicha Convención para proteger el sistema climático para beneficio de las presentes y futuras generaciones de la humanidad, sobre la base de la equidad y de acuerdo con nuestras responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas.

8. Son de gran relevancia las redes interamericanas establecidas en el marco de la OEA como herramientas para promover la cooperación y el intercambio de experiencias en las áreas de gestión integrada de recursos hídricos, energía renovable, información sobre diversidad biológica, gestión de riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático y el derecho ambiental, y para fomentar sinergias con otros mecanismos subregionales pertinentes.

9. La necesidad de incorporar la gestión integral de riesgo de desastre en la agenda pública de los Estados y de promover una coordinación internacional y regional para responder de manera coordinada, eficaz y eficiente ante situaciones de emergencia.

10. Es importante incentivar el diálogo y la cooperación regional, así como las alianzas público-privadas, entre otros, para consolidar los mecanismos hemisféricos existentes de promoción y fortalecimiento de políticas, legislación, transparencia institucional y otros mecanismos que fomenten la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades, la inclusión social, la participación pública y la buena gestión pública.

11. La necesidad de medir los avances en el logro de las metas y compromisos establecidos en el marco de la OEA en materia de desarrollo sostenible.

ADOPTAMOS LAS SIGUIENTES INICIATIVAS DE ACCIÓN:

1. Extender la vigencia del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) por el período 2010-2014 e instar a la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) a que inicie un proceso de revisión y actualización del PIDS, tomando en cuenta la evaluación del mismo presentada a los Estados Miembros y las decisiones previstas en esta Declaración.
2. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en el marco de sus mandatos y en coordinación con otras entidades y organismos internacionales, promover la movilización de recursos y facilitar asistencia técnica para avanzar con la implementación efectiva de la presente Declaración, del PIDS y de la Declaración de Santa Cruz + 10.
3. Promover el diálogo interamericano en materia de desarrollo sostenible y convocar de manera ordinaria las reuniones de la CIDS para apoyar y evaluar la ejecución del PIDS, así como para dar seguimiento a las diversas decisiones emanadas de la Cumbre de las Américas y de este proceso ministerial sobre desarrollo sostenible.
4. Encomendar a la CIDS que identifique opciones que permitan medir el progreso de los procesos del desarrollo sostenible de forma comparativa a nivel hemisférico, tomando en cuenta las fuentes disponibles de información, evitando duplicaciones y promoviendo las sinergias con los mecanismos existentes que aborden el tema, cuando sea apropiado.
5. Promover el desarrollo sostenible de todos los sectores productivos en el Hemisferio⁵.
6. Fortalecer el apoyo a los Estados Parte de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América en la implementación de esta Convención.
7. Promover estrategias para la conservación y utilización sostenible de los recursos hídricos y ecosistemas fronterizos y los bienes y servicios ecosistémicos que estos proveen como contribución al desarrollo sostenible⁶.
8. Identificar y desarrollar estrategias, basadas en el enfoque de ecosistemas y paisajes a diferentes escalas, que construyan alianzas y sinergias dentro y entre países y que hagan que la ciencia sea accesible a quienes toman decisiones y promueven políticas integradas para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
9. Promover el uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo, la cooperación, el

⁵ La República Oriental del Uruguay considera que se deben promover enfoques integrados del uso de la tierra que incorporen la perspectiva de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en el proceso de la planificación del uso y ordenación de la tierra.

⁶ La República Bolivariana de Venezuela deja constancia de su reserva a la inclusión en los párrafos 1 y 7 de la frase “*bienes y servicios*” y en el párrafo 29, inciso a) que reza: “*desarrollar programas de valoración ambiental, social y cultural y de pagos o reconocimientos por servicios ecosistémicos*” por considerar que su intencionalidad se dirige a convertir la naturaleza y al medio ambiente en sujetos de mercado y bienes transables.

intercambio de experiencias y las lecciones aprendidas, promoviendo prácticas de adaptación que consideren el incremento en la variabilidad hidrológica y climática para hacer frente a las necesidades de la población, los sectores productivos y los ecosistemas.

10. Fomentar e implementar iniciativas regionales que promuevan el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de políticas efectivas de gestión integrada de los ecosistemas y su adaptación al cambio climático, en particular, de las zonas costeras bajas como los pequeños estados insulares en desarrollo, los del istmo tropical y los ecosistemas montañosos frágiles o con riesgos de desertificación y sequías prolongadas.

11. Promover la gestión integrada de los recursos hídricos, los suelos y los bosques en el contexto de un aumento de variaciones hidroclimáticas, como una herramienta fundamental que permita el uso racional y sostenible de estos recursos en los sectores agropecuario y forestal, así como en la disminución del riesgo.

12. Continuar trabajando para garantizar el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento para las presentes y futuras generaciones con base en sus realidades nacionales.

13. Apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros y las organizaciones relevantes en cuanto a la cuantificación, monitoreo y observación sistemática del recurso hídrico para la planificación y toma de decisiones en los ámbitos locales, nacionales y regionales.

14. Fomentar el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos en los países del Hemisferio, promoviendo patrones de producción y consumo sostenibles, a través, entre otros, del establecimiento de alianzas público-privadas y el uso de incentivos apropiados para tales fines.

15. Fomentar esfuerzos para desarrollar sistemas de energía más limpios, asequibles, renovables y sostenibles para promover el acceso a la energía y a tecnologías y prácticas energéticas eficientes en los hogares y en los sectores público y privado.

16. Fomentar la cooperación solidaria en la promoción del uso de fuentes más limpias, más eficientes, renovables y no renovables de energía, la eficiencia energética y esquemas de interconexión energética, entre otras, a través de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés), Petrocaribe, el Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica, la Iniciativa Energética Mesoamericana, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y considerando las necesidades y prioridades particulares de cada uno de nuestros países.

17. Promover el uso de medios y sistemas de transporte que hagan un uso sostenible y eficiente de la energía.

18. Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para integrar la evaluación ambiental estratégica, la gestión del riesgo y la evaluación de vulnerabilidades en el ordenamiento territorial para la planificación del desarrollo y la mitigación y adaptación al cambio climático, contribuyendo a la resiliencia de las ciudades, las comunidades y los ecosistemas.

19. Apoyar a los Estados Miembros, cuando sea solicitado, en el fortalecimiento institucional y el diseño e implementación de estrategias, planes y herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel regional, nacional, subnacional y local, según corresponda, y de ecosistemas en la planificación del desarrollo sostenible, así como en la identificación de sus costos y escalas de prioridades, incluyendo la evaluación de costos relacionados y el establecimiento de prioridades.

20. Promover la cooperación regional y subregional para el desarrollo de las capacidades institucionales y el fortalecimiento y adopción a nivel nacional de sistemas de alerta temprana para riesgos múltiples, incluyendo sistemas comunitarios, haciendo uso de la información y los datos disponibles, el conocimiento y las tecnologías apropiadas.

21. Alentar y apoyar a los Estados Miembros en la implementación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD), para dar cumplimiento a los lineamientos del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 orientados a la reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, en particular mediante la integración de la reducción del riesgo en la inversión pública, el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales, y en la creación, el fortalecimiento y el cumplimiento nacional de códigos de construcción para peligros múltiples, cuando sea apropiado.

22. Promover la adopción de políticas y prácticas pertinentes y programas de fortalecimiento de capacidades para la rehabilitación de ecosistemas y la reconstrucción de la infraestructura que aumenten la resiliencia de las comunidades ante desastres.

23. Alentar la labor del grupo de trabajo de los Estados Miembros de la OEA sobre la coordinación de acciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres, así como también la facilitación de normas necesarias para permitir la entrega oportuna, eficaz, eficiente y ágil de la asistencia humanitaria y encargar a la CIDS que recoja y dé seguimiento a los resultados del mencionado grupo de trabajo. Asimismo se propone fortalecer el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN).

24. Fortalecer las sinergias, coordinación y cooperación entre los mecanismos y las iniciativas regionales, subregionales e internacionales de asistencia humanitaria para optimizar los recursos e incrementar nuestra capacidad de gestionar y responder ante desastres.

25. Apoyar la continuación del diálogo y la cooperación hacia y durante la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (COP 16) y la VI Conferencia de las Partes como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, que se celebrará en el Hemisferio, en Cancún, México, y apoyar al Gobierno de México como Presidente entrante de las Conferencias, y expresar nuestro más alto compromiso para reforzar la cooperación con el fin de alcanzar un resultado ambicioso, incluyente, equilibrado y transparente, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de conformidad con el Plan de Acción de Bali 2007.

26. Fomentar el desarrollo adicional de canales eficientes, transparentes y responsables para la entrega y movilización de financiamiento de fuentes públicas y privadas, incluyendo cuando sea apropiado y de conformidad con los principios constitucionales y la

legislación nacional aplicables, los mercados de carbono u otras modalidades para la implementación de acciones de mitigación y adaptación efectivas⁷.

27. Continuar fortaleciendo la cooperación entre los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con el manejo sostenible e integral de los bosques, enfatizando, entre otras, las acciones bajo la CMNUCC.

28. Continuar fortaleciendo el intercambio de información, experiencias, prácticas óptimas y lecciones aprendidas en los Estados Miembros sobre la gestión integrada de recursos hídricos, la energía sostenible, la diversidad biológica, el manejo sostenible de la tierra, la gestión de riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático y las políticas, estrategias y los marcos legales e institucionales sobre desarrollo sostenible, a través, entre otros, de las redes interamericanas establecidas en el marco de la OEA sobre estos temas.

29. Continuar promoviendo el desarrollo sostenible a través de la cooperación solidaria, de acuerdo con los principios constitucionales y la legislación nacional y el derecho internacional aplicables, en las áreas de formación de recursos humanos, el desarrollo de la capacidad institucional, la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales en los términos mutuamente acordados, y la efectiva movilización de todo tipo de recursos financieros, incluyendo nuevos y adicionales, cuando corresponda, para, entre otros:

a) desarrollar programas de valoración ambiental, social y cultural y de pagos o reconocimientos por servicios ecosistémicos en el ámbito nacional, cuando corresponda⁸.

b) promover iniciativas para la prevención del tráfico ilegal de especies de flora y fauna, la conservación de especies migratorias y esfuerzos para minimizar el impacto de especies exóticas invasoras;

c) fortalecer la gestión y los mecanismos de intercambio de información sobre prácticas óptimas de gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos, incluyendo la introducción de programas de sensibilización pública;

d) implementar los acuerdos multilaterales ambientales bajo un marco de sinergias, así como otros acuerdos bilaterales y regionales; y

⁷ La República Bolivariana de Venezuela se reserva el contenido del párrafo 26 y, en tal sentido, realiza la siguiente aclaratoria: los mercados de carbono no forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por ello rechazamos categóricamente la pretensión de algunos países de utilizar los mercados de carbono, tergiversando así el espíritu de la Convención, para proporcionar, de forma supletoria, fuentes de financiamiento para las acciones de mitigación y de adaptación de los países en vías de desarrollo, pues los compromisos de financiamiento son de los Estados y, en consecuencia, deben provenir de fondos públicos. Ha sido posición nacional y la de varios países en desarrollo, que los mercados no pueden ser creados bajo la Convención pues no existen previsiones en ese instrumento jurídico para ello.

⁸ La República Bolivariana de Venezuela deja constancia de su reserva a la inclusión en los párrafos 1 y 7 de la frase “*bienes y servicios*” y en el párrafo 29, inciso a) que reza: “*desarrollar programas de valoración ambiental, social y cultural y de pagos o reconocimientos por servicios ecosistémicos*” por considerar que su intencionalidad se dirige a convertir la naturaleza y al medio ambiente en sujetos de mercado y bienes transables.

e) las demás iniciativas consignadas en la presente Declaración, cuando corresponda.

30. Promover el fortalecimiento y la aplicación y cumplimiento efectivos de la legislación ambiental nacional, tomando en cuenta el derecho internacional y nuestras prioridades de desarrollo sostenible.

31. Promover la participación ciudadana y pública como elemento clave del proceso decisorio en materia de políticas de desarrollo sostenible y apoyar a los Estados Miembros en la implementación de la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP).

32. Contribuir a la integración del respeto de los valores culturales, la igualdad y equidad de género y los compromisos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los proyectos y programas para el desarrollo sostenible del Hemisferio.

33. Promover una nueva cultura sobre desarrollo sostenible basada en la armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental, a través de procesos de sensibilización y educación de la población con énfasis en la niñez y la juventud.

34. Promover la participación de las comunidades de acuerdo con la legislación y realidades nacionales en el fomento de un mayor bienestar social, económico y ambiental facilitando el financiamiento a programas, proyectos e iniciativas que generen fuentes alternativas de trabajo y de ingreso.

NOSOTRAS Y NOSOTROS, LAS MINISTRAS, LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AMÉRICAS,

Reconocemos que los resultados del foro virtual y las consultas con la sociedad civil y otros actores sociales que se llevaron a cabo en Santa Lucía, Argentina, Costa Rica y República Dominicana, así como las consultas con el sector privado han sido aportes importantes para esta Declaración;

Agradecemos la hospitalidad y la cálida acogida del pueblo y del Gobierno de la República Dominicana con ocasión de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI, y por la excelente conducción y organización de esta Reunión;

Por la presente aprobamos el contenido de esta “Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas”, en este día, 19 de noviembre de 2010.

Ministros de Defensa

IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

22 - 25 de noviembre de 2010

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Declaración de Santa Cruz de la Sierra

Los Ministros de Defensa y Jefes de Delegaciones participantes en la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 22 al 25 de noviembre de 2010,

CONSIDERANDO:

Los principios y declaraciones de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, contenidos en las Declaraciones de Williamsburg, Bariloche, Cartagena, Manaus, Santiago, Quito, Managua y Banff;

Que la Conferencia se ha consolidado como un foro de diálogo e intercambio de ideas y visiones sobre la seguridad y defensa de sus Estados miembros y de la región;

Que la Conferencia es, a su vez, un foro relevante que contribuye al fortalecimiento de la transparencia, confianza y cooperación sobre temas de defensa y seguridad;

La Declaración sobre Seguridad en las Américas de octubre de 2003;

La Declaración de Lima: Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas, de junio de 2010, que expresa el compromiso de los Estados de continuar implementando medidas de fomento de la confianza y la seguridad;

La celebración del IV Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad llevado a cabo en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, celebrado el 15 y el 16 de noviembre de 2010 en Lima, Perú; y

La celebración, en este año, del Bicentenario de la Independencia de varios países de las Américas, de sus declaraciones conmemorativas y de la progresiva construcción de la paz,

DECLARAN:

1. Los Estados miembros de la Conferencia apoyan unánimemente el imperativo de la paz y la confianza mutua en el hemisferio, sustentados en los principios y propósitos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

2. El compromiso y la importancia para la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) de preservar la vitalidad y el espíritu de los Principios de Williamsburg, respecto al fortalecimiento de la democracia, la paz, la seguridad, la solidaridad y la cooperación entre las naciones de las Américas.

3. Promover procesos de modernización institucional en el sector defensa, desarrollando al menos las siguientes iniciativas:

- Impulsar las prácticas interculturales en la dinámica institucional de las fuerzas armadas y las fuerzas públicas.
- Promover transversalmente la perspectiva de género en los diversos ámbitos de la defensa.
- Promover el fortalecimiento de la formación militar y de las fuerzas públicas, a fin de facilitar la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en los Estados de la región.

4. Reconocer la importancia de la cooperación en defensa y seguridad en la región, particularmente el avance en la implementación de medidas de fomento de la confianza y seguridad, tales como:

- Los informes que se presentan a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
- El conjunto de medidas de confianza y seguridad recientemente aprobadas en el marco del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la UNASUR con sus correspondientes mecanismos y procedimientos de aplicación, garantías y verificación, que comprenden: el intercambio de información sobre la organización de los sistemas nacionales de defensa; gastos militares; actividades militares intra y extra regionales; notificación de maniobras, despliegues y ejercicios en zonas de frontera, entre otros.
- Los avances logrados en la implementación del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
- La declaración de Nicaragua como territorio libre de minas antipersonal, con lo cual Centroamérica se convierte en la primera región del mundo libre de este flagelo. Reconocemos el éxito de Surinam en remover completamente las minas de su territorio.
- El esfuerzo realizado durante el año 2010 por el CDS para generar una metodología suramericana de medición e información de los gastos de defensa y promueven la misma como base para el desarrollo de una metodología hemisférica común.

5. Solicitar a la Asamblea General de la OEA que conceda a la Junta Interamericana de Defensa (JID) la facultad de actuar en apoyo a la Secretaría Pro-Tempore de la CMDA, a requerimiento del país sede, en la realización de las funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento de la CMDA.

6. Recomendar a la OEA que, en el marco de esa Organización, se convoque a una conferencia sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa, con la participación de representantes de los Ministerios de Defensa, para lo cual se acoge con beneplácito el ofrecimiento de la República Argentina para ser sede en el 2011.

7. Recomendar el intercambio de visiones y el inicio de un amplio debate en la próxima CMDA referidos a los conceptos sobre Defensa y Seguridad, para delimitar los ámbitos de ésta.

8. Tomar nota de los avances en las negociaciones en curso en el marco de la UNASUR, referidas a un protocolo de paz, seguridad y cooperación.

9. La importancia de la transparencia en los gastos militares, en la promoción de la confianza mutua y la cooperación entre los Estados. Por esta razón:

- Alientan la plena participación en el Informe Estandarizado de las Naciones Unidas sobre Gastos Militares y en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, antes de la próxima CMDA.
- Continúan progresando a nivel bilateral y subregional en metodologías estandarizadas de medición de gastos de defensa.
- Alientan la implementación de un registro interamericano administrado por la OEA, basado en experiencias regionales.
- Alientan la participación universal y la plena implementación de la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC).

10. Su apoyo a las conclusiones de la Presidencia del IV Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad de la OEA, en especial la adopción del formato para informar sobre la aplicación de dichas medidas presentado por la JID.

11. Su solidaridad con los pueblos y gobiernos de las Américas afectados por desastres naturales, en particular de la República de Haití y de la República de Chile, que sufrieron dramáticamente los embates de la naturaleza. Su reconocimiento por el generoso y solidario apoyo de los países del hemisferio en acciones de asistencia humanitaria y operaciones de rescate; y también por el decidido respaldo de Estados y organizaciones regionales e internacionales que comprometieron su apoyo para la reconstrucción de la República de Haití, especialmente en las conferencias de Montreal, Nueva York y Santo Domingo.

12. Su compromiso para mejorar y complementar la asistencia en curso, para atender las necesidades básicas de la población haitiana que se han visto severamente intensificadas, respetando las prioridades establecidas por el Gobierno y el Pueblo de la República de Haití.

13. La importancia del trabajo realizado por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), tanto en lo referente a las acciones de asistencia humanitaria como en las operaciones de rescate.

14. La valiosa contribución que el sector defensa y las fuerzas armadas pueden proporcionar como apoyo específico en respuesta a casos de desastres naturales o antrópicos, en coordinación con organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y agencias de seguridad para la protección y la defensa civil, como parte de una respuesta integral en caso de esos desastres.

15. Su apoyo a aquellas iniciativas internacionales, regionales y subregionales en curso a efectos de fortalecer la coordinación, las capacidades y la cooperación hemisférica en el área de respuesta a desastres naturales. En este sentido, manifiestan su acuerdo para analizar la propuesta titulada “Fortaleciendo las asociaciones en apoyo de la asistencia humanitaria y ayuda en caso de desastres naturales”, en grupos de trabajo coordinados por la Secretaría Pro-Tempore de la CMDA, de participación voluntaria y abierta a los Estados miembros, a realizarse en 2011, para la implementación de un mecanismo de colaboración entre los Ministerios de Defensa con el objeto de fortalecer las capacidades militares de asistencia humanitaria, en apoyo a autoridades civiles a nivel nacional y otras instancias pertinentes, siempre en respuesta a la solicitud de un Estado afectado por un desastre natural, sin perjuicio de las iniciativas en curso o que puedan surgir.

La Conferencia toma nota de la voluntad de cualquier grupo de países de avanzar anticipadamente en la implementación de dicha propuesta, así como de adecuarse en un todo al mecanismo que se adopte oportunamente a nivel hemisférico como resultado del referido proceso de análisis en el seno de la CDMA.¹

16. Que los recientes desastres naturales han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer nuestros mecanismos de prevención, preparación, respuesta y recuperación, así como la importancia de mejorar los sistemas de alerta temprana en la región. Apoyamos el esfuerzo continuo para fortalecer los sistemas de manejo de crisis frente a desastres naturales. Recomendamos que las organizaciones regionales, en cooperación con las Naciones Unidas, consideren la realización de talleres para desarrollar estrategias basadas en la colaboración y cooperación en la región, que permitan mejorar la gestión de riesgos en desastres naturales. En este sentido, celebramos el ofrecimiento del Gobierno de México de organizar, en el marco de la OEA, un taller que defina un mecanismo regional de respuesta ágil y coordinada para la atención de los desastres naturales, en el que recomendamos la participación de los Ministerios de Defensa a efectos de considerar sus contribuciones en este esfuerzo regional.

17. La importancia de las contribuciones de aquellos Estados de las Américas que participan en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas en el mundo.

18. El papel que pueden desempeñar los Ministerios y otras instituciones de defensa de los Estados de la región y su compromiso con las actividades que apoyen la sostenibilidad del medio ambiente.

¹ Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú y República Dominicana

19. Su compromiso en continuar fortaleciendo la difusión del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos mediante su integración en la doctrina, formación, entrenamiento y procedimientos operacionales, según corresponda a las fuerzas armadas o a las fuerzas públicas, a fin de que cuenten con los medios y mecanismos necesarios para su efectiva aplicación.

20. El común interés en impulsar, dentro de las respectivas jurisdicciones nacionales, medidas para promover, fortalecer o consolidar, según fuera el caso, la formación de civiles en defensa. En el ámbito de la cooperación, tanto bilateral como en instancias subregionales, se promoverá la inclusión de programas y proyectos de formación de civiles en las áreas pertinentes a la defensa.

21. Su reiterado rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia, cualquiera que sea su origen o motivación.

22. De conformidad con todos los instrumentos internacionales correspondientes, asegurando el pleno cumplimiento del derecho internacional, de los derechos humanos y las normas del debido proceso, en concordancia con el orden constitucional y la legislación nacional de cada Estado miembro, el compromiso de los Ministerios de Defensa para cooperar y enfrentar las amenazas y los retos que tienen nuestros Estados, que constituyen desafíos a la paz y la seguridad hemisférica, a las instituciones y los valores democráticos.

23. Su reconocimiento a la contribución de la sociedad civil, incluyendo al sector académico, en temas de defensa y seguridad de nuestros Estados.

24. Acoger con beneplácito la designación de la Republica Oriental del Uruguay como país sede de la X CMDA a realizarse en el año 2012; y el ofrecimiento de la República del Perú para ser sede de la XI CMDA a realizarse en el año 2014.

25. Su gratitud al Pueblo boliviano y al Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su Ministerio de Defensa, por la hospitalidad y el apoyo brindado durante el desarrollo de esta reunión ministerial.

Ministros de Turismo

Decimonoveno Congreso Interamericano de Turismo

29 - 30 de septiembre de 2011

San Salvador, El Salvador

Declaración de San Salvador para un desarrollo turístico sostenible en las Américas

NOSOTROS, LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 29 y 30 de septiembre de 2011, en el marco del XIX Congreso Interamericano de Turismo,

RECONOCEMOS la significativa contribución del sector turístico a los esfuerzos nacionales para la reducción de la pobreza y la desigualdad social, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades receptoras, al desarrollo económico sostenible de nuestros países, particularmente a la creación de empleos, el descanso, la recreación, las oportunidades empresariales y al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente las poblaciones vulnerables, tales como mujeres, niños y niñas, minorías raciales y étnicas, y poblaciones indígenas, así como su efecto multiplicador y su excelente potencial para el crecimiento a largo plazo, junto con sus importantes beneficios culturales y sociales;

RECONOCEMOS TAMBIÉN que las alianzas y un mayor diálogo entre los sectores público y privado son fundamentales para el desarrollo efectivo y la sostenibilidad del turismo;

EXPRESAMOS que el XIX Congreso Interamericano de Turismo, “Turismo: un desafío frente a la pobreza”, constituyó una valiosa oportunidad para el diálogo, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como para concertar acciones de cooperación y colaboración entre los Estados Miembros en favor del turismo sostenible que contempla el uso racional de los recursos, la responsabilidad social y económica, y la protección de nuestra herencia cultural y ambiental en beneficio de las futuras generaciones;

RECONOCEMOS la propuesta de “turismo consciente” que significa amar la vida, y está basado en los principios de sostenibilidad y ética, promueve los valores de paz, la amistad y el amor a la vida como esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes turísticos de las comunidades emisoras y receptoras del turismo, el turista y el patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y en constante construcción. Es una experiencia del dar y recibir;

CONSIDERAMOS la innovación como un elemento importante para el desarrollo turístico sostenible y la competitividad del sector turístico, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los programas innovadores deberán incluir el desarrollo del recurso humano, el desarrollo de capacidades, la inversión y el bienestar de las comunidades, entre otros;

ENFATIZAMOS que la responsabilidad social empresarial es fundamental para el desarrollo del turismo sostenible como elemento de innovación del sector turístico y que, entre otros, contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones;

DESTACAMOS que el turismo y la cultura, en sus diferentes manifestaciones, se encuentran estrechamente vinculados; ese vínculo es fundamental para el desarrollo sostenible de la actividad turística, la preservación de los recursos, la conservación del patrimonio y la identidad de los pueblos de las Américas;

RECONOCEMOS la importancia del turismo en el desarrollo regional y local de nuestros respectivos países y en especial en el progreso de las comunidades marginadas y grupos vulnerables;

RECONOCEMOS TAMBIÉN la importancia del turismo intrarregional como un instrumento valioso de integración y conocimiento entre nuestros pueblos, por lo que apoyaremos su facilitación y promoción;

VALORAMOS la importancia de la seguridad en el sector turístico y la necesidad de abordar este aspecto desde un enfoque multidimensional en el que se contemple, entre otros, reducir los riesgos asociados con desastres de origen natural y antrópico, y los efectos adversos del cambio climático;

RECONOCEMOS que el turismo debe promoverse con responsabilidad ética y social, tomando en cuenta las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en todas sus modalidades, especialmente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes;

RESALTAMOS que, junto con la cultura, los recursos naturales de los países del Hemisferio constituyen la base para la actividad turística como factor potencial para incentivar productos turísticos comunitarios para combatir la pobreza. Asimismo, reconocemos la necesidad de reforzar las políticas medioambientales con el fin de conservar un mundo sostenible para las futuras generaciones;

RECONOCEMOS la importancia de fomentar el turismo desde una perspectiva inclusiva que aliente el acceso a los servicios turísticos de todos los sectores de la sociedad, especialmente de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad;

ACOGEMOS con beneplácito la decisión de la Asamblea General [AG/RES. 2639 (XLI-O/11)] celebrada en San Salvador, El Salvador, para que el Congreso Interamericano de Turismo sea parte sectorial del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y la creación de la Comisión Interamericana de Turismo; y

REAFIRMAMOS la significativa contribución del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) en el desarrollo e integración turística hemisférica, regional y subregional y aplaudimos su fortalecimiento y sus esfuerzos para vincular los proyectos de cooperación del FEMCIDI en el sector turístico con las prioridades que establezca el Congreso Interamericano de Turismo.

EN ESE SENTIDO, NOSOTROS, LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO DE LOS ESTADOS MIEMBROS:

1. IMPULSAREMOS mecanismos de diálogo, cooperación y consulta dirigidos a fomentar esquemas asociativos público-privados, eliminar barreras y crear los marcos necesarios para apoyar la inversión en el sector turístico.
2. REITERAMOS que para impulsar el desarrollo del turismo sostenible debemos combatir los graves problemas de la pobreza, la exclusión social, la inequidad y propiciar una creciente colaboración y cooperación solidaria y complementaria entre los países del Hemisferio y los organismos internacionales, regionales y subregionales, nacionales y locales, públicos y privados pertinentes.
3. INSTRUIAMOS a la Comisión Interamericana de Turismo a que dé seguimiento a las recomendaciones contenidas en esta Declaración de San Salvador, mediante la elaboración de su plan de trabajo, que informe lo pertinente durante el XX Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, y que lo haga así sucesivamente.
4. INSTRUIAMOS ASIMISMO a la Comisión Interamericana de Turismo a:
 - a) que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), a través de su Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, fortalezca la cooperación y complementariedad con organizaciones relevantes en el sector turístico, para promover una participación regional más activa;
 - b) que promueva el diálogo permanente entre las autoridades de turismo del Hemisferio a fin de crear los mecanismos apropiados y se apoye en los existentes, para el acopio e intercambio de información y de experiencias, la identificación de mejores prácticas, la promoción de programas, proyectos y acciones de cooperación entre los Estados Miembros y con terceros vinculados al sector turismo;
 - c) que impulse la creación de políticas públicas con el objeto de identificar y atender los factores que inhiben el desarrollo sustentable del sector turístico, desarrollando estrategias que conviertan a los Estados en facilitadores de los procesos productivos y sociales que intervienen en el sector turístico;
 - d) que, en coordinación con la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo y la colaboración de la SEDI y la Secretaría de Relaciones Externas, emprenda acciones para recaudar fondos complementarios a los recursos del Fondo Regular de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destinados a la instrumentación de programas y proyectos para el desarrollo sostenible del turismo en las Américas; y

e) que en coordinación con las entidades pertinentes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), adopte acciones que sean necesarias, destinadas a crear un mecanismo de financiamiento y cooperación entre los ministerios y autoridades nacionales de turismo, a través de un fondo hemisférico de turismo, con aportes voluntarios que considere la participación del sector privado y de organismos internacionales, destinado a apoyar a aquellas comunidades en condición de pobreza extrema que, contando con potencial turístico en su entorno, no puedan acceder plenamente a condiciones de desarrollo.

5. ACOGEMOS con beneplácito los generosos aportes de los Ministerios de Turismo de Belize (US\$25.000,00), El Salvador (US\$25.000,00), Guatemala (US\$25.000,00), Honduras (US\$10.000,00), México (US\$25.000,00), Nicaragua (US\$25.000,00), Panamá (US\$25.000,00) y Trinidad y Tobago (US\$40.000,00) para alcanzar un total de US\$200.000,00, que servirán de capital semilla del fondo hemisférico de turismo que ha sido propuesto en la presente Declaración y adquirimos el compromiso de considerar sumarnos con contribuciones voluntarias adicionales.

6. SOLICITAMOS que en la preparación del Reglamento de la Comisión Interamericana de Turismo, la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) tome en cuenta la importancia de incorporar un mecanismo de diálogo con todos los actores involucrados para conocer sus necesidades y favorecer la expansión y mejora de los servicios turísticos.

7. MANIFESTAMOS nuestro interés de reforzar las capacidades de la OEA en el área responsable de turismo y recomendamos a la Secretaría General de la OEA que tome las acciones apropiadas para incrementar los recursos humanos y financieros de esta área con el propósito de dotarla de capacidad para llevar a cabo los mandatos y recomendaciones adoptados por los Estados Miembros y en especial por este XIX Congreso Interamericano de Turismo.

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE NUESTRAS NACIONES, LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO CONSIDERAMOS IMPORTANTE:

a) Promover el desarrollo sostenible del turismo con miras a generar un desarrollo económico y social más equitativo e inclusivo, y que contribuya de manera efectiva a la reducción de la pobreza.

b) Atender prioritariamente las acciones orientadas a la creación y fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de los países del Hemisferio y promover el bienestar de las poblaciones, la productividad, la cooperación, la complementariedad y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector.

c) Facilitar políticas que beneficien a empresas de mujeres propietarias, ya que ellas son una fuerza significativa de las micro, pequeñas y medianas empresas en los países del Hemisferio.

- d) Invitar a los Estados Miembros a colaborar, de acuerdo con sus realidades nacionales y con el apoyo de la OEA, cuando se requiera, en la implementación de herramientas estadísticas y compartir datos que permitan contar con el flujo de viajes y la contribución del turismo a la economía.
- e) Promover la innovación e inversión, en todas sus vertientes, en el sector turístico y la incorporación creciente de tecnologías modernas de información y comunicación, incluyendo redes sociales de comunicación.
- f) Alentar la colaboración y esfuerzo conjunto de todos los actores y asociaciones vinculados al sector turístico, especialmente de las comunidades locales y de las micro, pequeñas y medianas empresas.
- g) Promover iniciativas que fomenten y faciliten el turismo local, regional e intrarregional reconociendo la importancia para la integración.
- h) Favorecer programas y proyectos de cooperación en el sector turístico que ponderen el carácter transversal del turismo y su interrelación con otros sectores del desarrollo económico y social de nuestros países.
- i) Promover y fortalecer mecanismos de apoyo al turismo sostenible a través, entre otros, de programas de microcréditos, utilizando las instituciones financieras existentes, del uso y transferencia de nuevas tecnologías y de asistencia técnica que faciliten la producción de bienes y servicios de calidad y la creación de empleos, logrando así la creación de una cultura emprendedora.
- j) Promover un mayor vínculo institucional y de políticas entre el turismo y la cultura, así como la instrumentación de programas y proyectos que combinen ambos elementos.
- k) Facilitar y fortalecer políticas que promuevan mayores vínculos entre el sector turístico y otros sectores de la actividad económica.
- l) Promover programas orientados al fortalecimiento de capacidades que beneficien a las empresas creativas y artesanales, así como a las comunidades urbanas y rurales proveedoras de bienes y servicios para el sector turístico.
- m) Promover políticas públicas y acciones de cooperación entre los Estados Miembros orientadas a fortalecer los sistemas de prevención, manejo y atención de desastres.
- n) Promover políticas públicas y acciones de cooperación entre los Estados Miembros orientadas a fortalecer los mecanismos de seguridad vinculados a la provisión de servicios turísticos y a la seguridad del turista, así como a fomentar una mayor colaboración para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en todas sus modalidades, con especial énfasis de la explotación sexual comercial, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

o) Promover la responsabilidad social empresarial como elemento que contribuye al desarrollo turístico sostenible, a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, y también favorece la productividad y competitividad de las empresas del sector turístico.

p) Orientar esfuerzos que permitan el fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en el ámbito de la OEA, particularmente para el sector turístico de las Américas.

PROMOVEREMOS el turismo sostenible en las Américas y recomendamos a nuestros Jefes de Estado y de Gobierno que hagan suya esta Declaración y se integre en la Declaración y Plan de Acción de la VI Cumbre de las Américas.

EXPRESAMOS nuestro agradecimiento a los Gobiernos de Ecuador y Honduras, así como a sus Ministerios de Turismo, por los generosos ofrecimientos para ser sede, respectivamente, del XX y XXI Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo.

EXPRESAMOS TAMBIÉN nuestro agradecimiento al Gobierno y al pueblo de El Salvador por su cálida y generosa hospitalidad y por su comprometida contribución al éxito de este XIX Congreso Interamericano de Turismo en el ámbito de la OEA.

Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres

Cuarta Reunión de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros (REMIM IV)

1 de noviembre de 2011

San Salvador, El Salvador

Seguimiento del proceso de la Sexta Cumbre de las Américas

(Documento Informativo)

I. Antecedentes

En abril de 2000, bajo la coordinación técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó por primera vez la *Reunión de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros*. En esta histórica reunión, las Ministras aprobaron el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), un enfoque nuevo e integral con respecto a la perspectiva de género y al logro de la equidad e igualdad de género en todas las esferas de la política pública, tanto en el sistema interamericano como en los países miembros.

El trigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA adoptó el PIA por resolución AG/RES.1732 (XXX-O/00), que posteriormente fuera respaldado en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas (Quebec, 2001), como un mecanismo eficaz para la incorporación de la perspectiva de género.

En el mismo período ordinario de sesiones, la Asamblea General de la OEA adoptó la resolución AG/RES. 1741 (XXX-O/00), en la que se resolvió recomendar la celebración de Reuniones de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros, cada cuatro años, con el fin de contribuir en la preparación y en los trabajos de seguimiento de las Cumbres de las Américas. También, se alentaron a los gobiernos a considerar las recomendaciones de la CIM en el proceso de preparación de la Cumbre.

Esta posición de la CIM se vio fortalecida con el reconocimiento, por parte de la Cumbre de Quebec, del papel de la CIM como el organismo asesor técnico del Grupo de Revisión

de la Implementación de Cumbres (GRIC)¹, en todos los aspectos de equidad e igualdad de género, y la importancia de la Comisión en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de la Cumbre. Esta Cumbre también destacó la importancia de la CIM como el principal foro hemisférico generador de políticas en el fomento de los derechos humanos de la mujer y particularmente de la igualdad de género.

II. Objetivos

En cumplimiento de los mandatos mencionados, la CIM organiza periódicamente la REMIM para consensuar y aprobar las recomendaciones a ser elevadas para la consideración de los Estados Miembros, a través del GRIC, a fin de impulsar la agenda de igualdad de género y de los derechos de las mujeres en el proceso preparatorio de las Cumbres de las Américas.

Con este objetivo, la REMIM IV se realizará en San Salvador, El Salvador el 1 de noviembre de 2011, para efectos de la Sexta Cumbre de las Américas, que bajo el lema de “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad” tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia en abril de 2012.

Además de los mandatos mencionados bajo la sección I, la realización de la Cuarta REMIM también responderá a más recientes mandatos, a saber:

- Asamblea de Delegadas de la CIM (Ciudad de México, noviembre de 2010), que como parte de la Declaración del Año Interamericano de las Mujeres “Mujeres y Poder: Por un Mundo con Igualdad,” solicita al Comité Directivo y a la Secretaría Permanente de la CIM, impulsar la agenda de igualdad de género y de los derechos de las mujeres durante el proceso preparatorio de la Sexta Cumbre de las Américas.
- Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (San Salvador, junio de 2011), que bajo la resolución AG/RES. 2689 (XLI-O/11), insta al Secretario General a convocar la REMIM IV para el último trimestre de 2011.
- Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo 2010-2012 de la CIM (Washington, D.C., abril de 2011), que bajo el Acuerdo 8, determina celebrar la REMIM IV en 2011, y de ser posible, coincidiendo con la realización de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

¹ El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), es el principal órgano de gestión del Proceso de Cumbres. Cuenta con la representación de los Estados Miembros de la OEA a través del Coordinador Nacional designado. El GRIC es presidido por el Estado Miembro que tiene la sede del Proceso de Cumbres de las Américas. Colombia, como anfitrión de la Sexta Cumbre en 2012, es su actual Presidente.

III. Resultados de la REMIM

Desde el 2000 a la fecha se han realizado tres reuniones de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres cuyos resultados han sido muy satisfactorios.

A. REMIM I

(Washington, D.C., abril de 2000)

Adoptó el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), aprobado por la Asamblea General de la OEA en 2000 y respaldado por los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas en la Tercera Cumbre.

“229. Respondarán el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, aprobado por la Primera Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres, organizada en abril de 2000 por la CIM;”

“233. Reforzarán el papel de la CIM, como el organismo asesor técnico del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), en todos los aspectos de equidad e igualdad de género y reconocerán la importancia de la CIM en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de la Cumbre; proporcionarán un nivel apropiado de recursos a la CIM para desempeñar su papel como el principal foro hemisférico generador de políticas en el fomento de los derechos humanos de la mujer y particularmente de la igualdad de género.” (Plan de Acción de Québec, 2001).

Desde su aprobación, el PIA representó la principal base para las acciones de la CIM. Respondiendo al mandato de este Programa de “Asegurar que sea sistemáticamente incorporada la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de los instrumentos internacionales, mecanismos, y procedimientos en el marco de la Organización, en especial en las agendas de las reuniones a nivel ministerial”, la CIM ha trabajado con expertos/as en materia de género del Hemisferio, a fin de preparar recomendaciones y líneas de acción para la consideración de Ministros en el marco de reuniones Ministeriales sectoriales. En este proceso de seguimiento del PIA, se presentaron recomendaciones a los Ministerios de Trabajo, Justicia, Educación y Ciencia y Tecnología.

En el ámbito laboral, se destaca que a partir de la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), celebrada en Ottawa, Canadá en 2001, los Ministros(as) de Trabajo de la región asumieron el compromiso de integrar una perspectiva de género en el diseño y aplicación de las políticas laborales y promover la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Este compromiso se vio impulsado por la aprobación del PIA en 2000. Más adelante, en la XIV CIMT celebrada en Ciudad de México en 2005, los Ministros(as) de Trabajo refrendaron su compromiso y el tema de género recobró una especial relevancia dentro de las actividades de la Conferencia.

En el año 2007, la XV CIMT aprueba las “*Líneas Estratégicas de la XV CIMT para avanzar hacia la igualdad y la no discriminación de género en el marco del Trabajo Decente*”, como un marco general de acción para los Ministerios de Trabajo. Desde entonces se ha fortalecido aún más el trabajo conjunto entre la OEA y la CIM, en materia de género y trabajo, en el que también ha participado la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo intersectorial entre las Ministras de la Mujer y los Ministros(as) de Trabajo a celebrarse en la XVII Conferencia, el 1 de noviembre de 2011 en San Salvador, se desprende de esta cooperación y compromisos de ambos sectores.

B. REMIM II

(Washington, D.C., abril de 2004)

Aprobó recomendaciones que fueron elevadas a la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA-V), que las integró en sus Conclusiones y Recomendaciones, y propuso iniciativas a los gobiernos en los temas de trata de personas, especialmente de mujeres y niños, violencia contra la mujer y género y justicia.

REMJA V, Conclusiones y Recomendaciones:

VII. Violencia contra la Mujer:

“1. Insta a los Estados Miembros a completar sus procesos internos para determinar si han de suscribir y ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

2. Alienta a los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) a analizar el modo más apropiado de crear un mecanismo de seguimiento de la Convención.”

VIII. Género y Justicia:

“La REMJA V, habiendo escuchado la presentación de la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres), toma nota de las recomendaciones sobre género y justicia formuladas a la REMJA V por la Segunda Reunión de Ministras o Ministros o Autoridades al más alto nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros y las refiere a los Estados Miembros para mayor consideración.”

Por otro lado, en materia de Ciencia y Tecnología, las “Recomendaciones para integrar la perspectiva de género en las políticas y los programas de ciencia y tecnología en las Américas”, formuladas dentro del marco del seguimiento al PIA, se adoptaron en la *Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el ámbito del CIDI* (Lima, 2004), como una de las iniciativas hemisféricas del Plan de Acción de Ciencia y Tecnología.

C. REMIM III

(Santiago de Chile, noviembre de 2008)

Esta reunión identificó puntos de entrada en la agenda y los resultados de la Quinta Cumbre de las Américas (Puerto España, 2009). En sus recomendaciones, exhortan a los gobiernos a integrar la perspectiva de género en cada uno de los temas del Proyecto de Declaración de Puerto España. La CIM compartió sus recomendaciones con organizaciones de la sociedad civil y las invitó a formular comentarios y sugerencias sobre el Proyecto de Declaración, a través de un foro hemisférico en línea lanzado conjuntamente con la Secretaría de Cumbres de las Américas.

Como resultado, la Declaración de Compromiso de Puerto España adoptó compromisos importantes en cuanto al reconocimiento de la importancia de la transversalización de género en políticas, planes y programas nacionales y hemisféricos y al fortalecimiento de los mecanismos nacionales para la promoción de la mujer y la promoción la igualdad, equidad y paridad de género:

“6. Reconocemos la importancia de considerar las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, para promover y asegurar la integración transversal de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales y hemisféricos que se implementen en los ámbitos político, económico, laboral, social y cultural. Al respecto, continuaremos los esfuerzos para la producción de estudios regionales y de estadísticas desagregadas por sexo para medición y monitoreo, y para fomentar la cooperación y el intercambio entre los Estados de mejores prácticas, experiencias y políticas de igualdad y equidad de género, en el contexto de la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

11. Nos comprometemos a reforzar los mecanismos institucionales para el progreso de las mujeres, incluyendo, cuando corresponda, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” y su financiamiento. Fomentaremos la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política y las estructuras de toma de decisiones en nuestros países, a todos los niveles, a través de leyes y políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer, la igualdad, la equidad y la paridad de género.”

(Declaración de Puerto España, 2009).

En resumen, la REMIM, desde su primera reunión en 2000 hasta la más reciente, en 2008, ha tenido un impacto muy positivo a lo largo del proceso de Cumbres. El PIA, desde su adopción en 2000, ha contado con el respaldo de los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas. Asimismo, se logró que por primera vez el Plan de Acción de la Cumbre (Tercera Cumbre, Quebec, 2000) integrara la perspectiva de género en algunos de sus capítulos, adoptando uno dedicado a la igualdad de género. Más tarde, la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria (Monterrey, 2004), reiteró el compromiso de continuar promoviendo la equidad e igualdad de género; mientras que la Cuarta Cumbre (Mar del Plata,

2005), que se enfocara en la creación de trabajo decente y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, reafirmó su voluntad de combatir la discriminación de género en el mundo laboral. La Quinta Cumbre (Puerto España, 2009), como se muestra previamente, afirmó el compromiso de reforzar los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, incluyendo la “Convención de Belém do Pará” y su financiamiento, así fomentar la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política y en las estructuras de toma de decisiones.

IV. REMIM IV

Durante la REMIM IV se presentarán los avances en relación a la preparación de la Sexta Cumbre, a cargo de la Secretaría del Proceso de Cumbres de las Américas; así como los resultados de una consulta hemisférica virtual realizada con la sociedad civil.

La cuarta REMIM debería consensuar y aprobar recomendaciones para impulsar la agenda de igualdad de género y de los derechos de las mujeres en el proceso preparatorio de la Sexta Cumbre de las Américas. Las recomendaciones que se adopten en la REMIM IV serán puestas a disposición del GRIC. A la vez, las y los Ministros o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres, a través de los canales adecuados, podrán remitir los acuerdos adoptados a sus delegados ante el GRIC – Coordinadores Nacionales, para que sean tomados en cuenta en el proceso de negociación de los documentos finales de la Cumbre, la cual, según lo anunciara el Gobierno de Colombia, tiene por lema “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad.”

El proceso de preparación y negociación de los documentos finales de la Sexta Cumbre de las Américas se realizará bajo la Presidencia y guía de Colombia como país anfitrión. Este proceso se coordina en la OEA, dada su calidad de Secretaría Técnica, a través del GRIC.

Los temas seleccionados por Colombia son:

- seguridad
- acceso a y utilización de tecnologías
- desastres naturales
- reducción de la pobreza y las inequidades
- cooperación solidaria
- integración física de las Américas

Consulta con la Sociedad Civil

La consulta hemisférica virtual con la sociedad civil, “*Conectando a las Mujeres de las Américas: Socias para la Prosperidad*” está siendo coordinada por la Secretaría Permanente de la CIM en colaboración con la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA. Esta consulta se realiza entre el 3 y 21 de octubre de 2011, en la plataforma virtual de foros de la Secretaría de Cumbres, en el marco preparatorio de la Sexta Cumbre de las Américas.

Las conclusiones y recomendaciones de la consulta virtual serán presentadas ante la REMIM IV por representantes de la sociedad civil que participaron en su moderación. Servirán como un insumo para el diálogo ministerial, así como para la consideración de los Estados Miembros en el marco de negociación de los resultados de la Cumbre.

El foro virtual se desarrolló a través de los siguientes segmentos de discusión:

- a) Reducción de la pobreza y las inequidades – moderado por Soledad Parada, Presidenta de la Fundación Latinoamericana de Innovación Social
- b) Seguridad – moderado por Ana Falú, Directora del Instituto para Investigación sobre Vivienda y Habitat de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
- c) Acceso a y utilización de tecnologías – moderado por Sophia Huyer, Directora Ejecutiva de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología Global/WIGSAT

Seguimiento hasta Cartagena de Indias

Como parte del proceso preparatorio de la Sexta Cumbre, los/as Presidentes de cada uno de los procesos ministeriales que se realicen entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, serán invitados a participar en la Sesión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), que se desarrolle inmediatamente después de la respectiva reunión ministerial. Se busca que los Estados Miembros, a través del GRIC, puedan estar informados sobre los avances en la implementación de mandatos a nivel sectorial y utilicen dicha información según lo estimen conveniente.

Mayor información sobre la Sexta Cumbre y su proceso preparatorio puede encontrarse a través de la página Web de la Secretaría de Cumbres de las Américas, incluyendo la lista de Coordinadores Nacionales ante el GRIC en:
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html

Ministros de Cultura

Quinta Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura

9 - 10 de noviembre de 2011

Washington, D. C.

Comunicado

Cultura, común denominador para el desarrollo integral

NOSOTROS, LOS MINISTROS, LAS MINISTRAS Y LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE CULTURA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Washington, D. C., los días 9 y 10 de noviembre de 2011, en ocasión de la Quinta Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI),

RECONOCEMOS el valor intrínseco de la cultura como elemento distintivo, único e inseparable de todos los seres humanos y de las comunidades, y su contribución al fortalecimiento del tejido social; y reafirmamos la importancia de promover el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad cultural.

AFIRMAMOS que la cultura es el común denominador para el desarrollo integral de los pueblos de América que desempeña un papel central en el desarrollo económico, social, y humano de sus comunidades y ofrece ricas oportunidades para la cooperación e intercambio dirigidos a la promoción de una convivencia pacífica, comprensión, participación ciudadana y respeto mutuo.

RECORDAMOS que en múltiples ocasiones los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros y Máximas Autoridades de Cultura han destacado la contribución de la cultura en la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros pueblos; al fomento del diálogo y la cohesión social y la creación de comunidades más sólidas e incluyentes; y como portadora de la identidad, los valores y significados.

REAFIRMAMOS que la cultura, particularmente las industrias culturales y creativas, ofrece oportunidades para el crecimiento económico, el aumento de la competitividad y de la diversificación de las economías del Hemisferio, mediante la creación de nuevos empleos en áreas no tradicionales y la adquisición de nuevas habilidades. Por lo tanto, alentamos a los Estados Miembros a reconocer esta contribución en sus programas y proyectos, a considerar el incremento de los recursos destinados a la cultura y consolidar sus esfuerzos para cuantificar el impacto de la cultura en el crecimiento económico.

RENOVAMOS nuestro llamamiento para fortalecer las sinergias con los sectores de educación, turismo, trabajo, economía y finanzas, entre otros, a fin de maximizar la contribución de la cultura al desarrollo integral.

RECONOCEMOS la importancia de salvaguardar y promover nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible, y su contribución al desarrollo integral y sostenible de nuestras comunidades.

ENFATIZAMOS el valor del turismo cultural y la importancia de la cooperación continua y equilibrada entre los sectores de cultura y turismo a fin de promover el desarrollo integral y sostenible de nuestras comunidades.

RECONOCEMOS la importancia de la cultura como un elemento clave para promover la convivencia pacífica y fortalecer los procesos democráticos. Por lo tanto, alentamos la incorporación de componentes culturales, con un énfasis en el diálogo intercultural y la participación de los jóvenes, en programas y proyectos orientados a prevenir la violencia y promover una ciudadanía democrática.

ACOGEMOS con beneplácito las múltiples iniciativas adoptadas en el marco del Año Interamericano de la Cultura, e invitamos a continuar realizando esfuerzos para asegurar que su impacto perdure más allá de 2011.

ACOGEMOS TAMBIÉN con satisfacción la iniciativa de la Secretaría General de instaurar, en el marco del Año Interamericano de la Cultura, el reconocimiento “Patrimonio Cultural de las Américas” a las expresiones culturales más representativas de los Estados Miembros, con la finalidad de destacar los diversos elementos que conforman la identidad de las Américas, difundirlos como la contribución interamericana al acervo cultural de la humanidad y reafirmar su presencia en el escenario internacional. Felicitamos al Perú por haber recibido, en virtud de su riqueza gastronómica, la primera entrega del mencionado reconocimiento.

PRESENTAREMOS a la próxima reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) un informe conciso sobre los resultados y conclusiones de nuestras deliberaciones para que puedan ser analizados en relación con las áreas temáticas pertinentes aprobadas para la Sexta Cumbre de las Américas y, si procede, incluirlos en los documentos que los Jefes de Estado y de Gobierno suscribirán en Cartagena, Colombia, en abril de 2012.

REITERAMOS la importancia de la Comisión Interamericana de Cultura (CIC) como un foro hemisférico político-técnico de cooperación, diálogo, intercambio y creación de consensos en el ámbito cultural, y continuaremos trabajando a través de ese foro para promover programas y proyectos que fomenten el rol de la cultura en el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

FELICITAMOS a la CIC por los avances realizados en la ejecución de su Plan de Trabajo, en particular en el proyecto “La cultura en el desarrollo: una red interamericana de información”. En este sentido, instamos a la CIC, con el apoyo de la Oficina de Educación y Cultura de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA, a conti-

nuar estos esfuerzos y a fortalecer el portafolio de prácticas exitosas, el portal Internet “Desarrollo y Cultura”, y las misiones de asistencia técnica para promover el conocimiento, el diálogo, el intercambio y la cooperación horizontal en materia de cultura.

INSTAMOS a la continuación de esfuerzos tales como el proyecto conjunto de la CIC y la Comisión Interamericana de Educación (CIE), “Fomentando la Diversidad Cultural y la Expresión Creativa a través de la Educación: Intercambio de Prácticas Óptimas”, con miras a seguir fortaleciendo la colaboración entre los sectores de la educación y la cultura.

RECONOCEMOS el excelente trabajo realizado por la Oficina de Educación y Cultura e instamos a la Secretaría General a fortalecer esta oficina de manera que continúe cumpliendo sus funciones como Secretaría Técnica de la CIC.

ENCOMENDAMOS a la CIC, con el apoyo de la Oficina de Educación y Cultura, el diseño y la ejecución de su Plan de Trabajo para 2011-2013, destinado a fortalecer la capacidad del sector cultural y a profundizar la cooperación en las áreas temáticas acordadas en la Cuarta Reunión de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura en el ámbito del CIDI celebrada en Barbados en 2008, y a construir sobre la base de las deliberaciones y recomendaciones de esta Quinta Reunión de Ministros en Washington, D. C.

ALENTAMOS a los Estados Miembros a que presenten propuestas de proyectos para el nuevo ciclo de financiamiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI), sobre los temas clave aprobados: (i) incrementar el crecimiento económico y promover el desarrollo a través de la cultura, y (ii) fomentar la inclusión social a través de la cultura. Instamos a los Estados Miembros a que contribuyan a la cuenta de cultura en el FEMCIDI para incrementar el impacto de los proyectos financiados.

RECONOCEMOS la necesidad de promover la educación y capacitación de profesionales en el sector cultural y en ese sentido alentamos a la CIC a coordinar esfuerzos con los programas del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la SEDI para implementar oportunidades de desarrollo profesional y becas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales en el sector.

CONTINUAREMOS nuestro trabajo para fortalecer los planes y programas culturales en colaboración con otros sectores de política pública, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y organizaciones internacionales. Asimismo, promoveremos el diálogo, el intercambio y la cooperación en materia de cultura entre los Estados Miembros, así como con otros grupos regionales de integración.

INVITAMOS a la CIC a examinar la posibilidad de establecer un fondo especial para el desarrollo de nuestras industrias culturales y para la promoción de una mayor colaboración entre los Estados Miembros.

Ministros de Ciencia y Tecnología

Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología

17 - 18 de noviembre de 2011

Ciudad de Panamá, Panamá

Plan de Acción de Panamá

Ciencia, tecnología e innovación aplicadas:
Conocimiento para la competitividad y prosperidad

Dentro del marco de las reuniones de Ministros y Altas Autoridades del Hemisferio, la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT) constituye un foro para el diálogo político y el seguimiento de los mandatos adoptados en estas reuniones ministeriales.

Durante su sexta reunión ordinaria en septiembre de 2010, los representantes de la COMCyT reconocieron la importancia de enfocarse en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería como factores fundamentales para promover la innovación, la competitividad, el crecimiento y la prosperidad. De manera significativa, recomendaron el desarrollo de un programa interamericano de ciencia y tecnología de largo plazo, con metas y objetivos medibles, y la creación y fortalecimiento de mecanismos de supervisión y cooperación, incluido el Portal de la COMCyT.

Como respuesta a la recomendación de la COMCyT, durante la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, celebrada en Panamá los días 17 y 18 de noviembre de 2011, se presentó a los delegados de los países el documento “Hacia una Visión 20/25 en Ciencia, Tecnología e Innovación para las Américas: Cooperación Hemisférica para la Competitividad y Prosperidad en una Economía del Conocimiento (Visión 20/25)”, que recoge mandatos del proceso ministerial de ciencia y tecnología en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El propósito de este Plan de Acción es avanzar en la implementación de dichos mandatos ministeriales mediante la creación de grupos de trabajo y el establecimiento de acciones claras y mecanismos de cooperación para asegurar su funcionamiento eficaz y sostenido.

Por lo tanto, nosotros, los Ministros y Altas Autoridades de las Américas, con ocasión de la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de la OEA (REMCYT III), adoptamos el siguiente Plan de Acción:

Implementación del Plan de Acción

I. Papel de los Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología

A. Áreas de acción

Los Ministros y Altas Autoridades de ciencia y tecnología deben generar oportunidades que favorezcan el logro de los mandatos ministeriales que se recogen en la Visión 20/25 y que reflejan áreas estratégicas para el desarrollo y la prosperidad, entre ellas:

1. Promover la redacción, revisión, actualización y seguimiento de políticas y regulaciones, en particular aquellas que se desprenden de mandatos ministeriales.
2. Fomentar alianzas con los actores sociales, en particular agentes principales en el mundo académico, en el sector privado, en la sociedad civil y en las comunidades para proyectos, programas e iniciativas comunes que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población y a incrementar la competitividad de los sectores productivos y de servicios, en especial la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
3. Implementar acciones que ayuden a crear una sociedad basada en el conocimiento y a estimular el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales con perspectiva de género.
4. Difundir la información de la ciencia, la tecnología y la ingeniería promoviendo el pensamiento innovador y el intercambio de mejores prácticas para la transferencia de tecnología, con base en términos voluntarios y mutuamente acordados, la actualización de la educación, los servicios de extensión comunitaria y la creación de empleos.
5. Promover el aumento de la inversión y la disponibilidad de mecanismos de financiamiento para avanzar en las áreas prioritarias de la ciencia, la tecnología y la innovación.
6. Fortalecer la colaboración y el diálogo sobre políticas con otros ministerios y altas autoridades para atraer su participación en las iniciativas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
7. Asignar los recursos que se consideren necesarios para participar en la implementación del Plan de Acción y apoyar las iniciativas que resulten de los grupos de trabajo.

B. Niveles de acción

El rol de los Ministros y Altas Autoridades deberá desempeñarse en los niveles nacional, regional y hemisférico, los que se complementan entre sí:

1. A nivel nacional, comprende las acciones para fomentar las alianzas público-privadas y la colaboración con todos los actores sociales, en particular con el mundo académico, la sociedad civil, la comunidad empresarial, los gobiernos locales y las comunidades, a fin de avanzar en las áreas de acción antes referidas.

2. En los niveles subregional y regional, comprenden acciones que corresponden a los compromisos o intenciones emanados de acuerdos, asociaciones o proyectos.

3. A nivel hemisférico, comprende aquellas acciones derivadas de acuerdos o proyectos comunes, y cuyo seguimiento se encomienda a la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT).

II. La COMCyT

La Presidencia de la COMCyT (Panamá), en colaboración con las dos Vicepresidencias (Perú y San Vicente y las Granadinas), con el apoyo de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OEA, como Secretaría Técnica y en consulta con representantes de la COMCyT, se encargará de promover la implementación del Plan de Acción y de mejorar la colaboración y la cooperación con las organizaciones regionales e internacionales relevantes, la sociedad civil y otros actores en las Américas. Estas instituciones incluyen organismos de cooperación, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), la Organización de Mujeres Científicas del Mundo en Desarrollo (OWSD), la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA), y la Federación de Investigación Colaborativa en Tecnologías de Información y Comunicación de América Latina y el Caribe (LACCIR), entre otras.

Además, la COMCyT tiene funciones específicas en relación con los grupos de trabajo, que se describen en la siguiente sección.

III. Grupos de Trabajo

A. Coordinación, membresía y composición

La Presidencia de la COMCyT coordinará los grupos de trabajo. La Presidencia, con el apoyo de las dos Vicepresidencias, buscará activamente formas para obtener la participación de todos los Estados Miembros y de otros socios en la implementación del Plan de Acción (por ejemplo, resaltando y alentando el liderazgo, la participación y la representación de mujeres y grupos vulnerables, etc.).

La participación en los grupos de trabajo estará abierta a todos los Estados Miembros. Cada uno de los grupos de trabajo estará encabezado por un Estado Miembro, quien deberá comprometerse a emprender acciones concretas y tangibles para promover sus objetivos y propuestas que tengan impacto en todo el sistema productivo y, cuando sea requerido, con énfasis en las mipyme.

La participación también estará abierta a organizaciones internacionales, regionales y a otros actores sociales, incluida la sociedad civil, con la aprobación previa de las autoridades de la COMCyT.

B. Reuniones, seminarios, estudios y propuestas de proyectos

De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, los grupos de trabajo procurarán reunirse al menos dos veces al año, personal o virtualmente, en las fechas y lugares que se determinen por consenso entre los miembros de cada uno de ellos.

Cada uno de los grupos de trabajo deberá intentar programar al menos un seminario, taller o conferencia por año en sus áreas de responsabilidad. En la organización de estos eventos deberán tomarse en cuenta las preferencias, prioridades e intereses de los países y regiones del Hemisferio.

Asimismo, cada grupo de trabajo desarrollará estudios de casos integrales y/o propuestas de proyecto basados en el apoyo técnico y financiero disponible de los países participantes y de las instituciones regionales e internacionales que participan en las áreas de ciencia, tecnología e innovación.

C. Funciones

1. Grupo de Trabajo 1. Innovación

El Grupo de Trabajo 1 trabajará para el desarrollo en las Américas de una cultura de innovación basada en la tecnología que fomente la inclusión, el emprendimiento y el pensamiento creativo en la sociedad en general, y en los sectores académico, público y privado. Para ello:

- a) identificará, seleccionará, definirá y colaborará para proponer indicadores de innovación para los Estados Miembros;
- b) promoverá políticas y marcos nacionales para fomentar la innovación, incluidas las inversiones, en colaboración con los Ministros y Altas Autoridades;
- c) definirá el tema y supervisará el desarrollo de un estudio de caso o proyecto en la región y formulará recomendaciones de acción a la COMCyT; y
- d) diseñará y coordinará proyectos regionales y hemisféricos y forjará alianzas para:
 - i. Sensibilizar sobre la importancia del pensamiento innovador y de una cultura de innovación basada en la tecnología para la competitividad y el crecimiento económico.
 - ii. Enfatizar la participación de mujeres y grupos vulnerables a fin de promover más inclusividad en la innovación.

- iii. Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de *clusters*, parques tecnológicos, organizaciones para la transferencia de conocimientos, incubadoras y *spin-offs* para las mipyme.
- iv. Apoyar y promover subsistemas sectoriales y regionales de innovación.
- v. Difundir y popularizar avances y mejores prácticas en materia científica y tecnológica.

2. Grupo de Trabajo 2. Educación y formación de recursos humanos

El Grupo de Trabajo 2 trabajará para procurar el aumento del número de graduados y graduadas en ciencia, tecnología, ingeniería y educación técnica y para mejorar los programas de estudio en estas áreas para responder a las necesidades cambiantes de la industria, en especial de las mipyme y de las comunidades. Se esforzará también por:

- a) Atraer a las universidades para que actualicen los programas de estudio en ciencia, tecnología e ingeniería de tal manera que egrese una masa crítica de hombres y mujeres calificados en las industrias y campos estratégicos, haciendo énfasis en enfoques multidisciplinarios y en estrecha relación con la realidad social y económica de sus países.
- b) Promover el fortalecimiento de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la escuela primaria y secundaria.
- c) Promover investigaciones a nivel nacional y regional sobre la opinión de los estudiantes de educación secundaria sobre la ciencia y las profesiones científicas.
- d) Definir el tema y supervisar el desarrollo de un estudio de caso y/o proyecto para compartir mejores prácticas y experiencias en la región y formular recomendaciones de acción a la COMCyT.
- e) Promover el desarrollo profesional continuo del profesorado universitario en sus áreas y la capacitación periódica en los métodos docentes y de investigación más modernos.
- f) Promover el intercambio de estudiantes tomando en cuenta la equidad de género y una mayor participación de grupos minoritarios en el Hemisferio.
- g) Facilitar los mecanismos de cooperación hemisférica de manera que los Estados Miembros colaboren en sus esfuerzos por actualizar y mantener sus programas de estudio en ciencia, tecnología e ingeniería.
- h) Facilitar el intercambio de información en materia de movilidad académica para estudiantes y profesionales entre los Estados Miembros de la OEA.
- i) Crear o fortalecer los servicios de extensión y transferencia de tecnología, en base a términos voluntarios y mutuamente acordados, para las comunidades y la industria, en especial para las mipyme.

j) Diseñar y coordinar proyectos regionales y hemisféricos y forjar alianzas entre los sectores académico, público y privado en los temas mencionados, reforzando especialmente la iniciativa hemisférica “Ingeniería para las Américas”, aprobada en la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología y respaldada por la Segunda Reunión.

k) Alentar la cooperación entre colegas en materia de investigación científica en el hemisferio.

3. Grupo de Trabajo 3. Infraestructura nacional de la calidad

El Grupo de Trabajo 3 trabajará para ayudar a los Estados Miembros a tener acceso a servicios de infraestructura de la calidad internacionalmente reconocidos para fomentar la competitividad, la innovación, el comercio y la seguridad del consumidor. Para ello, este grupo de trabajo se encargará de:

a) Definir el tema y supervisar el desarrollo de un estudio de caso o proyecto para promover la importancia de la infraestructura nacional de la calidad en la región y formular recomendaciones de acción a la COMCyT.

b) Promover la definición de un conjunto mínimo de servicios de metrología en los Estados Miembros que satisfaga su demanda local de servicios y asegurar su trazabilidad internacional.

c) Ayudar a consolidar el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y promover la participación de los Estados Miembros en la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT).

d) Apoyar el diseño de programas que fomenten una cultura de calidad y responsabilidad social para las mipyme y otras unidades de producción.

e) Crear o fortalecer los sistemas de calidad nacional en los países de la región.

f) Diseñar y coordinar proyectos regionales y hemisféricos en los temas mencionados.

4. Grupo de Trabajo 4. Desarrollo tecnológico

El Grupo de Trabajo 4 trabajará para fortalecer la cooperación interamericana en ciencia, tecnología e innovación en áreas prioritarias seleccionadas para lograr un desarrollo tecnológico más efectivo y acelerado en la región. El Grupo de Trabajo 4 se esforzará por:

a) Definir temas específicos de interés y dar seguimiento al desarrollo de un estudio de caso o proyecto en la región y formular recomendaciones de acción a la COMCyT.

b) Crear o fortalecer programas, proyectos y actividades de cooperación e intercambio de conocimientos a fin de promover el desarrollo de las mipyme, las universidades y la comunidad, y otras unidades de producción en una o más de las siguientes áreas:

- i. Biotecnología y seguridad alimentaria
- ii. Energía limpia renovable, eficiencia energética y producción más limpia
- iii. Nanotecnología

c) Promover la creación de redes y observatorios especializados y avanzados y el uso de altas tecnologías en las áreas referidas anteriormente y, en particular, aquellas que fomenten la gestión de cadenas de suministro y la logística del transporte.

IV. Metodología

Para marzo de 2012, y con el apoyo de su Secretaria Técnica, la Presidencia de la COMCyT y los líderes de los grupos de trabajo formularán conjuntamente un calendario de eventos y actividades para cada grupo y el marco para los estudios de casos o propuestas de proyectos, en consulta con los Estados Miembros y las instituciones regionales e internacionales participantes.

Los grupos de trabajo deberán informar a la COMCyT por lo menos una vez al año. Además, deberán desarrollar sistemas para monitorear las actividades y evaluar los resultados en sus áreas de acción.

Los grupos de trabajo deberán coordinar su trabajo considerando el carácter complementario y la interdependencia de sus actividades. La comunicación continua y el intercambio de conocimientos, experiencias y resultados aportarán beneficios recíprocos.

Los grupos de trabajo considerarán los medios oportunos para forjar alianzas que generen sinergias con otros ministerios y órganos gubernamentales con competencia en ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, los grupos de trabajo deberán realizar los máximos esfuerzos, dentro del marco de las competencias nacionales e institucionales existentes, para establecer un diálogo integral, productivo y continuo con los ministerios de comercio, educación, agricultura, economía y finanzas, competitividad, ambiente y energía y otras instituciones para promover los objetivos de los grupos de trabajo.

V. Recursos

El Plan de Acción aborda un gran número de temas complejos que reflejan los graves desafíos que enfrentan los Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en la actualidad. Asimismo, en vista de las situaciones económicas mundial y regional, muchos ministerios enfrentan limitaciones financieras y de otra índole. Por lo tanto, es indispen-

sable que los grupos de trabajo se esfuercen por obtener financiamiento para apoyar sus actividades y sean eficientes en el uso de estos fondos a fin de lograr sinergias, maximizar su eficiencia, mejorar la sostenibilidad y difundir sus resultados.

Los Estados Miembros deberán asignar los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para participar en las reuniones de los grupos de trabajo. Además, los Estados Miembros deberán tratar de contribuir o ayudar a identificar fondos para cubrir actividades específicas, tales como talleres, reuniones, videoconferencias, etc., según los grupos de trabajo lo requieran.

Con el apoyo de la Secretaría Técnica, la Presidencia de la COMCyT y el dirigente de cada grupo de trabajo invitarán a las organizaciones regionales e internacionales pertinentes y a otros donantes y socios potenciales a que participen, aporten contribuciones voluntarias y proporcionen mecanismos financieros para apoyar las actividades, los proyectos y los programas resultantes de la implementación de este plan.

VI. El Portal de la COMCyT (COMCyTnet)

Los Estados Miembros deberán apoyar la actualización y el mejoramiento del Portal de la COMCyT de la OEA para promover la cooperación hemisférica y el diálogo sobre políticas, en su calidad de mecanismo de monitoreo y apoyo y como un repositorio de información para los programas, proyectos, actividades, mejores prácticas y logros de los grupos de trabajo. La OEA como Secretaría Técnica ofrecerá su capacidad e infraestructura instaladas para la operación de la red, así como tiempo parcial de su personal.



Foto oficial de la Sexta Cumbre de las Américas
Cartagena de Indias, Colombia. Abril 2012

Official photo of the Sixth Summit of the Americas
Cartagena de Indias, Colombia. April 2012

**Official Documents from the Summits
of the Americas Process:
From Port of Spain (2009)
to Cartagena de Indias (2012)**

**Summits of the Americas Secretariat
Organization of American States**

2012



Prologue by the Secretary General of the OAS

José Miguel Insulza

The Sixth Summit of the Americas marked an important moment in inter-American relations, and demonstrated, once more, that the relations among the States of the Americas are in a process of evolution.

Focused on the central theme of the Sixth Summit “Connecting the Americas: Partners for Prosperity,” the Heads of State and Government of the region engaged in a frank, open, and substantive conversation, and agreed on action-oriented mandates in five areas of great importance for our region: poverty elimination, infrastructure, security, access to technologies, and prevention and mitigation of disasters. The implementation phase of the process will focus in converting the decisions made by our leaders into concrete actions for our peoples. During this phase, we will focus not only on those commitments made in Cartagena, but also from past Summits, with the full commitment of the institutions of the Joint Summit Working Group to advance our collective efforts and strengthen partnerships that seek to improve the quality of life of the citizens of the Americas.

Cartagena also offered a space to further strengthen the participation of social actors in the Summits process. During the months prior to the Sixth Summit, civil society, youth, indigenous peoples, and labor organizations participated in a series of onsite and virtual consultations on the themes of the Sixth Summit. Through these mechanisms and the committed effort of stakeholders, approximately 74,000 individuals were able to participate and contribute to the preparatory phase of the Summit. The results of these consultations were presented to the States in the preparatory process of the Cartagena Summit. Likewise, in Cartagena, social actors had an unprecedented opportunity in the Summits process – more than 850 representatives from 27 countries of the region met with two Heads of State, with ministers of foreign affairs and with high-level government representatives to discuss the implementation of Summit mandates. We will continue to strengthen this frank dialogue between social actors and governments, with the aim of making the Summits process more participative, inclusive and open.

During the preparation of the Sixth Summit, as in past Summits, we continued to strengthen the link between the different ministerial and sectoral processes and the Summits process, with the aim of making the ministerial and sectoral processes an integral part of the preparation of the Summit and its implementation phase. This volume “Official Documents of the Summits of the Americas Process: From Port of Spain (2009) to Cartagena de Indias (2012)” constitutes a compendium of the documents agreed by the States during the Sixth Summit of the Americas in Cartagena de Indias, as well as from the inter-American ministerial meetings held since the Fifth Summit of the Americas in Port of Spain. The content of Volume VI is an essential point of reference for the formulation of inter-American policies, strategies and action plans.

The OAS remains committed to the Summits of the Americas process, and to forging partnerships with States, institutional partners and social actors to convert the aspirations and commitments of our Heads of State and Government into a reality for the citizens of the Hemisphere.

Introduction

The Summits of the Americas Secretariat of the Organization of the American States (OAS) is pleased to present *Volume VI: Official Documents of the Summits of the Americas Process*. This publication continues the series which began after the Second Summit in 1998. Each publication in the series contains a compendium of relevant documents pertaining to a specific Summit process.

Volume I of this series compiles the documents agreed upon at the First Summit of the Americas held in Miami, Florida (1994), the Special Summit on Sustainable Development held in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1996), and the Second Summit of the Americas held in Santiago, Chile (1998).

Volume II is a compilation of the inter-American ministerial-level declarations following the Second Summit of the Americas and preceding the Third Summit in Quebec City, Canada (2001). Among the topics presented in Volume II are terrorism, employment, trade, financing, transportation, telecommunications, and sustainable development.

Volume III is a compilation of the various Declarations and Plan of Actions established at each of the Summits from Miami (1994) through Quebec City (2001). It also includes the Inter-American Democratic Charter, adopted in Lima, Peru in 2001, as well as other instruments that are part of the region's juridical system.

Volume IV presents the essential elements of the Summits Process between 2004 and 2006. Among the documents included in Volume IV are the Declaration of Nuevo León, from the Special Summit of the Americas held in Monterrey, Mexico in 2004, and the Declaration and Plan of Action of Mar del Plata, from the Fourth Summit of the Americas held in Mar del Plata, Argentina in 2005.

Volume V presents the official documents of the Summits process between the Fourth Summit of the Americas held in Mar del Plata (2005) and the Fifth Summit of the Americas held in Port of Spain (2009), including the documents agreed to in Port of Spain, and the results of that Summit.

The current *Volume VI: Official Documents of the Summits of the Americas Process: From Port of Spain (2009) to Cartagena de Indias (2012)* continues this tradition. It includes the “Mandates Arising from the Sixth Summit of the Americas” and the Communiqués agreed to by States on the occasion of the Sixth Summit held in Cartagena de Indias, Colombia, April 14 – 15, 2012 as well as approved documents emanating from Ministerial meetings. This compilation of the mandates and commitments from the Sixth Summit of the Americas represents the institutional memory of the Summits process and provides a point of reference for governments, multilateral agencies, social actors, academia and the public.

From Port of Spain to Cartagena de Indias: A Report on the Summits of the Americas Process

The Sixth Summit of the Americas held in Cartagena, Colombia, April 14-15, 2012, under the central theme, “Connecting the Americas: Partners for Prosperity,” drew attention to the role of physical integration and regional cooperation as a means to achieve greater levels of development and overcome the Hemisphere’s challenges in several key areas including poverty and inequality, citizen security, disasters and access to technologies. At the Summit, the region’s Heads of State and Government advanced an important process of dialogue and debate, and adopted a series of policy decisions that form the basis for post-Summit follow-up and implementation.

The deliberations of the region’s Presidents and Prime Ministers were informed by the work of the **Summit Implementation Review Group (SIRG)**. The SIRG, comprised of National Coordinators from Member States, is the main governing body of the Summits of the Americas process. In preparation for the Sixth Summit, the SIRG held several meetings of negotiation between October 2011 and April 2012. The outcome document, entitled “*Mandates arising from the Sixth Summit of the Americas*,” contains 47 paragraphs under five thematic areas: Integration of Physical Infrastructure in the Americas; Poverty, Inequality and Inequity; Disaster Risk Reduction and Management; Access to and Use of Information and Communication Technologies; Citizen Security and Transnational Organized Crime.

The institutions that comprise the **Joint Summit Working Group (JSWG)** contributed technical papers on the thematic areas of the Sixth Summit and accompanied the negotiation process, providing technical support and advice to countries during negotiations. Institutions participated actively in public forums and policy roundtables organized by the Summits Secretariat and provided comprehensive reports to countries on Summit-related activities. Meeting at the level of Heads of Institution, under the chairmanship of the Secretary General of the Organization of American States, JSWG members pledged financial and technical assistance to support the implementation of Sixth Summit commitments.

More than 65 **Social Actor Consultations** were held in the lead-up to the Sixth Summit. Of these, approximately 25 were organized by the government of Colombia. 40 were or-

ganized by the Summits of the Americas Secretariat and other areas of the OAS including the Secretariat for External Relations, the Executive Secretariat for Integral Development, and the Young Americas Business Trust. At the Social Actor Summit Forums in Cartagena, April 10-12, more than 850 representatives from 27 countries participated onsite. At the closing dialogue, two Heads of State – President Juan Manuel Santos of Colombia and President Evo Morales of Bolivia – joined Foreign Ministers at the government/social actor dialogue, engaging in direct discussions with representatives of civil society, youth, indigenous peoples, and labor organizations.

The **Summits Virtual Community (SVC)** provided an inclusive and accessible mechanism for participation in the Summit process. More than 4,750 individuals from 22 countries in the Americas participated in virtual forums and online discussions through the SVC in the months leading up to the Summit. Live webcasts of the social actor forums in Cartagena were followed by more than 74,000 people worldwide.

The **CEO Summit of the Americas** was introduced at the Sixth Summit of the Americas. Organized by the government of Colombia with technical support from the Inter-American Development Bank (IDB), the CEO Summit counted with the participation of more than 600 top executives from the region's leading companies. The region's CEOs were joined at various events by Heads of State and Government as they analyzed current and future trade and investment opportunities in the Americas and discussed topics such as globalization and development, infrastructure for sustainable development, human capital for the knowledge economy, and economic growth and natural resources.

The **Summits of the Americas Follow-up System (SISCA)** was redesigned by the Summits Secretariat in 2011 to create a more user-friendly space for both countries and institutions to report online on Summit-related activities and results. The new system facilitated increased reporting by States. Viewer traffic to the site also registered a significant increase. In the wake of the Sixth Summit, the site incorporated a new feature dedicated specifically to a Sixth Summit Program of Implementation that is accessible to all audiences with the aim of providing accurate and timely information on Summit-related initiatives and attendant impacts.

Sixth Summit of the Americas

Connecting the Americas: Partners for Prosperity



Mandates arising from the Sixth Summit of the Americas

We, the Heads of State and Government of the Americas, resolve:

Integration of Physical Infrastructure in the Americas

1. To reaffirm that the promotion and further development of physical infrastructure projects at the national, subregional, and regional levels are priorities for the public policies and development strategies of our countries, as appropriate, which contribute to sustainable development, social inclusion, and increased trade.
2. To promote the exchange of experiences and the participation of the public and private sectors, taking into account current and future national, subregional, and regional physical infrastructure programs and projects that connect and integrate the Americas, which should, in accordance with our respective needs and full respect for our domestic laws, contribute to the development of synergies of national physical infrastructure agendas.
3. To examine financing mechanisms with a view to encouraging and strengthening the further involvement of national, subregional, regional, and international financial institutions, and that of the private sector, in projects to promote physical integration of the Americas as well as horizontal cooperation between our countries to that end.
4. To promote, on the basis of the corresponding national policies and regulatory frameworks, compatibility and harmonization of institutional regulations that facilitate investment in infrastructure in the Americas.
5. To promote and/or optimize electrical interconnection and foster the development of renewable energy generation in the Americas.

6. To encourage the transfer of available technologies in energy under voluntary and mutually agreed terms, as well as the exchange of best practices.

7. To foster increased connection of telecommunication networks in general, including fiber optic and broadband, among the region's countries, as well as international connections, to improve connectivity, increase the dynamism of communications between the nations of the Americas, as well as reduce international data transmission costs, and, thus, promote access, connectivity, and convergent services to all social sectors in the Americas.

Poverty, Inequality, and Inequity

1. To promote and encourage comprehensive, timely, and quality public policies on:

a. Early childhood care, education, and development.

b. Protecting children from economic exploitation and from any tasks that may interfere with their education and integral development, according to the principle of the effective abolition of child labor, which is contained in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998); as well as preventing and eradicating the worst forms of child labor according to Convention 182 of the ILO (1999)

c. Raising awareness about the adverse effects of adolescent pregnancies on the integral development of the adolescent and their offspring, as well as fostering their health and well-being.

2. To combat poverty, extreme poverty, hunger, inequality, inequity, and social exclusion through public policies that promote decent, dignified, and productive work; sustained economic growth; income growth; and access to comprehensive and quality education, health care, and housing, in order to achieve sustainable development with social justice in the Americas.

3. To ensure equal access to primary and secondary education for all, to promote improvement in the quality of education at all levels, increased access to tertiary, technical, and vocational education, as soon as possible, with particular attention to vulnerable groups and those with special education needs, using, inter alia, the modality of distance learning, and to promote strengthening of literacy programs.

4. To foster greater international exchange of students, in order to provide them with the greatest possible learning opportunities.

5. To reaffirm our commitment to advance towards the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) and promote the financing of projects and programs to disseminate best practices in the communities that are most behind.

6. To deepen inter-American cooperation in the area of development and social protection

with a view to strengthening human and institutional capacity-building efforts, and generating a skilled workforce, with a gender perspective and giving attention to vulnerable groups.

7. To promote economic growth with equity and social inclusion by strengthening cooperatives, micro, small, and medium-sized enterprises, including cultural industries, in addition to grassroots economic initiatives and other production units, innovation, and competitiveness in the countries of the Americas.

8. To strengthen public-private partnerships, and partnerships with all stakeholders, to promote the reduction of poverty and inequality as well as the economic and social development of the communities in which they operate.

9. To promote greater investment in, and access to, research, technological innovation, and capacity-building in order to strengthen and ensure a sustainable, comprehensive, inclusive, and competitive agro-food sector that would contribute to food security and the reduction of poverty and inequity, particularly in marginalized rural and urban areas.

10. To reaffirm our support for the objectives set out in the Declaration of the Decade of the Americas for the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (2006-2016) and its Plan of Action, by promoting equal opportunity for, and nondiscrimination of, persons with disabilities through their participation in our countries' social, political, economic, and cultural development processes, in order to ensure their well-being and the full enjoyment and exercise of all their human rights and fundamental freedoms.

11. To advance in strengthening the protection of the human rights and fundamental freedoms of older persons through promotion of public policies, programs, and services, thus safeguarding their dignity, their physical, mental and social well-being, and their quality of life, bearing in mind efforts underway at the inter-American level to draft a legally binding instrument for the protection of the rights of older persons and consideration of the issue at the international level.

12. To develop comprehensive public policies, as appropriate, to strengthen social inclusion of migrants in a bid to overcome marginalization, victimization, and poverty and, regardless of their immigration status, protect their human rights.

13. To promote the gradual formalization of the informal economy, recognizing its heterogeneous and multidimensional nature, through policies such as registration and information systems to facilitate formalization and access to credit, social protection mechanisms, improvement of occupational health and safety, strengthening of labor inspection, and effective enforcement of labor laws.¹

¹ In St. Vincent and the Grenadines, the definition of "informal economy" is broad enough to encompass certain activities that are illegal but which, nevertheless, have an impact on the local economy. Taking into account their domestic circumstance, St. Vincent and the Grenadines joins consensus on this paragraph with the understanding that "informal economy" refers wholly and solely to activities that are legally sanctioned.

14. To take specific steps to improve access to quality education for girls, especially in rural areas, as well as promoting improved capacities of schools, teachers, civil society, and communities to reduce the barriers to regular attendance for women and girls.

15. To take action on the conditions that negatively impact the health of our people taking into account the 2011 World Conference on the Social Determinants of Health.

16. To develop and strengthen, as appropriate, strategies and policies on youth employment, as well as to promote technical and vocational education and training opportunities in order to improve and increase the entry of young people into the labor market, the quality and stability of their jobs, as well as their social protection.

17. To give priority to nutrition, particularly child nutrition, in the fight against poverty, hunger, and inequality and, in this context, we underscore the importance of joint efforts by the public and private sectors, civil society, and other social actors.

Disaster Risk Reduction and Management

1. To reaffirm that disaster risk management is a priority within our national public policies and development strategies.

2. To prioritize the allocation of resources and the design of financial protection strategies, as appropriate, aimed at mitigating the social, economic, and environmental impact of disasters, with support from, *inter alia*, subregional, regional, and international financial institutions.

3. To strengthen our institutional platforms for disaster risk management, in collaboration with subregional, regional, and international mechanisms, through strategies of mutual assistance and partnership, in order to facilitate joint research, the exchange of knowledge, information, best practices, lessons learned in this area, and technology transfer under mutually agreed terms.

4. To strengthen regional and subregional instruments as well as existing initiatives in the area of disaster risk reduction and management and humanitarian assistance as well as coordination and cooperation mechanisms to generate synergies, underscoring the importance of coordination.

5. To work with subregional, regional, and international financial institutions with the aim to strengthen financing mechanisms for adaptation to climate change, mitigation, recovery, rehabilitation, and reconstruction, with a view to reducing and managing disaster risk and strengthening the resilience of communities and nations that are vulnerable to or affected by disasters.

6. To designate, where needed, and support, where already in existence, national and institutional focal points to promote more-efficient coordination among agencies of the inter-American system, international and regional organizations and entities, and subregional

mechanisms, and to promote the use of on-line tools in this context, in order to bring a more rapid and effective response to disasters and catastrophes.

Access to and use of Information and Communication Technologies

1. To foster participation and collaboration between the public and private sectors, social actors and communities to promote initiatives, in accordance with corresponding domestic legal frameworks, which enable our educational centers and health facilities, including in remote and rural areas, to enjoy equitable and affordable access to, and use of, expanded broadband, information and communication technologies (ICTs), and computers.
2. To promote and establish, as appropriate, programs to encourage the training of teachers for the inclusion and effective use of ICTs in education, and for the production and sharing of relevant educational materials in each country.
3. To promote the more intensive application of ICTs in health, with a view to improving the efficiency of our countries' health information systems, including accurate record keeping, and of subregional and regional alert systems for public health events of international concern; the expansion of continuing education programs for health workers and the population; and access to information on health services in those centers and communities that need it the most.
4. To promote the development, coordination, and implementation of strategies and projects, as appropriate, for expanding access to, and use of, ICTs with the support and participation of international organizations, the private sector, social actors, and communities, in order to achieve greater social inclusion and improve the quality of life of our peoples.
5. To promote and support, as appropriate, initiatives that expand the contribution of ICTs to innovation, entrepreneurship, productivity, competitiveness, the emergence of micro, small, and medium-sized enterprises, and economic growth, within the framework of sustainable development.
6. To strengthen our efforts to make government affairs more transparent and accountable by supporting ICT initiatives and projects that enhance citizen engagement and provide capacity building for the creation, accessibility, and sharing of on-line information and knowledge, as permitted by law.
7. To promote transparency, accountability, and anti-corruption initiatives in the private sector, with the support of ICT programs, activities, and projects, as appropriate, to improve the capacity of stakeholders to participate and access information, as permitted by law.
8. To further promote the cooperation of international organizations, specialized agencies, the private sector, and other social actors in the collection and analysis of uniform data on information and communication technologies, as appropriate, with a view to strengthening public policies, including the design of adequate strategies on the use of those technologies.

Citizen Security and Transnational Organized Crime

1. To strengthen and promote bilateral, subregional, regional, and international cooperation to prevent and combat violence, corruption, and transnational organized crime in all its forms and manifestations, and to promote institutional strengthening and, where applicable, rehabilitation and social reintegration, within the framework of the international conventions and instruments in force, with full respect for the rule of law, domestic and international law, and human rights, and, to that end, call upon all citizens to participate and lend their support.
2. To continue implementing comprehensive policies, strategies, and actions that seek to prevent crime and insecurity, taking into account links between security and development, as well as to address all causes of violence and promote peaceful coexistence and resolution of disputes among citizens, with special attention to youth and other vulnerable groups.
3. To implement policies containing measures to prevent, investigate, punish, penalize, and eradicate sexual and gender based violence.
4. To improve the effectiveness and efficiency of comprehensive public policies on citizen security through actions such as the generation and use of relevant and timely information and the strengthening of the capacity and coordination of institutions that participate in the management of citizen security.
5. To strengthen the system of hemispheric cooperation to prevent and combat transnational organized crime, taking into consideration the economic purpose associated with this phenomenon, through mechanisms that support the strengthening of the necessary national capacities, as appropriate, to confront these threats in a concerted manner, taking advantage of experiences and available resources from existing networks, bodies, and mechanisms, in accordance with international and domestic law.
6. To strengthen the administration of public security by governmental agencies through promotion of citizen and community participation, institutional coordination, and training and education of civilian and police personnel, with full respect for the rule of law, domestic law, gender equality, and human rights.
7. To promote and strengthen citizen and community participation in the promotion and sustainability of citizen security policies and programs.
8. To implement public policies in the realm of citizen security that make the human being their primary focus, within a framework of democratic order, the rule of law, and observance of human rights.
9. To strengthen our efforts to prevent and fight the smuggling of migrants and trafficking of persons, particularly of women, children and adolescents, and to promote cooperation among states to that end, respecting and fully protecting their human rights.

Sixth Summit Communiqués

Communiqué of the Heads of State and Government on the United Nations Conference on Sustainable Development – “Rio+20”

We, Heads of State and Government of the Americas, gathered at the Sixth Summit of the Americas:

1. Reiterate our commitment to ensure broad participation at the High Level Segment of the United Nations Conference on Sustainable Development - “Rio+20”, to be held in Rio de Janeiro, 20-22 June 2012.
2. Reaffirm our will to achieve action-oriented outcomes at the Rio+20, recognizing its importance to the progress towards sustainable development. The Conference will be an invaluable opportunity to rethink the current models of development. We recognize that a balanced integration of the three pillars of sustainable development is essential to eradicate extreme poverty and hunger, to support social inclusion, to protect the environment and to promote economic growth. In order to promote the national and international governance needed to set out the implementation of sustainable development, we must ensure efforts to improve its institutional framework.

Communiqué of the Heads of State and Government of the Americas on the “VI Americas Competitiveness Forum: Innovation for Prosperity” to be Held in Cali, Colombia, from October 24 to 26, 2012

The Heads of State and Government of the Americas, gathered at Cartagena de Indias for the Sixth Summit of the Americas:

Appreciate the efforts and leadership of Chile, the United States, and the Dominican Republic as past hosts and chairs *pro tempore* of the Americas Competitiveness Forum, of the Annual Meeting of the Inter-American Competitiveness Network (RIAC), and of the Meeting of Ministers of Economy, Finance, Industry, and Trade in 2009, 2010, and 2011;

Recognize the importance of holding the VI Americas Competitiveness Forum, of the Annual Meeting of the RIAC, and of the Meeting of Ministers of Economy, Finance, Industry, and Trade, and invite all states to participate through their highest competitiveness authorities and to promote the participation of small¹ and medium-sized enterprises and cooperatives;

¹ The delegation of Saint Vincent and the Grenadines joins consensus on the Communiqué on the basis that the word “micro” is inserted with reference to small and medium enterprises.

Take satisfaction in the fact that Colombia, as Chair *Pro Tempore* of the RIAC, will host the VI Americas Competitiveness Forum, which will be held in Cali, Colombia, from October 24 to 26, 2012;

Are grateful to the Government of Panama for agreeing to host the VII Americas Competitiveness Forum in 2013, and note that the Government of Trinidad and Tobago has submitted a formal offer to host the VIII Americas Competitiveness Forum in 2014.

Communiqué from the Heads of State and Government of the Americas to confront and combat Transnational Organized Crime in the Hemisphere

The Heads of State and Government of the Americas, within the framework of the Sixth Summit of the Americas and its political declaration:

Deeply concerned that the activities of transnational organized crime constitute one of the greatest threats to the safety and welfare of our people, since: i) it has moved beyond the sphere of drug trafficking to engage in other criminal activity, ii) its financial resources and powers of corruption, as well as its wide access to large quantities of high-power weapons, have increased levels of violence and affected the social fabric of many countries in the Americas, and iii) these negative effects impact territories of production, transit and consumption of illicit drugs.

Convinced of the need to strengthen hemispheric cooperation to confront and combat more effectively this scourge;

Concerned that national responses to this threat, by themselves, are insufficient;

Recalling the conclusions of, among other meetings, the High Level Hemispheric Meeting against Transnational Organized Crime held in Mexico City on March 1 and 2, 2012:

1. Reaffirm their willingness to join forces and capabilities to confront this common challenge.
2. Commit, at the highest political level, to the establishment of a hemispheric approach against transnational organized crime.
3. For this purpose, the hemispheric community will implement a coordinating entity to harmonize the strategies and actions of the States of the Americas against transnational organized crime.
4. The aforementioned entity will determine its contacts with existing fora and universal, regional and subregional mechanisms aimed at international cooperation against organized crime in its various forms.

5. To this end, leaders will instruct their relevant government institutions to carry out technical consultations and other aspects, in order to develop this hemispheric cooperation approach. The proposals arising from this process will be presented at an international conference to be held in Mexico, this year.

6. Such consultations will address the objectives, mandate, scope, means of funding and operational mechanisms of the hemispheric approach.

Communiqué of the Heads of State and Government on the holding of the International Conference of Ministers of Foreign Affairs and Heads of Specialized National Agencies on the Global Drug Problem

The Heads of State and Government of the Americas, gathered at the Sixth Summit of the Americas:

Deeply troubled by the fact that the global drug problem represents a serious threat to the public health, security, well-being, and political and economic stability of our peoples and nations;

Alarmed by the critical times that the region is traversing as a result of the activities of criminal organizations involved in the world drug problem, which constantly seek to penetrate and establish themselves in our societies and democratic institutions.

Mindful that, in confronting the vast resources and violent and corrupting effects of drug trafficking, simply combining uncoordinated efforts—even those that have been successful—has only had a limited impact on the world drug problem, and therefore it is necessary to identify effective measures on the basis of an integrated and balanced approach;

Recognizing the need to strengthen and intensify joint efforts at the national, regional, and international level to confront the global challenges posed by the illicit drug problem in accordance with the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem adopted at the fifty-second session of the United Nations Commission on Narcotic Drugs in March 2009, and aware that 2019 was established as a target date for states to eliminate or reduce significantly illicit cultivation; the illicit production, manufacture, and trafficking in narcotic and psychotropic substances; the diversion of and illicit trafficking in precursors; and money-laundering related to illicit drugs;

Further recognizing the Hemispheric Drug Strategy and the Hemispheric Plan of Action on Drugs, 2011-2015, of the OAS Inter-American Drug Abuse Control Commission, as a source of reference for joint action in the region for effectively countering the world drug problem.

- Express their full support for the International Conference of Ministers of Foreign Affairs and Heads of Specialized National Agencies on the World Drug Problem to be held in Lima, Peru, on June 25 and 26, 2012.

- Commit to making every effort to participate at the highest appropriate level in that meeting in order to advance the objectives agreed upon by the international community to tackle the world drug problem.

Communiqué of the Heads of State and Government of the Americas on Connectivity in the Americas

We, the Heads of State and Government of the Americas gathered at the Sixth Summit of the Americas held in Cartagena de Indias, Colombia, on April 14 and 15, 2012, commit:

To recognize that connectivity in the Americas is essential for the prosperity of our countries. Accordingly, we thank the International Telecommunication Union (ITU) and the Government of Panama for preparing and hosting the “Connect the Americas” Summit to be held in Panama City, from July 17 to 19, 2012, as this is a concrete step in realizing the vision that we have set out at the Sixth Summit of the Americas

To seek the participation of our Ministers of Telecommunications or relevant authorities and request that they work together with the Inter-American Telecommunication Commission (CITEL), the Caribbean Telecommunication Union (CTU), the Technical Regional Commission for Telecommunications (COMTELCA) and the ITU, among others, to further connect the Americas and continue to promote the interconnection of communications networks and systems worldwide. to propel the development of our peoples.

Communiqué of the Heads of State and Government of the Americas in Support of the Central American Security Strategy

The Heads of State and Government of the Americas, gathered at the Sixth Summit of the Americas:

Bearing in mind the difficulties that the peoples and governments of Central America are experiencing as a result of the violence generated by transnational organized crime, particularly drug trafficking rings, in the region;

Recognizing the substantial progress that the Central American governments have made in formulating the Security Strategy, which aims, under a holistic and regional approach, to tackle the security problems that afflict Central America;

Aware that the implementation of the Central American Security Strategy requires the cooperation and resolute contribution of all players in the international community, under the principles of common and shared but differentiated responsibilities,

1. Reiterate our solidarity and willingness to join efforts with the aim of contributing to security in the Central American region, and reaffirm the importance of “maintaining and strengthening bilateral, subregional, regional, and international cooperation on security-related matters.”

2. Express our firm support for the Central American Security Strategy, which has been jointly drawn up by the member states of the Central American Integration System (SICA), whose priorities have been set according to a strategic vision for the future and fully in line with the security problems and needs faced by the peoples and governments of Central America.

3. Support the appeal made by the Central American governments to the international community to furnish the necessary political support and the appropriate financial and other resources to enable the Central American Security Strategy to be implemented. That support, coupled with the increasing investment that the region has been making in the area of security, would enable Central America to consolidate as a secure, peaceful, free, and democratic developing region.

Ministerial Meetings

(Declarations and Final Documents)

OAS General Assembly

Thirty-ninth Regular Session of the General Assembly

June 2 - 4, 2009

San Pedro Sula, Honduras

AG/DEC. 60 (XXXIX-O/09)

Declaration of San Pedro Sula: Toward a Culture of Non-Violence

THE MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS AND HEADS OF DELEGATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), meeting in San Pedro Sula, Honduras, on the occasion of the thirty-ninth regular session of the General Assembly,

RECOGNIZING AND TAKING INTO ACCOUNT the concern expressed by their societies regarding violence in the Hemisphere, as well as the consequences that violence has for the social, economic, political, and cultural development of their peoples, affecting all population groups, especially those at risk, and seriously deteriorating their quality of life;

CONSIDERING that a culture of peace and non-violence must be viewed as a set of values, attitudes, and modes of behavior based on respect for life, human beings, and their dignity; that it gives priority to human rights, ending of violence, and adherence to the principles of freedom, justice, democracy, solidarity, tolerance, and respect for the diversity that characterizes the peoples of the Hemisphere; and that it must be promoted through education, dialogue, and cooperation;

TAKING INTO ACCOUNT that governments have a fundamental role to play in the promotion and strengthening of a culture of peace and non-violence;

RECALLING that all persons are born free and equal in dignity and in rights and, being endowed with reason and conscience, they should conduct themselves fraternally toward one another;

TAKING INTO ACCOUNT that full respect for and promotion of human rights and fundamental freedoms constitute the basis for the establishment and strengthening of a culture of peace and non-violence;

CONCERNED about the serious consequences of violence for the enjoyment and exercise of human rights and fundamental freedoms;

RECOGNIZING that violence and crime are serious obstacles to social harmony and to democratic and socioeconomic development in the Hemisphere, and that there is an urgent need for a comprehensive approach to their prevention;

BEARING IN MIND that the elimination of violence against women is an essential condition for their individual and social development and for their full and equal participation in society;

RECALLING the importance of preventing, impeding, and punishing the violence, segregation, exploitation, and discrimination directed at groups in vulnerable situations, among others, children, adolescents, the elderly, and persons with disabilities;

CONSIDERING the importance of fostering and strengthening social responsibility in the promotion of a culture of peace and non-violence, with the voluntary participation of the citizenry, the community, the mass media, and the private sector;

TAKING INTO ACCOUNT that the right to freedom of thought and expression is essential to the promotion and strengthening of a culture of peace and non-violence, because it is fundamental to democracy and the promotion of pluralism and tolerance, as well as to combating racism, discrimination, and xenophobia and preventing human rights violations;

CONCERNED about the impact of the economic and financial crisis, especially its social consequences and its effects on the achievement of the Millennium Development Goals;

REAFFIRMING full respect for the principles of sovereignty, territorial integrity, and political independence of states and nonintervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state, in accordance with the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of American States, and international law;

BEARING IN MIND the relevance of, *inter alia*, the United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, of 1993; the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women, “Convention of

Belém do Pará”; related declarations made by the Assembly of the Inter-American Commission of Women (CIM); and the global campaign “UNite to End Violence against Women,” launched by the United Nations Secretary-General in 2008;

RECALLING:

That both the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States advocate rejection of violence and promote a culture of peace;

The importance of the United Nations and inter-American legal instruments in this regard;

The Declaration of Bridgetown: “The Multidimensional Approach to Hemispheric Security,” adopted by the OAS General Assembly at its session in Bridgetown, Barbados, in 2002, as well as the Declaration on Security in the Americas, adopted at the Special Conference on Security, held in Mexico City, Mexico, in 2003, which underscored the multidimensional scope of security and that the purpose of security is the protection of human beings;

United Nations General Assembly resolution 53/25, which proclaimed the period 2001-2010 the “International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World,” and related United Nations General Assembly resolutions, as well as the Declaration and Programme of Action of the United Nations on a Culture of Peace of 1999;

United Nations General Assembly resolution 61/271, “International Day of Non-Violence”;

United Nations General Assembly resolution 63/23, “Promoting development through the reduction and prevention of armed violence”;

OAS General Assembly resolutions AG/RES. 2164 (XXXVI-O/06), “Inter-American Program on Education for Democratic Values and Practices,” which underscored the importance of education for peace, and AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08), “Preventing Crime and Violence in the Americas,” as well as other General Assembly resolutions on this topic;

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures; as well as the Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, adopted by the Inter-American Commission on Human Rights, and the relevant sections of the Convention on the Rights of the Child;

The outcomes of the First Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas, held in Mexico City, Mexico, in 2008; the Meeting of Ministers of Health of the Americas on Violence and Injury Prevention, held in Mérida, Mexico, in 2008; and the Second Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, held in Buenos Aires, Argentina, in 2009; and

That the recommendations of the World Report on Violence and Health (2002) of the World Health Organization (WHO) state that the multifaceted nature of violence requires the adoption of multisectoral strategies with the commitment of governments and interested parties at all levels of decision making: local, national and international;

WELCOMING WITH SATISFACTION the important work carried out by the different organs, agencies, and entities of the inter-American system dedicated to the prevention of violence;

TAKING NOTE:

That, according to the WHO World Report on Violence and Health, violence is the result of the complex interplay of individual, relationship, social, cultural, and environmental factors;

Of the concerns expressed by the countries of the Central American Integration System (SICA) in the report of the First International Conference on the Structural Causes of Violence; and

Of the work done in the framework of the Inter-American Peace Forum, including the seminar “Democratization of Knowledge for the Creation of a Culture of Peace – Ceibal Plan,” held in Montevideo, Uruguay, in 2009; and

RECOGNIZING:

That violence can be manifested by or against individuals, as well as in families and other spheres of the community;

That inequality and social exclusion, as well as the lack of opportunities in society, contribute to the exacerbation of violence and that, consequently, it is essential to have economic and social development that offers equality of opportunity, justice, and social inclusion;

The fundamental role of family for the promotion and strengthening of a culture of peace and non-violence;

That children and adolescents can be exposed to violent behavior at home, at school, and in public due to a variety of factors, including cultural, economic, social, ethnic, and political factors;

That intolerance and violence directed at migrants and their families hinder a culture of peace and non-violence;

That violence in their societies, including armed violence, hinders the achievement of the Millennium Development Goals, and thus can affect economic and social development, which is essential for a culture of peace and non-violence;

The need to eliminate trafficking in, and the illicit manufacturing, use, and diversion of, small arms and light weapons, given that they aggravate violence in societies and hinder the consolidation of a culture of peace and non-violence;

That the progressive reduction of violence, respect for human rights, good governance, sound public administration, combating corruption and impunity, and the strengthening and upholding of democratic values and the rule of law are indispensable to creating and sustaining a culture of peace and non-violence;

The contribution of culture to the promotion of social cohesion and inclusion, as well as the positive impact of cultural activities, the contribution of creative industries, and cultural entrepreneurship, as means of combating, reducing, and preventing violence;

That free, pluralistic, independent, and responsible mass media can contribute actively to promoting the values of peace and non-violence, tolerance, and unconditional respect for human rights; and

That a culture of peace and non-violence includes efforts to meet the developmental and environmental needs of present and future generations,

DECLARE:

1. Their commitment to promote, within a framework of the rule of law, a culture of peace and non-violence, which is understood as a set of values, attitudes, and modes of behavior based on respect for life, human beings, and their dignity, and which gives priority to human rights, ending of violence, and adherence to the principles of freedom, justice, democracy, solidarity, tolerance, and respect for diversity.

2. The necessity to involve all sectors of society in fostering a culture of peace and non-violence.

3. The importance of broadly publicizing human rights by means of public policies that consolidate the efforts of the member states to promote a culture of peace and non-violence.

4. The importance of adopting measures necessary to prevent, impede, and punish the violence, segregation, exploitation, and discrimination directed at groups in vulnerable situations, among others, children, adolescents, the elderly, and persons with disabilities, as well as of seeking to ensure that domestic legislation addresses these acts of violence against them and that every effort is made to guarantee that they receive legal assistance when necessary to obtain redress.

5. Their commitment to promote actions aimed at safeguarding respect for the rights of indigenous peoples, persons of African descent, migrants and their families, and individuals in vulnerable situations, particularly those affected by violence generated by any kind of discrimination, including discrimination based on race, ethnicity, sexual orientation, and xenophobia.

6. The importance of promoting policies to foster greater awareness and sensitivity among citizens aimed at combating discrimination against persons with disabilities and avoiding their rights being undermined by acts of violence.

7. The need to promote the strengthening of state institutions in order to provide protection and security for individuals and combat impunity, with full respect for human rights, and to facilitate access to and the administration of justice.
8. Their determination to design public policies and encourage legislative measures, as appropriate, in order to combat violence and discrimination.
9. Their commitment to develop public policies and strengthen multilateral cooperation for the purpose of promoting effective empowerment of women in political, social, and economic spheres, as well as educational initiatives to eliminate cultural patterns which tolerate violence and discrimination against women and girls.
10. Their commitment to make progress in promoting and implementing domestic legislation to prevent, eliminate, and punish all forms of violence against women.
11. The need to promote opportunities for collaboration and dialogue between public officials and communities, according to the characteristics of each population, in order to develop violence prevention and conflict resolution programs.
12. Their determination to design public policies and educational programs with a view of achieving a cultural transformation aimed at eradicating domestic violence.
13. The importance of developing and implementing educational programs starting from the early years of education, in both the formal and informal systems, that promote a culture of peace and non-violence.
14. The need to provide comprehensive assistance, in accordance with domestic laws, to victims of violence to enable their recovery.
15. Their commitment to continue sponsoring policies, programs, and measures that foster the role of family in the promotion of a culture of peace and non-violence.
16. Their concern about the publication, circulation, or dissemination, including on the Internet, of materials that deliberately advocate, promote, or incite hatred or violence.
17. The importance of supporting efforts by local governments in reclaiming and safeguarding public spaces in order to provide safe surroundings.
18. Their determination to formulate and promote policies that incorporate sports, the arts, and other cultural activities, including the exchange of experiences, that foster respect for cultural diversity and heritage, and that include stimulus of creative industries and cultural entrepreneurship, which strengthen a culture of peace and non-violence.
19. Their commitment to strengthen hemispheric cooperation to fight crime and violence, through the adoption of strategies that emphasize the role of prevention at its various levels and the administration of justice.

20. The importance of multilateral cooperation based on full respect for the sovereignty of states while factoring in the principle of shared responsibility to deal with the global drug problem and related crimes in a comprehensive manner.

21. The need to develop and strengthen programs for the prevention of drug use and abuse in view of the violence they generate in schools, universities, communities, and the workplace.

22. The need to develop and strengthen programs for the prevention and treatment of alcohol abuse, in order to prevent associated violence.

23. Their decision to address the criminal gang problem, its related aspects, and its effects on the social environment, taking a comprehensive approach that includes, *inter alia*, prevention and the rehabilitation and reintegration of individuals affected by this phenomenon, strengthening cooperation to combat the criminal gang problem in order to eliminate violence and intimidation generated within and among their societies.

24. The need to pursue efforts to implement the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (Programme of Action).

25. The importance of increasing cooperation, in accordance with their domestic and international commitments, to prevent, combat, and eradicate illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives, and related materials, in order to continue addressing crime and violence in society, as part of the consolidation of a culture of peace and non-violence.

26. The need to continue promoting the organization of prison systems based on respect for human dignity and human rights, including policies and practices geared toward rehabilitation and reintegration into society.

27. Their determination to address all types of violence against children and adolescents, especially child pornography in all its manifestations, including on the Internet, and to raise awareness of the scope and effects of the commercial sexual exploitation of children and adolescents worldwide.

28. Their commitment to adopt policies and programs to ensure the social, economic, and cultural inclusion of youth, in order to create the necessary conditions for youth to live in a peaceful and non-violent society.

29. Their commitment to promote respect and tolerance for the cultural diversity, identities, and religions of their peoples, with a view to fostering a culture of peace and non-violence.

30. Their commitment to promote respect for and protection of the environment in the context of a culture of peace and non-violence, by including, *inter alia*, capacity building and the training of human resources in the formulation of development strategies and projects to ensure environmental sustainability.

31. Their intention to undertake coordinated cooperation initiatives to mitigate the impact of the economic and financial crisis and its effects on social programs, with the support, when appropriate, of international, regional, and subregional organizations.

32. To request the General Secretariat to carry out the necessary actions, with the support of member states, to achieve the implementation of this Declaration.

**Fortieth Regular Session
of the General Assembly**

June 6 - 8, 2010

Lima, Peru

AG/DEC. 63 (XL-O/10)

**Declaration of Lima:
Peace, Security, and Cooperation in the Americas**

THE MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS AND HEADS OF DELEGATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in Lima, Peru, on the occasion of the fortieth regular session of the General Assembly,

CONFIRMING respect for the principles enshrined in the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States and committed to strict compliance therewith, as well as with the other regional and subregional instruments that reaffirm our commitment to peace and our desire to provide security for our peoples;

REAFFIRMING the importance of the legal instruments of the United Nations System and those of the inter-American system on peace, security, and cooperation;

REAFFIRMING ALSO that Article 2 of the Charter of the Organization of American States establishes that the essential purposes of the Organization are: (a) to strengthen the peace and security of the continent; (b) to promote and consolidate representative democracy, with due respect for the principle of nonintervention; (c) to prevent possible causes of difficulties and to ensure the pacific settlement of disputes that may arise among the member states; (d) to provide for common action on the part of those states in the event of aggression; (e) to seek the solution of political, juridical, and economic problems that may arise among them; (f) to promote, by cooperative action, their economic, social, and cultural development; (g) to eradicate extreme poverty, which constitutes an obstacle to the full democratic development of the peoples of the Hemisphere; and (h) to achieve an effective limitation of conventional weapons that will make it possible to devote the largest amount of resources to the economic and social development of the member states;

REAFFIRMING LIKEWISE that Article 19 of the OAS Charter establishes that no state or group of states has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other state. The foregoing principle prohibits not only armed force but also any other form of interference or attempted threat against the personality of the state or against its political, economic, and cultural elements;

REAFFIRMING the Inter-American Democratic Charter and the principles contained therein;

REAFFIRMING that the participatory nature of democracy in our countries in the different spheres of public activity contributes to the consolidation of democratic values and to freedom and solidarity in the Hemisphere;

REAFFIRMING ALSO that democracy is a right and an essential shared value that contributes to the stability, peace, and development of the states of the Hemisphere, and its full exercise is vital to enhancing the rule of law and the political, economic, and social development of peoples;

REAFFIRMING LIKEWISE that Article 3.e of the OAS Charter establishes that every state has the right to choose, without external interference, its political, economic, and social system and to organize itself in the way best suited to it, and has the duty to abstain from intervening in the affairs of another state. Subject to the foregoing, the American states shall cooperate fully among themselves, independently of the nature of their political, economic, and social systems;

RECOGNIZING the important role played by regional and subregional organizations and mechanisms in the peaceful settlement of disputes in the Hemisphere;

RECOGNIZING ALSO the OAS Fund for Peace as one of the tools that help link confidence-building measures with efforts to bring together the parties to an international dispute;

REITERATING that, as stated in the Declaration of Santiago, the Declaration of San Salvador, and the Consensus of Miami, confidence- and security-building measures increase transparency and understanding among the states of the Hemisphere and directly bolster regional stability;

REAFFIRMING that each member state has the sovereign right to identify its own national security priorities and to define the strategies, plans, and actions to address its security threats, in accordance with its legal system and with full respect for international law and the norms and principles of the OAS Charter and the United Nations Charter;

REAFFIRMING ALSO that, in the context of peace, cooperation, and stability established in the Hemisphere, each American state is free to define its own defense instruments, including the mission, personnel, armed forces, and public security forces needed to guarantee its sovereignty, as well as to accede to the corresponding legal instruments, in the context of the United Nations Charter and the OAS Charter;

RECOGNIZING that arms control, disarmament, and nonproliferation are essential to the maintenance of international peace and security;

REAFFIRMING the commitment to continue to strive to limit military spending while maintaining capabilities commensurate with our legitimate defense and security needs and fostering transparency in arms acquisitions;

RECOGNIZING the contributions and resources of member states in United Nations peacekeeping operations;

TAKING INTO ACCOUNT the important part played by the armed and public security forces in peacekeeping operations, in the United Nations framework;

TAKING INTO ACCOUNT ALSO the important part played by the armed and public security forces and civil defense and protection agencies as part of a comprehensive response to natural disasters;

RECOGNIZING that the Declaration on Security in the Americas establishes that the concept of security in the Hemisphere is multidimensional in scope, includes traditional and new threats, concerns, and other challenges to the security of the states of the Hemisphere; incorporates the priorities of each state; contributes to the consolidation of peace, integral development, and social justice; and is based on democratic values, respect for and promotion and defense of human rights, solidarity, cooperation, and respect for national sovereignty;

AWARE that the new threats, concerns, and other challenges to hemispheric security are crosscutting problems that require multifaceted responses by different national organizations and in some cases partnerships between governments, the private sector, and civil society, all acting appropriately in accordance with democratic norms and principles, and constitutional provisions of each state;

AWARE ALSO that many of the new threats, concerns, and other challenges to hemispheric security of the member states are transnational in nature and may require hemispheric cooperation, with respect for the norms and principles of international law, including respect for the sovereignty and independence of states, noninterference in internal affairs, and abstention from the threat and the use of force against the sovereignty and territorial integrity of any state;

RECOGNIZING that peace, security, democracy, human rights, development, and cooperation are the pillars of the inter-American system, which are interlinked and mutually reinforcing;

AFFIRMING that the solutions to the challenges facing our peoples are inextricably linked with our efforts to promote sustainable development and social inclusion, forge more robust democratic institutions, strengthen governance in our democracies, preserve the rule of law and ensure access to justice for all people, protect and promote human rights and fundamental freedoms, and achieve greater civic and community participation;

UNDERSCORING that conditions for human security are improved through full respect for people's dignity, human rights, and fundamental freedoms, as well as through the promotion of economic and social development, social inclusion, education, and the fight against poverty, disease, and hunger;

TAKING INTO ACCOUNT that economic and social development, especially the challenge of reducing poverty in our societies, in particular extreme poverty, is as an essential part of the promotion and consolidation of democracy, which requires us to attach appropriate priority to allocating our resources to such development efforts;

RECALLING that discrimination, poverty, inequity, and social exclusion in the Hemisphere are factors that increase the vulnerability of people, especially children;

REAFFIRMING that it is necessary to mainstream the gender perspective in peace, security, and cooperation initiatives;

CONCERNED that, in addition to interpersonal violence and common crimes, many countries are confronted with some of the following threats: transnational organized crime, arms trafficking, trafficking in persons, the smuggling of migrants, the world drug problem, money laundering, corruption, terrorism, kidnapping, criminal gangs, and cybercrime;

TAKING INTO ACCOUNT the support expressed by the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council for the bilateral and multilateral measures adopted by governments aimed at reducing military expenditures, where appropriate; and

MINDFUL of the importance of fostering conditions that make it possible to limit the use for military purposes of resources that could be devoted to development,

DECLARE:

1. Their commitment to international peace, security, cooperation in order to address the traditional threats and the new threats that affect the region.
2. Their commitment to reinforce inter-American partnership for integral development and, in that context, to strengthen cooperation mechanisms and actions to urgently address extreme poverty, inequity, and social exclusion.
3. Their commitment to respect for international law and their faith in the peaceful settlement of disputes.
4. The obligation of member states in their international relations not to have recourse to the use of force, except in the case of self-defense, in accordance with existing treaties or in fulfillment thereof.
5. The importance of continuing to promote in the Hemisphere a climate conducive to arms control, limitation of conventional weapons, and the nonproliferation of weapons of mass destruction, making it possible for each member state to devote more resources to its economic and social development, taking into account compliance with international commitments, as well as its legitimate defense and security needs.
6. Their commitment to ensuring that the Organization of American States continues to contribute to the overcoming of tensions and solution of crises, with full respect for the sovereignty of states and the principles of the OAS Charter; and, in addition, to continue supporting bilateral, subregional, regional, and international efforts, agreements, and mechanisms to prevent conflicts and achieve the peaceful settlement of disputes.
7. Their commitment to continue implementing confidence- and security-building measures identified in the Declaration of Santiago, the Declaration of San Salvador, and the Consensus of Miami.

8. Their firm commitment to promote transparency in arms acquisitions in keeping with pertinent United Nations and OAS resolutions on the matter; and to invite those states that have not yet done so to consider signing and ratifying, as the case may be, the Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions.

9. Their invitation to those member states that have not yet done so to give prompt consideration to ratifying or acceding to, as the case may be, the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (CIFTA).

10. The importance of continuing bilateral, subregional, and regional efforts to further advance cooperation on security matters and implement the agreements, declarations, and understandings adopted over the years with respect to peace, stability, confidence, and security.

11. Their commitment to strengthening cooperation in order to comprehensively address, with full respect for international law and international human rights law, the threats to the security of their peoples, including extreme poverty, social exclusion, the effects of natural disasters, transnational organized crime, arms trafficking, trafficking in persons, the smuggling of migrants, the world drug problem, money laundering, corruption, terrorism, kidnapping, criminal gangs, and cybercrime.

12. Their decision to continue fostering a culture of peace and promoting education for peace among the countries of the region, reaffirming our goal of continuing to devote more resources to the well-being of our peoples.

AG/DEC. 66 (XLI-O/11)

Declaration of San Salvador on Citizen Security in the Americas

THE MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS AND HEADS OF DELEGATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS) gathered in San Salvador, El Salvador, at the forty-first regular session of the OAS General Assembly,

RECOGNIZING that peace, security, democracy, human rights, development, and cooperation are the pillars of the inter-American system and that they are interlinked and mutually reinforcing;

CONVINCED that all multilateral efforts and cooperation in the area of security must respect in full the principles of sovereignty, territorial integrity, political independence of states, and of non-interference in the internal affairs of states, in accordance with the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of American States, and international law, as well as take into account different perspectives with regard to threats to states' security and their priorities;

RECOGNIZING that the Declaration on Security in the Americas reiterates that the concept of security in the Hemisphere is multidimensional in scope, includes traditional and new threats, concerns, and other challenges to the security of the states of the Hemisphere, incorporates the priorities of each state, contributes to the consolidation of peace, integral development, and social justice, and is based on democratic values, respect for and promotion and defense of human rights, solidarity, cooperation, and respect for national sovereignty;

RECOGNIZING that with the adoption of the Commitment to Public Security in the Americas at the First Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA I), held in Mexico from October 7 to 8, 2008, the member states expressed their political will for and the priority of confronting crime, violence, and insecurity in a joint, mutually supportive, preventive, comprehensive, coherent, effective, and continuous manner;

RECOGNIZING ALSO the Consensus of Santo Domingo on Public Security adopted at the Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA II), held in the Dominican Republic on November 4 and 5, 2009;

REAFFIRMING that the Meeting of Ministers of Justice or Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA) and other meetings of criminal justice authorities are important and effective forums for promoting and strengthening mutual understanding, confidence, dialogue, and cooperation in developing criminal justice policies and responses to address threats to security;

RECALLING the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, in the American Convention on Human Rights, and in the International Covenant on Civil and Political Rights;

TAKING NOTE of the Report on Citizen Security and Human Rights prepared by the Inter-American Commission on Human Rights and presented by it in December 2009;

RECOGNIZING that public security is the duty and exclusive obligation of the state, strengthens the rule of law, and has as its purpose to safeguard the integrity and safety of persons and to protect the enjoyment of all their rights;

TAKING INTO ACCOUNT that citizen and community participation is essential in the promotion and sustainability of public security policies;

RECOGNIZING that public security conditions are improved through full respect for human rights and fundamental freedoms, as well as by means of the promotion of education, culture, health, and economic and social development;

RECOGNIZING furthermore the need to promote and strengthen long-term and comprehensive state policies for public security that guarantee the protection and promotion of human rights, with an emphasis on addressing the causes of crime and violence;

UNDERLINING the need to continue coordinating international measures in the area of natural disaster prevention, mitigation, and assistance, while encouraging community participation and strengthening domestic capabilities as well as those of competent risk management agencies;

REITERATING the commitment to promote, within the framework of the rule of law, a culture of peace and nonviolence, which is understood as a set of values, attitudes, and modes of behavior based on respect for life, human beings, and their dignity, and which gives priority to human rights, ending of violence, and adherence to the principles of freedom, justice, democracy, solidarity, tolerance, and respect for diversity;

RECOGNIZING that crime and violence impair the social, economic, and political development of their societies;

CONSIDERING ALSO that, in the OAS Charter, the member states agreed that equality of opportunity, the elimination of extreme poverty, equitable distribution of wealth and income, and the full participation of their peoples in decisions relating to their own development are, among others, basic objectives of integral development;

RECOGNIZING the need to take action to bring about conditions for social, economic, political, and cultural development so as to promote social inclusion, reduce inequity and create opportunities for their people thereby contributing to the prevention of crime, violence, and insecurity;

REITERATING the commitment to address the challenges related to pandemics and natural and man-made disasters;

REAFFIRMING that states have a duty and responsibility to provide the humanitarian assistance necessary to protect the life, integrity, and dignity of their inhabitants in natural or man-made disasters;

CONSIDERING the importance of adopting policies, programs, and actions to prevent and confront crime, violence, and insecurity, including measures for the protection of vulnerable groups;

CONVINCED that elimination of violence against women in all its dimensions is an indispensable condition for their individual and social advancement and for their full and equal participation in society; as well as of the importance of including a gender perspective in security policies;

RECOGNIZING the importance of providing youth, particularly at-risk youth, with opportunities for and access to education, training, employment, culture, sports, and recreation, in order to prevent violence;

REAFFIRMING that prevention, punishment, and eradication of migrant smuggling, trafficking in persons and exploitation in all its forms, including sexual exploitation of women and minors, are obligations of the member states that should be addressed in accordance with the national and international legal instruments on such matters, and when appropriate, in partnership with civil society;

TAKING INTO ACCOUNT that transnational organized criminal activities can be used to finance and facilitate terrorism;

RECOGNIZING the importance of continuing to strengthen law enforcement and criminal justice capabilities;

RECOGNIZING ALSO the importance of mutual assistance in criminal matters and extradition in response to the preparation, planning, commission, execution, or financing of acts of terrorism, as well as corruption and organized crime, in accordance with domestic law and international agreements;

CONSIDERING the importance of international cooperation for improving economic and social conditions and thereby strengthening public security; and

REAFFIRMING the importance of maintaining and strengthening bilateral, subregional, regional, and international cooperation on security-related matters,

DECLARE:

1. That it is their priority to continue directing their political will, efforts and actions to strengthen citizen security, as a component of public security, in their countries.
2. The obligation of states to develop and implement public policies in the area of public security within the framework of a democratic order, the rule of law, and observance of human rights, geared towards providing security and strengthening peaceful coexistence in their communities.
3. That public security policies must encourage measures for dealing with the causes of crime, violence, and insecurity.
4. That the individual is at the center of citizen security, understood as a component of public security, and should therefore be a key factor in the definition and implementation of ways to build more secure and sustainable communities and societies that conform to their aspirations for democracy and for socioeconomic and cultural development.
5. That public security policies require the participation and cooperation of multiple actors, such as individuals, government at all levels, civil society, communities, the mass media, the private sector, and academia in order to reinforce promotion of a culture of peace and nonviolence and respond effectively and in a participatory manner to the needs of society as a whole.
6. The importance of strengthening the capacity of the state to develop comprehensive, long-term public security policies with a gender-based perspective, bearing in mind the needs of vulnerable groups, including the promotion and protection of human rights, and adapting, as necessary, the appropriate legal frameworks, structures, programs, operating procedures, and management mechanisms.
7. The need to continue implementing policies and measures in the area of prevention, law enforcement, rehabilitation, and reintegration into society, in order to ensure a comprehensive approach in combating crime, violence, and insecurity, for the purpose of enhancing public security.
8. The determination to design public policies and educational programs with a view to achieving a cultural transformation aimed at eradicating domestic violence.
9. The importance of continuing to foster measures to ensure that their populations have access to justice and to the protection afforded by an effective, transparent, and reliable criminal justice system.
10. The need to continue promoting prison systems based on respect for human dignity and human rights, including policies and practices geared towards rehabilitation and reintegration into society.

11. Their commitment to strengthen the links between development and security and, in this regard, foster increasing interaction between the areas of integral development and multidimensional security of the OAS.

12. The importance of maintaining and strengthening bilateral, subregional, regional, and international cooperation on security-related matters.

13. The commitment to reinforce inter-American partnership for integral development and to strengthen cooperation mechanisms and actions to urgently address extreme poverty, inequity, and social exclusion.

14. The need to continue coordinating international measures in the area of disaster prevention, mitigation, and assistance, while encouraging community participation and strengthening domestic capabilities as well as those of competent risk management agencies.

15. The need to continue strengthening bilateral, subregional, regional, and international cooperation mechanisms, in keeping with the principles established in the OAS Charter, to address, prevent, and combat, in a comprehensive and effective manner, transnational organized crime, illicit arms trafficking, trafficking in persons, smuggling of migrants, the global drug problem, money laundering, corruption, terrorism, kidnapping, criminal gangs, and technology-related crime, including cybercrime, as they may affect, in certain cases, social, economic, and political development and the legal and institutional order.

16. To instruct the Permanent Council to prepare, in consultation and coordination with the national authorities of the Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA) and of the Meeting of Ministers of Justice or Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA), with the assistance of the General Secretariat, a draft hemispheric plan of action, to follow up on this Declaration of San Salvador, to be considered by the forty-second regular session of the General Assembly.

17. That they request the General Secretariat to seek adequate funding for the preparation of the draft hemispheric plan of action and to report to the General Assembly at its next regular session on steps taken to this end.

Ministers of Education

Sixth Inter-American Meeting of Ministers of Education

August 12 - 14, 2009

Quito, Ecuador

Declaration of Quito: Better Opportunities for the Youth of the Americas: Rethinking Secondary Education

WE, THE MINISTERS OF EDUCATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in Quito, Ecuador, from August 12 to 14, 2009, for the Sixth Inter-American Meeting of Ministers of Education in the Framework of CIDI, declare the following:

1. We affirm that equal and timely access to education is a human right and that quality education is essential, a public good and a priority that forms the central pillar on which our societies are built. Quality secondary education is an essential ingredient for the successful access and insertion of youth into post-secondary, tertiary and higher education, personal development, and an active civic life.

2. We will redouble our efforts to fulfill the commitment of our Heads of State and Government at the Second Summit of the Americas, held in Santiago, Chile, in 1998, taken up again and reformulated at the Fifth Summit of the Americas, held in Port of Spain, Trinidad and Tobago, in 2009, to achieve a gross secondary school enrollment rate of at least 75% by no later than 2010 and, with the support of the OAS, specialized regional and international institutions responsible for the follow-up of the Millennium Development Goals and the Commitments of Education for All and civil society organizations, to develop strategies to make quality secondary education accessible for all our youth by no later than 2015, especially for the most vulnerable groups and those with special education needs. These strategies must be rooted in the principles of equity, quality, relevance, and efficiency in education, taking into account the gender perspective, ethnic diversity, and youth cultures, and also encouraging innovation and creativity.

3. There are enormous challenges in meeting the commitment to guarantee quality secondary education for all, given that, in many settings, the demands by the various players in society exceed the resources available in the system, be they economic, social, institutional, human, or organizational. At the same time, we recognize that the commitments in this Declaration of Quito must be translated into actual and institutionalized practices in each of our countries. In countries in which secondary education has been established as compulsory, it is essential that it be of high quality, free of charge, and accessible to all.

4. Education is one of the principal vehicles of the social mobility needed for countries to develop, as it promotes greater social equity and access to opportunities, which are prerequisites for overcoming the exclusion, poverty, and marginalization that affect many youth in the region. We consider that it is essential, especially in the context of today's global economic crisis to prioritize financing of quality education of all kinds and at every level, as an investment in the future of our peoples and societies. We recommend that our governments review financial strategies for fostering education in our Hemisphere that envisage greater public funding for this sector and, at the same time, promote cooperation strategies and partnerships between the public and private sectors.

5. Dialogue, exchange, and international cooperation can boost and enrich our national efforts, by generating the resources, knowledge and partnerships needed to achieve a genuine transformation of secondary education that will yield concrete benefits for everyone. Working with the OAS, through its Inter-American Committee on Education (CIE), and in coordination with international organizations and agencies, other donors, and civil society, we pledge to develop a regional cooperation plan to strengthen secondary education, with clear goals and the resources needed to foster exchange and cooperation among countries.

6. Against a backdrop of scant resources and growing social demand for secondary education, we emphasize the need to explore innovative and flexible education supply strategies that promote access, retention, reinsertion of those who have dropped out of school, and quality in secondary education, especially in rural and marginalized urban populations, indigenous peoples and other groups that have been historically excluded, migrants and/or other socially vulnerable groups. Taking into account national realities, education policy must consider the experiences and unique characteristics of these groups in order to provide them with relevant and quality education, and create conditions to ensure access to, and improve retention in, secondary education for the most vulnerable sectors.

7. We commit to strengthen mechanisms of participation of youth in decisions related to their own educational development and in the creation of public policies aimed at them. We commit to consider the proposals of adolescents and youth in our discussions and decisions concerning the commitments adopted at this Sixth Inter-American Meeting of Ministers of Education, and instruct the CIE, through our Inter-American Program on Education for Democratic Values and Practices, to follow up on the agreements adopted.

8. We recognize the importance of using a secondary education model that allows students to build a career that combines general education, personal development, and preparation for the world of work and that enables them to develop decision-making skills in keeping with their own interests and particular circumstances, both in choosing a higher education option and in developing future employment prospects.

9. We recognize the need to strengthen curricula according to national and sub-national policies and priorities so that they are relevant to the demands of the contemporary world. Comprehensive education in the 21st century should ensure the incorporation of youth cultures and consider different socio-cultural contexts and the knowledge, values of indigenous peoples and other groups that have been historically excluded, the development of specific policies for inclusion and youth citizenship, and the development of creativity, innovation, and entrepreneurship. Furthermore, it should emphasize and promote a critical

understanding of society, knowledge of and respect for human rights, democracy, diversity, inclusion, non-discrimination, inter-culturalism, the environment, sex education and addiction prevention, among others.

10. We recognize the implications of the HIV pandemic for youth in all the countries of the Hemisphere as a major problem that poses an enormous challenge for national governments, as set forth in the Ministerial Declaration “Preventing through Education” of the First Meeting of Ministers of Health and Education to Stop HIV and STIs in Latin America and the Caribbean in the framework of the XVII International AIDS Conference, held in Mexico City, in August 2008. We commit to promoting the development of strategies and programs aimed at the prevention of these problems in our schools.

11. We recognize the importance of strengthening technical, professional, and vocational training, as well as other skills relevant to the development needs of our countries, in order to create local and regional capacity for innovation and to forge community, local, national, and regional development projects.

12. We underscore the importance of developing accreditation and certification systems for core competencies and work-related skills, recognizing the knowledge and skills acquired by youth in the world of work or other settings, in order to reinforce the processes of inclusion and reinsertion of students who have dropped out of the formal education system before completing their schooling.

13. We agree on the need to promote measures for youth outside the school system in order to foster their integration into society in both educational and work settings. We consider that these socio-educational measures should be coordinated with formal education systems to encourage the completion of middle (or secondary) school studies and to facilitate continuing education.

14. We recognize the need for increased articulation or coordination of educational subsystems of national systems, in particular, of secondary or high school curricula with tertiary or higher education and technical education curricula, the purpose being to ensure students equal access and facilitate free movement throughout the educational system, from early childhood into adulthood.

15. Considering the fundamental role of teachers in education, we reaffirm the commitment to adopt cooperation mechanisms for the development of pre-service education and professional development of teachers that respond to the demands of 21st century education. We entrust the CIE to follow up on this issue through the Inter-American Teacher Educator Network (ITEN), to which we give our full backing.

16. We agree to the need to strengthen the national systems of information and evaluation of education, such as the participation in international assessment instruments, in order to advance strategies to consolidate quality secondary education.

17. We recognize with satisfaction the progress made in the implementation of the Inter-American Program on Education for Democratic Values and Practices, given its contribution to strengthening a democratic and non-violent culture, through formal and non-formal

education, promoting the participation of youth in an active and meaningful way in the decisions that affect them. We encourage the inclusion in secondary school education programs and curricula of the principles contained in international instruments aimed at promoting and protecting human rights and democracy, such as, the Inter-American Democratic Charter and the Universal Declaration on Human Rights, in accordance with each country's legal system. Furthermore we support the implementation, in the framework of the Inter-American Program, of new initiatives to stimulate participation and leadership by secondary school students.

18. We endorse the concerns of our Ministers of Foreign Affairs expressed in the Declaration of San Pedro Sula, "Toward a culture of non-violence," adopted at the thirty-ninth regular session of the OAS General Assembly, and we commit to promote public policies and educational programs aimed at bringing about a cultural transformation geared to eradicating violence, particularly intraschool and domestic violence and that against women, children and youth, caused by cultural, economic, social, ethnic, political, and other factors.

19. We recognize that the study and practice of art, culture and sports strengthen identity and personal development, forge better interpersonal relations, develop a greater sense of social responsibility, increase discipline, and enhance the interest in learning. We encourage the promotion of the inclusion of cultural, artistic, and sporting contents and activities in secondary school study programs. We support the efforts of the CIE to collaborate with the Inter-American Committee on Culture (CIC) in designing initiatives that promote creativity and strengthen cultural learning for youth through the education system, pooling their experiences and social backgrounds for dialogue and exchange with others. We recognize the importance to promote the strengthening of the cultural content of educational programs, in particular those directed at youth to promote the development of their cultural identity, foster intercultural dialogue, and create a greater awareness and respect for cultural and linguistic diversity.

20. We reaffirm our Hemispheric Commitment to Early Childhood Education adopted at the Fifth Inter-American Meeting of Ministers of Education held at Cartagena de Indias, Colombia, from November 12 to 14, 2007, in which we undertook to increase quality comprehensive early childhood education coverage, in accordance with each member state's possibilities and with the long-term goal of universalizing its integral care for the very young. We express our satisfaction at the progress in implementing the mandates that we agreed to on that occasion and, in the inter-American framework, under the coordination of the CIE. In order to give this greater impetus and visibility, we have agreed to entrust CIE to develop an Inter-American Program on Comprehensive Attention to Early Childhood, to which we will give a firm support.

21. We recognize the importance of broadening access to the use of information and communication technologies (ICTs) in secondary education as a factor that will contribute to young people's preparation and their appropriation of knowledge, tools that are needed to mainstream active and democratic citizens into the political, social, cultural, and productive sectors. We pledge to continue working toward universal access of young people to ICTs and their integration into secondary education, as well as preparing schoolteachers

in the teaching-learning process, in order to gain access to knowledge reducing the digital divide. We instruct the CIE to incorporate these subjects into processes of horizontal cooperation, technical assistance, and exchange of experiences.

22. We recognize the importance of implementing policies in the education sector, aimed at promoting technological innovation and scientific development. We pledge to promote and support programs and policies that foster the active participation of young people in innovation, science and technology initiatives, bearing in mind their expectations and vocations, in keeping with the human, social, cultural, and productive development needs of our countries.

23. We express our satisfaction that the CIE has made a positive contribution to the development and improvement of educational policy in member states. In this regard, it should be noted that the CIE has become a valuable forum for ensuring that the political mandates emanating from this and prior ministerial meetings receive appropriate technical support and follow-up. We also recognize the important support represented by the existence in this process of a special fund to provide seed money to implement projects that respond to the mandates of the Summits of the Americas and ministerial meetings in the area of education, and we urge cooperation, development, and financing agencies to work together in backing the multilateral activities of the CIE, contributing new funds which, coupled with the contributions of member states and other partners, would serve to implement the mandates that we adopt today.

24. We instruct the CIE, with the support of the Executive Secretariat for Integral Development (SEDI), to draw up a Work Plan for 2009-2012, the central objective of which should be to implement and follow up on our decisions, with special attention to lines of action such as: (1) strengthening of horizontal cooperation and technical assistance processes; (2) promotion and monitoring of policies of equity, quality and inclusion, and experiences of innovation; (3) strengthening of pre-service education and professional development of teachers; (4) financing and resource mobilization based on the criteria of equity, quality, and efficiency; (5) strengthening of strategies, mechanisms, and entities to promote the participation of youth; and (6) the use of information and communication technologies.

25. We instruct the CIE Authorities to convene a meeting for this purpose by February 2010 at the latest. In that connection, we entrust the CIE with seeking partnerships with other organizations in order to put together resources to support implementation of the Work Plan and with reporting on progress made in its implementation at our next ministerial meeting and also to other appropriate political organs in the framework of the OAS.

We thank the people and Government of Ecuador for the special welcome they have extended to us during this Sixth Inter-American Meeting of Ministers of Education in the framework of CIDI. In particular, we would like to acknowledge the leadership of the Ministry of National Education of Ecuador in ensuring the success of this event.

Seventh Inter-American Meeting of Ministers of Education

February 29 - March 2, 2012

Paramaribo, Suriname

Declaration of Paramaribo “Transforming the role of the teacher in response to 21st-century challenges”*

WE, THE MINISTERS OF EDUCATION OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), meeting in Paramaribo, Suriname, on March 1 and 2, 2012, at the Seventh Inter-American Meeting of Ministers of Education within the Framework of CIDI

REAFFIRMING that equal and timely access to education is a human right and that quality education is essential and constitutes an effective tool for reducing inequality and creating conditions for development and for the wellbeing of the population;

BEARING IN MIND the diversity of cultural contexts as well as the need to reduce social inequalities, foster competencies appropriate for a globalized 21st century, and narrow the digital divide;

AFFIRMING the need to improve the quality of education and educational offerings so as to prepare students for lifelong learning, active and committed citizenship, securing decent² work, and a good quality of life;

AWARE that teachers play a fundamental role in the quality of educational processes and outcomes and that for that purpose they need comprehensive initial and continuing preparation as well as appropriate employment conditions for the development of their professional career;

EMPHASIZING that teaching and learning take place within social and institutional systems and that no teacher can fulfill his or her role fully without the appropriate institutional and human environments; and

AWARE of the essential role of governments in promoting quality education for all and aware that special attention must be paid to the design and implementation of policies that strengthen the teaching profession and foster the educator’s strategic role in facilitating learning and promoting values.

* Subject to revision by Style Committee

¹ The Bolivarian Republic of Venezuela wishes to underscore that in the Declaration of Commitment of Port of Spain the Heads of State and Government committed to promote access to and to create dignified and decent work.

THEREFORE, WE, THE MINISTERS OF EDUCATION OF THE MEMBER STATES:

1. Underscore the importance of education as a fundamental aspect of development and, therefore, as essential to improving social, economic, cultural and democratic conditions in the member states.
2. Emphasize the intrinsic value of education, its social function, and its impact on the quality of life of every person and community, as well as its role in strengthening the economy, fostering social inclusion and mobility, and promoting equal access to greater opportunities, poverty reduction, and the building of citizenship and identity.
3. Reiterate that it is the responsibility of governments to ensure access to quality education for all.
4. Reaffirm the key role of the teacher in educational processes and results and recognize that the participation of teachers in efforts to improve the quality of education is important, so as to help ensure that the results are effective and lasting.
5. Affirm that it is important for all teachers to have access to quality initial preparation and continuing professional development that will enable them to guide and promote meaningful learning, social harmony, intercultural dialogue and respect for diversity, and whose pedagogical practice appropriately includes reflection, innovation, creativity and ICTs, as well as the development of skills to attend to students with diverse needs and to interact effectively with their peers, students and families.
6. Recognize that policies to strengthen the teaching profession and opportunities for quality professional development are vital to attract, employ, induct, develop, evaluate, motivate, retain, and recognize teachers so that they become ever better educators.
7. Attach priority, within efforts to raise the quality of education in our countries, to fostering appropriate pedagogical practices that are adapted to the diversity of local environments so as to more effectively meet the needs of the 21st century student. We also favor providing opportunities for teachers to observe, analyze, adapt, and adopt innovative teaching practices.
8. Emphasize that the student is the central figure in the educational process and therefore we promote active participation by students in learning and in educational processes that affect them. We further emphasize our commitment to foster greater international student exchange in order to provide the greatest possible learning opportunities for our students.
9. Affirm the need to conceive of 21st-century schools as learning communities whose central mission is to offer quality education to each student and where all staff work as a team, fostering learning and personal growth, and integration and ongoing participation by students, family members and guardians, and other educational actors. To that end, we will strive to provide leadership to see that this mission is fulfilled.

10. Pledge to promote the strengthening, professionalization and social valuing of the teaching profession through dynamic means of fostering dialogue and cooperation among educational systems, universities and other teacher preparation institutions, professional societies and unions, civil society organizations, the private sector, and other government sectors.

11. Affirm the importance of reviewing and, where necessary, in accordance with each member state's circumstances, strengthening legislative, regulatory, and administrative frameworks to formulate and implement policies that are responsive to the needs of 21st century students and the requirements of local contexts.

12. Recognize the importance of expanding access to ICTs in education at all levels and in all sectors, particularly as a contributing factor in the preparation of students, their learning, and their active and democratic participation in the political, social, cultural, and productive arenas. We will endeavor to promote training of teachers to use these tools effectively in the teaching and learning process.

13. Will redouble our efforts to generate knowledge and to exchange good practices concerning innovative policies and programs for initial preparation, professional development, improvement of labor conditions, and strengthening the teaching profession. We entrust the Inter-American Committee on Education (CIE), with support from its Technical Secretariat, with following up on this issue through the region's cooperation mechanisms, including the Inter-American Teacher Education Network (ITEN), whose progress we applaud.

14. Reaffirm our Hemispheric Commitment to Early Childhood Education, adopted at the Fifth Inter-American Meeting of Ministers of Education, held in Cartagena de Indias from November 12 to 14, 2007, in which we undertook to increase the coverage of quality comprehensive early childhood education in each member state in accordance with its circumstances. We express our satisfaction at the progress in implementing the mandates that we agreed to on that occasion and, in the inter-American framework, under the coordination of the CIE.

15. Recognize with satisfaction the progress made in implementing the Inter-American Program on Education for Democratic Values and Practices, given its contribution to strengthening a democratic and nonviolent culture, through formal and nonformal education, promoting active and meaningful participation by youth in the decisions that affect them and providing teachers with tools that will support them in making their classrooms more democratic.

16. Express our conviction that the CIE has become a valuable forum for ensuring that the political mandates emanating from this and prior ministerial meetings receive appropriate technical support and follow-up. We instruct the CIE, with the support of the Executive Secretariat for Integral Development (SEDI), to draw up a work plan for 2012 and 2013, the central objective of which should be to implement and follow up on our decisions, with special attention to strengthening horizontal cooperation and technical assistance in lines of action that include (1) promoting and monitoring policies of quality, equity, and

inclusion; (2) strengthening initial teacher preparation, professional development, and the teaching profession; (3) comprehensive early childhood care and education; (4) education in democratic values and practices; and (5) the use of information and communications technologies in the teaching and learning process.

17. Instruct the CIE authorities to convene a meeting for this purpose no later than May 2012. In that connection, we encourage member states to continue supporting initiatives now under way; and we instruct the CIE, with support from the Technical Secretariat, to seek partnerships with other organizations to secure additional resources for implementation of the work plan, and to present a progress report on its implementation at our next ministerial meeting and to other appropriate political organs in the OAS framework.

18. Thank the people and Government of Suriname for the special welcome they have extended to us during this Seventh Inter-American Meeting of Ministers of Education within the framework of CIDI. In particular, we wish to acknowledge the leadership of the Ministry of Education and Community Development in ensuring the success of this event.

Ministers of Labor

XVI Inter-American Conference of the Ministers of Labor (IACML)

October 6 - 8, 2009

Buenos Aires, Argentina

Declaration of Buenos Aires 2009: “Facing the Crisis With Development, Decent Work, and Social Protection”

WE, THE MINISTERS PARTICIPATING IN THE XVI INTER-AMERICAN CONFERENCE OF MINISTERS OF LABOR (IACML) OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), meeting in Buenos Aires, Argentina from October 6 to 8, 2009, conscious of the effects of the international economic crisis and especially concerned about its impact on employment levels and job quality, and recognizing that the State in its role as guardian, among other roles, has a proactive part to play in promoting employment and protecting the rights of workers, propose to move forward with a variety of innovative solutions that place decent work and social protection as fundamental pillars of development:

1. In the present context of the global economic downturn, we reaffirm our commitment to integral development and the principles of international cooperation and solidarity reflected in the OAS Charter. We confirm the full force and effect of the Inter-American Democratic Charter, adopted in Lima, Peru in September 2001, and reaffirm that democracy and social and economic development are interdependent and mutually reinforcing; and further, that the promotion and strengthening of democracy requires the full and effective exercise of workers' rights.
2. We reaffirm our obligations as members of the International Labour Organization (ILO) and our commitments to promote, respect, and realize the principles in respect of the fundamental rights contained in the ILO Declaration. In this framework, we look to the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization adopted in 2008, and to the resolution concerning the promotion of sustainable enterprises adopted at the 96th Session of the International Labor Conference for guidance.
3. We adopt the resolution “Recovery from the Crisis: A Global Jobs Pact” that came out of the 98th Session of the International Labor Conference designed to guide national and international policies aimed at stimulating economic recovery, generating jobs and providing protection to working people and their families.
4. We recall the labor mandates of the Fourth and Fifth Summits of the Americas, in whose declarations the Heads of State and Government of the Americas reaffirmed the central role of decent work in order to fight poverty and strengthen democratic governance. Further, we reaffirm our commitment to the promotion of human prosperity and will imple-

ment the specific mandate of our Heads of State and Government in the Declaration of Commitment of Port of Spain 2009 to endorse at the Sixteenth IACML a work program that advances the objectives of the promotion of decent work.

5. We express our concern that the present international economic crisis is affecting millions of workers in our region. The impact of the current framework requires the countries of the Americas to take complementary actions at the national and regional level, allowing for our differences and disparities, but committed to our common goals and persistent in our policies in order to maintain activity levels and to continue promoting improvements in the living standards of our peoples.

6. We recognize the positive contribution of trade among our nations to the promotion of growth, employment, and development. We will therefore continue to insist on an open, transparent and rules-based multilateral trading system. We further recognize the need for all our peoples to benefit from the increased opportunities and welfare gains that the multilateral trading system generates. We commit ourselves to continue analyzing, within the limits of our competencies, the labor dimension, the cooperation mechanisms contained therein, and the effects on employment of the regional and subregional integration processes, as well as of bilateral and multilateral free trade agreements of the Hemisphere.

7. Convinced of the need to involve society as a whole in policy shaping, we recognize that dialogue among governments and the social actors is an indispensable mechanism for generating the consensus which would enable the social, political and economic sustainability of strategies for facing the crisis and provide a broader basis of legitimacy for public policies designed to meet the fundamental needs of our peoples.

8. We are convinced that promotion of employment levels and protection of job quality, in addition to being a prerequisite for sustainable democratic systems, are an indispensable objective in dealing with the impact of the crisis on the living standards of our peoples.

9. Therefore, we, the Ministers of Labor of the Hemisphere, conscious of the need for the State through its public policies to play a proactive role, and to foster the accomplishment of the aforementioned objectives, adopt the following recommendations to guide the development of active labor policies in our respective countries and to serve as a frame of reference for regional exchange and cooperation measures.

Coordination of Policies and Programs for Promoting Employment and Protecting Workers' Rights: A Guiding Framework in Facing the Crisis

10. We highlight the recovery and stimulus measures that have been implemented by our countries and others around the world in response to the greatest economic crisis in modern times. We are firm in our belief that the success of our actions can be measured by the men and women engaged in dignified, decent and productive work.

11. We reaffirm our conviction of the need to continue to create innovative responses and policies to confront the economic crisis which, on one hand, should be based on an integrated approach that includes the economic, labor, social and ecological dimensions, and, on the other, should combine medium and long-term strategies and emergency measures for promoting employment and protecting workers' rights.

12. We declare our resolve to continue promoting employment and decent work as central issues of debates and decisions of the multilateral system, in order to face the crisis through coordinated actions and to set the foundations for a new development strategy in the context of democracy and renewed global cooperation.

13. We will renew efforts to contribute to employment creation and preservation in collaboration with social and productive actors, other ministries and government agencies, within a framework of economic and environmental sustainability that combines management of natural resources and technological innovation in harmony with the objectives of decent work. In the same way, and embracing the postulates of the United Nations Environment Programme (UNEP), we will promote quality employment in jobs created in the framework of an environmentally sustainable development in view of its potential to generate income, create decent work, and reduce poverty.

14. Within the framework of the crisis, we will promote synergies between public and private investment in infrastructure, in order for project planning and execution to be oriented towards those projects that contain a high employment coefficient and that, at the same time, promote decent work and enhance job skills.

15. Based on the foregoing, at the national level and at local levels, we believe collaboration and exchange with other ministries and organizations in the economic, educational, and social sectors to be essential in developing measures to stimulate effective demand, help to maintain the purchasing power of workers' wages, sustain and fuel the growth of businesses, and contribute to an improvement in employment levels, inter alia, through macroeconomic stimulus packages, as appropriate.

The Role of Ministries of Labor in Addressing the Crisis

16. In this time of economic crisis and, given its impact on employment, acknowledging the important role of our ministries in this context, we will strengthen labor administration capacity as a central element of all measures aimed at ensuring protection for workers, social security coverage, active employment policies, and social dialogue. The ministries of labor, as appropriate, can play a positive role contributing to the development of harmonious labor relations, healthy and safe work environments and negotiated salaries. Their contributions are key for economic recovery and prosperity with sustainable enterprises.

17. We reaffirm our commitment to ensure the effective enforcement of our national labor laws and ensure effective observance of fundamental principles and rights at work. We recognize that international labor standards will support economic recovery, and therefore, that their promotion is especially important at this time.

18. We will intensify our efforts to bring a significant reduction in levels of unregistered work, implementing or strengthening labor inspection and other mechanisms to enforce national labor laws in the workplace.

19. Recognizing the heterogeneity of the informal economy in the countries of the hemisphere, we will encourage the adoption of measures to bring about its gradual formalization. This will help to improve working conditions and productivity, and will promote the Hemispheric Decent Work Agenda.

20. We will foster skills development, upgrading, and retraining for workers through technical, technological, and professional training programs—coordinated with education and production needs—in order to improve their employability, with particular attention to those who will enter the labor market for the first time, those who are out of work, those in danger of losing their jobs, and the most vulnerable groups. We will encourage the development of competencies that facilitate appropriate harnessing of the potential of new information and communication technologies (ICTs) for enterprises and workers.

21. We will improve labor competencies and certification of skills, and seek the necessary resources for public employment services, as entities responsible for promoting active policies of labor insertion, training and mobility, so that jobseekers receive adequate services. Furthermore, we will strive to ensure the quality and availability of their services, in particular for individuals and groups most vulnerable to the crisis.

22. We recognize the need to strengthen or implement active and passive policy instruments, in accordance with national circumstances, such as well-targeted emergency employment programs, in order to cushion the increase in unemployment, provide incomes to workers who have been laid off or are at risk of losing their jobs, and build competencies that improve the employability of workers.

23. We will promote active policies to preserve employment in those companies whose situation could affect economic activity and employment levels according to the situation of each country. We will work, in collaboration with the social partners, to find options to minimize job losses or otherwise mitigate the employment effect of the economic crisis within the framework of respect for workers rights and ongoing social dialogue.

24. We recognize the contribution of sustainable enterprises, including micro, small and medium size enterprises and other production units, to poverty reduction, wealth creation and employment generation. In current times, in some countries, there are enterprises that face a decrease in demand that, coupled with less access to credit, threatens their sustainability and could consequently lead to a decrease in jobs. Therefore, we will contribute to the creation of an enabling environment for the establishment and growth of enterprises.

25. We will redouble our efforts to promote equal treatment and equal opportunities in the world of work, so that the economic crisis does not become a pretext for increased discrimination in the labor market. We will augment our efforts, paying particular attention to vulnerable groups to provide assistance and opportunities to young people at risk, persons with disabilities, senior citizens, low-paid and less qualified workers, persons employed in the informal economy, and migrant workers, among others.

26. We will promote policies to provide full access to employment opportunities and technical, technological and professional training, as appropriate, for the population, in particular vulnerable groups, so that they can overcome poverty and social exclusion, where it exists, in the framework of policies to combat all forms of discrimination at work.

27. We will deepen our efforts to eradicate forced and obligatory labor in all modalities, including bondage and semi-slavery, through integrated actions by the government and the society.

28. We will work towards a continuing reduction in the gender gap, promoting a reduction of the disparities that exist between men and women in the world of work. Notwithstanding the progress made in the last decades, there are challenges that become more relevant with the current economic crisis. We commit ourselves to reinforce the mainstreaming of the gender perspective in employment policies and promote it in recovery programs. We will strive, in the area of our competences, to ensure that all workplaces are free from violence and different forms of harassment. We will contribute to equity initiatives in the workplace that lead to a better balance between family and workplace responsibilities.

29. We will give priority to reducing unemployment and precarious jobs for young people in the hemisphere and will redouble efforts for their inclusion in vocational training, apprenticeship, educational reentry programs and models for school to work transition, in order to increase their access to decent and productive work.

30. We commit to protecting children from economic exploitation and from any tasks that may interfere with their education and integral development, according to the principle of the effective abolition of child labor, which is contained in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), in accordance with the commitment by our Heads of State and Government at the Fourth Summit of the Americas. In addition, we will contribute to the adoption of coordinated national strategies to prevent and eradicate the worst forms of child labor by 2020 at the latest, in accordance with the Declaration of Commitment of the Fifth Summit of the Americas and the Plan of Action of the Fourth Summit of the Americas.

31. We underscore the need for national occupational health and safety policies and programs which promote prevention and control of occupational hazards and which reaffirm the commitment of states and of employers and workers in promoting effective measures in this area, adopting an intersectoral approach.

32. We will collaborate with ministries of health to help reduce the effects of phenomena such as pandemics or health crises which can have an impact on the health of the population and on the economy of countries and employment, by appropriate legislation and regulation and by the promotion of the design and implementation of preparedness plans in companies and workplaces, with a view to limiting the effects on workers' health and productive activity as much as possible.

33. We commit to making the maximum use of mechanisms, as appropriate, that allow to maintain stable industrial relations environment and prioritize negotiations between em-

ployers and workers, in order to prevent and solve disputes through negotiation, mediation, and arbitration services, thereby playing an important role in helping the economy to recover in the current crisis.

34. We reaffirm the importance of fully protecting the human rights of migrants, regardless of their immigration status, and observance of the labor laws applicable to them, including the principles and labor rights embodied in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

35. In the context of the current economic crisis, we recognize that migrant workers and their families are particularly vulnerable. We also acknowledge that families that depend on migrants' remittances will face additional challenges. We will also step up efforts, in the area of our competencies, to combat smuggling of migrants and trafficking of persons in the world of work.

36. We will promote the improvement of national, sectoral, and regional labor market information systems and statistics, giving priority at this stage to implementation of observatories for sectors and production units potentially affected in their activity and employment levels.

37. We agree that the economic crisis allows us to refine our labor and employment policies and programs to improve the lives of working men and women and provide for more equitable economic growth. In this context, we undertake to make the necessary efforts at the national level and with international technical and financial cooperation agencies, in order to provide our ministries of labor with qualified human resources and sufficient budgetary and technical means to address the immediate and longer-term challenges resulting from the present environment in an effective manner.

38. Conscious of the benefits that accrue from the exchange of good practices and active horizontal cooperation in the inter-American framework, we agree to strengthen the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL) and other horizontal cooperation mechanisms at the regional and subregional and bilateral levels, in order to promote quality employment, workforce development, and effective enforcement of labor laws in our countries.

Encouraging Social Dialogue and Collective Bargaining

39. We will encourage broad and inclusive social dialogue at the national level, by sectors, and at the enterprise level, since we acknowledge it as an efficient mechanism for maintaining employment levels, preserving skills, and sharing the costs of the crisis, as well as the benefits of the subsequent economic and social recovery, in a fair manner.

40. We will strengthen our efforts to promote the institutionalization of the different social dialogue practices in use in our countries and to strengthen our response to the current challenges, in which it is necessary to build consensus and reduce disagreement.

41. We stress the need to promote freedom of association and broaden collective bargaining in order to adopt agreements between parties by which to confront the effects of the crisis with the least possible costs, recognizing sectoral and productive heterogeneities.

42. We recognize that the rights of workers' and employers' organizations can only be exercised in a climate free from violence, pressure, or threats of any kind against the leaders and members of these organizations. We commit to ensure that this principle be fully respected.

43. We undertake to support the development of workers' and employers' organizations, helping to increase their capacities in defense of their interests in the crisis and to consolidate a robust social dialogue.

Strengthening Social Protection in the Crisis

44. We recognize the importance of social protection systems to address the needs of the most vulnerable segments of our societies, particularly in the current economic crisis. We will continue to explore models of social protection to address economic and social hardships, in balance with the need to promote labor market engagement and employability.

45. We reiterate our conviction, expressed in previous IACML, regarding the need to strengthen and expand the coverage of social security systems, ensuring, within our areas of competence, its efficiency and transparency with effective policies that take into account the principles of universality and solidarity, provide for financial sustainability and accountability, and promote justice, equity and social inclusion, without requiring a particular management model.

46. In an effort to ensure comprehensive coverage and fair distribution of benefits, we will seek to organize the social protection system in such a way as to combine, where appropriate, contributive and non-contributive systems in a coordinated manner.

47. We underscore the importance of unemployment protection mechanisms (inter alia, unemployment insurance or support), especially in the present environment. Such mechanisms should be part of a comprehensive strategy that operates in tandem with active employment policies.

48. We will design or strengthen, depending on country circumstances, non-contributive social protection mechanisms, within the areas of our competencies, which would make it possible to manage a basic social benefits program with transfers to vulnerable and crisis-affected households. Our goal will be to protect jobless workers in countries without unemployment insurance or workers in the informal economy against the risk of lapsing into extreme poverty.

WE RESOLVE TO:

A. Implement a Plan of Action based on this Declaration and on the work of the XV IACML and the Fifth Summit of the Americas, and to dedicate the necessary resources to this end.

B. Establish two Working Groups as follows:

a. Working Group 1: “Decent Work to Face the Global Economic Crisis with Social Justice for a Fair Globalization”

b. Working Group 2: “Strengthening of the Ministries of Labor to Promote Decent Work”

C. Encourage the countries of the Hemisphere to intensify cooperation and to share knowledge, experiences and achievements in the area of employment, labor and social protection, and to exchange best practices in promoting decent work for all, in the framework of the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL).

D. Express appreciation to the different international organizations for their invaluable collaboration, in particular the members of the Joint Summits Working Group: the Organization of American States (OAS), the International Labour Organization (ILO), the Pan American Health Organization (PAHO), etc., which have played a central role in the promotion of decent work and we urge the promotion of all regional dialogue forums with these institutions.

E. We commend the Trade Union Technical Advisory Council (COSATE) and the Business Technical Advisory Committee on Labor Matters (CEATAL), in their capacity as constructive interlocutors and consultative bodies, for their innumerable contributions to the Inter-American Conference of Ministers of Labor.

F. Organize the XVII Inter-American Conference of Ministers of Labor of the OAS in El Salvador in 2011.

Plan of Action of Buenos Aires 2009: “Facing the Crisis with Development, Decent Work, and Social Protection”

1. WE, THE MINISTERS OF LABOR, GATHERED IN BUENOS AIRES, ARGENTINA, FROM OCTOBER 6 TO 8, 2009, ON THE OCCASION OF THE XVI INTER-AMERICAN CONFERENCE OF MINISTERS OF LABOR (IACML) OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), undertake to implement the following Plan of Action to confront the current economic crisis from a perspective that combines development, decent and productive work and social protection, in order to attain integral development and economic growth with greater justice and equity in our hemisphere.

A. Organization

2. The Chair *pro tempore* of the XVI IACML (Argentina) in collaboration with the former Chair (Trinidad and Tobago) and the future Chair (El Salvador), with the support of the Technical Secretariat of the OAS and in consultation with the representatives of the Trade Union Technical Advisory Council (COSATE), the Business Technical Advisory Committee on Labor Matters (CEATAL) and the Permanent Technical Committee on Labor Matters (COTPAL), will be responsible for promoting the implementation of the Plan of Action and for improving collaboration and coordination with key international institutions.

B. Resources

3. Member States will devote the appropriate economic, technical, and logistical resources to implement the Plan of Action with the participation of COSATE and CEATAL. In addition, the Chair *pro tempore* will invite the relevant regional and international organizations to make voluntary contributions to support activities and projects included in this Plan of Action, and to facilitate the participation of the said workers' and employers' organizations.

C. Working Groups

4. As described below, two Working Groups will be created, whose main objective will be to advise the IACML on the objectives of the Declaration of Buenos Aires. As such, the Groups will examine in greater depth the topics identified in this Plan of Action, facilitate the exchange of experience, provide pertinent information and studies, and follow-up on related hemispheric initiatives.

5. In determining their activities and approach to the issues identified in this Plan of Action, the Working Groups shall adhere to the Declaration of Buenos Aires, and the Final Reports of the Working Groups submitted to the XVI IACML shall be taken into account.

Working Group 1

“Decent Work to Face the Global Economic Crisis with Social Justice for a Fair Globalization”

6. Working Group 1 will follow up on the Declaration of Buenos Aires from a policy perspective, paying particular attention to the responses of the ministries of labor to the current economic crisis. It will continue to build on the work of former Working Group 1 “Decent Work as an Instrument for Development and Democracy in the Context of Globalization”.

7. Working Group 1 will address the following issues in follow-up to the Declaration of Buenos Aires and the Reports of the Working Groups:

- Articulation of economic, labor, education, environmental, and social policy;
- Responses of governments and ministries of labor to the economic crisis and its impacts;
- Strategies to maintain employment developed by governments, workers, and employers to mitigate the effects of the economic crisis;
- Policies, programs, and related developments concerning migrant workers;
- Youth employment strategies and initiatives;
- Strategies to combat child labor and eradicate its worst forms as enunciated by the Heads of State and Government at the Summits of the Americas;
- Gender mainstreaming in labor and employment policies;
- Support for micro, small, and medium-sized enterprises sustainability, and other productive units;
- Labor informality and unregistered work;
- Contributive and non-contributive social protection policies for the unemployed;
- Labor dimension of globalization, regional integration processes, and free trade agreements;
- Policies to assist and incorporate vulnerable groups, as stated in paragraph 26 of the Declaration of Buenos Aires;
- Promotion of fundamental principles and rights at work and experiences of good practices in social dialogue;
- Forced labor and trafficking in persons;
- Income policies within the framework of social dialogue and collective bargaining.

Working Group 2:

“Strengthening of the Ministries of Labor to Promote Decent Work”

8. Working Group 2 will follow up on the Declaration of Buenos Aires with regard to matters concerning institutional capacity and will continue to build on the work of former Working Group 2 “Strengthening the Capacities of Ministries of Labor to respond to the Challenges of Promoting Decent Work in the Context of Globalization”.

9. Working Group 2 will address the following issues in follow-up to the Declaration of Buenos Aires and the Reports of the Working Groups:

- Strengthening the management capacity of ministries of labor and strategic planning processes;
- Design and follow-up of national programs for creation of decent work;
- International cooperation on labor matters;
- Development, enforcement, and promotion of labor laws;
- Labor market information systems;
- Public employment services;
- Professional, technical, and technological training and certification of labor skills;
- Labor inspection;
- Occupational health and safety; and
- Social dialogue.

D. Directives for the Functioning of the Working Groups

10. The working groups will be coordinated by the following ministers of labor, elected by this Conference, who can perform the functions assigned directly or through a representative:

Working Group 1:

United States (Chair), Brazil (Vice Chair), and Guyana (Vice Chair).

Working Group 2:

Dominican Republic (Chair), Mexico (Vice Chair), and Canada (Vice Chair).

11. Participation in working groups will be open to all member states, as well as to CO-SATE and CEATAL. The Chair *pro tempore* will seek the means to ensure the active participation of all member states and COSATE and CEATAL in the working groups. The General Secretariat of the OAS will be the Technical Secretariat for the working groups and relevant regional and international organizations will be called upon to provide support and assistance.

12. The working groups will receive the support of the Technical Secretariat of the OAS and shall meet at least twice before the XVII Inter-American Conference of Ministers of Labor. They should also decide on a timetable for the activities contained in this Plan of Action by February 2010, bearing in mind the complementary nature of their activities and based on the earlier experiences of the working groups.

E. Inter-American Network for Labor Administration

13. The IACML renews its support and undertakes to strengthen the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL, by its Spanish acronym), inasmuch as it constitutes a valuable mechanism for the institutional and technical strengthening of ministries of labor as well as for dissemination and exchange among countries of policies to mitigate the international crisis.

14. The IACML entrusts its officers (troika, chairs and vice chairs of the working groups) with reviewing the RIAL Operations Guide; exploring the most appropriate participation, decision, follow-up, and evaluation mechanisms regarding the operation of the RIAL, including its Cooperation Fund; and preparing a proposal in this regard.

15. The RIAL will continue with its assigned activities, carry out those suggested in the Final Reports of Working Groups 1 and 2, and include such new areas as may be considered necessary in the framework of the Declaration and Plan of Action of the XVI IACML.

16. The Technical Secretariat will continue to coordinate the RIAL activities, following the priorities defined by the ministries of labor of the Hemisphere at the XVI IACML and with the broadest participation of its members.

17. Member states will make every effort to ensure the effective operation of the RIAL, including making financial and technical contributions, and the Technical Secretariat will continue to explore possible sources of financing. Recognizing that this cooperation goes beyond financial assistance, mechanisms will be promoted for the exchange of experience, dialogue, intraregional cooperation, and technical assistance, among others.

18. Committed to strengthening the RIAL, member states will regularly provide information on their ongoing programs, including best practices, to the RIAL Portfolio of Programs. The Technical Secretariat will regularly update a database on programs in the Hemisphere as the basis for exchange and horizontal cooperation activities. In this effort, we request the Technical Secretariat to work in coordination with other international agencies.

XVII Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML)

October 31 - November 1, 2011

San Salvador, El Salvador

Declaration of San Salvador 2011: Advancing Economic and Social Recovery with Sustainable Development, Decent Work, and Social Inclusion

WE, THE MINISTERS TAKING PART IN THE XVII INTER-AMERICAN CONFERENCE OF MINISTERS OF LABOR (IACML) OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in San Salvador, El Salvador, on October 31 and November 1, 2011, and conscious of the need to strengthen and to continue moving forward in the process of economic and social recovery of our peoples, recognize that sustainable development, decent work, and social inclusion are keystones of public policies for maintaining and increasing the level and quality of employment and for continuing to strengthen the tutelary and proactive role of the state in the advancement and protection of labor rights.

1. In the region's prevailing economic climate and considering the different ongoing effects of the global economic crisis on our countries, we reaffirm that the core objective of the democratic development model must be the creation of productive employment in the context of decent work. To that end, we recognize that the implementation of strategies for the development of strong, sustainable, and balanced economies, which are based on macroeconomic, financial, labor, environmental, and social policies, must be intensified.

2. In the context of the tenth anniversary of the OAS Inter-American Democratic Charter, adopted at Lima, Peru, on September 11, 2001, we celebrate and reaffirm the principle that democracy is essential to the social, political, and economic development of the peoples of the Americas. We ratify the precepts of the Democratic Charter, which state that the promotion and strengthening of democracy requires the full and effective exercise of workers' rights.

3. We recall the Declaration of the Fourth Summit of the Americas held in Mar del Plata, Argentina, in 2005, whose *leit motif* was "Creating Jobs to Fight Poverty and Strengthen Democratic Governance," at which the Heads of State and Government of the democratic countries of the Americas placed the right to work at the center of the hemispheric agenda. We also recall the Declaration of Commitment of the Fifth Summit of the Americas held in Port of Spain, Trinidad and Tobago, in 2009, when our Heads of State and Government, in the context of the theme "Securing Our Citizens' Future by Promoting Human Prosperity, Energy Security and Environmental Sustainability," committed to the enforcement of domestic labor laws to provide for acceptable conditions of work and safe and healthy workplaces, free from violence, harassment, and discrimination.

4. We acknowledge the advances and challenges identified at the XVII American Meeting of the International Labor Organization (ILO) held in Santiago, Chile, in December 2010, where it was highlighted that, despite the economic gains achieved, inequality still persists in the region and economic growth is not enough in itself to reduce inequality and create quality jobs. Likewise, we regard the Hemispheric Agenda for Promoting Decent Work (2006-2015) as a tool to guide our actions and progress in achieving the Millennium Development Goals by 2015.

5. We recall that the Global Jobs Pact adopted at the 98th International Labour Conference of the ILO notes that, as a general rule, employment recovery is reached after several years of economic recovery; therefore, it takes coordinated policy options to enhance the effectiveness of national and international efforts to create employment. The foregoing requires consistent policies and actions that include respect for rights at work and promotion of social dialogue.

6. As reiterated by the ILO Director-General in the Report to the 100th International Labour Conference, it is necessary to continue advancing toward a vision of sustainable development for social justice and an efficient growth path in order to overcome the imbalances of globalization and income inequality. We share the concern of the ILO that the global economy is still not creating the job opportunities that people need; in this context, we consider unemployment and underemployment to be among the main problems of our time and we reiterate that decent work is the best way to overcome poverty. Given that the global financial and economic crisis still has a strong impact on labor conditions, wages, vulnerable workers, and overall employment, we agree that there is a need to explore socially and environmentally responsible, innovative alternatives in the area of income, employment, and investment, taking into account the peculiarities of each country and sub region.

7. Consequently, we, the Ministers of Labor of the Hemisphere adopt the following proposals for advancing toward social and economic recovery at the national and international level, with sustainable development, decent work, and social inclusion constituting a frame of reference for exchange and regional cooperation activities.

Employment at the Core of Strategies for Creating a Strong, Sustainable and Balanced Economy

8. We maintain our belief that employment must remain a central objective of social and economic policy at the national and international level, on the premise that genuine progress in our countries can only be achieved when the women and men of our Hemisphere are engaged in decent work.

9. We reaffirm that income and employment policies are equivalent and complementary to macroeconomic, monetary, and fiscal policies, and we underscore that creation of productive and quality employment must be among the main objectives of these policies.

10. We believe that it is necessary to strengthen the state's role to reverse the trend of increasing economic and social inequality in some of our countries, overcome poverty, and consolidate democratic governance. To achieve these objectives, it is essential for the state to ensure that the conditions exist to strengthen trade union and employers' organizations, promote social dialogue, and ensure freedom of association

11. We recognize that macroeconomic, labor, environmental, and social policies should be implemented in a coordinated manner in order to ensure strong, sustainable, and balanced economic growth, generate and preserve employment, reduce poverty and the informal economy, and improve social protection.

12. We recognize that policy coherence is a challenge with multiple dimensions. Therefore, we intend to work toward better policy coordination in different spheres and at different levels, establishing decent work and social inclusion as crosscutting objectives.

13. We will promote active employment policies, particularly with regard to public employment services and vocational training to integrate the needs of the productive world. To achieve these objectives we will pay careful attention to growth and enhancement of the network of public employment services, development of incentive programs for job creation, and support for the maintenance and retention of employment in companies affected by the crisis.

14. We will strengthen technical, administrative, financial, and management assistance programs for the establishment and development of productive and competitive micro, small and medium-sized enterprises, taking into account the resolution on Promotion of Sustainable Enterprises adopted at the 96th International Labour Conference of the ILO. We will share our experience regarding other production units, such as cooperatives, mutual benefits societies, associations, self-managed endeavors, and other social production enterprises, in those countries where they exist, as generators of work and income and promoters of decent work and social inclusion in order to help ensure that benefits of economic growth are broadly shared.

15. We will promote a policy of training and lifelong learning that takes into account a greater synchronization of the world of work, formal education, and training systems as essential elements to enhance the labor skills of our workers, as well as the complementarity, productivity, and competitiveness of our countries to promote the creation of skilled employment and produce goods and services with higher added value, all of which are aspects that were established in the resolution concerning skills for improved productivity, employment growth, and development adopted at the 97th International Labour Conference of the ILO.

16. We will work to develop national vocational training and certification systems based on skills standards, coordinate vocational training with basic education for youth and adults, include the ILO Fundamental Principles and Rights at Work and occupational health and safety in education programs and curricula, ensure unemployed workers the right of access to vocational training, and expand training and employment opportunities for disadvantaged groups, promoting greater equality in education.

17. Taking into account that in this decade most countries in the Americas will have their highest-ever number of young men and women, we intend to promote the skills of our youth and increase their opportunities of access to facilitate their entry to the labor market. To that end, we will strengthen information services, career guidance, and public employment services. We intend also to promote youth entrepreneurship.

18. Within the framework of the changes taking place in production systems, we will promote greater synergy between production and education policies. To that end, we will continue to promote inclusion in the labor market and support access to information and communication technologies (ICTs), thereby reducing the digital divide and enhancing the opportunities that they offer for improving quality of life, particularly for youth.

19. We will promote and combine efforts to establish labor market observatories, which we consider strategic tools for analysis and labor market research to guide policy and decision making. In addition, we will advance toward the harmonization of statistics and indicators on employment and vocational training.

20. We will work with other ministries in our countries and region to promote the creation of decent, productive and environmentally sustainable jobs (*green jobs*).

21. We will promote an equitable transition framework that provides decent work for those workers who might be affected by measures resulting from efforts to mitigate climate change.

Advancing the Construction of Fairer Labor Conditions

22. We will strengthen our efforts and capabilities in the core areas of labor administration in order to advance the construction of fairer labor conditions.

23. We believe that collaboration and technical assistance in all their forms (multilateral, bilateral, etc.), especially from the OAS and the ILO, are some of the important tools available to ministries of labor to support and promote institutional strengthening. Therefore, we value and renew our commitment to and support for the initiatives of the ILO and the OAS, in particular the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL).

24. We will continue working resolutely to ensure observance of our national labor laws and the effective exercise of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work, through the strengthening of labor inspection systems, ongoing training and professionalization of labor inspectors, and provision of adequate resources and equipment, among other measures.

25. We undertake to promote the right to work in decent and fair conditions as an inherent value of a democratic society, promoting the elimination of all forms of discrimination in labor relations. We will strengthen policies, programs, and projects to prevent and eliminate discrimination, harassment—sexual, psychological or otherwise—in the workplace, violence, and wage gaps, which hinder access to fairer labor conditions.

26. We express our commitment to move forward with creating fairer labor conditions through promotion of stronger gender mainstreaming in employment and labor policies, elimination of discrimination and violence against women, and a balance between work and family obligations. We will also increase our efforts to progressively eliminate the employment gap between men and women, removing obstacles to equal opportunity. In this regard, we intend to further strengthen dialogue and coordination between our ministries and national mechanisms for the advancement of women, under the aegis of the OAS Inter-American Commission of Women (CIM).

27. We will reinforce the role of labor inspection, as well as health and safety measures to prevent and eliminate discriminatory practices, harassment—sexual, psychological or otherwise—in the workplace, as well as violence against women and other segments of the population.

28. We will promote measures that allow a balance between work and family life, in order to avoid impairing the quality of life of workers and increasing social costs.

29. We are committed to developing policies that will help to create opportunities of access to decent work for all vulnerable groups, regardless of their social or economic condition, age, race, ethnicity, gender, or religion.

30. We recognize that migrant workers and their families are particularly vulnerable. Therefore, we reaffirm the importance of fully protecting the human rights of migrants—regardless of their immigration status—and observance of the labor laws applicable to them, including the principles and labor rights embodied in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. We will promote efforts within the sphere of our responsibilities to combat smuggling of migrants, trafficking in persons, and forced labor.

31. We will consider options to generate decent work to mitigate the negative effects of the emigration of skilled workers. At the same time, to improve the situation of migrant workers, we will, within the scope of our competencies, encourage measures aimed at setting up decent working conditions and the dignified, orderly, and safe travel, stay, and return of migrant workers.

32. We will promote policies and programs to eradicate all forms of forced labor, respecting human rights, in general, and social and labor rights, in particular, of all vulnerable groups that are or could be victims of this scourge.

33. In collaboration with our tripartite partners, we will encourage strategies to continuously improve occupational health and safety, promoting a culture of risk prevention in the workplace to ensure safe and healthy work environments.

34. We undertake to foster the development and implementation of policies that will assist in preventing discrimination in the workplace, based on perceived or real status as regards communicable and non-communicable diseases. We will also promote access to decent work for persons affected by these diseases, while respecting the rights of workers to a healthy and safe working environment.

35. We are convinced that social dialogue and collective bargaining within a framework of respect for freedom of association are fundamental pillars of democracy and prosperity in our nations. We will strengthen our efforts to promote forums for social dialogue at the national, regional, and hemispheric levels, and we will work to make them inclusive, open, transparent, and tripartite. In this context, we recognize that social dialogue, tripartite consultation, and respect for the fundamental principles of freedom of association and collective bargaining require representative stakeholders (workers and employers) protected from any practice that impedes or limits the exercise of their autonomy.

36. We will promote the expansion of the coverage of social protection systems through an appropriate combination of contributory and non-contributory schemes, bearing in mind the peculiarities of each country. We will promote the design of sustainable social protection policies and systems that are consistent with the realities of each of our countries and that include active employment measures. In these cases, we will encourage the expansion of coverage based on social protection floors, considering what is defined by the ILO's Global Jobs Pact.

37. We recognize the need for strengthening employment initiatives and social protection to reduce poverty in the region. We highlight the importance of continued support for the Inter-American Social Protection Network (IASPN) to combat poverty in the region through social programs implemented under various government institutions.

38. We will design policies and promote measures to bring forward the gradual formalization of the informal economy, recognizing it as a heterogeneous and multidimensional phenomenon. These policies could include incentives for business formalization, registration, and information systems to facilitate their formalization (one-stop systems), social protection mechanisms, and improvement of occupational health and safety, without prejudice to strengthening labor inspection and its ability to impose penalties.

The Scourge of Child Labor: An Obstacle to the Integral Development of Societies

39. We recognize the need to eradicate child labor, which is an injustice, obstructs progress in our societies, and prevents the integral development of children and adolescents. We underscore that child labor requires a multi-sectoral strategy that demands a more active role on the part of states to effectively enforce legislation pertaining to the minimum working age or mandatory education, as well as raising the need to move toward economic, social, and cultural shifts to overcome the child labor phenomenon and eliminate it as a pretense of training.

40. We will strengthen coordination with the institutions responsible for children and adolescents through an institutional framework dedicated to prevention and eradication of child labor. To that end, we will support actions that increase family income through social protection programs, such as conditional cash transfers and the like.

41. We are aware that the elimination of child labor is only possible with the participation of all sectors of society—particularly workers and employers—and through the establishment of joint initiatives. Likewise, member states will develop appropriate mechanisms along border regions and promote exchange of experiences.

42. We also recall that at the Fourth and Fifth Summits of the Americas, the leaders of our region called on ministers of labor and others to adopt coordinated national strategies to prevent and eradicate the worst forms of child labor by 2020. In addition, it is important that the region’s ministries participate in the upcoming Global Child Labor Conference to be held in Brazil in 2013.

THEREFORE, WE RESOLVE:

A. To implement a plan of action based on this declaration as well as on the work of the XVI IACML and the Fifth Summit of the Americas, and to allocate the necessary resources to that end.

B. To establish two Working Groups:

a. Working Group 1: “Sustainable Development with Decent Work for a New Era of Social Justice”

b. Working Group 2: “Strengthen Ministries of Labor to Promote Decent Work and Social Inclusion”

C. To encourage the countries of the Hemisphere to intensify cooperation and share knowledge, experiences, and achievements in the areas of employment, labor, and social protection, as well as to exchange best practices in promoting decent work for all, in the framework of the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL).

D. To thank the different international organizations for their invaluable collaboration, in particular the members of the Joint Summit Working Group—OAS, ILO, Pan American Health Organization (PAHO), Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Inter-American Development Bank (IDB), etc.—which have played a central role in the promotion of decent work. Furthermore, we invite that all regional dialogue forums be strengthened with these institutions.

E. To commend the Trade Union Technical Advisory Council (COSATE) and the Business Technical Advisory Committee on Labor Matters (CEATAL) on their innumerable contributions to the IACML as constructive interlocutors and consultative bodies.

F. To thank and commend Argentina for its leadership and commitment as Chair of the XVI IACML.

G. To commend the Government of Canada for its outstanding support over the years to the RIAL.

H. To congratulate the United States, Brazil, and Guyana as the officers of Working Group 1, as well as the Dominican Republic, Mexico, and Canada as the officers of Working Group 2.

I. To commend the Dominican Republic, the United States, and the OAS for hosting and organizing the working group meetings of the XVI IACML.

J. To hold the XVIII Inter-American Conference of Ministers of Labor of the OAS in Colombia in 2013.

Plan of Action of San Salvador 2011: Advancing Economic and Social Recovery with Sustainable Development, Decent Work, And Social Inclusion

1. WE, THE MINISTERS OF LABOR, GATHERED IN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, FROM OCTOBER 31 TO NOVEMBER 1, 2011, AT THE XVII INTER-AMERICAN CONFERENCE OF MINISTERS OF LABOR (IACML) OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), undertake to implement the following Plan of Action to advance in the economic and social recovery of our Hemisphere from a perspective that combines sustainable development, decent and productive work, and social inclusion.

A. Organization

2. The Chair *pro tempore* of the XVII IACML (El Salvador) in collaboration with the former Chair (Argentina) and the future Chair (Colombia), with the support of the Technical Secretariat of the OAS and in consultation with the representatives of the Trade Union Technical Advisory Council (COSATE), the Business Technical Advisory Committee on Labor Matters (CEATAL), and the Permanent Technical Committee on Labor Matters (COTPAL), will be responsible for promoting the implementation of the Plan of Action and for improving collaboration and coordination with key international institutions.

B. Resources

3. Member States will devote the appropriate economic, technical and logistical resources to implement the Plan of Action with the participation of COSATE and CEATAL. In addition, the Chair *pro tempore* will invite the relevant regional and international organizations to make voluntary contributions to support activities and projects included in this Plan of Action, and to facilitate the participation of the said workers' and employers' organizations.

C. Working Groups

4. As described below, two working groups will be created, whose main objective will be to advise the IACML on the objectives of the Declaration of San Salvador. As such, those groups will examine in greater depth the topics identified in the Plan of Action, facilitate exchange of experience, provide pertinent information and studies, and follow up on related hemispheric initiatives.

5. In determining their activities and approach to the issues identified in the Plan of Action, the working groups shall adhere to the Declaration of San Salvador, and the final reports of the working groups submitted to the XVII IACML shall be taken into account.

a. Working Group 1: “Sustainable Development with Decent Work for a New Era of Social Justice”

b. Working Group 2: “Strengthen Ministries of Labor to Promote Decent Work and Social Inclusion”

Working Group 1: “Sustainable Development with Decent Work for a New Era of Social Justice”

6. Working Group 1 will follow up on the Declaration of San Salvador from a policy perspective, giving particular attention to the responses of the ministries of labor in relation economic and social recovery. It will continue to build on the work of former Working Group 1 “Decent Work to Face the Global Economic Crisis with Social Justice for a Fair Globalization.”

7. Working Group 1 will address the following issues in follow-up to the Declaration of San Salvador and the reports of the working groups:

- Coherence of economic, labor, education, environmental and social policy, as a means to achieve strong, sustainable, and balanced development;
- Responses of governments and ministries of labor to the challenges of economic and social recovery;
- Examine strategies to maintain and create employment developed by governments, workers, and employers;
- Strategies to reduce income inequalities with particular attention given to all vulnerable groups;
- Policies and programs concerning youth employment;
- Analyze strategies to promote gender mainstreaming in labor and employment policies;
- Support for the sustainability of micro, small, and medium-sized enterprises and other productive units;
- Strategies to overcome labor informality and unregistered work;
- Analysis of initiatives advanced by countries to build a social protection floor;

- Labor dimension of globalization in regional integration processes and free trade agreements;
- Experiences of good practices in social dialogue and collective bargaining.

8. Working Group 1 will conduct, subject to the availability of resources, the following activities, taking into account the recommendations of the final report it presented to the XVII IACML, and may include new areas, as considered necessary:

a. Deepen review of policies, discuss best practices, and determine innovative measures in the region focused on the importance of creating decent and sustainable jobs that protect the rights of workers and provide or expand social protection programs, systems, and benefits for the vulnerable.

b. Underscore the continued need to combat informality and create more opportunities for decent work in the formal sector by combining education, social, economic, and employment policies. Consideration will be given to the exchange of experiences and best practices or strategies on the informal sector, with particular attention to unregistered workers, rural communities, domestic workers, and other vulnerable workers in each country.

c. Continue efforts to support employment and social protection issues under the auspices of the Inter-American Social Protection Network (IASPN) and as a follow-up to the joint RIAL-IASPN seminar on employment and social protection held in Rio de Janeiro, Brazil, in December 2010. Continue cooperation with government agencies at the state and local level on employment and social protection.

d. Engage in a more in-depth exchange of best practices in the region focused on green jobs (i.e., how green jobs are defined, responsible/partner agencies in each country, promotion of green jobs and training, and environmental impact). We recognize the importance that ministries of labor play an active role during the upcoming Rio+20 Conference. Additionally, we intend to identify best practices in the region through a workshop or study on the role of ministries of labor with regard to natural and man-made disasters, and social protection networks in place to assist citizens. We will also discuss the impact of these disasters and emergencies on labor markets.

e. Recognize the importance of micro, small, and medium-sized enterprises in improving human prosperity and social inclusion, and support the call for international and regional finance institutions to increase lending and expand access to credit as referenced at the Fifth Summit of Americas by our region's leaders. We recognize the need to strengthen entrepreneurship initiatives in the region and the role of ministries of labor in this effort.

f. Incorporate social dialogue as a crosscutting topic of the working groups' discussions and continue to expand cooperation, exchange and systematization of experiences in strengthening social dialogue, freedom of association, and collective bargaining.

g. Share best practices in the region and implement programs to promote the skills of our youth, as well as increase their opportunities of access and facilitate their entry to the labor market. We, therefore, reiterate the importance of a follow-up activity to the RIAL youth employment seminar held in Rio de Janeiro, Brazil in 2008, and of updating the RIAL Portfolio of Programs in this area.

h. Continue with the ongoing exchange of information on gender mainstreaming in the region to reduce inequality and prevent violence and harassment in the workplace (sexual, psychological, or otherwise).

i. Support Haiti following the devastating earthquake in January 2010.

j. Strengthen the ongoing contribution of the IACML to the G20 process, particularly with respect to labor issues.

k. Advance in the analysis and follow-up on the labor provisions of free trade agreements and integration processes, giving special attention to the role that ministries of labor are playing in the negotiation of those agreements and their implementation.

Working Group 2: “Strengthen Ministries of Labor to Promote Decent Work and Social Inclusion”

9. Working Group 2 will follow up on the Declaration of San Salvador with regard to matters concerning institutional capacity and will continue to build on the work of former Working Group 2 “Strengthening of the Ministries of Labor to Promote Decent Work.”

10. Working Group 2 will address the following issues in follow-up to the Declaration of San Salvador and the reports of the working groups:

- Strengthen the management capacity of ministries of labor and strategic planning processes;
- Design and follow-up of decent-work country programs and social inclusion programs;
- International cooperation on labor matters;
- Labor market observatories;
- Public employment services;
- Professional, technical and technological training and certification of labor skills;
- Labor inspection;
- Occupational health and safety;
- Development, enforcement, and promotion of labor laws, and effective exercise of fundamental rights at work;
- Strategies to combat child labor and eradicate its worst forms;
- Mainstreaming labor policies to eliminate all forms of discrimination;
- Progress towards eliminating forced labor and trafficking in persons;
- Support access to information and communication technologies (ICTs).

11. Working Group 2 will conduct, subject to the availability of resources, the following activities, taking into account the recommendations of the Final Report presented to the XVII IACML, and may include new areas, as considered necessary:

a. Strengthen the Inter-American Network for Labor Administration (RIAL) as the IACML mechanism for cooperation and technical assistance, as established in section E of this Plan of Action. In that effort, it is fundamental to insist on political commitment to this instrument on the part of the ministries of labor of the Hemisphere.

b. Continue and/or support efforts of labor ministries to build their institutional capacity through, *inter alia*, training and professionalization of their officials and developing strategic planning exercises, adopting a results-based approach.

c. Promote actions by ministries of labor to enhance aspects of professional training for appropriate workforce development, such as innovative experiences of education-company coordination, multi-skill development best practices from the job-skills and skill-certification approach, incorporation of new technologies in learning, coordination with employment services, and job matching.

d. Compile regional, subregional, and national information on innovative practices in the use of information technologies to disseminate and raise awareness of compliance with labor laws. This information could be incorporated in a RIAL database accessible by the countries to promote the exchange of good practices in promoting and respecting fundamental labor rights and principles.

e. Promote corporate social responsibility as an instrument to help promote compliance with labor laws, since buy-in, awareness, consensus, and commitment on the part of societal stakeholders are key in the context of a culture of compliance.

f. Support the expansion and improvement of the public employment services network in order to achieve greater impact at the local level. Share experiences and identify successful practices of participation by societal stakeholders in designing policies, measurement of user satisfaction, and incorporating employer needs and new labor market demands.

g. Strengthen labor market observatories as instruments to provide ministries with labor market studies and appropriate recommendations.

h. Strengthen labor inspection services, in addition to promoting awareness and increasing employer and worker commitment regarding respect for labor rights. Likewise, we will strengthen the exchange of mechanisms, such as the systematization of inspection processes, so that results can be evaluated and timely reports obtained for the formulation of effective policies.

i. Support the formulation of national occupational health and safety policies that reaffirm commitment to promoting effective action in this area, with an emphasis on prevention and compliance. The tripartite approach should be further consolidated, bolstered by the concept of shared responsibility.

j. Reinforce public policies, programs, and actions for prevention and elimination of child labor, and share best practices among countries in the region. We recognize that it is important that ministries of labor play an active role during the World Summit on Child Labor to be held in Brazil in 2013.

D. Guidelines for the Functioning of the Working Groups

12. The working groups will be coordinated by the following ministries of labor, elected by this Conference, who may perform the assigned functions directly or through a representative:

Working Group 1: Ministers of Labor of Brazil (Chair), United States (Vice Chair), and Dominican Republic (Vice Chair).

Working Group 2: Ministers of Labor of Canada (Chair), The Bahamas (Vice Chair), and Mexico (Vice Chair).

13. Participation in working groups will be open to all member states, as well as to COSATE and CEATAL. The Chair *pro tempore* will seek the means to ensure the active participation of all member states and COSATE and CEATAL in the working groups. The General Secretariat of the OAS will be the Technical Secretariat for the working groups, and relevant regional and international organizations will be called upon to provide support and assistance.

14. The working groups, with the support of the Technical Secretariat, are to meet at least twice before the XVIII Inter-American Conference of Ministers of Labor. They should also decide on a timetable for the activities contained in this Plan of Action by February 2012, bearing in mind the complementary nature of their activities and based on earlier experiences of the working groups.

E. Inter-American Network for Labor Administration (RIAL)

15. The IACML recognizes that the RIAL has achieved significant results in institutional strengthening and deepening cooperation between ministries of labor in the region and, therefore, reiterates its full support and commitment to this mechanism.

16. The IACML confirms the creation of the RIAL Voluntary Contribution Fund, established by the IACML working groups in July 2010 and incorporated in the Technical Secretariat. With a view to strengthening the RIAL, the ministries of labor reiterate their commitment to make voluntary contributions to the Fund in accordance with the latter's Guidelines and subject to national capacities.

17. The efforts of the RIAL should be immediately directed toward the following:

- Updating its web page on an ongoing basis.
- Creating a virtual library with institutional information on ministries of labor (authorities, organizational charts, missions, responsibilities, manuals, labor legislation, etc.).
- Holding RIAL workshops in partnership with other organizations and, when possible, organizing the workshops together with working group meetings in order to maximize use of resources.
- Emphasizing follow-up on RIAL activities.

18. The Technical Secretariat will continue to coordinate the activities of the RIAL, following the priorities defined by the IACML and seeking the broadest possible participation of its members. Likewise, the Technical Secretariat will continue to explore possible funding sources for the operations of the RIAL.

19. Member states are to make every effort to ensure the effective operation of the RIAL, including making financial and technical contributions, and are to continue to develop their horizontal cooperation and technical assistance through this mechanism. Furthermore, the ministries of labor undertake to provide regular information to the Technical Secretariat on its operations, authorities, news highlights, and programs designed to update the RIAL Portfolio of Programs.

Ministers of Agriculture

Fifth Meeting of Ministers of Agriculture “Agriculture and Rural Life in the Americas”

October 26 - 29, 2009
Montego Bay, Jamaica

Hemispheric Ministerial Agreement Jamaica 2009 for Agriculture and Rural Life in the Americas “Building capacity for enhancing food security and rural life in the Americas”

We, the Ministers and Secretaries of Agriculture or Heads of Delegation, gathered together at the Fifth Ministerial meeting “Agriculture and Rural Life in the Americas”, in the city of Montego Bay, Jamaica and within the context of the Summit of the Americas process, as a follow-up to the Ministerial Agreement Guatemala 2007 and the mandates related to agriculture, food security and rural life issued at the Fifth Summit of the Americas (Port of Spain, Trinidad and Tobago 2009), hereby reaffirm our commitment to the implementation and updating of the *AGRO 2003- 2015 Plan for Agriculture and Rural Life in the Americas*.

Therefore, having reviewed the national reports on progress made and challenges encountered and identified in the implementation of the AGRO Plan during the 2008-2009 Ministerial Process, and based on the consensus reached by the Ministerial Delegates during the 2009 Meeting of the GRICA (Group for the Implementation and Coordination of the Agreements on Agriculture), we adopt the **strategic actions** of the Hemispheric Agenda for the 2010-2011 biennium and the **measures** for implementing and following up on the AGRO Plan.

2010-2011 Hemispheric Agenda

The updating of the Hemispheric Agenda for the 2010-2011 biennium is based on the current validity of the strategic actions adopted in 2003, 2005 and 2007, and on new challenges and emphasis identified by the countries during the 2008-2009 Ministerial Process, in particular those related to food security, the global economic crisis and climate change, and their impacts on agriculture and rural life.

In defining the **strategic actions** of the present Hemispheric Agenda, and in accordance with the broad-based approach to agriculture and rural life, the AGRO Matrix used by the Ministers and Ministerial Delegates in preparing the AGRO Plan in 2003 and the Hemispheric Ministerial Agreements Guayaquil 2005 and Guatemala 2007 was used.

The AGRO-Matrix

Systemic Concept	Rural Territories	Agricultural Production-Trade Chains	National and International Context	Strategic Objectives
Sustainable Development Approach				
Production – Trade	I. Promoting competitive rural enterprises	II. Integrating chains and strengthening their competitiveness	III. Promoting on environment conducive to competitive agriculture	Competitiveness
Ecological – Environmental	IV. Being environmentally responsible in the rural areas	V. From farm to table: promoting integrated environmental management	VI. Participating in building and institutional environmental framework	Sustainability
Socialcultural – Human	VII. Quality of life in rural communities: creating know-how and opportunity	VIII. Advancing learning and expertise in the chain	IX. Promoting policies to create capabilities and opportunities for the rural communities	Equity
Political – Institutional	X. Strengthening public and private sector participation and coordinated action between them in the territories	XI. Strengthening dialogue and commitments among actors in the chain	XII. Promoting national policies and regional and hemispheric cooperation for agriculture and rural life	Governance
Strategic Objectives	Rural Prosperity – Food Security – International Positioning			Overreaching Goal Sustainable Development Of Agriculture And Rural Milieu

In this context, the principal strategies that inspire this Agreement are:

- to increase national capacities for enhancing food security and rural life,
- to strengthen the positioning of the issues and the priorities of agriculture and rural development in the public consciousness and in national strategies,
- to invest more in agriculture and rural development,

- to encourage the stakeholders of agriculture to adopt a broad-based approach to thinking and acting in agriculture and the rural milieu, and
- to promote with them the “working together” approach to improve agriculture and rural life in the Americas.

Therefore, we express our will to promote, jointly with other stakeholders of agriculture and rural life the following, **strategic actions**:

I. Promoting competitive rural enterprises

(Rural territories – production/trade dimension)

More and better food

1. To promote technological innovation and to disseminate the use of good production practices and of science based technologies, including environmental and sanitary ones, among producers, growers’ organizations, local leaders, and professionals providing technical assistance to contribute to increase production, productivity, nutrition, food quality and safety, competitiveness, and sustainability of agricultural activities.

Diversification of the Food basket

2. To improve the quality of life in rural areas by encouraging the production of traditional foods of cultural significance that are locally consumed, enhancing the use of under-utilized species and varieties and promoting an increase in their productivity and marketing, through research among other means, with a view to contributing to the diversification of the food basket, local supply, food security and the conservation of biodiversity.

II. Integrating chains and strengthening their competitiveness

(Agricultural production-trade chains – production/trade dimension)

Storage and food processing

3. To promote the improvement of harvesting, storage and food processing technologies and infrastructure through public and private investment that contributes to a better use of agricultural production, a reduction of post harvest losses and an increased food supply to local and export markets.

III. Promoting a harmonized environment conducive to competitive agriculture

(National and international context – production/trade dimension)

Plant and animal health and food safety

4. To strengthen capacity development and modernization of national and international institutions for plant and animal health and food safety with the objective of:

- improving veterinary, phytosanitary and public health status of the countries,
- the harmonization of sanitary and phytosanitary measures according to science-based international standards,
- border and cross-border disease controls, and
- the management capacity to prevent and combat invasive organisms and diseases.

Soils and water management

5. To strengthen, jointly with the cooperation of other national institutions and with the technical assistance of international organizational bodies:

- the implementation of national strategies,
- exchange of international experiences, and
- mobilization of resources

to enhance the capacities of agriculture stakeholders, promote conservation and sustainable management of soils and water resources and to address degradation, desertification, floods and droughts for the protection of land and water as common resources of humankind so as to encourage agricultural production and productivity.

Land and land tenure

6. To create programs that facilitate access to land, and establishing mechanisms for security of tenureship and land titling for small producers.

Risk management and agricultural emergencies

7. To improve and develop instruments for the management of risks such as:

- agricultural insurance
- mechanisms to combat risks related to illegal occupation and praedial larceny,
- integration of early warning information systems,
- international networks for cooperation in risk assessment,

as well as to strengthen the comprehensive management of emergencies in agriculture and the rural milieu caused by agro-climatic and meteorological changes, and by human intervention.

IV. Being environmentally responsible in the rural areas

(Rural Territories – ecological/environmental dimension)

The challenges identified are covered by the previous hemispheric agendas and, therefore, no complementary strategic actions are suggested.

V. From farm to table: promoting integrated environmental management

(Agricultural production-trade chains – ecological/environmental dimension)

The challenges identified are covered by the previous hemispheric agendas and, therefore, no complementary strategic actions are suggested.

VI. Participating in building an institutional environmental framework

(National and international context - ecological/environmental dimension)

Climate change

8. To strengthen the agricultural sector's capacity to mitigate and to adapt to climate change through the development and implementation of strategies that address:

- coordination between environmental and food security policies,
- development of incentives for those that protect the environment,
- generation and use of environmentally sustainable technologies and practices,
- increasing public and private sector investment, and
- assessment of the impact of climate change and the exchange of information.

Multisectoral agroenvironmental management

9. To actively encourage a multisectoral approach for the development of national strategies in agro-environmental management in rural areas.

VII. Quality of life in rural communities: creating know-how and opportunity

(Rural Territories – sociocultural/human dimension)

Management and leadership

10. To improve entrepreneurial management and leadership capacities through the operation of appropriate rural institutions offering services such as training, technological dissemination, innovation, market information and other services required for production, processing and marketing. These activities should give special priority to small and medium size producers and entrepreneurs, field workers, women and youth.

VIII. Advancing learning and expertise in the chain

(Agricultural production-trade chains – sociocultural/human dimension)

The challenges identified are covered by the previous hemispheric agendas and, therefore, no complementary strategic actions are suggested.

IX. Promoting policies to create capabilities and opportunities for the rural communities

(National and international context - sociocultural/human dimension)

Production and income

11. To promote expansion of producers and rural entrepreneurs and increased rural incomes through:

- clear price signals for inputs, food products and associated processing and transportation costs,
- increased capacity for post harvest storage and marketing,
- national strategies directed to the incorporation of rural groups, organizations and communities into the production process,
- increased investment in agriculture,
- strengthening of small and medium size rural enterprises,
- participation of rural women and youth in income and employment generating activities, to contribute to the improvement of the quality of life in the rural milieu giving priority to those that present a higher level of social vulnerability and to food insecurity.

X. Strengthening public and private sector participation and coordinated action between them in the territories

(Rural Territories – political/institutional dimension)

Focusing on rural territories

12. To promote the use of a systemic, multisectoral and participatory approach in the design of policies and programs and in the assignment and focusing of resources for improving agriculture, food security and sustainable rural development.

XI. Strengthening dialogue and commitments among actors in the chain

(Agricultural production-trade chains – political/institutional dimension)

Coordination mechanisms and chain approach

13. To promote or strengthen, as required, the creation and operation of formal coordination mechanisms with all public and private agricultural production chain stakeholders, to facilitate, among other things:

- identifying and eliminating those factors that restrict their competitiveness,
- the integral analysis of such chains through a chain approach,
- trust building and institutional mechanisms to solve the conflicts inherent to each chain,
- improving logistics from farm to the table,
- improving regulatory compliance
- responding to crises
- dialogue, reaching agreements and follow-up of action commitments.

XII. Promoting State policies and regional and hemispheric cooperation for agriculture and rural life

(National and international context – political/institutional dimension)

Institutional capacity

14. To enhance the public and private institutional capacity in order to promote:
- participation of stakeholders in the agricultural sector and the development of their own capacities,
 - expansion of technical services and technological innovation to improve the entire agricultural value chain, with particular emphasis on small and medium sized producers and entrepreneurs,
 - building trade capacities for the benefit of agriculture and rural communities,
 - environmental management of the different agricultural activities,
 - inter-institutional coordination, and
 - informed participation in international forums regarding agriculture and rural life.

Investment in agriculture and rural development

15. Promoting National policies to increase public and private, national and international investment as well as better financing of agriculture, agribusiness, small and medium-size enterprises, cooperatives, infrastructure and public goods for the rural milieu.

Implementation and Follow-up

The AGRO 2003-2015 Plan reflects the will of the countries to work together towards the Shared Vision 2015, with the understanding that national governments are the main parties responsible for the implementation of the shared agenda and to coordinate the participation with the other public and private agricultural stakeholders in view of their international commitments and agreements.

Dissemination of the Jamaica 2009 Hemispheric Ministerial Agreement and the AGRO-Matrix

16. The implementation of the Jamaica 2009 Hemispheric Ministerial Agreement requires a joint action on the part of stakeholders in the public, private and social sectors. Therefore, it is necessary to widely disseminate the Jamaica 2009 *Hemispheric Ministerial Agree-*

ment, an activity that the ministerial delegates will undertake with the support of the IICA offices in their countries, taking their national policies into account.

The broad-based and comprehensive way in which we conceive agriculture and rural life in the Plan (expressed in the AGRO-Matrix) represents the main contribution of our ministerial process to facilitate an understanding of the importance of agriculture and the rural milieu to development in our countries, in accordance with the call of the Port of Spain Declaration of Commitment, Trinidad and Tobago, for us to initiate actions by 2009 to facilitate implementation of the Heads of State and Government commitments as indicated in paragraphs 23, 24, 25, 90 and 93 of this declaration.

Regional mechanism and strategies

17. To strengthen regional meetings of ministers of agriculture, regional meetings of other agricultural stakeholders, as well as working together with the mechanisms for the regional integration of agriculture and for consultation and identification of priorities, coordination of actions and adoption of regional policies on matters of common interest, in the context of the AGRO 2003-2015 Plan.

Support from and alignment of the international organizations

18. We reiterate our calls to the international organizations, made in 2001, 2003, 2005, 2007 and request that they actively participate in the implementation of the Hemispheric Ministerial Agreement Jamaica 2009.

Updating of the Hemispheric Agenda

19. The 2010-2011 Hemispheric Agenda is the fourth of six biennial agendas for the implementation of the AGRO Plan. National governments will deliver reports on progress in implementing each biennial agenda and identify challenges faced. These reports will serve as input for updating the Agenda for the 2012-2013 period. We therefore entrust:

- The Ministerial Delegates with preparing, with the support of the Secretariat of the Ministerial Process, the national report on progress and challenges in implementing this Ministerial Agreement.
- The Hemispheric Forum of Ministerial Delegates (GRICA) with developing the Ministerial Agreement for the 2012-2013 biennium.
- The Technical Secretariat, with reporting, in the Sixth Ministerial Meeting, on the progress of the Ministerial Process “Agriculture and Rural Life in the Americas” and on any actions carried out to ensure coordination of this ministerial process with the Summit of the Americas process, with the purpose of consolidating the positioning of agriculture and rural life in the Sixth Summit of the Americas, to take place in the city of Cartagena de Indias, Colombia in 2012.

Dialogue forums for other agricultural stakeholders

20. Due to the importance of the participation of all stakeholders in the value chain to achieve the agricultural and rural milieu development objectives, we consider necessary to promote dialogue forums parallel to the Ministerial Meetings for the other key agricultural stakeholders, such as private industry and social organizations, among others. With this in mind we request IICA and other international organizations, institutional partners of the Summit of the Americas Process, to support the implementation of such forums in future Ministerial Meetings.

Implementation mechanisms

21. Against the background of concerns about the effective implementation of the Hemispheric Agenda 2010-2011, we mandate IICA to provide support to strengthen and monitor the implementation of the Agro Plan in Member States and to facilitate exchange of experiences.

Signed in the city of Montego Bay, Jamaica on the twenty-ninth day of October of two thousand and nine

Meeting of Ministers of Agriculture of the Americas 2011

“Sowing innovation to harvest prosperity”

October 19 - 21, 2011

San Jose, Costa Rica

San Jose Declaration of Ministers of Agriculture 2011

1. We, the Ministers and Secretaries of Agriculture of the Americas, gathered together in San Jose, Costa Rica, October 19-21, 2011, with the objective of engaging in dialogue and undertaking commitments in order to advance towards achieving food security, rural well-being and the development of competitive, sustainable and inclusive agriculture, and in harmony with the challenges and thematic areas indicated for the Sixth Summit of the Americas, “*Connecting the Americas: Partners for Prosperity*”, Colombia 2012:

2. Believing that agricultural innovation is a catalyst for growth and positive change. Moreover, we agree that fostering innovation is vital to increasing and intensifying production, improving incomes for farmers and rural populations, reducing the environmental impacts of agriculture, adapting to climate change and, consequently, achieving food security and better well-being for all our citizens.

3. Recognizing that innovation in agriculture can include: better practices, improved products, better infrastructure to support farmers and to bring food to markets, technology transfer, new ways of sharing information and building relationships through value chains, training and extension services, and a science-based legal framework that supports innovation.

4. Being aware that meeting today’s challenges, and preparing for the future ones can only be achieved if we enable more innovation in agriculture throughout our hemisphere, given that by 2050 it is estimated that there will be a worldwide need to produce 70% more food in order to achieve food security in the face of climate change, high input costs, and the impossibility of significantly increasing the areas under cultivation.

Do hereby declare that:

5. Agriculture and the rural economy play a fundamental role in the overall development of all the countries of this hemisphere to guarantee the economic and social growth of the inhabitants of the Americas.

6. Innovation, technology transfer and effective access to them are key elements to achieving a sustainable, competitive and inclusive agriculture.

7. Innovation processes will help agriculture to weather the consequences of the economic crises that are affecting it and offer tools for converting the sector into an axis for economic and social development.

8. Adoption of transparent regulatory systems and public policies to promote and support innovation in agriculture is fundamental to achieving the development and use of innovative agricultural technologies and practices and the objectives of competitiveness and economic growth, with social integration, in each of our countries.

9. The use of science-based standards and measures which ensure protection of the environment as well as the life and health of human beings, animals and plants, while not unduly restricting trade, is key to allowing the countries to benefit from better access to innovative agricultural technologies.

10. The regional and hemispheric initiatives with respect to innovation are an excellent complement to the efforts that each of our countries is deploying and will therefore be the priority areas for joint action.

11. The support of international bodies for technical cooperation and development funding is essential to achieving the common objectives that we as countries have established, and to the strengthening of the national innovation systems, as determined by each country.

12. The Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) has assumed a leadership role in supporting innovation for the competitive and sustainable development of agriculture in the Americas and for improving rural life through the provision of technical cooperation, the leveraging of its specialized knowledge and its networks of experts, implementing projects, and working with its Member States.

For these reasons, we urge:

13. The Heads of State and Government, the international funding and cooperation agencies, the institutions that make up the Joint Summit Working Group, public institutions and private sector companies in each country and all members of the agrifood value chain, to perfect the institutional innovation frameworks and increase investment in and funding for the agricultural innovation systems in a sustainable, predictable and adequate manner.

14. The international organizations of the United Nations System which operate within the hemisphere, the national agencies for international cooperation, the national governments, the research centres and regional research and innovation mechanisms, to cooperate mutually on behalf of the countries and to develop a regional strategy to promote innovation, technology transfer and fair access to technology for achieving competitive, sustainable and inclusive agriculture in the Americas; and

We commit to:

15. Promoting, with the help of private and public institutions, a greater role for research and development of knowledge, and agricultural and agroindustrial technologies in the

national innovation systems, as well as the transfer of technology and fair access for family agriculture to these new technologies.

16. Propelling the transformation of national agricultural research institutions into national systems for agricultural innovation, thereby strengthening the capacities of national institutions, promoting the creation of technological observatories and the development of public innovations linked to the modern elements of international agricultural competitiveness.

17. Promoting, in collaboration with the institutions and stakeholders involved in the improvement of agriculture, a culture of innovation within the technological, institutional and business spheres, by encouraging interdisciplinary work through different networks and alliances among participants in the system.

18. Adopting public innovation policies in the agrifood sector, strengthening the creation and improvement of public and private organizations with responsibility in this area and encouraging their effective and committed participation.

19. Developing comprehensive national innovation strategies that will guide governmental efforts towards improving agricultural productivity, the quality of agricultural products, value added at origin and the full development of its productive capacity.

20. Innovating sanitary and phytosanitary risk evaluation and management for the protection of humans, animals and plants, taking into account the environment, as a key element for allowing countries to benefit from better access to innovative agricultural and agrifood products.

21. Establishing favorable conditions for promoting strategic alliances and for collaborative work among public and private institutions, both national and international, in the development, transfer and use of innovative technologies and practices oriented towards agricultural productivity and sustainability.

22. Continuing to cooperate, within and outside the hemisphere, in order to share experiences and generate knowledge regarding the best ways to encourage innovation and foster, with the assistance of international and regional organizations, joint collaborative actions, mechanisms, programs and networks for North-South and South-South, as well as triangular cooperation on innovation, such as the recently established Network for the Management of Innovation in the Agricultural Sector, in which 44 institutions and 14 countries will participate.

23. Supporting early-warning systems on food security and improving the availability of timely and reliable market information so that it can contribute to the transparency required in food security and to identifying commercial opportunities for our agricultural products.

24. Supporting the work of the Market Information Organization of the Americas (MIOA) and promoting greater collaboration between the Member States on the topic of market information.

25. Increasing direct investment in order to promote the generation of new knowledge and rebuild the national extension systems, in order to ensure transfer of this new knowledge and promote the creation of modern and efficient institutional forms of technological extension, involving different types of public and private stakeholders.

26. Making innovation possible through regulatory approaches and policy frameworks that are transparent, science-based, consistent with international obligations, and which take into account, where appropriate, existing international standards in order to facilitate trade in products derived from innovative agricultural technologies, while ensuring the protection of human, animal and plant health, as well as the environment.

27. Pushing for the adoption of innovations that strengthen, in a responsible manner, adaptation of the various systems and scales of agricultural production to weather variability, both environmentally and in the use of natural resources, from the research centres to the field and to the consumers, and adapting them to the different types of agriculture/agroindustry, including small and medium-sized enterprises and related activities with potential.

28. Supporting technological and institutional innovations that (i) facilitate better integration of agriculture – including family agriculture – into the agroindustry export chains, (ii) strengthen the links between the traditional sectors and the “intensive knowledge” sectors, (iii) strengthen the technological base to undertake competitive activities, and (iv) favour rural social integration.

29. Fostering innovation in irrigation management and technologies that contribute to productivity and to better control of production systems in the face of climate events.

30. Stimulating innovation in different types of agroenergy that contribute to diversification of the energy matrix and reduction of environmental impacts.

31. Reinforcing the national and regional systems for monitoring and forecasting agroclimatic variables, promoting climatic risk management and the establishment of mechanisms for risk management, and facilitating the identification and dissemination of practices that reduce the vulnerability of agriculture and the rural milieu.

32. Investing in the improvement of our human resources in the areas of research and innovation and, by so doing, promoting a generation of entrepreneurs.

33. Strengthening IICA so that, working jointly with the countries, it can foster innovation in agriculture by supporting the formulation of strategies, policies and regulations, the decision-making process with respect to science-based technological innovation, institutional modernization, the development of national capabilities, the management and dissemination of knowledge and technology, the formulation and implementation of investment projects geared towards promoting innovation and the mobilization of external resources for agriculture and innovation.

Signed in the City of San Jose, Costa Rica, on the twenty-first day of October, two thousand and eleven.

Ministers of Public Security

Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA II)

November 4 - 5, 2009

Santo Domingo, Dominican Republic

Consensus of Santo Domingo on Public Security

We, the Ministers Responsible for Public Security in the Americas and the representatives of the member states of the Organization of American States, gathered in Santo Domingo, Dominican Republic on November 4 and 5, 2009 at the Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA II), convened by the General Assembly of the Organization in resolution AG/RES. 2444 (XXXIX-O/09);

REITERATING the validity and importance of the “Commitment to Public Security in the Americas,” adopted during the First Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas, held in Mexico City in October 2008, and also of the Declaration of Port of Spain of the Fifth Summit of the Americas;

BEARING IN MIND that in the aforementioned “Commitment to Public Security in the Americas” the representatives of the member states expressed their political will to, and the priority of, addressing all forms of crime, violence, and insecurity in a mutually supportive, preventive, comprehensive, coherent, effective, and continuous manner;

TAKING NOTE of the outcomes of the Inter-American Specialized Conference on Public Security: Meeting of Experts to prepare for MISPA II, held in Montevideo, Uruguay, in August 2009, and of the civil society preparatory meeting, held in Lima, Peru, in September 2009;

RECOGNIZING that public security conditions improve through full respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the promotion of education, culture, health, and economic and social development;

RECOGNIZING ALSO that additional efforts are needed at the hemispheric, subregional, national, and local levels, to reduce crime, violence, and insecurity in the region;

UNDERSCORING the importance of public security management; prevention of crime, violence, and insecurity; police management; citizen and community participation; and international cooperation;

CONSIDERING the importance of actively adopting prevention policies, programs and actions to fight crime, violence, and insecurity, protecting at-risk youth and vulnerable populations; and

CONCERNED at the adverse economic and social impact of transnational organized crime and other forms of organized criminal activity and convinced that cooperation urgently needs to be strengthened to more effectively prevent and combat those activities at the domestic, regional, and international levels, while respecting the sovereignty of states,

SHOULD THEREFORE:

1. Forge ahead with implementation of the “Commitment to Public Security in the Americas” (MISPA/doc.7/08 rev. 4).

2. Encourage member states to exchange best practices and experiences on the subject of prevention of crime, violence, and insecurity, public security management, police management, citizen and security participation and international cooperation based on the successful experiences of member states and of citizen and community participation.

3. Request the General Secretariat to propose, within the framework of the Committee on Hemispheric Security (CSH) and with the support of member states, initiatives needed to fully implement the “Commitment to Public Security in the Americas.”

4. Thank the OAS General Secretariat for the draft feasibility study on the best means to strengthen the training and education of personnel responsible for public security in the region (MISPA/RE/doc.4/09); request that it complete the study with input from the member states, so that it can be submitted to MISPA III for consideration by the ministers; and ask that it keep the CSH permanently informed of progress made.

5. Institutionalize the MISPA process by holding a Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas every two years (in odd years), beginning with this one, and a preparatory meeting of experts prior to the ministerial meetings, in the framework of the CSH.

6. We thank the Government of the Republic of Chile for its kind offer to host the next meeting of experts to prepare MISPA III and are pleased to accept that offer.

7. We look forward to continuing the MISPA process at our third meeting, to be held in the Republic of Trinidad and Tobago.

8. We thank and acknowledge the people and Government of the Dominican Republic for hosting the Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas and for the warm welcome they extended during this meeting.

Santo Domingo, Dominican Republic, on this fifth day of the month of November of two thousand and nine.

Third Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA III)

November 17 - 18, 2011

Port of Spain, Trinidad and Tobago

Port of Spain Recommendations for Police Management

We, the ministers responsible for public security in the Americas and the representatives of the member states of the Organization of American States (OAS), gathered in Port of Spain, Trinidad and Tobago, on November 17 and 18, 2011, at the Third Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA III), convened by the General Assembly of the Organization in accordance with resolution AG/RES. 2629 (XLI-O/11);

REITERATING the importance of implementing the *Commitment to Public Security in the Americas* adopted during the First Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA I), held in Mexico City, in October 2008, as well as the *Consensus of Santo Domingo on Public Security*, adopted during the Second Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA II), held in Santo Domingo, Dominican Republic in November 2009;

TAKING NOTE of the outcomes of the Meeting of Experts to Prepare for MISPA III held in Santiago, Chile in November 2010, in particular the support given by member states for the proposal made by the Government of Trinidad and Tobago to focus, during MISPA III, on the police management pillar of the *Commitment to Public Security in the Americas*;

UNDERSCORING that effective police management by the competent national authorities requires the formulation and implementation of comprehensive policies to fully and adequately address public security concerns;

RECOGNIZING that professionalization and strengthening of the police requires ongoing observance of the relevant human rights norms and principles, as well as of fundamental freedoms, democracy, and the principles of justice, impartiality, and gender equality, consistent with the domestic legislation of each state, and also require enhancing the national capacity of states through the provision of technical assistance, capacity-building, and training of police and civilian personnel with responsibility in public security management.

TAKING NOTE of the completion of the Feasibility Study for Strengthening the Training of Public Security Personnel in the Region, prepared by the OAS General Secretariat; and

TAKING NOTE ALSO of the “Document of Port of Spain: Institutionalization of the MISPA Process” adopted at this ministerial meeting and which governs the MISPA process;

Agree on the following recommendations for strengthening police management in the Hemisphere:

1. Foster the strengthening of information systems, among other measures by improving data collection and record-keeping methods utilizing available technology, promoting investigative cooperation and knowledge-sharing at the sub-regional, hemispheric and international levels consistent with applicable domestic legislation.
2. Promote public trust and confidence in police management organizations by, *inter alia*, adopting measures to foster responsibility, transparency, effectiveness, citizen and community participation, respect for human rights, and a comprehensive gender perspective.
3. Conduct police training programs that foster respect for human rights in the performance of police functions.
4. Support professionalization and training for personnel with responsibility for public security and improve, where necessary, professional development and career management systems for the police.
5. Instruct the General Secretariat of the Organization of American States to continue, in consultation with the member states, ongoing education and training programs for police personnel and persons responsible for public security, to help strengthen police management in areas of interest specified by member states, within the framework of the Inter-American Police Training Program and bearing in mind, *inter alia*, the agreements signed by the OAS General Secretariat.
6. Request the OAS General Secretariat to prepare, update, and publish an inventory of training programs offered by member states to increase awareness of and access to training opportunities, building on the OAS General Secretariat document that compiles best practices and experiences on police management and international cooperation.
7. Encourage awareness and, where appropriate, the use of technologies to promote efficiency in and modernization of police management and training.
8. Encourage member states to consider exchanging civilian and police training program material and instructors to create new areas of cooperation and training.

FOLLOW-UP:

9. Request the General Secretariat of the Organization of American States (OAS) to provide the member states with ongoing technical support in order to achieve the purposes and objectives of these Recommendations.
10. Instruct the General Secretariat of the OAS to inform the relevant international hemispheric, regional, and subregional organizations of the outcomes of the Third Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA III) and encourage them to consider and, as appropriate, act on these outcomes.

11. Invite member states, permanent observers to the OAS, institutions of the inter-American system, and other international agencies to consider making voluntary financial, technical and/or human resource contributions to achieve the implementation of these Recommendations.

12. Request the OAS Permanent Council to follow up on these Recommendations through the Committee on Hemispheric Security.

13. Welcome with satisfaction the offer of the Government of the Republic of Colombia to host the Fourth Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA IV) in 2013.

14. We, the Ministers responsible for public security in the Americas and the representatives of the member states of the Organization of American States also express our appreciation to the Government of the Republic of Trinidad and Tobago for having hosted this Third Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA III) in Port of Spain, Trinidad and Tobago.

November 18, 2011

Document of Port of Spain: Institutionalization of the MISPA Process

I. Purpose of the Document

1. Purpose of the Document. This Document (hereinafter, the “Document”) shall govern the process of Meetings of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA). To that end, it refers to the subjects specified in each chapter.

The MISPA meetings will perform their functions in the framework of the purposes, principles, and other pertinent provisions of the Charter of the Organization of American States (OAS).

The provisions contained in the Rules of Procedure of the General Assembly and of the Permanent Council of the OAS shall apply, as appropriate and in that order, to any aspects not provided for in this document.

This document shall be known as the “Document of Port of Spain: Institutionalization of the MISPA Process.”

II. Composition and Functions of the MISPA Meetings

2. Composition. The MISPA meetings shall be attended by the Ministers of Public Security or other ministers of the member states of the OAS with responsibilities in the area of public security.

The governments of the member states of the Organization may accredit delegations to the ministerial meetings. The delegations shall comprise the heads of delegation, alternate delegates, and advisers accredited by the governments.

States, through their permanent missions to the OAS, shall apprise the Secretariat in writing of the composition of their respective delegations, identifying the head thereof.

3. Functions. The functions of the MISPA meetings are as follows:

- a. Act as a hemispheric forum for information and experience sharing, and for consolidating and strengthening cooperation in areas relating to public security.
- b. Formulate recommendations to the OAS member states on cooperation in the area of public security.
- c. Follow up on their recommendations and, to that end and as necessary, assign specific mandates, including their timeframes, to subsidiary technical working groups.
- d. Continue to follow up on existing mandates, which are the subject of recommendations from MISPA meetings held prior to the approval of this document.
- e. Promote, as necessary, strengthening of coordination and cooperation between the MISPA meetings and other OAS organs, agencies, entities, and mechanisms and, to that end, formulate recommendations and follow up on them to the extent they deem appropriate.
- f. Promote and facilitate coordination and collaboration between the MISPA process and other international cooperation processes in areas related to public security.
- g. Facilitate other functions agreed upon.

III. Structure and Responsibilities

4. Frequency, venue, and convocation of meetings. The MISPA meetings shall be held biannually (in odd years).

The venue of the next MISPA meeting shall be determined based on offers made by member states at each MISPA meeting.

Should the foregoing not occur, member states may offer to host a MISPA meeting by means of a written communication addressed to the Secretary General of the OAS, who would inform all of the member states through their permanent missions to the Organization.

If no offer to host one of these meetings is forthcoming, or if for any reason the meeting is unable to be held at the appointed place, it shall be held at the headquarters of the General Secretariat of the OAS.

The General Assembly or, failing that, the Permanent Council of the OAS, shall adopt a resolution formally convening each MISPA meeting, and shall set the date and, in the circumstances referred to in the two immediately preceding paragraphs, also the place of each meeting.

5. Chair and Vice Chairs. Once a MISPA meeting has been formally convened as provided in the last paragraph of the preceding provision, the member state that is to host the meeting shall take up the Chair and convene the preparatory meetings referred to in provision 7 of this Document.

In the event that a MISPA meeting is to be held at the headquarters of the General Secretariat of the OAS, the member state that is the incumbent Chair shall remain as such and shall convene the preparatory meetings referred to in provision 7 of this Document. In such circumstances, the Chair of the MISPA meeting shall be elected at the start of the respective meeting.

Also, the Vice Chairs of each MISPA meeting shall be elected at the start of the respective meeting. The Vice Chairs shall replace the Chair in the event of any impediment thereto.

6. Functions of the Chair. The functions of the Chair are as follows:

- a. Represent the MISPA process before the organs of the OAS and at meetings, acts, or ceremonies to which they are invited in that capacity.
- b. Coordinate the preparation, proceedings, and follow up of the MISPA meetings with the Secretariat.
- c. Convene preparatory meetings and present to said meetings for consideration the draft agenda and documents of the MISPA meetings, with technical support provided by the Secretariat.
- d. Call sessions to order, adjourn sessions, and chair the proceedings.
- e. Submit for consideration the items on the approved agenda for each MISPA meeting.
- f. Rule on points of order that may be raised in the course of the proceedings.
- g. Submit for consideration any items under discussion that require a decision, in accordance with provision 9 of this Document, and announce the results.
- h. Such other functions as this Document and the MISPA meetings may confer on the Chair in keeping with the nature of his or her responsibilities.

7. Preparatory Meetings. In keeping with provision 5 herein, preparatory meetings shall be called sufficiently in advance of the date each MISPA meeting is to be held, so that the authorities of the MISPA meeting may consider sending their representatives.

Preparatory meetings shall consider and prepare the draft agenda, draft schedule and final document of the respective MISPA meeting. To that end, the deadlines for states, through their permanent missions to the OAS, to submit written proposals with respect to these documents will be adopted at the preparatory meetings.

So long as it is possible and should it be necessary, the decision may be made to hold the last preparatory meeting on the day or days immediately before the start of the respective MISPA meeting.

For the adoption of decisions at preparatory meetings, where pertinent, provisions 8 and 9 of this Document shall apply.

8. Quorum. The presence of one third of the member states of the Organization shall constitute the quorum necessary for the MISPA meeting and its subsidiary technical working groups to meet in session.

The presence of the majority of the representatives of the OAS member states shall constitute the quorum necessary for the agreements referred to in the following provision.

9. Agreements. Agreements arrived at by the MISPA meetings shall be termed “recommendations” and their nature will be as such.

As a general rule, recommendations and other documents considered at meetings shall be adopted by consensus. Should discrepancy arise on a given matter, the Chair shall interpose its good offices and take all the measures in its power to attain consensus. If no consensus is reached and the Chair considers that this stage has been exhausted, the matter may be put to a vote. In the latter case, each delegation shall be entitled to one vote and the resulting decision shall be adopted by an absolute majority of votes of the delegations present.

The implementation of any recommendations that may result in expenses for the OAS shall be subject to the consideration of those expenses by the competent bodies of the OAS, in accordance with the provisions and procedures established in the framework of the Organization.

10. Participation of Permanent Observer States. Permanent observer states to the OAS may participate in that capacity in the MISPA meetings, for which purpose they shall provide information on the composition of their respective delegation in a written communication transmitted through the Secretariat.

11. Participation of OAS organs, agencies, entities, mechanisms and working groups. Any OAS organs, agencies, entities, mechanisms and working groups may participate, as observers, in the MISPA meetings, provided there is a consensus to that effect among the member states.

12. Participation of other international agencies. Where relevant, the provisions contained in the Rules of Procedure of the General Assembly of the OAS shall apply to the participation of other international agencies in the MISPA meetings.

13. Participation of civil society organizations. Civil society organizations that are duly accredited pursuant to the “Guidelines for the Participation of Civil Society Organizations in OAS Activities” [CP/RES. 759 (1217/99)] and the “Strategies for Increasing and Strengthening Participation by Civil Society Organizations in OAS Activities” [CP/RES. 840 (1361/03)], may participate, as observers, in the MISPA meetings.

IV. Subsidiary Technical Working Groups

14. Subsidiary Technical Working Groups. The MISPA process may set up subsidiary technical working groups to follow up on its recommendations, based on the five pillars established in the Meetings of Ministers Responsible for Public Security, namely public security management; prevention of crime, violence and insecurity; police management; citizen and community participation; and international cooperation, as well as other current and emerging issues.

The MISPA process will assign specific mandates and timeframes to the subsidiary technical working groups, which the latter will carry out between MISPA meetings and report on the results achieved in relation thereto.

The mandate of each subsidiary technical working group shall expire at the end of the time allotted by the ministers responsible for public security. Where no such time allotted is specified, the mandate shall expire when, in the opinion of the ministers, it has fulfilled its purpose or whenever the ministers deem it appropriate.

15. Functions of subsidiary technical working groups. Subsidiary technical working groups shall have the following functions:

- a. To implement the mandates that they receive from the MISPA process in their areas of competence.
- b. To report at the MISPA meetings, or whenever else they might be requested to do so, on progress in implementing the mandates or functions assigned to them.
- c. Any other functions that the MISPA process assigns to them in accordance with their areas of competence.

16. Frequency, venue and convocation of meetings of subsidiary technical working groups

Unless otherwise directed by ministers, subsidiary technical working groups may meet on at least one occasion within the timeframe allotted to their existence by ministers.

Meetings of subsidiary technical working groups shall be held at the headquarters of the General Secretariat of the OAS, unless a member state offers to host a particular meeting.

Meetings of subsidiary technical working groups shall be formally convened by resolution of the Permanent Council of the OAS, which shall set the date and place thereof, in consultation with the Chair of the subsidiary technical working group.

17. Chair and Vice Chair of subsidiary technical working groups.

The MISPA shall elect the chair of each subsidiary technical working group at the session in which the latter is established.

The delegations of the states that come after the Chair in alphabetical order in Spanish shall be the Vice Chairs *ex officio* of the respective subsidiary technical working group and shall replace the Chair in the event of any impediment thereto.

In the event that the meeting of a subsidiary technical working group is to be held away from the headquarters of the General Secretariat of the OAS, once the respective meeting has been convoked in accordance with the last paragraph of the preceding provision, the state that is to host the meeting shall chair the group and coordinate the preparations for the meeting with the support of the Secretariat.

18. Functions of the Chair of subsidiary technical working groups. The Chair of each working group shall have the following functions:

- a. Coordinate the preparation and proceedings of subsidiary technical working group meetings with the Secretariat, in accordance with the mandates assigned to the working group by the MISPA process.
- b. Report to the MISPA meetings on progress in the implementation of mandates assigned by them to the subsidiary technical working group.
- c. Call sessions to order, adjourn sessions, and chair the proceedings at meetings of the subsidiary technical working group.
- d. Submit for the consideration of the plenary of the subsidiary technical working group the items on the approved agenda for each meeting of the working group.
- e. Rule on points of order that may be raised in the course of the proceedings.
- f. Submit for the consideration of the plenary of the subsidiary technical working group any items under discussion that require a decision, in accordance with provision 9 of this Document, and announce the results.
- g. Such other functions as this Document and the MISPA process may confer on him or her in keeping with the nature of their responsibilities.

19. Preparations for meetings of subsidiary technical working groups. The Secretariat shall assist the Chair in preparing a preliminary draft agenda and, in keeping with the instructions of the latter, distribute it to the other delegations at least one month in advance, stating the time limit for member states to submit any observations or proposals that they may have in relation thereto. A revised version of the draft agenda that takes into account observations or proposals received in due time shall be prepared and presented for consideration at the beginning of the meeting.

Once the observations and proposals have been received, should it be necessary, in the opinion of the Chair, to hold a preparatory meeting, then the Chair will convene such a meeting.

20. Adherence to provisions established for the MISPA process. In matters for which no provision is made in this chapter, subsidiary technical working groups shall adhere, as appropriate, to all provisions established herein for the MISPA process as well as all other provisions applicable thereto.

V. Relations with OAS Organs, Agencies, Entities, and Mechanisms

21. Relations with OAS organs, agencies, entities, and mechanisms. The MISPA meetings shall consider and formulate such recommendations as they deem appropriate to consolidate and strengthen coordination, information exchange, and cooperation with OAS organs, agencies, entities, and mechanisms in areas of common interest, striving to avoid duplication of efforts in connection with those areas.

VI. Relations with other Cooperation Processes

22. Relations with other cooperation processes. The MISPA meetings shall formulate such recommendations as they deem appropriate to consolidate and strengthen coordination, information exchange, and cooperation on matters of their concern among member states and other cooperation processes.

VII. Secretariat

23. Secretariat. The General Secretariat of the OAS shall provide administrative and technical secretariat services to the MISPA process and its subsidiary technical working groups.

As a result, in matters regarding its technical and administrative personnel, as well as its structure and responsibilities, the Secretariat shall adhere to the provisions in the OAS Charter, the General Standards to Govern the Operations of the General Secretariat of the OAS approved by its General Assembly, and the decisions that the Secretary General may adopt in developing said General Standards.

24. Functions of the Secretariat. The Secretariat shall have the following functions:

- a. Provide advice to the respective Chairs on the preparation and proceedings of the MISPA process and its subsidiary technical working groups.
- b. Assist the chairs of the MISPA meetings and subsidiary technical working groups in preparing draft meeting agendas and distributing them through the permanent missions to the OAS.
- c. Coordinate the organizational and administrative aspects of the MISPA meetings and its subsidiary technical working groups. When a member state offers to host any of these meetings, the Secretariat shall enter into an agreement with it, the negotiation and signing of which shall be coordinated through the state's permanent mission to the OAS.
- d. Supply secretariat services to the MISPA process and its subsidiary technical working groups, assist them in the preparation and consideration of the respective draft recommendations, and classify, translate, distribute to the delegations, and, as appropriate, disseminate via the Internet and by any other means, the official texts of documents submitted, considered, and adopted in the framework of MISPA meetings.
- e. Prepare summary reports on the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups, distribute them to the delegations, and maintain the record of all the documents connected with such meetings.
- f. Act as the central coordination and contact point for transmission and receipt of documents and communications among the authorities that take part in the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups, with respect to all matters relating to their structure, responsibilities, and implementation of their respective recommendations.
- g. In keeping with the recommendations of the MISPA meetings, promote, organize, and coordinate programs, projects, and activities to facilitate and strengthen information exchange, training, and technical cooperation. For that purpose, in permanent communication with member states, it shall sign the relevant agreements with states, international organizations, and agencies that contribute to their financing, and with the states where they would be carried out, in accordance with the provisions in force on such matters in the framework of the OAS.
- h. Manage and maintain any networks established in connection with the MISPA process, in coordination with the subsidiary technical working groups, and in permanent communication with member states, in their various components, for dissemination and exchange of information on public security management, prevention of crime, violence and insecurity, police management, and citizen and community participation and supply training and technical assistance services in order to facilitate the participation of authorities in said networks, to which end,

the necessary agreements would be signed with states or institutions thereof. The Secretariat shall also act as the central coordination and contact point for transmission and receipt of documents and communications among the authorities that are part of the aforesaid networks, with respect to all matters relating to their structure, maintenance and responsibilities.

i. Keep a register of authorities or contact points that participate in the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups.

j. In keeping with the recommendations of the MISPA meetings, prepare documents or studies to support follow-up or implementation of the recommendations of the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups, to which end member states shall supply the information necessary.

k. In keeping with the recommendations of the MISPA meetings, promote and take the steps necessary to institute or strengthen coordination and collaboration with secretariats of other international cooperation agencies, entities, or mechanisms in areas that concern the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups.

l. Submit such reports as may be required by the OAS General Assembly, the Permanent Council, or its permanent committees, in the framework of its functions as technical and administrative secretariat of the MISPA process.

m. In keeping with the recommendations of the MISPA meetings, take steps to secure internal and external financial resources to fund the activities of the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups.

n. Any other appropriate functions as technical and administrative secretariat of the MISPA meetings, their subsidiary technical working groups and information networks, in order to enable them to function adequately.

25. Communication and coordination between Member States and the Secretariat.

Communications and coordination between the secretariat and state authorities in connection with all matters concerning the preparation, proceedings, and follow up of the MISPA meetings and their subsidiary technical working groups, as well as matters that pertain to implementation of their recommendations, information networks, and training and technical cooperation programs, projects, and activities, shall be channeled through the permanent missions to the OAS.

VIII. Final Provisions

26. Amendment of this Document. This Document shall govern the MISPA process once it is adopted by the respective meeting thereof and may be amended thereby. To that end, pursuant to provision 9, the endeavor shall be made to ensure that the respective agreement

is adopted by consensus, to which end the number of delegations present must be equal to or greater than two thirds of the member states of the Organization. In the case of a vote, to be carried, a motion shall require the vote in favor of two thirds of the OAS member states.

27. Distribution and publication. The Secretariat shall distribute this document to all the delegations and shall publish Spanish, English, French, and Portuguese versions thereof on its web page.

Ministers of Justice or other Ministers or Attorneys General

Eighth Meeting of Ministers of Justice or other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA VIII)

February 24 - 26, 2010

Brasilia, Brazil

Conclusions and Recommendations of REMJA-VIII*

The Eighth Meeting of Ministers of Justice or Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA-VIII) took place in Brasilia, Brazil, on February 24, 25, and 26, 2010, as called for in the “Document of Washington” (REMJA-VII/doc.6/08 rev. 1) and in resolutions AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08) and AG/RES. 2462 (XXXIX-0/09) of the OAS General Assembly.

REMJA-VIII takes note of the important and useful part played by implementation of the “Document of Washington,” approved by REMJA-VII to govern the REMJA process, both in compliance with the recommendations made at that meeting and in the preparation and execution of this meeting. In this regard, REMJA-VIII highlights the significance of the fact that as provided in the “Document of Washington,” both Ministers of Justice and Attorneys General of the member states of the OAS with responsibilities in the area of international legal cooperation, in particular criminal matters, attended this meeting. This participation consolidates REMJA as the hemispheric forum for cooperation in this area, and constitutes significant progress toward interagency and international coordination and the definition and adoption of concrete and practical policies, such as those embodied in these conclusions and recommendations, to strengthen the states’ effective, efficient, and expeditious joint action to prevent, prosecute, and combat crime in the Americas.

Having concluded its deliberations on the various items on its agenda, REMJA-VIII adopted the following conclusions and recommendations for transmission to the OAS General Assembly at its fortieth regular session:

* This “Conclusions and Recommendations” were approved by consensus during the plenary session held on February 26, 2010, in the framework of the Eighth Meeting of Ministers of Justice or other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA-VII) held in Brasilia, Brazil.

I. Concrete Measures to Strengthen Legal and Judicial Cooperation in the Americas.

REMJA-VIII reaffirms that the damage caused, and the threat posed to our citizens, our democracies, and the economic and social development of our states, by the different manifestations of crime in the Hemisphere, make it necessary and urgent to continue to strengthen and enhance mutual legal and judicial cooperation at the hemispheric level, as well as to ensure that member states have the laws, procedures, and legal mechanisms in place to enable them to prevent transnational organized crime, prosecute and punish the perpetrators of this type of crime and to deny them safe haven as well as the proceeds and instrumentalities of their illegal conduct.

REMJA-VIII notes the enhancement of legal and judicial cooperation in criminal matters resulting from various processes launched in the REMJA framework. Among them are those related to support for justice reform, such as the establishment of the Justice Studies Center of the Americas (JSCA); the development of mechanisms for hands-on cooperation, through meetings, networks, and other means of sharing information, experiences, training, and technical cooperation among national officials competent in such areas as mutual assistance in criminal matters and extradition, cyber-crime, trafficking in persons, penitentiary and prison policies, and forensic research; the initiative to draw up and adopt a hemispheric plan of action against transnational organized crime; and the forging of many other agreements called for in the recommendations of the REMJA and its working groups and technical meetings, as well as the procedures established to follow up on their implementation; and the reinforcement of cooperation with other regional, subregional, and international organizations and bodies in the various areas addressed by the REMJA and its working groups and technical meetings.

The measures taken in compliance with REMJA recommendations have been practical and very useful for ensuring effective, efficient, and expeditious international legal cooperation, mainly in criminal matters. Notwithstanding the progress achieved in this regard, it is essential to continue moving forward and to further strengthen the states' joint efforts, through concrete new measures and actions such as those emanating from the working groups and technical meetings held since REMJA-VII, from which REMJA-VIII has received reports and on which it has made specific recommendations, as expressed in the sections below.

However, REMJA-VIII deems it important to make the following recommendations on measures or actions to strengthen legal and judicial cooperation in the Americas:

1. That the OAS member states that have not yet done so sign and ratify, ratify, or accede to, as appropriate, as quickly as possible:
 - a. The Inter-American Convention against Corruption, and the Declaration on the Mechanism for Follow-up for its implementation (MESICIC) (“Document of Buenos Aires”);
 - b. The Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, and its Optional Protocol;

- c. The Inter-American Convention against Terrorism;
 - d. The Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (CIFTA);
 - e. The Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad;
 - f. The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;
 - g. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and its protocols; and
 - h. The United Nations Convention against Corruption.
2. That the OAS member states that have not yet done so adopt the legislation and other measures required to facilitate and ensure implementation of the aforementioned conventions and to provide effective, efficient, and expeditious cooperation in the framework of those conventions, *inter alia*, in mutual assistance, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets.
3. That the OAS member states, as necessary, and in full observance of the principles of their legal systems, review domestic laws and enforcement mechanisms with a view towards modernizing the tools to address the challenges of transnational organized crime, including implementation of laws and other measures:
- a. To ensure that those engaged in transnational organized crime be prosecuted by member states whose laws they violate;
 - b. To combat international trafficking in illegal narcotics, as well as precursor chemicals used to make synthetic drugs;
 - c. To strengthen and apply import and export control laws in order to prevent the illicit trafficking of firearms, ammunition and explosives;
 - d. To strengthen legal systems and international cooperation to prevent drug trafficking;
 - e. To facilitate, when their legal systems allow, and with full respect of civil rights and due process and in accordance with applicable national legislation, the interception of wire, oral, and electronic communications and the sharing of that information with other member states for law enforcement purposes;
 - f. To consider, with full respect for state sovereignty, and in accordance with the principles of their domestic legal systems and the provisions of Article 19 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the

possibility of entering into bilateral or multilateral agreements which set forth a legal framework for joint investigation teams, as well as the necessity for national legislations to progressively consider this new mechanism for mutual assistance between States;

g. To promote effective financial investigations aimed at forfeiture of proceeds and instrumentalities of transnational organized crime, including, where it is consistent with its national legal structure, a non-conviction based forfeiture;

h. To consider, when its domestic legal system allows, and in accordance with international commitments that have been undertaken, the enforcement of foreign orders for freezing, seizure, and confiscation, taking into account matters related to asset management prior to confiscation, and the efficient liquidation, proper maintenance, and return of forfeited assets;

i. To utilize all possible advancements in forensic technology in the fight against transnational organized crime;

j. To ensure the effective protection of victims and witnesses, within the framework of criminal procedures, while at the same time promoting that their relocation become viable, through expedited cooperation mechanisms, consistent with the provisions of Articles 24 and 25 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

4. That due consideration be given to proposals for the development of supplementary legal instruments to strengthen international legal cooperation in criminal matters, taking into account recommendations made by the REMJA working groups and technical meetings.

5. That the OAS member states that have not yet done so take the necessary measures to establish, and ensure the operations of, the central authorities for reciprocal cooperation in mutual assistance in criminal matters, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets, and to ensure that they have the human, material, and financial resources needed to perform their functions effectively, efficiently, and expeditiously.

6. That the OAS member states that have not yet done so take the necessary measures to facilitate, under their constitutional systems, channels of direct communication and ongoing contact among the central authorities responsible for reciprocal cooperation in mutual assistance in criminal matters, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets, and to step up procedures and reduce or eliminate factors that contribute to delays in the transmission of and response to requests for cooperation in mutual assistance in criminal matters, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets.

7. That, given the crosscutting nature of cooperation in mutual assistance in criminal matters, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets, the REMJA come together as a forum for hemispheric cooperation in these areas, and that the OAS entities, organs, agencies, groups, or mechanisms, in the framework of their respective spheres of com-

petence, take appropriate measures to facilitate and strengthen their cooperation with the REMJA in said areas and to avoid duplication of efforts.

8. That, consistent with the principles of their national laws, secure and responsible use of new communication technologies, such as videoconferencing, be promoted, in order to render legal and judicial cooperation in the Americas more effective, efficient, and expeditious.

9. That training programs for government authorities and experts continue to be promoted, supported, and developed in the area of deterring, investigating and prosecuting cyber-crime, and also concerning the Criminal Matters Network, in order to facilitate international legal cooperation in the respective areas.

10. That efforts continue to strengthen information sharing and cooperation between the REMJA and other subregional, regional, or international organizations, forums, mechanisms, or bodies, in mutual assistance in criminal matters, extradition, and the confiscation and/or seizure of assets.

II. Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition

1. To express appreciation its satisfaction with the Fourth Meeting of the REMJA Working Group on Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition, which took place in San Salvador, El Salvador, on March 31 and April 1 and 2, 2009, and for the fact that, as stipulated in the “Document of Washington,” participants included central authorities, international legal cooperation officials, and other government experts with responsibility for mutual criminal assistance and extradition in the OAS member states.

2. To approve the recommendations adopted at the Fourth Meeting of the REMJA Working Group on Mutual Criminal Assistance and Extradition, published in document PENAL/doc.29/09 rev. 1 and, in that connection, to request that its Chair report to the next REMJA on progress with respect to their implementation.

3. To urge the states to give due consideration to and apply the guidelines on best practices with respect to “the gathering of statements, documents and physical evidence” and “mutual legal assistance in relation to the tracing, restraint (freezing) and forfeiture (confiscation) of assets which are the proceeds or instrumentalities of crime,” and the “Forms on mutual legal assistance in criminal matters” (document PENAL/doc.19/07 rev.1), as well as the “Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters” (document PENAL/doc.20/07 rev. 1).

4. To direct the REMJA Working Group on Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition, considering the recommendations made at its fourth meeting, and with the support of the Technical Secretariat of the REMJA:

a. To consider the development of an inter-American legal instrument to supplement existing ones for the purpose, *inter alia*, of facilitating the use of new com-

munication technologies for cooperation in mutual assistance in criminal matters and extradition, and to report thereon, through its Chair, to REMJA-IX.

b. To consider drafting an efficient and expeditious inter-American legal instrument for extradition that incorporates the progress and new institutions developed at the bilateral and subregional levels, in order to strengthen cooperation in this area.

c. To continue to promote the sharing of information on current subregional developments, such as the adoption of the Central American Treaty on Arrest Warrants and Simplified Extradition Procedures in the framework of the Central American Integration System (SICA); the CARICOM Arrest Warrant Treaty; and the proposal for a MERCOSUR Arrest Order (MMC). Taking into account these and other related international developments, the working group should consider drafting the text of a model agreement on the subject.

d. To consider advancing with the preparation of model agreements to establish a legal framework for joint and/or coordinated investigations and special investigation techniques, and with the preparation of other recommendations on legal measures and other steps that would assist the states to consider, establish, and implement these new mutual assistance mechanisms, taking into account the provisions of articles 19 and 20 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Articles 9.1.c and 11 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and in Articles 49 and 50 of the United Nations Convention against Corruption. In preparing said model agreements, reference could also be made to the draft "Framework Agreement among the States Parties to MERCOSUR and Associated States on the Creation of Joint Investigation Teams in the Area of Transnational Crime," which is currently under negotiation in the context of the meetings of ministers of justice of that regional forum.

e. To continue to consider the subject of mutual assistance in relation to the tracing, restraint (freezing) and forfeiture (confiscation) of assets which are the proceeds or instrumentalities of crime, based on the best practices guidelines the working group has prepared, and to make the recommendations it deems appropriate to continue improving and strengthening cooperation in this field among the OAS member states.

5. To recommend that the member States of the OAS consider various measures to improve resourcing for the fight against organized crime, including implementing measures under national law to restrain, seize, forfeit, and share illicit proceeds and to consider the feasibility of establishing an OAS fund to assist member states.

6. To recommend, recognizing the growing need for member states to enhance mutual legal assistance in criminal matters, that member states take the necessary measures to improve cooperation in this area, such as:

- a. Improving national legislation dealing with mutual legal assistance in criminal matters;
 - b. Implementing the recommendations of REMJA to improve mutual legal assistance in criminal matters within the Hemisphere; and
 - c. Considering measures to improve mutual legal assistance in criminal matters with countries outside the Hemisphere, including broadening the application of the Inter-American Convention on Mutual Legal Assistance, to apply, where appropriate, to such countries.
7. To recommend that member states participating in the 12th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, bring to the attention of other states the above-noted recommendation.
8. To express appreciation for and accept the offer made by the Delegation of Paraguay to host the Fifth Meeting of the REMJA Working Group on Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition.
9. To request the Technical Secretariat of the REMJA to continue to encourage and strengthen the exchange of information and cooperation with other networks, organizations and international cooperation processes on criminal matters.
10. To entrust the Technical Secretariat with gathering information from the states before REMJA-IX on progress made to date regarding the issues addressed in the recommendations of previous meetings on international legal cooperation in criminal matters, and compile the information in aggregate form in a hemispheric report for presentation to that meeting.

III. Hemispheric Information Exchange Network for Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition (“Criminal Matters Network”)

1. To take note of the progress made by the OAS General Secretariat in the establishment, consolidation, maintenance, expansion, and in securing funding for the Criminal Matters Network, demonstrated by, *inter alia*, in the signature of memoranda of understanding with institutions of the OAS member states and the participation of their personnel in the Secure Electronic Communication System; the training of new users of this system in the workshop held in San Salvador, El Salvador, on March 31, 2009, and through the online training program accessible through the “Educational Portal of the Americas”; and by the fact that all relevant documents of the public and private components of the Network have been updated and translated into the four official languages of the OAS.
2. To express its satisfaction with the development of electronic tools to send and respond, in a secure manner, to requests for mutual assistance in criminal matters and with the dictionary of legal terms for mutual assistance in criminal matters and extradition translated into the four official languages of the OAS.

3. To support continued development of a pilot phase on the use of secure videoconferences, including the development of a model draft agreement for the use of videoconferencing in taking the testimony of witnesses, experts, victims, and the accused, with full respect for the right of due process of said accused, and to urge the states to regulate the use of this tool under its domestic law and to report on the progress made in this regard to the Fifth Meeting of the REMJA Working Group on Mutual Criminal Assistance and Extradition and to REMJA-IX.

4. To underscore the value of the “Legal Cooperation Bulletin” and to request the Technical Secretariat of the REMJA to continue the effort and to encourage the states to contribute information to the bulletin.

5. To request the General Secretariat of the OAS to, in line with available resources, to continue providing services for maintenance, updating, support, and technical assistance to the Criminal Matters Network; for training to personnel who participate in the Secure Electronic Communication System; and for the development of new electronic tools to facilitate cooperation in mutual assistance in criminal matters and extradition. Likewise, to request the General Secretariat of the OAS to inform the REMJA and the Working Group at their next meetings of the progress made in these areas.

6. To invite the OAS member states and permanent observer states to consider making voluntary contributions to finance the Criminal Matters Network.

IV. Cyber-Crime

1. To express its satisfaction with the outcomes of the Sixth Meeting of the REMJA Working Group on Cyber-crime, held at OAS headquarters on January 21 and 22, 2010, pursuant to the agreement reached in REMJA-VII.

2. To adopt the recommendations made by the REMJA Working Group on Cyber-crime at the abovementioned Sixth Meeting (REMJA-VIII/doc.--/10) and request that its Chair report to REMJA-IX on progress with respect to their implementation.

3. To continue consolidating and updating the Inter-American Portal for Cooperation in Cyber-crime through the OAS Internet page, and in this regard:

a. To request the OAS General Secretariat, in coordination with the REMJA Working Group on Cyber-crime, to continue completing and updating the data on the Portal in its public and private components.

b. To ask the states to respond to requests from the OAS General Secretariat to complete or update information relating to each of them that is disseminated on the Portal’s public and private components.

4. To express its satisfaction with the results obtained in the workshops to strengthen the states’ capacity for development of legislation and procedural measures related to cyber-

crime and electronic evidence. The workshops took place in Port of Spain, Trinidad and Tobago; Bogotá, Colombia; Santiago, Chile; Panama City, Panama; and Asunción, Paraguay and were held under the leadership of the United States as Chair of the REMJA Working Group on Cyber-crime and with the financial support of that government; the support of the states in which the workshops were held; and the cooperation of the OAS General Secretariat

5. To continue to strengthen mechanisms that allow for the exchange of information and cooperation with other international organizations and agencies in the area of cyber-crime, such as the Council of Europe, the United Nations, the European Union, the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the G-8, the Commonwealth, and INTERPOL, so that OAS member states can take advantage of developments in those entities. In addition, to recognize the consideration that certain OAS member states have given to applying the principles of the Council of Europe's Convention on Cyber-crime, acceding thereto, and adopting the legal and other measures required for its implementation, and recommend to those states that have not yet done so, to give due consideration thereto, bearing in mind the recommendations adopted by the Working Group on Cyber-crime and by the REMJA at previous meetings. Similarly, to this end, that technical cooperation activities be continued under the auspices of the OAS General Secretariat and the Council of Europe.

6. That the REMJA Working Group on Cyber-crime meet before the next REMJA to consider, among other topics, the progress in implementing the recommendations adopted at its Sixth Meeting, and that it report to REMJA-IX on the outcomes achieved in this regard.

V. Victim and Witness Protection and Assistance

1. To express its satisfaction with the initial consideration of the topic of victim and witness protection and assistance at the Fourth Meeting of the REMJA Working Group on Mutual Criminal Assistance and Extradition, pursuant to the recommendation of REMJA-VII.

2. That based on information supplied by the states, the Technical Secretariat of the REMJA:

a. Continue to compile, in a systemized fashion, legislation and other measures for victim and witness protection and assistance in the OAS member states, and make this information available to them on the Internet.

b. Continue to update a directory of authorities directly responsible for victim and witness protection and assistance programs in OAS member states.

3. To convene a technical meeting of authorities directly responsible for victim and witness protection and assistance, including those responsible for witness protection programs in OAS member states, for the purpose of identifying priority areas of work.

4. To keep the topic of victim and witness protection and assistance on the REMJA agenda and request a report to REMJA-IX on progress made regarding implementation of the foregoing recommendations.

VI. Penitentiary and Prison Policies

1. To express its satisfaction with the Second Meeting of the Working Group on Penitentiary and Prison Policies, held from August 27 to 29, 2008, in the city of Valdivia, Chile.

2. To recommend that the OAS member states consider the adoption, insofar as they can and as they deem appropriate, of the measures, guidelines, and policies contained in the recommendations of the REMJA Working Group on Penitentiary and Prison Policies, which are published in document GAPECA/doc.8/08 rev. 2.

3. To recommend that a Third Meeting of the REMJA Working Group on Penitentiary and Prison Policies be convened to continue the exchange of information and experiences and to strengthen mutual cooperation among authorities responsible for those policies in the OAS member states; that the OAS General Secretariat continue providing technical support for these meetings; and that a report be presented REMJA-IX on developments in this area.

VII. Hemispheric Cooperation on Forensic Research

1. To express its satisfaction with the First Meeting of Forensic Specialists of the Americas, held under the framework of the REMJA Working Group of Forensic Sciences, which took place at OAS headquarters in Washington D.C. on September 24 and 25, 2009.

2. To take note of the needs identified by the forensic specialists of the Americas and to adopt the recommendations made at their first meeting, which are published in document REF/doc.4/09 rev. 1 corr. 1, and in that regard to request that, through the Chair, REMJA-IX be informed of the progress made regarding said recommendations.

3. To recommend that a Second Meeting of Forensic Specialists of the Americas be convened under the framework of the REMJA Working Group of Forensic Sciences, for the purpose of exchanging information and strengthening mutual cooperation among the forensic specialists of the OAS member states, and to accept with appreciation the offer of the delegation of the Dominican Republic to host the second meeting of said specialists.

4. To request that the REMJA Working Group of Forensic Sciences invite the Ibero-American Academy of Criminalist and Forensic Studies (AICEF), as well as other similar academic institutions, to share their practice and experiences to future meetings of the Working Group.

5. To request the OAS General Secretariat to continue providing support for these meetings, in accordance with resources allocated in the program-budget of the Organization and other resources.

VIII. Hemispheric Cooperation Against Trafficking in Persons

1. To express its satisfaction with the Second Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, co-sponsored by the governments of Argentina and Uruguay and held in Buenos Aires, Argentina, on March 25 to 27, 2009.
2. To endorse the conclusions and recommendations of the First and Second Meetings of National Authorities on Trafficking in Persons and their implementation, and the development of a work plan by the Committee on Hemispheric Security of the OAS Permanent Council, based on the conclusions and recommendations of said meetings and other pertinent provisions in the OAS sphere, taking into account the progress made in the subregional and global areas, avoiding duplication of effort and fostering greater coordination.
3. To encourage member states to consider, in the framework of their respective national legislations, criminal laws or other appropriate measures that are applicable to so-called clients, customers, or users of trafficking for purposes of sexual exploitation, as well as other forms of exploitation of persons.
4. To retain hemispheric cooperation against trafficking in persons as a permanent topic on the REMJA agenda and request that a report be submitted to REMJA-IX on progress in this field in the OAS sphere.

IX. Development and Strengthening of Justice Systems in the Region

To express its satisfaction with the Report on Judicial Systems in the Americas 2008-2009, prepared and presented by the Justice Studies Center of the Americas (JSCA), and to request the Center to continue contributing to the processes of reform and strengthening of the criminal justice systems of the member states, through its activities of research, evaluation, dissemination, training, and technical support. In this regard REMJA-VII urges the JSCA to continue publishing the above-mentioned Report.

X. Justice Studies Center of the Americas (JSCA)

1. To congratulate the JSCA on its work in the Americas since REMJA-VI, especially in evaluating criminal justice reform processes, improving legal defense standards, identifying best practices in the investigation of complex crimes, and producing indexes of relevant judicial information accessible in the Internet.
2. To express its enthusiastic support for the JSCA's efforts to strengthen the judicial branch in the region. In this regard, REMJA recognizes the value of the ties with the judicial summit system and with magistrate federations and, in general, the value of collaboration in processes to modernize judicial bodies in the continent.

3. To urge the JSCA to strengthen and disseminate its projects in the area of information, management, and new information technologies (ICTs) in order to modernize judicial systems, and providing the REMJA and its officers with those proposals it deems relevant in this regard.
4. To reiterate its appeal to member states to consider making voluntary contributions to the JSCA to cover its basic costs, as decided by REMJA-VI and reaffirmed by the OAS General Assembly at its thirty-sixth regular session.
5. To recommend the member states and organs and institutions associated with the inter-American system to deepen their working relations with the JSCA within their areas of competence.

XI. Hemispheric Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law

1. Continue strengthening the exchange of national experiences and legal and judicial cooperation within the framework of the inter-American system in the area of family and child law, in such areas as adoption, return of minors and child support.
2. Reaffirm Recommendation X.2 of REMJA-VII, whereby member states are requested to designate central authorities under the various conventions in the inter-American system that to which they are a party, such as:
 - a. The Inter-American Convention on Letters Rogatory and its Additional Protocol;
 - b. The Inter-American Convention on Proof of and Information on Foreign Law;
 - c. The Inter-American Convention on Support Obligations;
 - d. The Inter-American Convention on the International Return of Children; and
 - e. The Inter-American Convention on International Traffic in Minors.
3. To express its satisfaction with the First Pilot Meeting of the Network for Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law, in Washington, D.C., that was held on November 3 and 4, 2009, and in which Argentina, Colombia, the Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Spain participated.
4. To request the Department of International Law of the OAS Secretariat for Legal Affairs to continue with the preparations for the Second Pilot Meeting of the Network for Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law, to be held in April 2010.
5. To request that the Department of International Law of the OAS Secretariat for Legal Affairs share the outcomes of the First and Second Pilot Meetings of the Network for Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law with all member states at a technical

meeting to be held in the second semester of 2010, coordinated by Brazil, with a view to discussing the utility of the Network and the states' interest in constituting a working group about family and child law and determining their effective contribution to this initiative and their capacity to do so. If deemed necessary at the first technical meeting, a second technical meeting may be held before reporting to REMJA-IX.

6. To request the Department of International Law of the OAS Secretariat for Legal Affairs to continue developing the tools of the Network for Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law as a pilot project, and to provide a report on the outcomes of the initiative at REMJA IX.

7. To encourage member states to designate competent authorities to participate in the meetings on the Network for Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law and to respond to requests to provide information for dissemination through the public and private components of the Network.

8. To request the Department of International Law of the OAS Secretariat for Legal Affairs to consult with member states on the possible establishment of a Working Group on International Legal Cooperation in the Area of Family and Child Law and Support, and to prepare a written proposal containing information on fundamental issues such as the mandate, work methods and resources of the proposed Working Group for consideration at REMJA IX.

9. To reiterate item X.4 of the Conclusions and Recommendations of REMJA-VII, whereby it was recommended that OAS member states consider ratifying or acceding to, as the case may be, the Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, adopted in November of 2007.

10. To express appreciation to the Government of Spain for its funding of the operations and strengthening of the Network for Legal Cooperation and for its active participation therein.

XII. Hemispheric Plan of Action Against Transnational Organized Crime

1. To take note of the report of the Second Meeting of the Technical Group on Transnational Organized Crime held at OAS headquarters in Washington D.C. on October 7, 2009.

2. To recommend that, pursuant to section I.1 of the Hemispheric Plan of Action against Transnational Organized Crime, this item remain on the REMJA agenda and that REMJA-IX be informed of the specific activities carried out under the Plan.

XIII. Access to Justice

REMJA-VIII notes the progress made through the Brasilia Rules regarding Access to Justice for Vulnerable Persons and the Santiago Guidelines on Victim and Witness Protection, and suggests that a working group be set up to follow up on the subject of accessibility of justice and legal assistance.

XIV. Venue of REMJA-IX

To express appreciation for and accept the offer made by the delegation of El Salvador to host REMJA-IX, which will take place in 20

Ministers of Social Development

Second Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development

July 8 - 9, 2010

Cali, Colombia

Communiqué of the Second Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development

Strengthening and Sustaining Social Protection Systems

THE MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in Cali, Colombia, on July 8 and 9, 2010, at the Second Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development in the framework of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI),

RECOGNIZING the central role of the State in the fight against poverty, inequity, inequality, and social exclusion;

BEARING IN MIND that, at the Fifth Summit of the Americas, with a view to strengthening our efforts to reduce inequality and social disparities and to halve extreme poverty by the year 2015, our Heads of State and Government committed to exchanging information on policies, experiences, programs, and best practices. To that end, they supported the establishment of the Inter-American Social Protection Network in order to facilitate that exchange;

NOTING that social protection programs based on conditional cash transfers help to address the challenges of poverty, we are also convinced that we must promote actions aimed at fostering social mobility and lowering unemployment rates and inequity by generating conditions conducive to the development of dignified and decent work opportunities and access to quality education and health as two of the principal ingredients of social inclusion;

NOTING WITH CONCERN the human, economic, social, and environmental impact of recent disasters in the region, particularly the earthquakes in Haiti and Chile, both for the regrettable loss of life and for the devastating consequences these catastrophes have had upon national economies, local development, and the social networks of the communities directly affected by them, especially the poorest and the most vulnerable;

AWARE of the negative impact of crises on employment and poverty, as well as the challenges this situation poses for national efforts to achieve the Millennium Development Goals, especially with regard to the eradication of extreme poverty and hunger;

WE, THE MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES OF SOCIAL DEVELOPMENT,

ASSUME the commitment to strengthen our social protection strategies to minimize the consequences of crises and avoid, as much as possible, a setback in the advances made in reducing poverty; in order to move forward in this area, we must strengthen and consolidate the institutions responsible for social policy and ensure the fiscal sustainability of social protection programs. Those strategies shall be guided by the experiences of integrated development models in which economic policies, productive development with employment generation, and protection and social equity programs are central components of equal priority.

WE REAFFIRM that social protection is an integral approach comprised of various universal and targeted policies and programs that seek to help individuals confront the various risks they face in their lifetime; and that their specific design will be determined by the conditions, needs, and decisions of each member state. In that regard, we value the exchange of experiences, methodologies, results and impact of social protection programs, such as conditional cash transfers and other intervention strategies in the framework of social protection networks.

WE COMMIT to enhancing the effectiveness and efficiency of social protection, inclusion, and poverty eradication programs and to promoting accountability and transparency mechanisms vis-à-vis citizens; to achieve this goal, we will share our management accomplishments in this field, including, when appropriate, the implementation of single beneficiary registries, strengthening evaluation and monitoring systems and budget procedures that ensure the fiscal sustainability of said programs, even under adverse circumstances or crises.

WE REITERATE that poverty and inequality are multidimensional phenomena that require intersectoral and coordinated interventions in the framework of a national social development strategy. Therefore, we will continue to promote the implementation and strengthening of governmental strategies that integrate the work of various ministries and public agencies to ensure greater impact in efforts to confront those challenges. Intersectoral coordination is essential to broaden the impact of a diversity of social policy interventions, including the promotion of employment and income generation, strengthening of food security policies, and prevention and protection management for communities faced with risks and vulnerabilities as a result of disasters.

WE UNDERSCORE the need to strengthen coordination with inter-American, regional, and subregional integration agencies and mechanisms in order to advance our shared social policy priorities.

WE UNDERSCORE ALSO the importance that the Inter-American Social Protection Network join its cooperation efforts to other international mechanisms devoted to the analysis and diffusion of social protection, including those belonging to the inter-American and United Nations systems.

WE CALL on all sectors of society, including civil society, and nongovernmental, academic, private sector and community organizations, to collaborate in providing inputs to the design and implementation of monitoring and evaluation systems of public policies that seek greater social development in our societies; and to create strategic alliances between the state and the various social groups to strengthen democracy and promote the actions needed, in a framework of shared responsibility, to confront the challenges of poverty—especially extreme poverty—, inequality and vulnerability.

WE TAKE NOTE of the progress made in the negotiations on the Social Charter of the Americas and its Plan of Action, an instrument conceived for the purpose of guiding the efforts of our states in the areas of social, economic, and cultural development. We reiterate our support of its objectives, which seek to offer all our citizens greater opportunities to benefit from sustainable development with equity and social inclusion.

WE INSTRUCT the Inter-American Committee on Social Development (CIDES), with the support of the Executive Secretariat for Integral Development (SEDI) of the OAS, to consider the following elements in its Work Plan 2010-2012:

1. To strengthen the Inter-American Social Protection Network as a mechanism of hemispheric cooperation in fighting poverty and inequity and to foster the transfer of successful experiences and analyses of the main challenges confronting social protection strategies.
2. To continue implementing, within the framework of this Network, technical cooperation in the Caribbean through the “Bridge Caribbean Program,” the results of which are an example of partnership for development; and to report to all the members of CIDES on the outcome of the subregional meeting on this matter to be held in Barbados in 2010, with a view to seeking opportunities to facilitate the implementation of this cooperation mechanism throughout the region.
3. To support the Government of Haiti, especially in the reconstruction of communities following the earthquake that devastated the country in January 2010, making available the cooperation mechanisms of this forum to transfer the knowledge and experiences relevant to the reconstruction process.
4. To promote greater dialogue and joint activities with all sectors of society, including civil society, and nongovernmental, academic, private-sector, and other organizations, for the purpose of moving forward in the development of social protection policies and programs that are more inclusive, participatory, and subject to greater accountability.
5. To use existing mechanisms within the framework of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI) of the OAS to strengthen intersectoral coordination in the area of social policy and, in that connection, to promote the exchange of opinions and joint projects with relevant inter-American committees and forums on topics such as promoting employment and income generation in vulnerable populations; strengthening food security policies; addressing inequalities between women and men; risk management; and reconstruction of communities in order to reduce the vulnerability of disaster victims.

6. To contribute, when requested, to the drafting of the Social Charter of the Americas and its Plan of Action.

7. To collaborate, when appropriate, with the preparations for the Sixth Summit of the Americas.

8. To prepare a report on the execution of the Work Plan 2010-2012 to be presented at the next Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development.

WE THANK the Government of Brazil for its generous offer to host the Third Meeting of Ministers and High Authorities of Social Development within the framework of CIDI, to be held in 2012.

Ministers of Sustainable Development

Second Meeting of Ministers and High Authorities on Sustainable Development in the CIDI Framework

November 17 - 19, 2010

Santo Domingo, Dominican Republic

Declaration of Santo Domingo for the Sustainable Development of the Americas

WE, THE MINISTERS AND HIGH-LEVEL AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AMERICAS, gathered in the city of Santo Domingo, Dominican Republic, from November 17 to 19, 2010, on the occasion of the Second Inter-American Meeting of Ministers and High-Level Authorities on Sustainable Development in the framework of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI), reaffirm our commitment to sustainable development;

RECOGNIZING that human beings are at the center of concerns for sustainable development, that they are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature, and that poverty eradication is an integral part of sustainable development;

RECOGNIZING ALSO that Mother Earth is a common expression for the planet earth in a number of countries and regions, which reflects the interdependence that exists among human beings, other living species, and the planet we all inhabit;

RECOGNIZING FURTHER that the constitutional legislative principles and jurisprudence of the member states reflect the view of each country on the relationship between human beings and nature;

RECOGNIZING MOREOVER the different levels of development and economic, social and environmental vulnerability of the states of the Hemisphere, the wealth of their ecosystems and their biological and cultural diversity, as well as the need to work in a spirit of solidarity to ensure that strategies, policies, plans, and programs are mutually supportive and contribute to sustainable development, to the eradication of hunger and poverty, and to peace and democracy in the Americas;

NOTING the economic, social, and environmental benefits of the sustainable management of natural resources, including those arising from access to the fair and equitable sharing of benefits that derive from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge;

WELCOMING WITH SATISFACTION the decision of the United Nations General Assembly to organize the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio +20), to be held in Rio de Janeiro in 2012, and reiterating the full support and commitment of all the countries in the region to the success of the Conference, with a view to achieving a focused political document and to encouraging a high level of participation;

RECOGNIZING that tackling sustainable-development challenges calls for comprehensive approaches to strengthen public-private partnerships, both within our countries and at a regional level, on key issues such as sustainable production and consumption and social responsibility, to address the economic, social, and environmental aspects in a balanced manner;

CONSIDERING:

The regional, subregional, and international commitments adopted by member states related to sustainable development,¹ as well as those adopted by member states at the United Nations Millennium Summit in 2000;

That to eradicate hunger and poverty, especially extreme poverty; create dignified and decent work; and raise the standard of living of all our people, we must promote sustainable economic development and socially and environmentally responsible business practices through equity, social inclusion, and the active participation of all sectors, ensuring the creation and strengthening of capacity-building of the population;

That the positive contribution of trade among our nations to the promotion of growth, employment, and development depends on the continued insistence on an open, transparent and rules-based multilateral trading system; we further recognize the need for all our peoples to benefit from the increased opportunities and welfare gains that the multilateral trading system generates;²

That the Heads of State and Government of the Americas, gathered in Port of Spain at the Fifth Summit of the Americas, renewed their support for the Inter-American Program for Sustainable Development (2006-2009) (PIDS) and gave instructions for the Second Inter-Ameri-

¹ The United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro in 1992 (Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development); the Summit of the Americas on Sustainable Development, held in Santa Cruz de la Sierra in 1996 (Declaration and Plan of Action); the United Nations Millennium Summit in 2000 (Millennium Development Goals); the World Summit on Sustainable Development, held in Johannesburg in 2002 (Declaration and its Plan of Implementation); the First Meeting of Ministers of Sustainable Development in the framework of CIDI, held in Santa Cruz de la Sierra in 2006 (Declaration of Santa Cruz +10 and the Inter-American Program for Sustainable Development (PIDS) [2006-2009]); the World Conference on Disaster Reduction, held in Kobe, Hyogo in 2005 (Hyogo Framework for Action 2005-2015); the Fifth Summit of the Americas, held in Port of Spain in 2009 (Declaration of Commitment of Port of Spain); Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and Mauritius Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, among others, as applicable.

² The Delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela does not support this paragraph as they believe that market liberalization in its current form does not speak to the interests of the peoples of the world, and widens the inequality and social inclusion divides. We propose a reorientation of the international trading system towards a multilateral trading system that is more just and equitable and incorporates the principles of solidarity, cooperation, complementarity, and respect for the sovereignty of peoples.

can Meeting of Ministers and High-Level Authorities on Sustainable Development to be held in 2010, under the auspices of the Organization of American States (OAS), with the collaboration of relevant international organizations and financial and development institutions and with the participation of the academic community and other members of civil society, in order to assess the achievements of the PIDS to date and renew or modify it, as necessary;

That the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, signed in October 1940, within the framework of the Pan American Union, has been a pioneering instrument in the establishment of national protected area systems in its State Parties, and that we commemorate in 2010 the seventieth anniversary of its signing and the International Year of Biodiversity 2010;

That the Heads of State and Government of the Americas, gathered in Port of Spain during the Fifth Summit of the Americas, instructed the relevant ministers or pertinent high-level authorities, in collaboration with the specialized national, regional, and international disaster-management organizations, to strengthen cooperation within the Americas in the areas of disaster risk reduction and management. The General Secretariat has also been instructed to collaborate with member states to implement the Hyogo Framework for Action 2005-2015; and

That the Heads of State and Government of the Americas, gathered in Port of Spain during the Fifth Summit of the Americas, reaffirmed their commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its objectives,

DECLARE THAT:

1. Unsustainable production and consumption patterns result in complex challenges to sustainable development and human well being, and that the deterioration of the goods and services provided by ecosystems has an impact on economies and on the livelihoods of the communities that depend on them and affects their capacity for resilience.^{3/4}
2. Poverty eradication is a fundamental goal of sustainable development, given the links between vulnerability, poverty, inequity, environmental degradation, and disasters.
3. The importance of the commitment to reduce the loss of biodiversity in accordance with the Convention on Biological Diversity, the Millennium Development Goals, and the International Year of Biodiversity 2010.

³ The Eastern Republic of Uruguay, the Republic of Guatemala, and the Republic of Colombia believe that soil degradation is recognized as one of the major challenges to the environment and sustainable development worldwide for the twenty-first century and, in particular, for countries of the Americas whose economies are based on agricultural production.

⁴ The Bolivarian Republic of Venezuela places on record its reservation to the inclusion of the term “*goods and services*” in paragraphs 1 and 7, and to paragraph 29 (a), which reads “developing environmental, social, and cultural valuation programs and payment or recognition for ecosystem services,” as it believes that their intent is to make nature and the environment market objects and tradable goods.

4. The integrated management of ecosystems is vital for climate-change adaptation and for the social and economic well-being of all countries, particularly of those with low-lying coastal areas such as small island developing states, those of the tropical isthmus, as well as of those with fragile mountainous ecosystems or with a risk of desertification and prolonged droughts.

5. Water is fundamental for life and basic for socioeconomic development and environmental sustainability, and that integrated water management and non-discriminatory and equitable access of the population to potable water and sanitation services contributes to the full enjoyment of life and human rights.

6. Energy is essential for improving the standard of living of our peoples and that access to energy is of fundamental importance to economic growth with equity and social inclusion.

7. Deep cuts in emissions of greenhouse gases and measuring progress in mitigation are necessary in order to achieve, in the context of the negotiation process of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the ultimate goal and principles of that Convention, in order to protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with our common but differentiated responsibilities and respective capabilities.

8. The inter-American networks established within the framework of the OAS are of great relevance as tools to promote cooperation and the exchange of experiences with respect to integrated water resources management, renewable energy, biodiversity information, disaster risk management, climate change adaptation, and environmental law, as well as to promote synergies with other pertinent subregional mechanisms.

9. The need to incorporate comprehensive disaster risk management into the public agenda of the states and to promote international and regional coordination to respond, in a coordinated, effective, and efficient manner, to emergency situations.

10. It is important to encourage dialogue and regional cooperation, as well as public-private partnerships, *inter alia*, in order to consolidate the existing hemispheric mechanisms for the promotion and strengthening of policies, legislation, institutional transparency, and other mechanisms that foster equity, equal rights and opportunities, social inclusion, public participation, and sound public administration.

11. The need to measure progress in the achievement of the sustainable development goals and commitments established in the context of the OAS.

WE ADOPT THE FOLLOWING ACTION INITIATIVES:

1. To extend the Inter-American Program for Sustainable Development (PIDS) for the period 2010-2014 and to urge the Inter-American Committee on Sustainable Development (CIDS) to initiate a process for its revision and update, taking into consideration the assessment of PIDS presented to member states and the recommendations and directions provided by this Declaration.

2. To entrust the General Secretariat of the Organization of American States (OAS), within the framework of its mandates, and in coordination with other entities and international organizations, with promoting the mobilization of resources and facilitating technical assistance to advance effective implementation of this Declaration, the PIDS, and the Declaration of Santa Cruz +10.

3. To promote inter-American dialogue on sustainable development and convene regular meetings of the CIDS in order to support and evaluate the execution of the PIDS, as well as to follow up on the various decisions arising out of the Summit of the Americas and this ministerial process on sustainable development.

4. To entrust the CIDS with identifying options for measuring progress made in the advancements of sustainable development processes in a comparative manner at a hemispheric level, taking into account available sources of data, avoiding duplication, and promoting synergies with the existing mechanisms that address this issue, as appropriate.

5. To promote sustainable development of all productive sectors in the Hemisphere.⁵

6. To reinvigorate support for states parties to the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere in the implementation of this Convention.

7. To promote strategies for the conservation and sustainable use of water resources and border ecosystems and the ecosystem goods and services they provide as a contribution to sustainable development.⁶

8. To identify and develop strategies, based on an approach to ecosystems and landscapes, at different scales, to build partnerships and synergies within, as well as between and among, countries and to make science accessible to decision makers and those who promote integrated policies for conservation and sustainable use of natural resources and climate change adaptation.

9. To promote the sustainable use of natural resources, including cooperation and the exchange of experiences and lessons learned, promoting adaptation practices that consider the increase in hydrological and climate variability to meet the needs of the population, productive sectors, and ecosystems.

10. To foster and implement regional initiatives to promote the strengthening of capacities for the development of effective integrated management ecosystem policies and their adaptation to climate change, in particular, low-lying coastal areas such as those found in

⁵ The Eastern Republic of Uruguay believes that integrated land use approaches that incorporate a conservation perspective and sustainable use of biodiversity into the process of land use and soil management planning should be promoted.

⁶ The Bolivarian Republic of Venezuela places on record its reservation to the inclusion of the term “*goods and services*” in paragraphs 1 and 7, and to paragraph 29(a), which reads “developing environmental, social, and cultural valuation programs and payment or recognition for ecosystem services,” as it believes that their intent is to make nature and the environment market objects and tradable goods.

small island developing states, tropical isthmus zones, and fragile mountainous ecosystems, or those with a risk of desertification and prolonged droughts.

11. To promote integrated water resource, soil, and forest management, in the context of increased hydrological and climatic variability as a fundamental tool to enable a rational and sustainable use of these resources in the agriculture and forest sectors, as well as risk reduction.

12. To continue working to guarantee access to potable water and sanitation services for present and future generations, based on their national realities.

13. To support the efforts of member states and pertinent organizations to quantify, monitor, and systematically observe water resources for planning and decision-making purposes at the local, national, and regional levels.

14. To foster improved environmental performance of productive sectors in countries of the Hemisphere, promoting sustainable production and consumption patterns, through, among others, the establishment of public-private partnerships and the use of appropriate incentives to this end.

15. To encourage efforts toward developing cleaner, more affordable, and renewable and sustainable energy systems to promote access to energy and energy-efficiency technologies and practices in households and in the public and private sectors.

16. To foster partnership in the promotion of the use of cleaner, more-efficient, renewable and non-renewable energy sources, as well as energy efficiency and energy interconnection schemes, *inter alia*, through the Energy and Climate Partnership of the Americas (ECPA), Petrocaribe, the Central American Electrical Interconnection System (SIEPAC), the Mesoamerican Energy initiative, and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA), considering the needs and particular priorities of each of our countries.

17. Promote the use of means and systems of transport that make sustainable and efficient use of energy.

18. To strengthen the capacity of member states to integrate strategic environmental assessment, risk management and vulnerability assessment in land-use planning for development planning and mitigation and adaptation to climate change, contributing to the resilience of cities, communities, and ecosystems.

19. To support member states, as requested, in institutional strengthening and in the design and implementation of strategies, plans, and tools for mitigation and adaptation to climate change in regional, national, subnational, local, and ecosystem levels of planning for sustainable development, as well as in identifying its costs and scale of priorities including related cost evaluation and priority setting.

20. To promote regional and subregional cooperation and institutional capacity-building and strengthening, and adoption at the national level of multi-hazard early warning sys-

tems, including community-centered early warning systems, making use of available information and data, knowledge, and appropriate technologies.

21. To encourage and support member states in implementing the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), in order to comply with the Hyogo Framework for Action 2005-2015 guidelines, oriented to reduce vulnerabilities and strengthen the resilience of communities, especially by incorporating risk reduction in public investment, the strengthening of legal and institutional frameworks, and the creation, strengthening, and national enforcement of multi-hazard building codes, where appropriate.

22. To promote the adoption of relevant policies and practices and capacity-building programs for the rehabilitation of ecosystems and the reconstruction of infrastructure that enhance communities' resilience to disasters.

23. To encourage the work of the Working Group of OAS member states on the coordination of actions for disaster prevention, preparedness, response and rehabilitation, as well as facilitation of standards necessary to enable timely, effective, efficient, and responsive delivery of humanitarian assistance, and instruct the CIDS to collect and track the results of that working group. It is also proposed to strengthen the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction (IACNDR).

24. To strengthen synergies, coordination, and cooperation among the regional, sub-regional, and international humanitarian assistance mechanisms and initiatives, in order to optimize resources and increase our disaster management and response capabilities.

25. To support further dialogue and cooperation leading up to and at the XVI Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 16) and the VI Conference of Parties as Meeting of Parties of the Kyoto Protocol, to be held in the Hemisphere, in Cancun, Mexico, and to support the Government of Mexico as incoming Chair of the conferences, and express our utmost commitment to strengthen cooperation in order to reach an ambitious, inclusive, balanced, and transparent outcome under the United Nations Framework Convention on Climate Change pursuant to the 2007 Bali Action Plan.

26. To encourage the further development of efficient, transparent and accountable channels for delivery and mobilization of financing from public and private sources, including, where appropriate and keeping with applicable constitutional principles and national legislation, carbon markets or other modalities for the implementation of effective mitigation and adaptation actions.⁷

⁷ The Bolivarian Republic of Venezuela expresses its reservation to the contents of paragraph 26 and, accordingly, issues the following explanation: Carbon markets are not part of the UN Framework Convention on Climate Change and we therefore categorically reject the attempt by some countries to use carbon markets, thus distorting the spirit of the Convention in order to provide, furthermore, sources of financing for mitigation and adaptation efforts of developing countries, since funding commitments are from states and must therefore come from public funds. Our national position and that of a number of developing countries has been that markets cannot be created under the Convention as said legal instrument has no provision for them.

27. To continue strengthening cooperation between member states on matters relating to the sustainable and comprehensive management of forests, emphasizing, *inter alia*, enhanced action under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

28. To continue to strengthen the exchange of information, experiences, best practices, and lessons learned in member states on integrated water resources management, sustainable energy, biodiversity, sustainable land management, disaster risk management, climate change adaptation, and policies, strategies, and legal and institutional frameworks on sustainable development, through inter-American networks established in the framework of the OAS on these issues.

29. To continue to promote sustainable development through partnership for development, in accordance with applicable constitutional principles, national legislation, and international law, in the areas of human and institutional capacity-building, transfer, on mutually agreed terms, of environmentally sound technologies, and effective mobilization of all appropriate financial resources, including new and additional resources, as appropriate, for, *inter alia*:

a. Developing environmental, social, and cultural valuation programs and payment or recognition for ecosystem services in the national context, when appropriate;⁸

b. promoting initiatives for the prevention of illegal trafficking of species of flora and fauna, the conservation of migratory species, and efforts to minimize the impact of invasive alien species;

c. strengthening the management and mechanisms to exchange information on best practices for the sound management of chemicals, pollutants and waste, including the introduction of programs of public awareness;

d. implementing multilateral environmental agreements under a synergy framework, as well as bilateral and regional agreements; and

e. other initiatives included in the present Declaration, as appropriate.

30. To promote the strengthening and effective application and enforcement of national environmental laws, taking into account international law and our sustainable development priorities.

31. To promote citizen and public participation as a key element in the decision-making process on sustainable development policies and to support member states' efforts to implement the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-Making for Sustainable Development (ISP).

⁸ The Bolivarian Republic of Venezuela places on record its reservation to the inclusion of the term "*goods and services*" in paragraphs 1 and 7, and to paragraph 29(a), which reads "developing environmental, social, and cultural valuation programs and payment or recognition for ecosystem services," as it believes that their intent is to make nature and the environment market objects and tradable goods.

32. To contribute to the mainstreaming of respect for cultural values, gender equality and equity, and commitment to the Millennium Development Goals in projects and programs for sustainable development in the Hemisphere.

33. To promote a new culture of sustainable development based on harmony between economic, social, and environmental issues, through awareness campaigns and education of the population with an emphasis on children and youth.

34. To promote the participation of communities, in accordance with national legislation and realities, in order to foster greater social, economic, and environmental wellbeing by facilitating financing for programs, projects, and initiatives that generate alternative sources of work and income.

WE, THE MINISTERS AND HIGH-LEVEL AUTHORITIES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AMERICAS:

Recognize that the results of the virtual forum and consultations with civil society and other social actors that took place in Saint Lucia, Argentina, Costa Rica, and the Dominican Republic, as well as consultations with the private sector, have been important contributions to this Declaration;

Express our appreciation for the hospitality and warm welcome of the people and the Government of the Dominican Republic on the occasion of the Second Meeting of Ministers and High-Level Authorities on Sustainable Development in the Framework of CIDI and for the excellent leadership and organization of the meeting;

Hereby approve the contents of this Declaration of Santo Domingo for the Sustainable Development of the Americas on the nineteenth day of November of the year two thousand ten.

Defense Ministers

IX Conference of Defense Ministers of the Americas

November 22 - 25, 2010

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Declaration of Santa Cruz de la Sierra

The Defense Ministers and Heads of Delegations participating in the IX Conference of Defense Ministers of the Americas, meeting in the city of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, between 22 and 25 November 2010,

CONSIDERING:

The principles and declarations of the Conferences of Defense Ministers of the Americas, contained in the Declarations of Williamsburg, Bariloche, Cartagena, Manaus, Santiago, Quito, Managua and Banff;

That the Conference has established itself as a forum for dialogue and the exchange of ideas and visions on security and defense of their member nations and the region;

That the Conference is also a relevant forum that contributes to strengthening transparency, trust and cooperation on defense and security issues;

The Declaration on Security in the Americas of October 2003;

The Lima Declaration: Peace, Security, and Cooperation in the Americas, of June 2010, that expresses the commitment of the States to continue implementing measures to promote trust and security;

The Fourth Forum on Confidence and Security Building Measures held by the Organization of American States on 15-16 November 2010 in Lima, Peru; and

The celebration this year of the Independence Bicentennials of various countries of the Americas, their commemorative declarations and the progressive construction of peace,

DECLARE:

1. The member States of the Conference unanimously support the imperative of peace and mutual trust in the hemisphere, based on the principles and purposes of the Charter of the United Nations and the Charter of the Organization of American States.

2. The commitment and the importance for the Conference of Defense Ministers of the Americas (CDMA) to preserve the vitality and spirit of the Williamsburg Principles, re-

garding the strengthening of democracy, peace, security, solidarity and cooperation between the nations of the Americas.

3. Their promotion of institutional modernization processes in the defense sector by developing at least the following initiatives:

- Promote intercultural practices within the institutional dynamic of the armed forces and security forces.
- Promote a gender perspective as a crosscutting issue in the various defense environments.
- Promote the strengthening of military and security forces training in order to consolidate democracy and respect for human rights in the states of the region.

4. Acknowledge the importance of cooperation in defense and security in the region, particularly the advances made in the implementation of confidence and security building measures, such as:

- The reports that are presented to the United Nations and the Organization of American States (OAS).
- The set of confidence and security building measures recently approved within the framework of the South American Defense Council (SADC) of UNASUR with its corresponding mechanisms and application, guarantee and verification procedures, which include: the exchange of information on the organization of national defense systems; military expenditures; intra and extra-regional military activities; notification of maneuvers, deployment and exercises in border areas, among others.
- Advances made in the implementation of the Framework Treaty on Democratic Security in Central America.
- The declaration of Nicaragua as an anti-personal landmine-free territory, as a result of which Central America becomes the first region in the world that is free from this threat. We acknowledge Suriname's success in removing completely the landmines from their territory.
- The effort made by the SADC during 2010 to generate a South American methodology to measure and report defense expenditures and promote it as the basis for the development of a common hemispheric methodology.

5. Request the General Assembly of the OAS to grant the Inter American Defense Board (IADB) the faculty to support the Pro-Tempore Secretariat of the CDMA, at the request of the host country, in carrying out the duties established in article 25 of the CDMA's Regulations.

6. Recommend to the OAS to convene a conference, within the framework of that organization, to discuss the future of the mission and functions of the instruments and components of the Inter American Defense System, with the participation of representatives of the Ministries of Defense, to that end, welcome the offer of the Republic of Argentina to be the venue in 2011.

7. Recommend the exchange of views and the initiation of a broad debate at the next CDMA concerning the concepts of Defense and Security to define the scope of the conference.

8. Take note of the advances made in the negotiations taking place within UNASUR regarding a peace, security and cooperation protocol.

9. The importance of transparency in military expenditures in promoting mutual trust and cooperation between the states. For this reason:

- They encourage full participation in the United Nations Standardized Reporting Instrument for Military Expenditures and the UN Register of Conventional Arms, prior to the next CDMA.
- They continue to make progress at the bilateral and sub-regional levels on standardized methodologies to measure defense expenditures.
- They encourage, implementation of an Inter-American register managed by the OAS based on regional experiences.
- They promote universal participation and the full implementation of the Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions (CITAAC).

10. Their support for the conclusions of the Chairmanship of the OAS' IV Forum on Confidence and Security-Building Measures, and especially the adoption of the format to report on the application of these measures, presented by the IADB.

11. Their solidarity with the peoples and governments of the Americas affected by natural disasters and in particular those of the Republic of Haiti and the Republic of Chile, which dramatically suffered the onslaught of nature. Their acknowledgement for the generous and joint support and collaboration of various countries of the hemisphere in humanitarian assistance activities and rescue operations, and the decisive support of states, regional and international organizations, that committed to the reconstruction of the Republic of Haiti, especially in the conferences of Montreal, New York, and Santo Domingo.

12. Their commitment to continue improving and complementing the ongoing assistance to address the severely intensified basic needs of the Haitian population, respecting the priorities established by the Government and people of the Republic of Haiti.

13. The importance of the work done by the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), both in terms of humanitarian assistance activities and rescue operations.

14. The valuable contribution that the defense sector and armed forces can provide in terms of specific support in response to natural and manmade disasters in coordination with national and international humanitarian organizations and security agencies for protection and civil defense, as part of an integral response to such disasters.

15. Their support for ongoing international, regional and sub-regional initiatives, in order to strengthen the coordination, capacities, and hemispheric cooperation in the area of natural disaster response. In this sense, they express their agreement to analyze the proposal

entitled “Strengthening partnerships in support of humanitarian assistance and disaster relief” in working groups coordinated by the Pro-Tempore Secretariat of the CDMA, with voluntary and open participation by the member States, to be held in 2011, for the implementation of a collaboration mechanism among the Ministries of Defense to strengthen military capacities for humanitarian assistance to support civilian authorities at the national level as well as other pertinent entities, always in response to the request of a country affected by a natural disaster, without prejudice to ongoing or future initiatives.

The Conference takes note of the willingness of any group of countries to move ahead the implementation of said proposal as well as to fully adjust to the mechanism adopted in due time at the hemispheric level as a result of the aforementioned analysis process within the framework of the CDMA.¹

16. That the recent natural disasters have highlighted the need to strengthen prevention, preparation, response and recovery mechanisms, as well as the importance of improving early warning systems in the region. We support continuous efforts to strengthen crisis management systems in the face of natural disasters. We recommend that the regional organizations, in cooperation with the United Nations, consider the holding of workshops to develop strategies based on collaboration and cooperation in the region, allowing for improved risk management of natural disasters. In this regard, we welcome the offer made by the Government of Mexico to organize, within the OAS framework, a workshop to define a prompt and coordinated regional response mechanism to natural disasters, in which we recommend the participation of the Ministries of Defense in order to consider their contributions to this regional effort.

17. The important contributions made by those states of the Americas that participate in United Nations peacekeeping operations throughout the world.

18. The role that can be played by the Ministries and other defense institutions of the states in the region and their commitment to activities that support environmental sustainability.

19. Their commitment to continuing to strengthen the dissemination of international humanitarian law and international human rights law by their integration into the doctrine, education, training, and operational procedures of the armed forces or security forces, as appropriate, so that they have the necessary means and mechanisms for its effective application.

20. A shared interest in encouraging, within their respective national jurisdictions, measures to promote, strengthen or consolidate, as the case may be, the training of civilians in defense. The inclusion of programs and projects to train civilians in defense matters will be promoted in bilateral cooperation and in sub-regional bodies.

21. Their renewed rejection of the presence or activities of illegal armed groups that carry out or promote violence, regardless of their origin or motivation.

22. In accordance with all related international instruments, ensuring full respect for international law, human rights, and due process standards, and in accordance with each

¹ Colombia, Chile, Peru, Dominican Republic and United States of America.

member state's constitutional order and national legislation, the commitment of Ministries of Defense to cooperate and confront the threats and challenges to hemispheric peace and security, democratic institutions and values that our states face.

23. Their acknowledgement of the contribution made by civil society, including the academic sector, in issues pertaining to the defense and security of our States.

24. Welcome the designation of the Oriental Republic of Uruguay as the venue for the X CDMA to be held in 2012; and the offer by the Republic of Peru to be the venue of the XI CDMA to be held in 2014.

25. Their gratitude to the Bolivian people and the Plurinational State of Bolivia, through its Ministry of Defense, for their hospitality and support during this ministerial meeting.

Ministers of Tourism

Nineteenth Inter-American Travel Congress

September 29 - 30, 2011

San Salvador, El Salvador

Declaration of San Salvador for Sustainable Tourism Development in the Americas

WE, THE MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES OF TOURISM OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in San Salvador, El Salvador from September 29 to 30, 2011, for the XIX Inter-American Travel Congress,

RECOGNIZE the significant contribution of the tourism sector to national efforts to reduce poverty and social inequality; to the enhancement of the quality of life of host communities; to sustainable economic development of our countries, particularly in job creation, relaxation, recreation, business opportunities; and to the development of micro, small, and medium-sized enterprises, particularly for vulnerable populations, such as women, children, racial and ethnic minorities, and indigenous peoples, as well as its multiplier effect and excellent potential for long-term growth together with its important cultural and social benefits;

RECOGNIZE ALSO that partnership and increased dialogue between the private and public sectors are vital to the effective development and sustainability of tourism;

STATE that the XIX Inter-American Travel Congress, “*Tourism: A Challenge to Poverty*,” was a valuable opportunity for dialogue and the sharing of experiences and good practices, as well as for reaching agreement on cooperation and collaboration activities among the member states to foster sustainable tourism that involves the rational use of resources, social and economic responsibility, and protection of our cultural and environmental heritage for the benefit of future generations;

RECOGNIZE the proposal on *conscious tourism*, which means loving life and is based on the principles of sustainability and ethics and promotes the values of peace, friendship, and love for life as the essence of the practice of tourism. It is a pact surrounding coexistence, responsibility, mutual respect, and fellowship among tourism agents from communities that send and receive tourism, tourists, and natural and cultural heritage. *Conscious tourism* is a living, dynamic concept that is constantly under construction. It is an experience of giving and receiving;

CONSIDER innovation an important element for sustainable tourism development and the competitiveness of the tourism sector, especially for micro, small, and medium-sized enterprises; Moreover, innovative programs should include human resources development, capacity building, training, investment and the well-being of the communities, among others;

EMPHASIZE that corporate social responsibility is fundamental to sustainable tourism development as an element of innovation in the tourism sector that, *inter alia*, contributes to enhancing the quality of life of populations;

UNDERLINE that tourism and culture in their different manifestations are closely linked; that link is essential to sustainable development of tourism activity, the conservation of resources, and the preservation of the heritage and identity of the peoples of the Americas;

RECOGNIZE the importance of tourism to the regional and local development of our respective countries and especially to the progress of marginalized communities and vulnerable groups;

RECOGNIZE FURTHER the importance of intraregional tourism as a valuable instrument for integration and knowledge-sharing among our peoples, for which reason we shall support its facilitation and promotion;

APPRECIATE the importance of security in the tourism sector and the need to approach it from a multidimensional perspective that considers, *inter alia*, reducing risks associated with natural and man-made disasters and with the adverse impact of climate change;

RECOGNIZE that tourism should be promoted with ethical and social responsibility, taking into account measures needed to prevent, combat, and eradicate human trafficking in all its forms, especially commercial sexual exploitation of children;

NOTE that, along with culture, the natural resources of the countries of the Hemisphere constitute the foundation of tourism activity as a potential factor to foster the creation of community-based tourism products to combat poverty. Likewise, we recognize the need to strengthen environmental policies, in order to preserve a sustainable world for future generations;

RECOGNIZE FURTHER the importance of promoting tourism through an inclusive approach that fosters access to tourism services for all sectors of society, especially vulnerable groups, including persons with disabilities;

WELCOME the decision of the General Assembly [AG/RES.2639 (XLI-O/11)] held in San Salvador, El Salvador, to make the Inter-American Travel Congress a sectoral part of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI) and to create the Inter-American Committee on Tourism; and

REAFFIRM ALSO the significant contribution of the Special Multilateral Fund of the Inter-American Council for Integral Development (FEMCIDI) to hemispheric, regional, and subregional tourism development and integration, and applaud its strengthening and its efforts to link FEMCIDI cooperation projects in the tourism sector with the priorities set by the Inter-American Travel Congress.

THEREFORE, WE, THE MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES OF TOURISM OF THE MEMBER STATES:

1. ENCOURAGE dialogue, cooperation, and consultation mechanisms designed to foster public-private partnerships, remove barriers, and create the necessary frameworks to support investment in the tourism sector.

2. REITERATE that to promote sustainable tourism, we must fight the serious problems of poverty, social exclusion, and inequity, and foster increased collaboration, partnership, and complementarity between the countries of the Hemisphere and the relevant public and private agencies at the international, regional, subregional, national, and local level.

3. INSTRUCT the Inter-American Committee on Tourism to follow up on the recommendations contained in this Declaration of San Salvador through the preparation of a work plan, to report to the XX Inter-American Congress of Ministers and High-Level Authorities of Tourism, and to do so at successive Congresses.

4. INSTRUCT FURTHER the Inter-American Committee on Tourism:

a. To forge, with the support of the Executive Secretariat for Integral Development (SEDI), through its Department of Economic Development, Trade and Tourism, closer cooperation and complementarity with relevant organizations in the tourism sector so as to promote more active participation;

b. To promote ongoing dialogue among the tourism authorities of the Hemisphere in order to create and build on existing appropriate mechanisms for gathering and sharing information and experiences, identifying best practices and promoting cooperation programs, projects, and activities among the member states and with third parties connected with the tourism sector;

c. To promote the creation of public policies for the purpose of identifying and addressing the factors that hinder the sustainable development of the tourism sector, developing strategies to make the states become facilitators of productive and social processes related to the tourism sector;

d. To take steps, in coordination with the Inter-American Agency for Cooperation and Development and in collaboration with SEDI and the Secretariat for External Relations, to secure funding to complement the Regular Fund of the Organization of American States (OAS), for the implementation of programs and projects for sustainable tourism development in the Americas; and

e. That, in coordination with the relevant bodies of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI), the necessary steps be taken to create a financing and cooperation mechanism among the national ministries and authorities of tourism, through a hemispheric tourism fund composed of voluntary contributions, giving consideration to the participation of the private sector and in-

ternational organizations, in order to support communities that live in extreme poverty and have tourism potential in their environment but cannot fully achieve development.

5. WELCOME the generous contributions from the Ministries of Tourism of Belize (US\$25,000.00), El Salvador (US\$25,000.00), Guatemala (US\$25,000.00), Honduras (US\$10,000.00), Mexico (US\$25,000.00), Nicaragua (US\$25,000.00), Panama (US\$25,000.00), and Trinidad and Tobago (US\$40,000.00), totaling US\$200,000.00, which will serve as seed capital for the hemispheric tourism fund that has been proposed in this Declaration, and we undertake to consider making additional voluntary contributions.

6. REQUEST that, in drafting the rules of procedure of the Inter-American Committee on Tourism, the Permanent Executive Committee of the Inter-American Council for Integral Development (CEPCIDI) take into account the importance of including a mechanism for dialogue with all the stakeholders in order to become acquainted with their needs and facilitate the expansion and enhancement of tourism services.

7. DECLARE our interest in strengthening the capacity of the OAS in the area of tourism and recommend that the General Secretariat of the OAS take the necessary steps to increase the human and financial resources of this area to enable it to carry out the mandates and recommendations adopted by the member states of the OAS, and especially this XIX Inter-American Travel Congress.

COMMITTED TO SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN OUR NATIONS, WE, THE MINISTERS AND HIGH AUTHORITIES OF TOURISM, CONSIDER IT IMPORTANT TO:

- a. Promote sustainable tourism development with a view to engendering more equitable and inclusive economic development that contributes effectively to poverty reduction.
- b. Give priority to action geared towards creating and strengthening human and institutional capacity in the countries of the Hemisphere and promoting the well-being of the populations, productivity, cooperation, complementarity, and competitiveness in the sector's micro, small, and medium-sized enterprises.
- c. Facilitate policies that benefit women-owned businesses, which are a driving force of micro, small, and medium-sized enterprises in the countries of the Hemisphere.
- d. Invite all member states to collaborate, in accordance with their national realities and with the support of the Organization of American States (OAS), upon request, in the implementation of statistical tools, and to share data, which will include travel flows and the contribution of tourism to their economies.
- e. Promote all aspects of innovation and investment in the tourism sector and increased use of modern information and communication technologies, including social media networks.

- f. Encourage collaboration and joint efforts by all stakeholders and associations connected with the tourism sector, especially from the local communities and from micro, small, and medium-sized enterprises.
- g. Promote initiatives to foster and facilitate local, regional, and intraregional tourism, recognizing its importance for integration.
- h. Foster cooperation programs and projects in the tourism sector that emphasize the crosscutting nature of tourism and its relationship to other economic and social development sectors in our countries.
- i. Promote and strengthen sustainable tourism support mechanisms through, inter alia, micro-credit programs that utilize existing financial institutions, the use and transfer of new technologies, and technical assistance, in order to facilitate production of quality goods and services and job creation, and so achieve an entrepreneurial culture.
- j. Promote greater institutional and policy linkages between tourism and culture, as well as the implementation of programs and projects that combine both elements.
- k. Facilitate and strengthen policies that promote greater linkages between the tourism sector and other areas of economic activity.
- l. Promote programs aimed at strengthening capacities to benefit creative and handicraft businesses as well as urban and rural communities that provide goods and services to the tourism sector.
- m. Promote public policies and cooperation activities among the member states, with a view to strengthening disaster prevention, management, and response systems.
- n. Promote public policies and cooperation activities among the member states, with a view to strengthening security mechanisms related to the delivery of tourism services and to the security of tourists, in order, also, to fostering greater collaboration to prevent, combat, and eradicate human trafficking in all its forms, with particular emphasis on commercial sexual exploitation, especially of children.
- o. Promote corporate social responsibility as a factor that contributes to sustainable tourism development and to the quality of life of communities as well boosting the productivity and competitiveness of tourism sector enterprises.
- p. Orient efforts towards strengthening the Special Multilateral Fund of the Inter-American Council for Integral Development (FEMCIDI) in the framework of the OAS, particularly for the tourism sector in the Americas.

PROMOTE sustainable tourism in the Americas and recommend to our Heads of State and Government that they endorse this Declaration and incorporate it into the Declaration and Plan of Action of the Sixth Summit of the Americas.

EXPRESS our appreciation to the Governments of Ecuador and Honduras, as well as to their Ministries of Tourism, for the generous offers to host, respectively, the XX and XXI Inter-American Congress of Ministers and High-Level Authorities of Tourism.

THANK the Government and the people of El Salvador for their warm and generous hospitality and for their commitment and contribution to the success of the XIX Inter-American Travel Congress in the framework of the OAS.

Ministers or Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women

Fourth Meeting of Ministers or of the Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women (REMIM IV)

November 1, 2011

San Salvador, El Salvador

For the Preparatory Process for the Sixth Summit of the Americas

(Informative document)

I. Background

In April 2000, under the technical coordination of the Inter-American Commission of Women (CIM), the Organization of American States (OAS) first convened the *Meeting of Ministers or of the Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women in the Member States (REMIM)*. At that historic meeting, the Ministers approved the Inter-American Program on the Promotion of Women's Human Rights and Gender Equity and Equality (IAP), a new and comprehensive approach to the gender perspective and to achieving gender equity and equality in all areas of public policy, in the inter-American system and in the member states.

At its thirtieth regular session, by resolution AG/RES. 1732 (XXX-O/00), the OAS General Assembly adopted the IAP, which was subsequently endorsed in the Plan of Action of the Third Summit of the Americas (Quebec, 2001) as an effective mechanism for integration of the gender perspective.

At that same session, the OAS General Assembly adopted resolution AG/RES. 1741 (XXX-O/00), in which it was resolved to recommend that Meetings of Ministers or Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women in the Member States be held every four years in order to contribute to the preparatory and follow-up activities of the Summits of the Americas. The governments were also encouraged to consider the recommendations of the CIM in the process of preparing for the Summit.

This position of the CIM was reinforced through the recognition by the Heads of State and Government at the Third Summit of the Americas (Quebec) of the role of the CIM as the technical advisor to the Summit Implementation Review Group (SIRG)¹ on all aspects of

¹ The Summit Implementation Review Group (SIRG) is the main management body of the Summits process. It is composed of all OAS member states, represented by their designated National Coordinators. It is pre-

gender equity and equality and of the importance of the Commission in follow-up to relevant Summit recommendations. That Summit also emphasized the importance of the CIM as the principal hemispheric policy-generating forum for the advancement of the human rights of women and particularly of gender equality.

II. Objectives

In implementation of the above-mentioned mandates, the CIM periodically organizes the REMIM with the aim of reaching consensus on and adopting recommendations for referral to the member states for consideration, through the SIRG, to promote the gender equality and women' human rights agenda in the preparatory process for the Summits of the Americas.

To that end, REMIM IV will be held in San Salvador, El Salvador, on November 1, 2011, with a view to the Sixth Summit of the Americas, to be held in Cartagena de Indias, Colombia, in April 2012, with the theme "Connecting the Americas: Partners for Prosperity." In addition to the mandates mentioned in Section I, the Fourth REMIM will also be held in implementation of more recent mandates. Examples are:

- The Assembly of Delegates of the CIM (Mexico City, November 2010), in the Declaration of the Inter-American Year of Women "Women and Power: For a World of Equality," requests the Executive Committee and the Permanent Secretariat of the CIM, to move forward the gender equality and women's rights agenda during the preparatory process for the Sixth Summit of the Americas.
- The OAS General Assembly, at its forty-first regular session (San Salvador, June 2011), in resolution AG/RES. 2689 (XLI-O/11), urges the Secretary General to convene REMIM IV for the last quarter of 2011.
- The 2010-2012 Executive Committee of the CIM, at its First Regular Session (Washington, D.C., April 2011), in Agreement 8, decided to hold REMIM IV in 2011, and, if possible, to coincide with the XVII Inter-American Conference of Ministers of Labor.

III. Outcomes of REMIM

From 2000 to date, three Meetings of Ministers or of Highest-Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women in the Member States have been held, with highly satisfactory outcomes.

A. REMIM I

(Washington, D.C., April 2000)

Approved the Inter-American Program on the Promotion of Women's Human Rights and Gender Equity and Equality (IAP), which was adopted by the OAS General Assembly in 2000 and endorsed by the Heads of State and Government of the Americas at the Third Summit.

sided over by the member state hosting the Summit of the Americas Process. Colombia, as host of the Sixth Summit in 2012, is its current Chair.

“229. [Our governments will ... endorse] the Inter-American Program on the Promotion of Women’s Human Rights and Gender Equity and Equality approved at the First Meeting of Ministers or of the Highest Ranking Authorities Responsible for the Advancement of Women, held in April 2000, by the CIM;”

“233. [Our governments will ... reinforce] the role of the CIM as the technical advisor to the Summit Implementation Review Group (SIRG) on all aspects of gender equity and equality and recognize the importance of the CIM in follow-up to relevant Summit recommendations; provide for an appropriate level of resources to the CIM to carry out its role as the principal hemispheric policy-generating forum for the advancement of the human rights of women and particularly of gender equality.” (Plan of Action of the Third Summit of the Americas (2001).

Since its adoption, the IAP has constituted the primary basis for the actions of the CIM. In response to the mandate issued in this Program to “Ensure that a gender perspective is consistently mainstreamed into the preparation and application of international instruments, mechanisms, and procedures within the framework of the OAS, and particularly on the agendas of ministerial-level meetings”, the CIM has worked with gender experts of the Hemisphere to prepare recommendations and action lines for consideration by Ministers in the framework of sectoral ministerial meetings. In this process of implementing the IAP, recommendations were presented to the Ministries of Labor, Justice, Education, and Science and Technology.

In the labor area, it should be noted that at the XII Inter-American Conference of Ministers of Labor (IACML), held in Ottawa, Canada, in 2001, the Ministers of Labor of the region made a commitment to integrate a gender perspective into the development and implementation of labor policies and to promote equality between men and women at work. This commitment had been promoted by the adoption of the IAP in 2000. Subsequently, at the XIV IACML, held in Mexico City, in 2005, the Ministers of Labor reaffirmed their commitment, and the gender issue acquired special relevance in the activities of the Conference.

In 2007, the XV IACML adopted the “*Strategic Guidelines of the XV IACML for Advancing Gender Equality and Non-Discrimination within a Decent Work Framework*,” as a general framework for action by Ministries of Labor. Since that time, joint OAS-CIM efforts in the area of gender and labor have been strengthened still further, in which the International Labour Organization has also taken part. The intersectoral dialogue in which Ministers of Women’s Affairs and Ministers of Labor are to engage at the XVII Conference, to be held on November 1, 2011, in San Salvador, make evident the cooperation between and commitments on the part of the two sectors.

B. REMIM II

(Washington, D.C., April 2004)

Approved recommendations that were presented to the Meeting of Ministers of Justice or Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA-V), which incorporated them in its Conclusions and Recommendations. REMIM II also proposed initiatives to governments on the issues of trafficking in persons, especially women and children, violence against women, and gender and justice.

REMJA V, Conclusions and Recommendations:

“VII. VIOLENCE AGAINST WOMEN:
REMJA-V:

1. Urges Member States to complete their internal processes for determining whether to sign and ratify the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication Violence against Women (Convention of Belén do Pará).
2. Encourages the States Parties to the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication Violence against Women (Convention of Belén do Pará) to study the most appropriate manner establish the Convention’s Follow-up Mechanism.”

“VIII. GENDER AND JUSTICE:

REMJA-V, after having heard the presentation by the Inter-American Commission of Women (CIM), took note of the recommendations on gender and justice formulated to the REMJA-V by the Second Meeting of Women Ministers or Ministers or Top Authorities Responsible for Women’s Policies in the Member States and refers them to the Member States for greater consideration.”

Additionally, in the area of science and technology, the “Recommendations for Integrating a Gender Perspective in Science and Technology Policies and Programs in the Americas,” formulated in the context of follow-up to the IAP, were adopted at the *First Meeting of Ministers and High Authorities of Science and Technology within the Framework of CIDI* (Lima, 2004), as one of the hemispheric initiatives of the Plan of Action of Lima on science and technology.

C. REMIM III

(Santiago, Chile, November 2008)

At this meeting, the Ministers or Highest-Ranking Authorities identified items for inclusion on the agenda and in outcomes of the Fifth Summit of the Americas (Port of Spain, 2009). Their recommendations urge the governments to integrate the gender perspective as a cross cutting issue in the Draft Declaration of Port of Spain. The CIM shared its recommendations with civil society organizations and invited them, in a virtual hemispheric forum launched in conjunction with the Summits of the Americas Secretariat, to make comments and suggestions on the Draft Declaration.

As a result, in the Declaration of Commitment of Port of Spain, the Heads of State and Government adopted important commitments regarding recognition of the importance of mainstreaming gender in national and hemispheric policies, plans, and programmes, and strengthening national mechanisms for the advancement of women and for the promotion of gender equality, equity, and parity:

“6. We recognise the importance of considering the differentiated needs of women and men in promoting and ensuring the integration of the gender perspective as a cross cutting issue in national and hemispheric policies, plans and programmes to be implemented in the political, economic, labour, social and cultural spheres. In this regard, we will continue our efforts to produce regional studies and statistics disaggregated by sex for measuring and monitoring, and for promoting cooperation and the sharing of good practices, experiences and policies among States on gender equality and equity within the context of human prosperity, energy security and environmental sustainability.”

11. We commit to strengthening the institutional mechanisms for the advancement of women, including, where applicable, the Mechanism to Follow Up on the Implementation of the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women “Convention of Belém do Pará” and its funding. We will encourage the full and equal participation of women in the political life and decision-making structures of our countries at all levels through laws and public policies that promote respect for women’s human rights and fundamental freedoms, as well as gender equality, equity and parity.

(Declaration of Port of Spain, 2009).

To summarize, REMIM, from its first meeting in 2000 to the most recent, in 2008, has had highly positive impact throughout the Summits process. The IAP, since its adoption in 2000, has been endorsed by the Heads of State and Government of the Americas. Another achievement is that for the first time, the Plan of Action of the Summit (Third Summit, Quebec, 2000) incorporated the gender perspective in some chapters, adopting one devoted to gender equality. Subsequently, the Declaration of Nuevo León of the Special Summit (Monterrey, 2004) reiterated the commitment to continue promoting gender equality and equity; whereas the Fourth Summit (Mar del Plata, 2005), which focused on the creation of decent work and strengthening democratic governance, reaffirmed its commitment to combat gender-based discrimination in the work place. The Fifth Summit (Port of Spain, 2009), as indicated above, committed to strengthening the institutional mechanisms for the advancement of women, including the “Convention de Belém do Pará” and its funding, and encouraged the full and equal participation of women in the political life and decision-making structures.

IV. REMIM IV

The progress made in connection with the preparations for the Sixth Summit, a responsibility of the Summits of the Americas Secretariat, as well as the outcomes of a virtual hemispheric consultation with civil society, are to be presented at REMIM IV.

At REMIM IV, consensus is to be reached and recommendations approved to promote the gender equality and women's rights agenda in the preparatory process for the Sixth Summit of the Americas. Any recommendations approved at REMIM IV will be made available to the SIRG. In turn, the ministers or highest-ranking authorities responsible for the advancement of women in the member states, through the appropriate channels, will be able to forward the agreements reached to their delegates to the SIRG – National Coordinators, so that they can be taken into account in the process of negotiating the final documents of the Summit, whose theme, as announced by the Government of Colombia, is “Connecting the Americas: Partners for Prosperity.”

The process of preparing and negotiating the final documents of the Sixth Summit of the Americas will be conducted under the chairmanship and guidance of Colombia, as its host country. This process is coordinated in the OAS, in its capacity as Technical Secretariat, through the SIRG.

The topics selected by Colombia are:

- Security
- Access to and utilization of technologies
- Natural disasters
- Reducing poverty and inequity
- Regional cooperation
- Physical integration of the Americas

Consultation with civil society

The virtual hemispheric consultation with civil society, “*Connecting the Women of the Americas: Partners for Prosperity*,” is being coordinated by the Permanent Secretariat of the CIM in collaboration with the Summits of the Americas Secretariat of the OAS. This consultation will be conducted from October 3 to 21, 2011, via the virtual consultation forum of the Summits Secretariat, as part of the preparatory process for the Sixth Summit of the Americas.

The conclusions and recommendations of this virtual consultation forum will be presented to REMIM IV by civil society representatives who participated in its moderation. They will serve as input for the ministerial dialogue, and for consideration by the member states in the context of negotiating the outcomes of the Summit.

The virtual forum was organized into three separate discussion threads:

- a. Reducing poverty and inequity—moderated by Soledad Parada, President, Latin American Foundation for Social Innovation
- b. Security—moderated by Ana Falú, Director, Institute for Research on Housing and Habitat, National University of Cordoba (Argentina)
- c. Access to and utilization of technologies—moderated by Sophia Huyer, Executive Director, Women in Global Science and Technology (WIGSAT)

Preparatory process for Cartagena de Indias

As part of the preparatory process for the Sixth Summit, the chair of each ministerial process to be held between September 2011 and March 2012 will be invited to participate in the regular meeting of the Summit Implementation Review Group (SIRG) to be held immediately following the respective ministerial meeting. The aim is for the member states, through the SIRG, to be informed of progress made in implementing the sectoral mandates and to utilize that information as they deem advisable.

Further information on the Sixth Summit and its preparatory process may be found on the web page of the Summits of the Americas Secretariat, including the list National Coordinators for the Summits of the Americas Process:

http://www.summit-americas.org/default_en.htm

Ministers of Culture

Fifth Inter-American Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities

November 9 - 10, 2011

Washington, D.C.

Communiqué

Culture, Common Denominator for Integral Development

WE, THE MINISTERS OF CULTURE AND HIGHEST APPROPRIATE AUTHORITIES OF THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS), gathered in Washington, D.C. on November 9 and 10, 2011, on the occasion of the Fifth Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities within the Framework of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI),

RECOGNIZE the intrinsic value of culture as a distinctive, unique, and inseparable feature of all human beings and communities, as well as its contribution to strengthening the social fabric, and we reaffirm the importance of promoting cultural dialogue and respect for cultural diversity.

AFFIRM that culture is a common denominator for the integral development of the peoples of the Americas, plays a central role in the economic, social, and human development of their communities, and offers rich opportunities for cooperation and exchange aimed at promoting peaceful coexistence, understanding, civic engagement, and mutual respect.

RECALL that on multiple occasions, the Heads of State and Government and the Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities have emphasized the contribution of culture to the fight against poverty and to improving the quality of life of all our peoples; to promoting dialogue and social cohesion as well as the creation of stronger and more inclusive communities; and as bearer of identity, values, and meaning.

REAFFIRM that culture and, in particular, the cultural and creative industries, create opportunities for economic growth, increased competitiveness, and diversification of the economies of the Hemisphere, through the creation of new employment in non-traditional areas and the acquisition of new skills. Therefore, we encourage member states to recognize this contribution in their programs and projects, to consider increased funding for culture, and to strengthen efforts to quantify the impact of culture on economic growth.

RENEW our call to strengthen synergies, *inter alia*, with the education, tourism, labor, economic, and financial sectors, in order to maximize the contribution of culture to integral development.

RECOGNIZE the importance of safeguarding and promoting our tangible and intangible cultural heritage, and its contribution to the integral and sustainable development of our communities.

EMPHASIZE the value of cultural tourism and the importance of continued and balanced cooperation between the culture and tourism sectors to promote the integral and sustainable development of our communities.

RECOGNIZE the importance of culture as a key element for promoting peaceful coexistence and strengthening democratic processes. Therefore, we encourage the integration of cultural components, with an emphasis on intercultural dialogue and youth participation, in programs and projects aimed at preventing violence and promoting a democratic citizenry.

WELCOME the multiple initiatives undertaken in the framework of the Inter-American Year of Culture, and invite continued efforts to ensure that its impact is sustained beyond 2011.

WELCOME the General Secretariat's initiative to establish, within the framework of the Inter-American Year of Culture, the Cultural Heritage of the Americas Award for the most representative cultural expressions of the member states, in order to highlight the variety of elements that make up the identity of the Americas, promote them as an inter-American contribution to the cultural heritage of humanity, and reaffirm the region's presence on the world stage. We congratulate Peru on being the first recipient of this award in recognition of its gastronomic riches.

SUBMIT to the next meeting of the Summit Implementation Review Group (SIRG) a brief report on the results and conclusions of our deliberations, so that they might be studied in relation to the relevant thematic areas approved for the Sixth Summit of the Americas and, as appropriate, included in the documents to be signed by the Heads of State and Government in Cartagena, Colombia, in April 2012.

REITERATE the importance of the Inter-American Committee on Culture (CIC) as a hemispheric technical-political forum for cooperation, dialogue, exchange, and consensus-building in the sphere of culture. We will continue to work through this forum to foster programs and projects that promote the role of culture in the social and economic development of our people.

COMMEND the CIC on the progress made in the execution of its Work Plan, in particular through the project "Culture in Development: An Inter-American Information Network." In this respect, we encourage the CIC, with the support of the Office of Education and Culture of the Executive Secretariat for Integral Development (SEDI) of the OAS, to continue its efforts and to strengthen the portfolio of successful practices, the "Development and Culture" web portal, and technical assistance missions, in order to promote knowledge, dialogue, exchange, and horizontal cooperation in culture.

URGE the continuation of efforts such as the joint Inter-American Committee on Culture (CIC)-Inter-American Committee on Education (CIE) project "Fostering Cultural Diversity and Creative Expression through Education: Exchange of Good Practices" with a view to further strengthening collaboration between the education and culture sectors.

RECOGNIZE the excellent work of the Office of Education and Culture and urge the General Secretariat to strengthen this office so that it can continue to fulfill its function as Technical Secretariat of the CIC.

ENTRUST the CIC, with support from the Office of Education and Culture, with the design and execution of its 2011-2013 Work Plan, aimed at strengthening capacity in the culture sector and furthering cooperation in the thematic areas agreed at the Fourth Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities in the Framework of CIDI held in Barbados in 2008 as well as building on the discussions and recommendations arising from this Fifth Meeting of Ministers held Washington, D.C..

ENCOURAGE member states to submit project proposals for the new funding cycle of the Special Multilateral Fund for Integral Development (FEMCIDI) in the approved key topics: (i) Expanding economic growth and promoting development through culture; and, (ii) Fostering social inclusion through culture. We urge member states to contribute to the culture account in FEMCIDI to augment the impact of funded projects.

RECOGNIZE the need to promote education and training of professionals in the culture sector and for that reason encourage the CIC to coordinate efforts with the programs of the Department of Human Development, Education and Culture of SEDI to implement professional development and scholarship opportunities that contribute to strengthening human and institutional capacities in the sector.

CONTINUE our work to strengthen cultural plans and programs, in collaboration with other areas of the public sector, the private sector, civil society, communities, and international organizations. Moreover, we will promote dialogue, exchange, and cooperation in culture among member states as well as with other regional integration groups.

INVITE the CIC to examine the possibility of establishing a special fund for the development of our cultural industries and for the promotion of increased collaboration among member states.

Ministers of Science and Technology

Third Meeting of Ministers and High Authorities on Science and Technology

November 17 - 18, 2011

Panama City, Panama

Plan of Action of Panama

Translational Science, Technology and Innovation:
Knowledge for Competitiveness and Prosperity

Within the context of the meetings of Ministers and High Authorities of the Hemisphere, the Inter-American Committee on Science and Technology (COMCyT) constitutes a forum for policy dialogue and follows up on mandates adopted at these ministerial meetings.

During their sixth regular meeting, held in September 2010, COMCyT representatives acknowledged the importance of focusing on the application of science, technology, and engineering as fundamental to fostering innovation, competitiveness, growth, and prosperity. Most significantly, they recommended the development of a long-term inter-American program on science and technology with measurable goals and objectives, as well as the creation and strengthening of monitoring and cooperation mechanisms, including the COMCyT Portal.

In response to the COMCyT recommendations, during the Third Meeting of Ministers and High Authorities on Science and Technology, held in Panama on November 17 and 18, 2011, the country delegates were presented with the document “Towards a Vision 20/25 in Science, Technology and Innovation for the Americas: Hemispheric Cooperation for Competitiveness and Prosperity in a Knowledge Economy (Vision 20/25),” which contains mandates from the science and technology ministerial process in the framework of the Organization of American States (OAS).

The purpose of this plan of action is to advance the implementation of said ministerial mandates by creating working groups and establishing clear actions and cooperation mechanisms to ensure their effective and sustained functioning.

Therefore, we, the Ministers and High Authorities of the Americas, on the occasion of the Third Meeting of Ministers and High Authorities on Science and Technology of the OAS (REMCYT III), adopt the following Plan of Action:

Implementation of the Plan of Action

I. Role of the Ministers and High Authorities of Science and Technology

A. Areas of Action

The Ministers and High Authorities of Science and Technology should generate opportunities conducive to achieving the ministerial mandates contained in Vision 20/25 that reflect strategic areas for development and prosperity, including:

1. Promoting the drafting, revision, updating and follow-up of policies and regulations, particularly those that result from ministerial mandates;
2. Fostering partnerships with social actors, particularly with key stakeholders in academia, the private sector, civil society, and communities, for common projects, programs and initiatives that help improve the quality of life of the population and increase the competitiveness of the productive and service sectors, especially micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs);
3. Taking actions to help create a knowledge-based society and to encourage the development of human and institutional capabilities with a gender perspective;
4. Dissemination of science, technology, and engineering information to promote innovative thinking and the exchange of best practices for technology transfer, based on voluntary and mutually agreed terms; updating of education; community extension services; and job creation;
5. Promoting increased investment and the availability of funding mechanisms to advance in priority areas of science, technology, and innovation;
6. Strengthening collaboration and policy dialogue with other ministries and high authorities to engage them in initiatives concerning science, technology, and innovation;
7. Allocating resources considered necessary to participate in the implementation of the Plan of Action and to support initiatives resulting from the working groups.

B. Levels of Action

The role of the Ministers and High Authorities should be carried out at the national, regional, and hemispheric levels, which complement one another:

1. At the national level, consisting of actions to foster private-public partnerships and collaboration with all social actors, particularly with academia, civil society, the business community, local governments, and communities, in order to move forward on the areas of action mentioned above;

2. At the sub-regional and regional levels, involving actions that correspond to commitments or intentions resulting from agreements, partnerships, or projects;

3. At the hemispheric level, covering actions derived from agreements or common projects and instructing the Inter-American Committee on Science and Technology (COMCyT) to follow up on those initiatives.

II. COMCyT

The Chair of COMCyT (Panama), in collaboration with the two Vice Chairs (Peru and St. Vincent and the Grenadines), with the support of the OAS Office of Science, Technology and Innovation as its technical secretariat, and in consultation with the COMCyT representatives, will be responsible for promoting the implementation of the Plan of Action and for improving collaboration and cooperation with the relevant regional and international organizations, civil society, and other actors in the Americas. These institutions include cooperation agencies, the OAS, the Inter-American Development Bank (IDB), the World Bank, the Andean Development Corporation (CAF), the Central American Bank for Economic Integration (CABEI), the Caribbean Development Bank (CDB), the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Ibero-American and Inter-American Network for Science and Technology Indicators (RICyT), the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), the International Council for Science (ICSU), the Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS), the Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD), the Latin American Advanced Networks Cooperation (CLARA), and the Latin American and Caribbean Collaborative Information and Communication Technologies Research Federation (LACCIR), among others.

In addition, COMCyT has specific roles in relation to the working groups that are described in the following section.

III. Working Groups

A. Coordination, Membership and Composition

The COMCyT Chair will coordinate the working groups. The Chair, supported by the two Vice Chairs, will seek the means to actively engage the participation of all member states and other partners to implement the Plan of Action (e.g., by distinguishing and encouraging the leadership, participation, and representation of women and vulnerable groups, etc.).

Participation in working groups will be open to all member states. Each working group will be led by one member state, which will commit to undertake concrete and tangible actions to advance the group's objectives and to put forward proposals that impact on the whole production apparatus, with particular emphasis, where necessary, on MSMEs.

Participation will also be open to international and regional organizations as well as other social actors, including civil society, previously approved by COMCyT authorities.

B. Meetings, Seminars, Studies, and Project Proposals

Depending on the availability of resources, working groups will endeavor to meet at least twice a year—either face-to-face or virtually—at dates and locations to be determined by consensus among the members of each working group.

Each working group should aim to schedule at least one seminar, workshop, and/or conference per year on their specific area of responsibility. The preferences, priorities, and interests of the countries and regions of the Hemisphere should be considered in the organization of these events.

Additionally, each working group will develop comprehensive case studies and/or project proposals based on available technical and financial support from participating countries and regional and international institutions active in the science, technology, and innovation areas.

C. Functions

1. Working Group 1. Innovation

Working Group 1 will work toward developing a culture of technology-based innovation in the Americas that fosters inclusiveness, entrepreneurship, and creative thinking in society at large, academia, and the private and public sectors. For this purpose it will:

- a. Identify, select, define, and collaborate to propose innovation indicators for member states;
- b. Promote national policies and frameworks to foster innovation, including investment, in collaboration with the Ministers and High Authorities;
- c. Define the theme and supervise the development of a case study and/or project in the region and make recommendations to COMCyT to take action;
- d. Design and coordinate regional and hemispheric projects and develop partnerships to:
 - i. Raise awareness of the importance of innovative thinking and a technology-based innovation culture for competitiveness and economic growth;
 - ii. Emphasize the participation of women and vulnerable groups, in order to promote greater inclusiveness in innovation;
 - iii. Build institutional capacities for the development of clusters, technology parks, knowledge-transfer organizations, incubators, and spin-offs for MSMEs;
 - iv. Support and foster sectoral and regional innovation subsystems; and
 - v. Disseminate and popularize scientific and technological developments and best practices.

2. Working Group 2. Human Resources Training and Education

Working Group 2 will work to help increase the number of female and male graduates in science, technology, engineering, and technical education, and to improve study programs in these areas to respond to the changing needs of industry—especially of MSMEs—and communities. It will also work to:

- a. Enlist universities to update study programs in science, technology, and engineering so as to graduate a critical mass of qualified men and women in strategic industries and fields, emphasizing multidisciplinary approaches and strengthening private-sector linkages in line with the social and economic situation of their countries;
- b. Promote the strengthening of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education in primary and secondary schools;
- c. Encourage opinion surveys among secondary school students on science and scientific professions.
- d. Define the theme and supervise the development of a case study and/or a project for sharing best practices and experiences in the region, and make recommendations to COMCyT to take action;
- e. Promote the continued professional development of faculty members in their fields and periodic training on the latest teaching and research methods;
- f. Promote student exchanges in the Hemisphere, taking into account gender equity and greater participation of minorities;
- g. Facilitate hemispheric cooperation mechanisms so that member states collaborate in their efforts to update and maintain their science, technology, and engineering study programs;
- h. Facilitate information sharing on academic mobility for students and professionals among OAS member states;
- i. Create and/or strengthen extension services and technology-transfer, based on voluntary and mutually agreeable terms, to the community and industry, especially MSMEs;
- j. Design and coordinate regional and hemispheric projects and develop academia-public-private partnerships in the aforementioned topics, reinforcing, in particular, the “Engineering for the Americas” hemispheric initiative approved at the First Meeting of Ministers and High Authorities of Science and Technology and endorsed by the Second Meeting;
- k. Encourage peer-to-peer scientific research cooperation in the Hemisphere.

3. Working Group 3. National Quality Infrastructure

Working Group 3 will work to help member states to have access to internationally recognized, quality infrastructure services to foster competitiveness, innovation, trade, and consumer safety. To this end, this working group will:

- a. Define the theme and supervise the development of a case study and/or project to promote the importance of national quality infrastructure in the region and make recommendations to COMCyT to take action;
- b. Promote the definition of a minimum set of metrology services in member states that satisfy their local demand for services, and ensure their international traceability;
- c. Help consolidate the Inter-American Metrology System (SIM) and promote member-state participation in the Inter-American Accreditation Cooperation (IAAC) and the Pan American Standards Commission (COPANT);
- d. Support the design of programs that foster a culture of quality and social responsibility for MSMEs and other production units;
- e. Create and/or strengthen national quality systems in the region's countries; and
- f. Design and coordinate regional and hemispheric projects on the aforementioned topics.

4. Working Group 4. Technological Development

Working Group 4 will work to help strengthen inter-American cooperation in science, technology, and innovation in selected priority areas to achieve more effective and faster technological development in the region. Working Group 4 will make efforts to:

- a. Define specific themes of interest and follow up on the development of a case study and/or project in the region and make recommendations to COMCyT to take action;
- b. Create and/or strengthen cooperation and knowledge-sharing programs, projects, and activities, in order to foster the development of MSMEs, universities, and community and other production units in one or more of the following areas:
 - i. Biotechnology and food security
 - ii. Clean and renewable energy, energy efficiency, and cleaner production
 - iii. Nanotechnology
- c. Promote the creation of specialized and advanced networks and observatories as well as the use of high technology in the areas mentioned above and, in particular, those that foster supply-chain management and transport logistics.

IV. Methodology

By March 2012, with the support of its Technical Secretariat, the COMCyT Chair and the leaders of the working groups will jointly develop a calendar of events and activities for each group as well as a framework for case studies and/or project proposals, in consultation with the member states and the participating regional and international institutions.

The working groups should report to COMCyT at least once a year. Furthermore, they should develop systems for monitoring activities and evaluating results in their areas of action.

The working groups should coordinate their work taking into account the complementary nature and interdependence of their activities. Ongoing communication and exchange of knowledge, experience, and results will provide reciprocal benefits.

The working groups will consider appropriate means to develop partnerships to create synergies with other ministries and government bodies with competence in science, technology and innovation. In this regard, working groups should make every effort, within the framework of existing national and institutional competencies, to establish a comprehensive productive and regular dialogue with ministries of trade, education, agriculture, economy and finance, competitiveness, environment, and energy, as well as other institutions, in order to further the objectives of the working groups.

V. Resources

The Plan of Action addresses a large number of complex themes reflecting the acute challenges currently facing the Ministers and High Authorities on Science and Technology. In addition, in light of current global and regional economic situations, many ministries face financial and other constraints. Therefore, it is indispensable that the working groups make efforts to obtain funding to support their activities and be efficient in the use of these funds in order to achieve synergies, maximize efficiencies, improve sustainability, and disseminate results.

Member states should allocate the necessary economic, technical, and human resources to participate in meetings of the working groups. In addition, member states should endeavor to contribute or help locate funds to cover specific activities, such as workshops, meetings, videoconferences, etc., as required by the working groups.

With the support of the Technical Secretariat, the COMCyT Chair and the leader of each working group will invite the relevant regional and international organizations and other potential donors and partners to participate, make voluntary contributions, and provide financing mechanisms to support activities, projects, and programs resulting from the implementation of this plan.

VI. COMCyT Portal (COMCyTnet)

Member states should support the updating and improvement of the OAS COMCyT Portal to promote hemispheric cooperation and policy dialogue and as a monitoring and supporting mechanism and information repository of programs, projects, activities, best practices, and achievements from the working groups. The OAS, as Technical Secretariat, will offer its installed capacity and infrastructure for the network's operation, as well as its staff on a part-time basis.



Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos

Summits of the Americas Secretariat
Organization of American States

ISBN 978-0-8270-5928-3